



Mario Torrico
Editor

¿Fin del giro a la izquierda
en América Latina?
Gobiernos y políticas públicas

¿Fin del giro a la izquierda en América Latina?
Gobiernos y políticas públicas

¿Fin del giro a la izquierda en América Latina?

Gobiernos y políticas públicas

Mario Torrico (Editor)



FLACSO
MÉXICO

320.53098

F491 ¿Fin del giro a la izquierda en América Latina? : gobiernos y políticas públicas / Mario Torrico (editor). -- México : FLACSO México, 2017.
260 páginas : gráficas ; 23 cm

ISBN: 978-607-8517-20-6

1. Derechas e Izquierdas (Política) – América Latina 2. América Latina – Política y Gobierno 3. Oposición (Ciencias Políticas) – América Latina 4. Democracias Populares – América Latina 5. Formas de Gobierno -- América Latina 6. Políticas Públicas – América Latina 7. Redes Sociales – Aspectos Políticos – América Latina I. Torrico Terán, Mario Alejandro, editor

Primera edición: noviembre de 2017

Primera reimpresión: febrero de 2018

D.R. © 2017, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede México
Carretera al Ajusco 377, Héroes de Padierna, Tlalpan, 14200 Ciudad de México
www.flacso.edu.mx | public@flacso.edu.mx

ISBN 978-607-8517-20-6

Este libro fue sometido a un proceso de dictaminación por parte de académicos externos nacionales e internacionales de acuerdo con el Consejo Editorial de la Flacso México.

Queda prohibida la reproducción parcial o total, directa o indirecta del contenido de la presente obra, sin contar previamente con la autorización por escrito de los editores, en términos de la Ley Federal del Derecho de Autor y, en su caso, de los tratados internacionales aplicables.

Impreso y hecho en México. *Printed and made in Mexico.*

Índice

Prólogo	7
Introducción. Giro a la izquierda en América Latina: las explicaciones teóricas y el desempeño de los gobiernos <i>Mario Torrico</i>	9
1. El fin del giro a la izquierda en Ecuador: rendimientos económicos y declive electoral en los gobiernos de Rafael Correa <i>Santiago Basabe-Serrano y Coralía Barahona</i>	35
2. “Mi meme te odia”: redes sociales y giro a la derecha en Brasil <i>Gisela Zarembeg</i>	57
3. Ascenso, auge y ocaso del kirchnerismo en Argentina <i>Juan C. Olmeda</i>	89
4. Paraguay: el cuestionable giro a la izquierda <i>Juan Mario Solís Delgadillo y Sarah Patricia Cerna Villagra</i>	123
5. ¿Giro a la derecha en Bolivia? <i>Mario Torrico</i>	151
6. Venezuela y el fin del giro a la izquierda en América Latina: desempeño económico y liderazgo <i>Rodrigo Salazar y Adriana Diego</i>	183
7. ¿La calle es de los revolucionarios...? Posttotalitarismo y activismo opositor en Cuba. El caso de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) <i>Armando Chaguaceda y Carlos Torrealba</i>	213
Anexo metodológico del capítulo 2.	253

Prólogo

El presente libro tuvo su origen en el Seminario Internacional “¿Fin del Giro a la Izquierda en América Latina?” realizado en la Flacso México en mayo de 2016, con participación de académicos de diversas instituciones mexicanas y de otros países de la región. Dicho evento se organizó a partir de una discusión en Facebook que tuve con Juan Olmeda (el autor del capítulo sobre Argentina) el día en que Evo Morales perdió el referéndum por medio del cual pretendía la aprobación popular de un cambio constitucional que le permitiera una tercera reelección presidencial. Las preguntas de Juan eran tan difíciles de responder que en un momento le dije: “mejor organizamos un seminario y allí seguimos”. Sin embargo, nos dimos cuenta de que el contexto político se tornaba problemático no solo en Bolivia, sino en varios de los países que habían transitado hace varios años por lo que se conoció como el *giro a la izquierda*, ya que pocos meses antes Mauricio Macri había ganado la presidencia en Argentina, Dilma Rousseff se enfrentaba a una inminente destitución en Brasil y Venezuela estaba sumida en una crisis económica y en un caos social sin precedentes. En esas condiciones se imponía la necesidad de una reflexión más amplia sobre lo que estaba sucediendo en la región.

Los capítulos que se presentan a continuación no son transcripciones de las exposiciones del seminario, el libro, pues, no debe considerarse como una colección de memorias de dicho evento.¹ Cada capítulo ha

¹ El seminario fue grabado y se puede ver en los siguientes vínculos: <<https://www.youtube.com/watch?v=adDwBp91-0E>> y <<https://www.youtube.com/watch?v=DsThOHgASsc>>.

sido minuciosamente trabajado por sus autores con base en una propuesta metodológica y en un conjunto de preguntas de investigación que se les envió. En ese sentido, se trata de un trabajo de investigación colectiva de alta calidad científica que será un importante aporte al conocimiento de los procesos políticos latinoamericanos. Es más, creemos que la obra en conjunto implica un avance del estado del arte sobre las explicaciones y evaluaciones en torno al giro a la izquierda en América Latina. Esperamos que los lectores disfruten tanto de este libro como nosotros lo hicimos en nuestras discusiones.

1. Introducción. Giro a la izquierda en América Latina: las explicaciones teóricas y el desempeño de los gobiernos

*Mario Torrico**

A finales de la década de los noventa del siglo xx inició una etapa política en América Latina conocida como “el giro a la izquierda”, que se caracterizó por el triunfo electoral de candidatos presidenciales que criticaron intensamente las políticas económicas de apertura de mercados, privatización y reorientación del rol del Estado en la economía (englobadas bajo el término neoliberalismo) aplicadas en los países de la región. En varios casos, estos candidatos construyeron, además, un discurso que identificaba a las prácticas corruptas y clientelares de los partidos y al funcionamiento del sistema político en general como los responsables de la amplia desigualdad social y de que la población permanezca sumergida en la pobreza. Este giro llamó la atención de la academia y de la comunidad internacional debido a que significaba una posible ruptura con el pasado inmediato, con el consenso económico que se había alcanzado luego de la crisis de la década de los ochenta de que las fuerzas del mercado debían desarrollarse sin limitaciones y de que sus beneficios se derramarían a toda la población. A nivel político también existía la posibilidad de un quiebre con el convencimiento generalizado de que la representación política a través de los partidos era el componente fundamental de la democracia. En ese sentido, se vislumbraban políticas distintas, e incluso opuestas, a las aplicadas previamente.

* Profesor-investigador de la Flacso México.

Rasgos generales del giro a la izquierda

Existe amplio acuerdo en la literatura comparada¹ de que el giro a la izquierda inició en Venezuela en 1998 con la victoria de Hugo Chávez y se propagó por la mayoría de los países de la región durante la década siguiente, en la cual alrededor de dos tercios de la población latinoamericana llegó a ser gobernada por presidentes izquierdistas. Pero también hay un buen grado de aceptación de que la izquierda en América Latina es diversa debido a las distintas trayectorias históricas de los países en relación, entre otras cosas, al tipo de regímenes autoritarios que han tenido (militar, civil), a cómo ha sido su proceso de democratización (ruptura, transición pactada), a qué tipo de sistemas de partidos han emergido en ellos (institucionalizados o no institucionalizados) y a las características de su población (socioeconómicas, étnicas, etc.).² A continuación se exponen en orden cronológico los triunfos electorales con que los distintos países se adscribieron a dicho giro o se mantuvieron en él.

Si bien el giro ha sido dominante en la región, su duración muestra variaciones importantes entre países. Así, en Venezuela, Brasil, Uruguay, Argentina, Bolivia, Nicaragua y Ecuador se mantuvo o se mantiene más de una década; en tanto que en Paraguay, Panamá o Guatemala no se extendió por más de un periodo presidencial. El porqué de estas diferencias aún no ha sido estudiado, aunque es claro que hay factores comunes entre los países que llevan a esos resultados (es decir, la explicación no puede limitarse a describir las trayectorias y procesos internos nacionales). Otro contraste notorio es que en algunos casos la continuidad de la izquierda en el poder se dio a través de la alternancia de líderes políticos (Uruguay, Brasil, Chile), en tanto que en otros la izquierda fue incapaz de cambiar de líder y cayó en el caudillismo (Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua).³ La interacción entre el grado de institucionalización del sistema de partidos antes del giro y el desprestigio del mismo

¹ Toda mención a la literatura que se haga en este capítulo refiere a los estudios comparados sobre América Latina.

² Véanse al menos Cleary (2006), Oxhorn (2009), Panizza (2009), Luna (2010) y Levitsky y Roberts (2011).

³ El caso argentino es un intermedio entre ambos, ya que hubo alternancia, aunque de esposo a esposa.

parece ser la causa principal de esto, aunque su comprobación empírica aún está pendiente.⁴

Cuadro 1. Presidentes del giro a la izquierda en América Latina*

<i>País</i>	<i>Presidente</i>	<i>Elección 1</i>	<i>Elección 2</i>	<i>Elección 3</i>	<i>Elección 4</i>	<i>Elección 5</i>
Venezuela	Hugo Chávez Nicolás Maduro	1998	2000	2007	2013	2013
Chile	Ricardo Lagos Michelle Bachelet	2000	2006			
Brasil	Lula da Silva Dilma Rousseff	2003	2007	2011	2015	
Argentina	Néstor Kirchner Cristina Fernández	2003	2007	2011		
Panamá	Martín Torrijos	2004				
Uruguay	Tabaré Vázquez José Mujica Tabaré Vázquez	2005	2010	2015		
Bolivia	Evo Morales	2006	2010	2015		
Nicaragua	Daniel Ortega	2007	2012	2017		
Ecuador	Rafael Correa	2007	2009	2013		
Guatemala	Álvaro Colom	2008				
Paraguay	Fernando Lugo	2008				
El Salvador	Mauricio Funes Salvador Sánchez	2009	2014			
Perú	Ollanta Humala	2011				
Costa Rica	Luis Guillermo Solís	2014				

* Se incluyeron solo los casos en que hay acuerdo en la literatura en que esos presidentes son de izquierda.

Fuente: Elaboración propia y Diego (2016).

Una pregunta obvia que surge cuando se discute sobre el giro es: ¿qué queremos decir cuando hablamos de la izquierda en América Latina? Quienes la han abordado coinciden en que una característica de esta corriente política es la búsqueda de la igualdad en sentido amplio (Arditi, 2009; Borón, 2012), en especial la reducción de la desigualdad socioeconómica (Castañeda, 2006; Schamis, 2006; Santander, 2009) a través de una distribución lo más igualitaria posible de la riqueza (Cleary, 2006), lo que implica su disposición a recurrir al Estado para corregir el desbalance

⁴ Schamis (2006), Lanzaro (2007) y Paramio (2008) sugieren esta relación causal, pero la vinculan con el surgimiento del populismo, lo que no es una consecuencia teóricamente inevitable.

de las fuerzas del mercado (Cameron, 2009; Weyland, 2010). Si en décadas pasadas la izquierda era relacionada con posturas anticapitalistas, hoy en día se la asocia más bien con la búsqueda de un modelo económico que no solo produzca crecimiento, sino también inclusión social. Por ello, la izquierda plantea la necesidad de una política social activa que permita la creación de empleos, la mejora de la educación y de la salud y la reducción de la pobreza (Paramio, 2006). Actualmente la izquierda no se opone a la propiedad privada ni a la competencia de mercado, pero rechaza la idea de que las fuerzas del mercado no reguladas pueden satisfacer las necesidades sociales (Levitsky y Roberts, 2011). La regulación del mercado y la política social que defiende la izquierda requiere del aumento de las capacidades del Estado, en especial de su recaudación a través de una estructura tributaria progresiva, basada más en impuestos a los sectores de mayores ingresos (tanto a la riqueza como a la propiedad) y menos en tributos al consumo (como es el caso del impuesto al valor agregado —IVA—) (Beasley-Murray, Cameron y Hershberg, 2010). En ese sentido, esta corriente es consciente hoy en día de la importancia de la estabilidad económica, lo que la aleja de lo que Dornbusch y Edwards (1992) llamaron “populismo macroeconómico”.⁵ Adicionalmente, se señala que la izquierda ha ampliado su mirada sobre las desigualdades y actualmente incluye a las que se desprenden de las diferencias de género, raza o etnia (Levitsky y Roberts, 2011).

La postura de la izquierda en relación con la economía descrita en el párrafo anterior se aleja de la tradición estatista prevaleciente en las décadas de los sesenta y setenta y tiene coincidencias con algunos planteamientos que se impulsaron con las reformas de los años ochenta y noventa (control del déficit fiscal, de la inflación, respeto a la propiedad privada y a los intercambios de mercado), lo que lleva a algunos autores a plantear que el giro está muy lejos de configurar un modelo alternativo al Consenso de Washington (Paramio, 2006) o que incluso la izquierda en Brasil, Uruguay y Chile no es izquierda (Borón, 2012). Sin embargo, no puede ignorarse que la postura izquierdista de inicios del siglo XXI tiene también importantes diferencias con los señalamientos neoliberales, en

⁵ Dentro de esta caracterización general hay obviamente variaciones entre países. Así, por ejemplo, en unos casos la política social es más activa, la regulación estatal es más intensa o el respeto a las reglas del mercado es mayor que en otros.

especial con relación a que los frutos del crecimiento económico no llegarán en automático a todos los sectores de la sociedad (por lo que se requiere redistribución), o que el libre mercado es benéfico para todos (lo que hace necesaria la regulación). También hay diferencias sobre la conveniencia de los acuerdos internacionales de libre comercio (mismos que fueron impulsados con fuerza antes del giro), ya que si bien la izquierda de hoy en día no es aislacionista ni radicalmente proteccionista, mantiene sus reservas respecto a la apertura total del comercio internacional en sus países, en especial cuando el mismo se realiza con naciones más poderosas (Santander, 2009). En consecuencia, el giro a la izquierda en América Latina no puede caracterizarse como la continuación del neoliberalismo, aunque ciertamente no rompe con él. Se trata de un giro, mas no de un cambio radical y menos de un retorno al pasado.

Respecto al ámbito político, en la literatura se suele destacar que la izquierda dejó atrás su escepticismo con la democracia (a la que llamaba burguesa o meramente formal) y está comprometida con los procedimientos electorales para elegir autoridades, pero los considera insuficientes para incluir a los grupos marginados, por lo que promueve la democracia participativa (Cameron, 2009; Panizza, 2009; Weyland, 2010) y la toma de decisiones a través de mecanismos de democracia directa (nombrados por algunos autores como formatos posliberales de participación política).⁶ En ese sentido, su crítica política estaría usualmente dirigida a cuestionar el desempeño de los gobiernos más que la democracia en sí misma, aunque sin dejar de buscar la construcción de sistemas políticos más incluyentes (Schamis, 2006; Beasley-Murray, Cameron y Hershberg, 2010).

No está claro en qué medida lo que la literatura identifica como planteamientos que defiende la izquierda tiene sustento empírico, y si así fuera, si se está prestando atención a lo que los líderes de esta corriente política dicen en sus discursos, en sus entrevistas y en sus programas de gobierno o a las decisiones que toman y a las acciones que emprenden una vez que están en el poder. Los estudios de caso de los capítulos siguientes aclararán en qué medida la caracterización de la izquierda que realizan las investigaciones académicas se ajusta a la realidad.

⁶ Véanse Lanzaro (2008) y Arditi (2009).

El estado del arte sobre el giro a la izquierda en América Latina. ¿Qué sabemos y qué ignoramos?

La discusión académica sobre el giro a la izquierda en América Latina ha atravesado tres etapas. En la primera los estudios se limitaron a argumentar que, en efecto, se estaba produciendo dicho giro y comenzaron a plantear de manera preliminar sus causas, aunque sin mostrar evidencia de ello (Borón, 2004; Boersner, 2005; Panizza, 2005; Paramio, 2006; Touraine, 2006). En estos trabajos se aprecia un optimismo moderado sobre las posibilidades que los nuevos gobiernos tienen para efectuar cambios importantes y se señalan algunos desafíos que enfrentaría la izquierda (amplias demandas de la población, deterioro económico previo, necesidad de gobernar eficazmente para aliviar las carencias de los sectores más empobrecidos y de hacerlo de manera más incluyente) que además le permitan construir o mantener su credibilidad. En la segunda etapa la academia discutió ampliamente las causas del giro y los tipos de izquierda que se pueden identificar en los gobiernos de la región. Al respecto, hay consenso de que la crisis económica de finales de los noventa e inicios de este siglo⁷ desencadenó la ola de triunfos de candidatos izquierdistas, aunque las lecturas sobre ese episodio varían, ya que para algunos se trató de la culminación del fracaso del neoliberalismo en generar crecimiento, mejorar las condiciones de vida de la población y reducir la desigualdad (Laclau, 2006; Ardití, 2009; Macdonald y Ruckert, 2009; Sader, 2009; Borón, 2012), en tanto que para otros lo que hubo fue un desencanto social con los resultados económicos obtenidos luego de varios años de reformas, aunque el saldo sería más bien mixto, ya que las mismas permitieron al menos mantener la estabilidad de las economías (Lanzaro, 2008; Paramio, 2008; Panizza, 2009; Santander, 2009; Beasley-Murray, Cameron y Hershberg, 2010; Luna, 2010; Levitsky y Roberts, 2011; Weyland, 2010; Oxhorn, 2009).⁸

Otras de las causas frecuentemente mencionadas en la literatura son la crisis de representación que sufrió la clase política ante la ciudadanía, el mal desempeño de los gobiernos en la región y la falta de rendición de

⁷ Llamada media década perdida por la CEPAL (2002).

⁸ Pero todas las explicaciones al respecto destacan la amplia desigualdad y la extendida pobreza en la región a inicios del siglo XXI.

cuentas democrática (Lanzaro, 2007; Paramio, 2008; Cameron, 2009; Panizza, 2009; Santander, 2009; Silva, 2009; Luna, 2010; Thwaites, 2010), que se pueden aglutinar bajo el término *déficits del sistema político democrático*. Esto ya había sido diagnosticado en un documento elaborado por el PNUD (2004) (con datos hasta 2002) y ampliamente difundido en la región en el que se mostraba que la insatisfacción ciudadana con la democracia había aumentado y que los partidos políticos y los cuerpos legislativos recibían el apoyo de menos de un cuarto de la población, todo ello a pesar de que la mayoría de los países gozaba de más de veinte años de vida democrática ininterrumpida. La principal diferencia en la interpretación de ese fenómeno entre los autores es que unos (aquellos para los que el fracaso del neoliberalismo es el único factor causal del giro a la izquierda) lo conciben como parte integral del deterioro neoliberal (es decir, las reformas estructurales de mercado habrían sido más que un cambio de las políticas de desarrollo, y constituían también un proyecto de transformación político, social y cultural),⁹ sin embargo para otros los ámbitos económico y político son autónomos, aunque ciertamente existe relación entre las crisis en ambos de principios de siglo.¹⁰

La crisis económica y los déficits del sistema político democrático latinoamericano son las causas del giro a la izquierda más mencionadas en la literatura (aunque ningún estudio ofrece un planteamiento metodológico causal para demostrarlo).¹¹ También se suele resaltar el impacto que tuvo la normalización electoral en la región, ya que en la medida en que se institucionalizó la competencia política las elecciones se convirtieron en parte de la vida de los países y fueron asumidas por los distintos actores (incluidas las izquierdas) como la única ruta para la conquista del poder. En ese sentido, era esperable que tarde o temprano los partidos y candidatos que no habían accedido a los gobiernos tuvieran su oportunidad, la cual llegó cuando el electorado pudo castigar a sus autoridades por la crisis económica y por el mal desempeño público (Castañeda, 2006; Cleary, 2006; Levitsky y Roberts, 2011). Es más, algunos autores señalan que el

⁹ En especial Laclau (2006), Arditi (2009), Macdonald y Ruckert (2009), Roberts (2009), Sader (2009) y Borón (2012).

¹⁰ Véanse Lanzaro (2007), Paramio (2008), Cameron (2009), Panizza (2009), Santander (2009), Silva (2009) y Luna (2010).

¹¹ Con excepción de Diego (2016), que es una tesis de maestría de la Flacso México.

giro a la izquierda no fue más que una alternancia política en que la población no votó a favor de la izquierda, sino de oposiciones o de líderes que no habían gobernado previamente, esto con el fin de que haya cambios en los gobiernos (Panizza, 2009). ¿Por qué entonces no llegaron las izquierdas antes al poder?

La crisis de la deuda de la década de los ochenta del siglo xx afectó la credibilidad de los planteamientos que señalaban la necesidad del involucramiento del Estado en la economía, mismos que siempre han sido parte de los programas de la izquierda política. El desprestigio de estas ideas fue tan grande y el acuerdo sobre la conveniencia de las reformas de mercado llegó a ser tan amplio que varios candidatos que se postularon por partidos de tradición nacionalista-revolucionaria se ajustaron a los señalamientos del Consenso de Washington cuando les tocó gobernar.¹² El éxito en contener la inflación y en conservar la estabilidad económica, en un contexto en que el recuerdo de los trastornos provocados por la crisis aún estaban frescos, permitieron la continuidad de dichas políticas. Sin embargo, las izquierdas fueron avanzando de forma gradual en elecciones subnacionales y municipales, lo que les permitió, antes de llegar a la presidencia, gobernar regiones importantes de los países y ciudades tan centrales como Caracas, Brasilia, São Paulo, Montevideo, San Salvador y la Ciudad de México. Ese ejercicio de gobierno no solo les permitió ganar experiencia en la gestión pública, sino también construir una buena reputación al respecto.¹³ Además, el acceso que tuvo la izquierda a los poderes legislativos le permitió proyectar su imagen y mezclar discursos de oposición radical con el juego pragmático de alianzas y compromisos parlamentarios. En ese sentido, el giro habría sido producto de un proceso de acumulación política de la democracia que tomó casi dos décadas, tiempo en el cual las ideas de mercado perdieron fuerza y los partidos de izquierda acumularon experiencia y ganaron aceptación.

Las causas desarrolladas en los dos párrafos anteriores pueden sintetizarse bajo las expresiones *institucionalización de la competencia política* y *acumulación política democrática*. A las mismas la literatura agrega dos factores causales de índole internacional: el retiro de Estados Unidos de la re-

¹² Fue el caso de Carlos Menem en Argentina, Carlos Salinas en México y Víctor Paz en Bolivia. Esta aparente paradoja es explicada por Stokes (2001).

¹³ Este argumento es desarrollado por Panizza (2009) y por Levitsky y Roberts (2011).

gión después del ataque a las Torres Gemelas de 2001 (Cameron, 2009) y el surgimiento de un proceso de difusión regional hacia la izquierda, similar a un efecto contagio de un país a otro (Levitsky y Roberts, 2011). En relación con el primero, se menciona que el país norteamericano concentró sus esfuerzos militares, diplomáticos y económicos en las invasiones a Irak y Afganistán y en los efectos negativos que estas generaron en los países cercanos, lo que provocó que América Latina pasara a un segundo o tercer plano de su agenda internacional, motivo por el cual la fuerza cada vez mayor que iba cobrando el giro a la izquierda no se vio amenazada por una reacción contraria desde Washington. Esta postura de Estados Unidos incluso aumentó después de la IV Cumbre de las Américas en Mar del Plata cuando prácticamente quedó sepultada cualquier posibilidad de que se concretara la iniciativa norteamericana de constituir un área de libre comercio continental (ALCA). Respecto al proceso de difusión regional se señala que el éxito de los primeros gobiernos de izquierda en lograr un buen desempeño económico (en buena medida gracias al aumento de precios internacionales de materias primas) eliminó las reservas que algunos sectores de la población en otros países tenían con la izquierda y dio mayor impulso al cambio. El cuadro 2 resume las causas en América Latina que identifica la literatura comparada.

Cuadro 2. Causas del giro a la izquierda

Ámbito	Causas
Interno	Crisis económica/fracaso del neoliberalismo
	Déficits del sistema político democrático
	Institucionalización de la competencia política
Externo	Acumulación política democrática
	Retiro de Estados Unidos de la región
	Difusión regional hacia la izquierda

Fuente: Elaboración propia.

En la discusión académica sobre los tipos de izquierda en América Latina se identifican dos corrientes: una que construye tipologías mutuamente excluyentes (que es predominante en los estudios) y otra que propone clasificaciones multidimensionales. En cuanto a la primera, ha tenido amplia difusión el planteamiento de Castañeda (2006) de que

existen dos izquierdas en la región, una populista y otra socialdemócrata. La primera estaría presente en Venezuela, Bolivia y Argentina, y la segunda en Chile, Uruguay y Brasil. Para este autor solo la izquierda socialdemócrata representa un avance en términos de su responsabilidad fiscal, su pluralismo y su apertura a la modernidad, en tanto que el populismo es un retroceso histórico en todos los sentidos. Oxhorn (2009) y Weyland (2010) presentan clasificaciones muy similares, pero con distintas etiquetas; así, identifican una izquierda moderada donde las instituciones representativas tuvieron éxito (presente en Brasil, Chile y Uruguay) y otra contestataria que emergió del rechazo a esas instituciones (en Venezuela, Bolivia y Ecuador). Por su parte, Schamis (2006) y Lanzaro (2008) proponen una categoría intermedia entre las dos anteriores, misma que estaría caracterizada por su pasado nacional-popular y por el hecho de que está presente en países que nunca pudieron establecer un sistema de partidos institucionalizado (en Argentina, Nicaragua y Perú).

En las tipologías mutuamente excluyentes siempre aparecen de un lado Chile, Uruguay y Brasil, y del otro Venezuela, Bolivia y Ecuador, y se desvanecen las diferencias que hay en el interior de cada grupo, pero las clasificaciones multidimensionales añaden información importante. Así, por ejemplo, Panizza (2009) muestra que en Bolivia la participación directa y la deliberación de los actores sociales es muy alta, lo que la acerca al caso uruguayo y la aleja de la izquierda venezolana, pero que el poder del líder también es alto, lo que, de forma contraria, la aleja de Montevideo y la acerca a Caracas. Para Luna (2010) también hay similitudes entre la izquierda uruguaya y la boliviana (en relación con los límites sociales al poder) y entre esta y la venezolana (ya que ambas buscan cambios radicales). Finalmente, quienes hacen la propuesta más interesante son Levitsky y Roberts (2011), quienes identifican cinco grupos de dicha corriente política en la región: izquierda electoral profesional (en Brasil y Chile), izquierda orgánica de masas (en Uruguay), maquinaria populista (en Argentina y Nicaragua), izquierda populista (en Venezuela y Ecuador) y movimiento de izquierda (en Bolivia).

Al igual que en la discusión sobre qué es la izquierda, en el debate sobre los tipos de izquierda no queda claro si los autores están evaluando lo que dicen los líderes o lo que hacen, los orígenes de esos gobiernos o la forma en que gobiernan. Tampoco ayuda mucho que ese debate

esté atravesado por prejuicios en contra de una parte de la izquierda de la región o esté planteado en términos normativos de la buena y la mala izquierda, algo que es notorio al menos en Castañeda (2006), Schamis (2006)¹⁴ y Weyland (2010). Pero ese tipo de sesgo también se aprecia en quienes se empeñan en defender, con ninguna evidencia sistemática, las experiencias de Venezuela, Bolivia y Ecuador (Laclau, 2006; Borón, 2012). En ese sentido, resulta lamentable que la batalla ideológica permeanee en los estudios científicos sobre los fenómenos políticos.¹⁵

La tercera etapa de la discusión académica sobre el giro a la izquierda es reciente y está muy poco desarrollada. En ella se discute sobre los resultados de los gobiernos de izquierda: cómo gobernaron en términos del ejercicio de autoridad, qué reformas institucionales emprendieron y qué políticas impulsaron a nivel económico y social. Al respecto hay acuerdo en que las condiciones externas del giro fueron favorables debido al notable incremento de precios de materias primas que benefició a la región por al menos una década. Ello permitió a los gobernantes aumentar el gasto social, fomentar la participación económica del Estado (aunque con grandes variaciones entre países) y, al mismo tiempo, mantener en orden las finanzas públicas; es decir, sin abandonar la ortodoxia económica la izquierda pudo emprender políticas redistributivas, siendo predominantes los programas de transferencias monetarias condicionadas¹⁶ (Madrid, Hunter y Weyland, 2010; Levitsky y Roberts, 2011; Macdonald y Ruckert, 2009; Hershberg, 2010). En realidad, este tipo de programa social no es una innovación de la izquierda, ya que surgió en México a mediados de los años noventa (en pleno dominio priista) y después fue propagado en la región por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero la posibilidad que ofrecía de llegar a los sectores más

¹⁴ Este autor incluso viola la regla de clasificación (institucionalización del sistema de partidos) que él mismo establece y señala que en Venezuela y Bolivia existe una petroizquierda (gobiernos que sobreviven gracias a las rentas petroleras).

¹⁵ El debate contemporáneo sobre el populismo, que es una parte de la discusión más amplia sobre los tipos de izquierda, es el que más ha sufrido la falta de rigor científico de la academia.

¹⁶ Esta combinación entre ortodoxia económica y política social activa ha sido denominada posneoliberalismo. Para algunos autores este es el rasgo principal de los gobiernos de izquierda latinoamericanos, los que no serían neoliberales, pero tampoco antineoliberales ni keynesianos (esto último exigiría al menos el intento de construir un Estado de bienestar, lo que no ha sucedido). Al respecto, véase Macdonald y Ruckert (2009).

necesitados y de obtener buenos resultados con poca inversión pública lo hizo muy popular entre los gobernantes.¹⁷ Esto muestra que un rasgo adicional de la izquierda latinoamericana actual es su pragmatismo.

Lo anterior significa que el giro a la izquierda no significó el fin del Consenso de Washington (Oxhorn, 2009; Silva, 2009), pero tampoco el inicio de una transición al socialismo, sino el intento de construir un capitalismo más incluyente (Levitsky y Roberts, 2011). Sin embargo, si bien el aumento de precios de materias primas permitió a los gobiernos impulsar políticas sociales de forma más activa que sus antecesores (con buenos resultados en términos de reducción de la pobreza y de la desigualdad), también redujo la presión para emprender reformas impositivas progresivas y para iniciar un proceso de transformación productiva que permitieran que los avances logrados fueran sostenibles en el largo plazo. En ese sentido, América Latina podría haber perdido una oportunidad histórica e incluso haber dado un paso muy peligroso debido a que la dependencia de las materias primas se profundizó y su vulnerabilidad externa aumentó (Hershberg, 2010).

En el aspecto político, los estudios destacan que los gobiernos de izquierda han mantenido las instituciones básicas de la democracia electoral y no han echado abajo el orden político; sin embargo, claramente en unos países los cambios han sido más radicales que en otros, ya que mientras en Brasil, Chile y Uruguay se ha respetado a las instituciones políticas existentes y a la oposición, en Venezuela, Bolivia y Ecuador se concentró el poder en el Ejecutivo debilitando los pesos y contrapesos entre poderes y prevaleció una práctica política confrontacional y polarizante (Levitsky y Roberts, 2011). Si bien esto lleva a afirmar que la democracia fue respetada más en el primer grupo que en el segundo, no puede ignorarse que los sectores políticamente excluidos antes del giro vieron incrementada su influencia en mayor medida en este que en aquel, y que, como consecuencia, la satisfacción con la democracia aumentó notablemente en los países gobernados, por lo que algunos consideran la izquierda populista y que en los de la izquierda socialdemócrata dicha satisfacción se mantuvo en niveles relativamente bajos (Madrid, Hunter y Weyland, 2010). En ese sentido, el reto para Amé-

¹⁷ Véanse Fiszbein y Schady (2009) y Cecchini y Madariaga (2011).

rica Latina sigue siendo el mismo desde hace décadas: ¿cómo lograr una inclusión política plural? (Oxhorn, 2009).

El presente libro se inserta en la tercera etapa de estudios sobre el giro a la izquierda en América Latina, pero a la vez plantea interrogantes adicionales, por ejemplo, si este ha concluido, qué escenarios se abren a futuro para la región y qué retos deben afrontar los nuevos gobiernos con independencia de su signo ideológico. Sin embargo, es preciso señalar que las preguntas que han motivado cada una de las etapas anteriores aún no han sido completamente respondidas. Así, todavía está pendiente la corroboración empírica de las causas del giro, el estudio de los factores que explican por qué surgen distintos tipos de izquierda en la región y sus implicaciones, el análisis de por qué ciertos gobiernos decidieron emprender cambios más profundos que otros y el examen de si el aumento de precios de materias primas debió producir avances sociales mayores (evaluación de la gestión pública de la izquierda), entre otras interrogantes. El debate que se genere debe, además, procurar ser desapasionado y centrado en la evidencia disponible.

Contenido del libro

El presente libro recolecta el análisis del giro a la izquierda en seis países (Venezuela, Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador y Paraguay), entre los cuales hay casos en que ese proceso es o fue muy duradero y en otros, más bien corto. También hay países que pertenecen a lo que algunos autores llaman la izquierda populista, otros a la izquierda socialdemócrata y algunos casos intermedios.¹⁸ En ese sentido, las conclusiones de los capítulos, tomadas en conjunto, pueden considerarse representativas de la experiencia de América Latina con gobiernos de izquierda en un contexto de continuidad democrática. Se incluye un capítulo adicional, sobre Cuba, que permite comparar esa experiencia con otra en que el mayor referente que tuvo la izquierda latinoamericana durante décadas se ha mantenido gobernando de manera ininterrumpida por más de cincuenta años. Así pues, el capítulo que aborda la actualidad cubana

¹⁸ Con el objetivo de maximizar la variación, se buscó heterogeneidad en los casos seleccionados.

hará posible saber si la izquierda latinoamericana tiene mayores afinidades con el régimen o con la oposición de la isla.

Todos los capítulos que abordan la experiencia de países que vivieron el giro destacan que los gobiernos de izquierda impulsaron políticas sociales más activas respecto a sus predecesores y que el resultado de las mismas fue una caída de la pobreza y una reducción de la desigualdad. Si recordamos que la literatura señala que las posturas de izquierda se caracterizan por la búsqueda de la igualdad, pues se puede afirmar que al menos en el ámbito socioeconómico la izquierda latinoamericana es precisamente de izquierda. Si bien esta conclusión respalda los hallazgos previos de la literatura al respecto, los capítulos siguientes aportan información adicional que estaba dispersa en estudios de caso: en unos países la política social consistió principalmente en la creación de programas de transferencias condicionadas y en otros empleó, además, mayor gasto en salud, educación, vivienda y salarios. El porqué de ello radica en la capacidad fiscal de cada Estado, lo que parece tener relación con el tamaño de la economía de los países. Así, Zaremborg y Olmeda muestran en sus trabajos que en Brasil y en Argentina los gobiernos pudieron emprender políticas activas laborales, salariales, educativas y de salud, a la par que sostuvieron grandes programas de transferencias como Bolsa Familia y Asignación Universal por Hijo, respectivamente.¹⁹ En cambio, en Paraguay, Bolivia y Ecuador las posibilidades de aumentar el gasto social fueron menores, por lo que la importancia de los mencionados programas fue mayor (véanse los capítulos de Torrico, Solís y Cerna, y Basabe y Barahona).²⁰ En el caso venezolano la política social fue, además, innovadora, ya que, como muestran Salazar y Diego en el capítulo 6. “Venezuela y el fin del giro a la izquierda en América Latina”, creó estructuras paralelas a las del Estado con participación social a través del Sistema Nacional de Misiones (que, sin embargo, luego fue utilizado con fines políticos para movilizar la defensa del gobierno de Maduro).

¹⁹ En Argentina incluso se mantuvieron subsidios otorgados por el Estado a empresas privadas prestadoras de servicios públicos con el objetivo de mantener las tarifas prácticamente congeladas.

²⁰ Tal afirmación no significa que en estos tres últimos países no haya aumentado el gasto en educación, salud o vivienda, sino que, en comparación con los países más grandes, el incremento fue menor.

El aumento del gasto social de los gobiernos de izquierda fue posible gracias al notable incremento de precios de materias primas a nivel internacional, que impulsó el crecimiento económico de los países²¹ y elevó los recursos públicos. Ese contexto favorable brindado por el petróleo en Venezuela, Brasil y Ecuador, por el gas natural en Bolivia, y por la soya en Argentina y Paraguay,²² no generó la necesidad o el estímulo para que los gobernantes emprendieran reformas impositivas que eleven la recaudación a partir de gravar a los sectores de mayores ingresos.²³ De hecho, en todos los países analizados la estructura tributaria es regresiva y el IVA es el impuesto que más aporta a las finanzas públicas, lo que significa que en buena medida estas crecieron gracias a la expansión del consumo que propició el *boom* de materias primas. En ese sentido, los gobiernos del giro relegaron una de las principales agendas que define a la izquierda: lograr una estructura tributaria progresiva. El capítulo sobre Paraguay de Solís y Cerna sugiere una explicación de ello: que los gobiernos optaron por no enfrentarse a las élites económicas de sus países. Habiendo dinero en las arcas públicas, ¿para qué pelearse con los mayores empresarios?, ¿para qué abrir un frente adicional de conflicto? En este tema el pragmatismo de la izquierda puede tener consecuencias sociales adversas en el largo plazo, ya que es previsible que con un ciclo económico a la baja el gasto social también se reduzca, algo que, como mencionan Olmeda y Zaremborg, ya se observa en Argentina (donde el gobierno de Mauricio Macri disminuyó significativamente los subsidios a servicios) y en Brasil (donde la administración de Temer aprobó una reforma constitucional que congela por veinte años el gasto público). Esto puede ocurrir debido al deterioro

²¹ En Argentina el crecimiento anual en el periodo 2003-2007 fue de casi 10%, Paraguay llegó a crecer un increíble 15% en 2010, la economía de Brasil luego de diez años de gobierno del Partido de los Trabajadores era casi 40% más grande, Ecuador y Bolivia promediaron un crecimiento anual de 5% durante la mayor parte de los gobiernos de Rafael Correa y Evo Morales, y la economía venezolana aumentó su tamaño 58% entre 2004 y 2012.

²² Respecto a 2003, en 2010 los precios internacionales del petróleo, del gas natural y de la soya eran 174, 164 y 70% más altos, respectivamente (según estadísticas de la CEPAL, disponibles en <http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/Portada.asp>).

²³ Solo en Bolivia se dio un paso parcial en ese sentido con la nacionalización de hidrocarburos de mayo de 2006, que en realidad consistió en una renegociación de contratos que obligó a todas las empresas petroleras al pago de mayores tributos. Sin embargo, el resto de impuestos se mantuvo inalterado (véase el capítulo 5 de Mario Torrico).

económico, incluso sin que la izquierda salga del poder, como muestra el capítulo de Salazar y Diego.

Los gobiernos del giro intentaron mantener la estabilidad macroeconómica y ciertamente lo lograron durante varios años, lo que llamó la atención de la academia ya que se alejaban del “populismo macroeconómico” que Dornbusch y Edwards (1992) señalaron como una característica de la izquierda en el poder en la región. Sin embargo, en la medida en que los precios de materias primas empezaron a disminuir y el ciclo económico favorable se revirtió,²⁴ las dificultades en las finanzas públicas reaparecieron, situación que en unos casos fue enfrentada con mayor éxito (Bolivia, Paraguay) y que en otros ocasionó el retorno de presiones inflacionarias, de déficit público y de recesión económica (Argentina, Brasil, Ecuador). Mención aparte merece el caso de Venezuela, en que la crisis económica del gobierno de Nicolás Maduro no tiene precedentes en ese país. Si bien los mencionados precios no regresaron al nivel anterior al *boom* de materias primas, su reducción puso en aprietos a los gobiernos en virtud del aumento del gasto público (en especial del gasto social) que ocurrió durante los años del giro.²⁵ Es posible también que el aumento de recursos públicos haya ocasionado gasto ineficiente que pasó desapercibido en los tiempos de bonanza económica, pero que ocasiona serios problemas en tiempos de menores ingresos (en todos los países el gasto corriente también se incrementó). Esto es algo que estudios futuros deberán abordar, pero de momento queda claro que sí hubo giro a la izquierda en el gasto social, aunque no en la generación de recursos públicos, lo que significa que cuando se acaban los ingresos extraordinarios también se termina la posibilidad de tener políticas sociales activas.

Lo anterior podría interpretarse como que el giro a la izquierda a nivel socioeconómico solo fue posible en virtud del *boom* de las mate-

²⁴ Respecto a 2010, en 2015 los precios internacionales del petróleo, del gas natural y de la soya fueron 52, 41 y 28% más bajos, respectivamente (según estadísticas de la CEPAL, disponibles en <http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/Portada.asp>).

²⁵ En los años de gobierno kirchnerista en Argentina el gasto público aumentó en 11.5 puntos porcentuales respecto al PIB, en el tiempo en que el PT gobernó Brasil se incrementó en 8 puntos, en el Ecuador de Correa en 7.3, en Bolivia bajo Morales, en 11.3, en Paraguay con Fernando Lugo en 7.09 y en la Venezuela de Hugo Chávez y Maduro en 16.13 puntos.

rias primas, y que sin él los gobiernos no hubieran podido aumentar el gasto social incluso teniendo la voluntad de hacerlo. Este escenario contrafáctico se comprueba parcialmente en el caso de Venezuela, donde el gobierno del PSUV ha tenido que aumentar el IVA debido a sus dificultades fiscales, medida que afecta en mayor grado a los sectores de menores ingresos.²⁶ La comprobación irrefutable únicamente la tendríamos si ocurriera otro ciclo similar, ahora con gobiernos de derecha en varios países de la región. Por el momento, la evidencia disponible nos indica que en términos de política y gasto social la izquierda latinoamericana fue coherente. Sin embargo, no lo fue en términos de reducir otro tipo de desigualdades, en especial las que se desprenden de diferencias de género, preferencia sexual o etnia. Solo en Argentina se avanzó en el tema de matrimonio igualitario y solo en Bolivia hubo un impulso a los derechos de los pueblos indígenas (según se describe en los capítulos de Olmeda y Torrico). Los capítulos de Basabe y Barahona, sobre Ecuador, y de Solís y Cerna, sobre Paraguay, muestran que en términos de valores la izquierda es tan conservadora como el resto de la sociedad; en ese sentido, bien podríamos preguntar: si esas agendas sociales no pudieron avanzar con gobiernos de izquierda, ¿cuándo podrán hacerlo?

El giro a la izquierda fue notorio por la coincidencia de triunfos electorales de partidos y candidatos de esa corriente en los países, pero al parecer los electores nunca giraron a la izquierda. Al respecto, los capítulos sobre Ecuador y Bolivia muestran que, efectivamente, el elector mediano de esos países es de centro, y el capítulo sobre Paraguay revela información de que es de centro-derecha. Para Brasil y Argentina los datos de Latinobarómetro indican que el electorado también es predominantemente de centro y que eso no ha cambiado entre 2003 y 2015. Todo esto apoya el planteamiento de Panizza (2009) de que el giro a la izquierda fue en realidad una alternancia política en favor de oposiciones o de líderes que no habían gobernado previamente, lo que significa que en los países en que la derecha ahora ocupa el poder los electores también estarán dispuestos a castigar a sus gobernantes en caso de mal desempeño. Esas son sin duda buenas noticias para la democracia, ya que evidencian la existencia de un electorado maduro, o por lo menos de una buena parte.

²⁶ Véase el capítulo de Salazar y Diego.

En lo que sí hubo diferencias en los gobiernos del giro fue que en unos casos impulsaron profundas reformas institucionales a través de cambios constitucionales (en Venezuela, Ecuador y Bolivia) y que en otros básicamente mantuvieron la arquitectura institucional heredada (en Brasil, Argentina y Paraguay). El primer grupo es el mismo que algunos autores han llamado la “izquierda populista” (y en el que las reformas prácticamente han concentrado el poder en el Ejecutivo), y en el segundo hay algunos países de la “izquierda socialdemócrata”. Los capítulos del libro presentan posibles explicaciones del porqué de esa diferencia; así, Torrico señala que en Bolivia la llegada del Movimiento al Socialismo al poder supuso simultáneamente el empoderamiento de un gran sector de la sociedad que estuvo históricamente relegado (los indígenas y campesinos) y el colapso del sistema de partidos, y Olmeda muestra que en Argentina no hubo un desmoronamiento de los partidos (a pesar de la profundidad de la crisis de 2001-2002) y tampoco había un grupo específico de la población que estaba sistemáticamente excluido. En este tenor, la existencia de un grupo con esas características que logra acceder al poder y el grado de institucionalización del sistema de partidos podrían explicar el que se impulsen reformas institucionales profundas (aunque no hay ningún motivo *a priori* para que las mismas generen siempre concentración del poder).

Un fenómeno que no había sido mencionado en la literatura comparada previa, pero que es frecuentemente señalado en los capítulos de este libro es el de la corrupción en que cayeron los gobiernos de izquierda de la región. En todos los países del giro cubiertos en esta obra los actos de corrupción contribuyeron al desprestigio de los gobernantes y, en algunos casos, a que la izquierda sea finalmente derrotada, ya sea en las urnas o a través de juicios políticos. Así, por ejemplo, en Brasil la operación Lava Jato que involucró a políticos de los principales partidos y a la empresa más importante del país, Petrobras, generó el clima de indignación que culminó con la destitución de Dilma Rousseff (aunque la expresidenta fue procesada por irregularidades administrativas de tipo contable, y no por delitos de corrupción); en Argentina los escándalos de corrupción llegaron a involucrar a la presidenta Cristina Fernández y al vicepresidente, al destaparse el otorgamiento de contratos de obra pública a empresarios cuyas fortunas crecieron de manera inexplicable desde la llegada de los Kirchner al poder; en Bolivia se develó un millonario

desfalco de parte de dirigentes del MAS al Fondo de Desarrollo Indígena (que derivó en el encarcelamiento de dos ministras de Estado) y se descubrió una red de influencias en que participaba la expareja del presidente Morales y por la cual se otorgaron millonarios contratos a una empresa china. Ambos escándalos se hicieron públicos poco antes del referéndum de febrero de 2016 a través del cual el presidente buscaba la aprobación popular para una nueva reelección en 2019, pero resultó derrotado.

Si recordamos que la izquierda latinoamericana llegó al poder en buena medida por el mal desempeño y el desprestigio de los gobernantes anteriores o de todo el sistema de partidos en virtud de sus prácticas clientelares y corruptas, solo podemos concluir, con base en los hechos mencionados en el párrafo precedente, que la corrupción es un fenómeno que trasciende ideologías políticas y cuya solución va mucho más allá de buenas voluntades o de exhortos a la ética pública. Incluso es muy probable que las reformas institucionales que se impulsaron en algunos países y concentraron el poder en el Ejecutivo hayan debilitado a las instancias de control administrativo y de contrapeso político, aumentando los incentivos para incurrir en prácticas corruptas. Resta mucho por estudiar al respecto, e incluso a nivel internacional la agenda de investigación sobre corrupción es de las más importantes debido a la complejidad del fenómeno y a sus efectos nocivos, pero un buen punto de partida será justamente reconocer que este problema es transversal a los partidos, a los líderes, al género de los gobernantes, a sus pertenencias de clase, de origen étnico, etcétera, y discutir científicamente los escenarios que favorecen su propagación y los mecanismos que ayudan a reducirlo.

Una novedad en la política latinoamericana en la presente década es el efecto cada vez más importante que tiene el uso de internet y de redes sociales virtuales. En dos de los capítulos de este libro se presenta evidencia de que han jugado un papel muy relevante en las derrotas que sufrió la izquierda en Brasil (en la convocatoria a las protestas en contra de Dilma Rousseff) y en Bolivia (en el llamado al voto por el “No” del referéndum de 2016). Así, Zaremborg muestra que quienes asistieron a las marchas en contra del gobierno del PT habían sido convocados en gran número por redes sociales y no participaban regularmente en política, en tanto que quienes marchaban en apoyo de la presidenta pertenecían mayoritariamente a organizaciones políticas tradicionales (sindicatos, movimientos sociales, partidos políticos, asociaciones de barrio, entre otras).

Torrico, por otra parte, encuentra evidencia de que en la medida en que las personas usan internet con mayor frecuencia aumenta la probabilidad de que voten en contra del MAS. Estos hallazgos son de la mayor relevancia y prueban que debe emerger una agenda de investigación comparada sobre internet, redes sociales y política en América Latina. Lo poco que sabemos con los capítulos de este libro es que el efecto de estos nuevos medios de comunicación e interacción ha sido negativo para la izquierda, pero resta saber si eso es por el desgaste de dichos gobiernos (en cuyo caso si hubiera desgaste de gobiernos de derecha el efecto sería el mismo) o porque el perfil de esos usuarios es contrario a las posturas izquierdistas.

¿Ha concluido el giro a la izquierda? ¿Estamos ante un giro a la derecha? Al momento de escribir este texto, en siete de los catorce países del cuadro 1 la izquierda no había salido del poder (Venezuela, Uruguay, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica), en uno de ellos salió, pero luego regresó (Chile) y en seis ha sido derrotada en las urnas o en el Congreso (Brasil, Argentina, Perú, Panamá, Paraguay y Guatemala). En consecuencia, la respuesta a la primera pregunta es “sí”, pero a la segunda es “no”; es decir, el péndulo de la política latinoamericana ya no está situado a la izquierda, pero aún no ha girado a la derecha, aunque ello podría ocurrir. Resulta impresionante que el éxito o el fracaso de líderes y gobiernos sea tan altamente sensible a los ciclos de la economía y, en particular, a los precios internacionales de materias primas, lo que nos lleva a concluir que en última instancia la suerte política de la región está en gran medida determinada por factores externos sobre los que la influencia de los países latinoamericanos es nula. No puede llegarse a otra conclusión si al menos se considera lo siguiente: a) que el giro comenzó en medio de una crisis económica cuyos costos políticos fueron muy altos para quienes se encontraban en ese momento gobernando en la región; b) que, de acuerdo al hallazgo que se muestra en el capítulo de Basabe y Barahona, en Ecuador los triunfos electorales a nivel subnacional de Alianza País y el apoyo al presidente Correa van prácticamente de la mano con el precio del petróleo, y c) que, como señalan Olmeda y Zaremberg, el triunfo de Macri en Argentina y el arribo de Temer a la presidencia de Brasil se produjeron en contextos recesivos de sus economías. Los estudios futuros deberán profundizar al respecto, e intentar encontrar los factores internos que hacen que esa vulnerabilidad política externa se reduzca.

Los efectos del ciclo económico llegaron a sentirse no solo en los procesos políticos internos de los países de la región, sino también en las relaciones entre ellos. Así, el *boom* de las materias primas y la coincidencia ideológica de los gobernantes propició su acercamiento y el emprendimiento de iniciativas de integración regional en que se destacaba la identidad y la solidaridad latinoamericana como factores que deberían fortalecer la unidad de América Latina. En ese espíritu se crearon la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y varios países se sumaron al ya existente Mercosur. Sin embargo, incluso antes de que varias de las izquierdas salieran del poder esas iniciativas perdieron fuerza y a la fecha la tan pretendida unidad latinoamericana está prácticamente congelada, lo que tuvo que ver con que los problemas económicos de los gobiernos y las crisis políticas que generaron ocuparon la agenda y las preocupaciones de los líderes que anteriormente habían buscado impulsarla. La desaparición de Hugo Chávez, figura emblemática en todos los foros continentales, y de Néstor Kirchner, quien fuera el primer secretario general de la Unasur, sin duda también influyeron en ello.

Como se ha mostrado, la inclusión socioeconómica ha sido la agenda más impulsada por los países del giro, seguida (en algunos países) por la inclusión política. En ambos temas la izquierda latinoamericana coincide con la oposición cubana, aunque en la isla caribeña es inversa la importancia que se les asigna: la inclusión política por encima de la socioeconómica. Al respecto, el capítulo de Chaguaceda muestra que en la formación y crecimiento de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) resultó crucial la construcción de una identidad ciudadana democrática, la que tiene a los derechos humanos (entendidos como demandas por el cambio de las relaciones de poder) como principal articulador. Sin embargo, en el contexto actual en que el gobierno de Raúl Castro ha emprendido reformas económicas para liberar algunos ámbitos de mercado y se esperaría una flexibilización política y mayor tolerancia a las organizaciones opositoras, los integrantes de la Unpacu han sido víctimas de mayor represión y, a la fecha, no hay ninguna señal de que el régimen pretenda avanzar hacia una transición democrática. En esas condiciones, y si se considera que las demandas de esta organización giran en torno a la construcción de una economía social de mercado, de libertad sindical, de libertad a presos políticos, de una nueva constitución, etcétera, se puede

concluir que la izquierda regional tiene, en general, más afinidad con los grupos opositores que con el gobierno cubano. Este hallazgo es muy sorprendente dada la cercanía de varios líderes latinoamericanos con Fidel (antes) y con Raúl Castro (ahora), pero hablando estrictamente de los temas que interesan a unos y a otros, claramente el régimen cubano se aleja de lo que es hoy la izquierda en América Latina.²⁷

Los capítulos de este libro dan sustento parcial a la caracterización de la izquierda regional que se realiza en la literatura. A pesar de las diferencias existentes entre países, la izquierda de hoy ciertamente no es anticapitalista (a pesar de la estridencia de algunos de sus líderes), asume la importancia de la estabilidad económica (aunque no en todos los casos la ha podido mantener) y de los intercambios de mercado, pero también está convencida de que se requiere de regulación estatal y de redistribución del ingreso. Sin embargo, la izquierda no ha emprendido la tan necesaria reforma de la estructura tributaria que haga sostenible las políticas impulsadas. En ese sentido, su dependencia de las buenas condiciones externas no la hace distinta a los gobiernos de derecha que prevalecieron anteriormente. No obstante, un logro de los años en que imperó el giro fue mostrar que el neoliberalismo no es la única opción disponible para las economías latinoamericanas y que a través de políticas sociales activas se puede reducir la pobreza y la desigualdad. Por otra parte, en el ámbito político es mucho lo que la izquierda nos queda a deber, ya que ha sido escaso el impulso a medios alternativos de participación política,²⁸ y en los países en que se han empleado mecanismos de democracia directa ha prevalecido el afán plebiscitario de los presidentes.²⁹ También es muy poco lo que se ha avanzado en términos de igualdad de género o del reconocimiento de derechos a minorías sexuales e indígenas. En este ámbito, lo que señala la literatura como rasgos de la izquierda está basado más en buenos deseos que en evidencia.

Ya sea en el poder o en la oposición, la izquierda será un rasgo permanente de la política institucional en América Latina y en cada elec-

²⁷ Con la única excepción de Venezuela.

²⁸ Al respecto, el capítulo sobre Brasil de Zaremborg muestra que en los gobiernos del PT se dio un impulso a nivel municipal de los consejos gestores de políticas, en los que participan distintos tipos de organizaciones sociales.

²⁹ Véanse en este libro los capítulos sobre Bolivia, Ecuador y Venezuela.

ción, un actor competitivo con serias posibilidades de triunfo (en varios países durante mucho tiempo estuvo aislada en sindicatos, movimientos sociales, etc.). Esa herencia que nos deja el giro a la izquierda es favorable y permite que la democracia sea hoy más plural que hace dos décadas (tal vez la única excepción sea la de Venezuela). Además, actualmente los electores pueden distinguir con mayor claridad que antes qué esperar de gobiernos de izquierda o de otras corrientes, ya que el giro mostró un cambio no solo en quienes gobernaban, sino también en cómo lo hacían. Esa mayor información también es positiva. A pesar de ello, quedan a futuro muchos retos, no solo para la izquierda sino para los países en general: ¿cómo reducir sostenidamente los rezagos sociales?, ¿cómo ganar en inclusión política y en pluralismo al mismo tiempo?, ¿cómo enfrentar a la corrupción sin caer en planteamientos ingenuos?, ¿cómo disminuir la vulnerabilidad económica y política respecto al exterior? Los capítulos de este libro contribuyen de forma importante al conocimiento sobre la política regional, pero sobre todo ayudan al surgimiento de nuevas interrogantes. En última instancia, esa es la prueba de un buen trabajo académico.

Referencias

- Arditi, Benjamin (2009). "El giro a la izquierda en América Latina: ¿una política post-liberal?", *Ciências Sociais Unisinos*, vol. 45, núm. 3, pp. 232-246.
- Beasley-Murray, Jon, Maxwell A. Cameron y Eric Hershberg (2010). "Latin America's Left Turns: A Tour D'Horizon", en Maxwell A. Cameron y Eric Hershberg (eds.), *Latin America's Left Turns: Politics, Policies, and Trajectories of Change*, Boulder, Lynne Rienner.
- Boersner, Demetrio (2005). "Gobiernos de izquierda en América Latina: tendencias y experiencias", *Nueva Sociedad*, núm. 197, pp. 100-113.
- Borón, Atilio (2012). "¿Una nueva era populista en América Latina?", en Martha Lucía Márquez, Eduardo Pastrana y Guillermo Hoyos (eds.), *El eterno retorno del populismo en América Latina y el Caribe*, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana/Clacso.
- Borón, Atilio (2004). "La izquierda latinoamericana a comienzos del siglo XXI: nuevas realidades y urgentes desafíos", *Observatorio Social de América Latina*, año V, núm. 13, pp. 41-56.

- Cameron, Maxwell A. (2009). "Latin America's Left Turns: Beyond Good and Bad", *Third World Quarterly*, vol. 30, núm. 2, pp. 331-348.
- Castañeda, Jorge (2006). "Latin America's Left Turn", *Foreign Affairs*, vol. 85, núm. 3, pp. 28-43.
- Cecchini, Simone y Aldo Madariaga (2011). *Programas de Transferencias Condicionadas. Balance de la experiencia reciente en América Latina y el Caribe*, Cuadernos de la CEPAL, núm. 95, Santiago de Chile, CEPAL/ASDI.
- CEPAL (2002). *Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2001-2002*, Santiago de Chile, CEPAL.
- Cleary, Matthew R. (2006). "Explaining the Left's Resurgence", *Journal of Democracy*, vol. 17, núm. 4, pp. 35-49.
- Diego, Adriana (2016). *Análisis de los factores que favorecieron el giro a la izquierda en América Latina: ¿por qué México no fue parte del patrón?*, tesis de Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos, México, Flacso México.
- Dornbusch, Rudiger y Sebastián Edwards (1992). *Macroeconomía del populismo en la América Latina*, México, FCE.
- Fiszbein, Ariel y Norbert Schady (2009). *Transferencias monetarias condicionadas. Reduciendo la pobreza actual y futura*, Washington, Banco Mundial.
- Hershberg, Eric (2010). "Latin America's Left: The Impact of the External Environment", en Maxwell A. Cameron y Eric Hershberg (eds.), *Latin America's Left Turns: Politics, Policies, and Trajectories of Change*, Boulder, Lynne Rienner.
- Laclau, Ernesto (2006). "La deriva populista y la centroizquierda latinoamericana", *Nueva Sociedad*, núm. 205, pp. 56-61.
- Lanzaro, Jorge (2008). "La 'tercera ola' de las izquierdas latinoamericanas: entre el populismo y la social-democracia", *Estudio/Working Paper*, núm. 91, Uruguay, Universidad de la República.
- Lanzaro, Jorge (2007). "Gobiernos de izquierda en América Latina: entre el populismo y la socialdemocracia", en Ernst Hillebrand (ed.), *La izquierda en América Latina y Europa: nuevos procesos, nuevos dilemas*, Uruguay, Friedrich Ebert Stiftung.
- Levitsky, Steven y Kenneth M. Roberts (2011). "Introduction: Latin America's 'Left Turn'. A Framework for Analysis", en Steven Levitsky y Kenneth M. Roberts (eds.), *The Resurgence of the Latin American Left*, Baltimore, The Johns Hopkins University Press.
- Luna, Juan Pablo (2010). "The Left Turns: Why They Happened and How They Compare", en Maxwell A. Cameron y Eric Hershberg (eds.), *Latin*

- America's Left Turns: Politics, Policies, and Trajectories of Change*, Boulder, Lynne Rienner.
- Macdonald, Laura y Arne Ruckert (2009). "Post-Neoliberalism in the Americas: An Introduction", en Laura Macdonald y Arne Ruckert (eds.), *Post-Neoliberalism in the Americas*, Nueva York, Palgrave.
- Madrid, Raúl L., Wendy Hunter y Kurt Weyland (2010). "The Policies and Performance of the Contestatory and Moderate Left", en Kurt Weyland, Raúl L. Madrid y Wendy Hunter (eds.), *Leftist Governments in Latin America. Successes and Shortcomings*, Nueva York, Cambridge University Press.
- Oxhorn, Philip (2009). "Beyond Neoliberalism? Latin America's New Crossroads", en John Burdick, Philip Oxhorn y Kenneth M. Roberts (eds.), *Beyond Neoliberalism in Latin America? Societies and Politics at the Crossroads*, Nueva York, Palgrave.
- Panizza, Francisco (2009). "Nuevas izquierdas y democracia en América Latina", *Revista CIDOB d'Afers Internacionals*, núm. 85/86, pp. 75-88.
- Panizza, Francisco (2005). "Unarmed Utopia Revisited: The Resurgence of Left-of-Centre Politics in Latin America", *Political Studies*, vol. 53, núm. 4, pp. 716-734.
- Paramio, Ludolfo (2008). "La izquierda en América Latina", *Quórum. Revista de Pensamiento Iberoamericano*, núm. 22, pp. 21-29.
- Paramio, Ludolfo (2006). "Giro a la izquierda y regreso del populismo", *Nueva Sociedad*, núm. 205, pp. 62-74.
- PNUD (2004). *La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos. El debate conceptual sobre la democracia*, Buenos Aires, Alfaguara.
- Roberts, Kenneth M. (2009). "Beyond Neoliberalism: Popular Responses to Social Change in Latin America", en John Burdick, Philip Oxhorn y Kenneth M. Roberts (eds.), *Beyond Neoliberalism in Latin America? Societies and Politics at the Crossroads*, Nueva York, Palgrave.
- Sader, Emir (2009). *El Nuevo Topo. Los caminos de la izquierda latinoamericana*, Buenos Aires, Siglo XXI Editores/Clacso.
- Santander, Sebastián (2009). "El 'giro a la izquierda' en América Latina: fragmentación y recomposición de la geopolítica regional", *Cuadernos sobre Relaciones Internacionales, Regionalismo y Desarrollo*, vol. 4, núm. 7, pp. 17-38.

- Schamis, Héctor E. (2006). "Populism, Socialism, and Democratic Institutions", *Journal of Democracy*, vol. 17, núm. 4, pp. 20-34.
- Silva, Eduardo (2009). *Challenging Neoliberalism in Latin America*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Stokes, Susan C. (2001). *Mandates and Democracy. Neoliberalism by Surprise in Latin America*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Thwaites Rey, Mabel (2010). "Después de la globalización neoliberal: ¿qué Estado en América Latina?", *Observatorio Social de América Latina*, año XI, núm. 27, pp. 19-43.
- Touraine, Alain (2006). "Entre Bachelet y Morales, ¿existe una izquierda en América Latina?", *Nueva Sociedad*, núm. 205, pp. 46-55.
- Weyland, Kurt (2010). "The Performance of Leftist Governments in Latin America: Conceptual and Theoretical Issues", en Kurt Weyland, Raúl L. Madrid y Wendy Hunter (eds.), *Leftist Governments in Latin America. Successes and Shortcomings*, Nueva York, Cambridge University Press

1. El fin del giro a la izquierda en Ecuador: rendimientos económicos y declive electoral en los gobiernos de Rafael Correa

Santiago Basabe-Serrano, Coralia Barahona***

Luego de más de una década de gobierno, en mayo de 2017 Rafael Correa abandonó la presidencia de Ecuador. Aunque una de las ideas más posicionadas para explicar la vigencia de la denominada “Revolución Ciudadana” es que la orientación del electorado giró hacia la izquierda, en este capítulo sostenemos que dicho argumento es falaz. Por el contrario, señalamos que la bonanza económica que vivió el país como consecuencia de los altos precios del petróleo es la causa principal del auge de Rafael Correa y su movimiento político. En efecto, en la medida en que los ingresos fiscales disminuyeron y la fragilidad del modelo económico implementado se hizo visible, la fortaleza del gobierno empezó a decrecer al punto que Correa decidió no ser candidato a la reelección en 2017.¹ Sobre la base de datos de aprobación ciudadana a la gestión del presidente y los resultados de las dos últimas elecciones seccionales, evidenciamos que el votante mediano en Ecuador se ubica

* Coordinador de la Maestría en Política Comparada y profesor titular del Departamento de Estudios Políticos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flacso Ecuador.

** Investigadora asociada del Departamento de Estudios Políticos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flacso Ecuador.

¹ Aunque existe una disposición transitoria a la Constitución que le impidió a Rafael Correa ser candidato en 2017 dicha restricción fue autoimpuesta por su propio movimiento político. Más allá del discurso oficial en el sentido de que tal decisión abona a la vocación democrática del presidente, una interpretación alterna señala que la disposición transitoria se incorporó porque las probabilidades de que Rafael Correa volviera a ganar en 2017 eran menores.

ideológicamente al centro y que esa ha sido una constante antes y durante los gobiernos de Rafael Correa.

Para el análisis partimos de algunas ideas básicas. En primer lugar, señalamos que la llegada de Rafael Correa al gobierno marcó una serie de rupturas y continuidades en el sistema político ecuatoriano. Por una parte, los partidos políticos creados al principio de los años ochenta desaparecieron de la arena electoral, la mayoría de las élites políticas se renovaron y el diseño institucional del país varió por completo (Vera y Llanos-Escobar, 2016; Freidenberg, 2015; Polga-Hecimovich, 2013; Pachano, 2010). Por otro lado, las prácticas políticas de antaño, como el caudillismo (De la Torre, 2013), la cooptación de instituciones judiciales y de control (Basabe-Serrano y Llanos-Escobar, 2014) y los escándalos de corrupción (Conaghan, 2012) se mantuvieron presentes, aunque en algunos casos a través de mecanismos diferentes. En el plano económico, después de varias décadas en las que los recursos de la caja fiscal fueron exiguos, el incremento del precio del barril del petróleo colocó a Rafael Correa frente a la mayor bonanza de los últimos cincuenta años.

En dicho contexto, Rafael Correa y el denominado Socialismo del Siglo XXI ascendieron meteóricamente en la arena política ecuatoriana hasta consolidarse en el poder a lo largo de la última década. De hecho, luego de la muerte de Hugo Chávez, el fin de la hegemonía del matrimonio Kirchner-Fernández en Argentina y la estrepitosa salida del poder de Dilma Rousseff, Rafael Correa es el referente actual de lo que muchos analistas han denominado el giro a la izquierda de América Latina (Arditi, 2008). Dentro de tal discusión, la pregunta de investigación que orienta este capítulo busca evidenciar los factores que explican la permanencia del apoyo electoral a Rafael Correa desde su llegada al gobierno.

Por la naturaleza de la pregunta de investigación que planteamos nuestra exploración es fundamentalmente empírica. Nuestra primera hipótesis es nula y contraintuitiva, pues planteamos que el electorado ecuatoriano no es ideológicamente de izquierda por lo que esta variable no explica el apoyo dispensado en las urnas a Rafael Correa. Si tal conjetura tiene correlato empírico entonces es viable la búsqueda de otros factores que den cuenta del apoyo electoral al presidente Correa. Por tanto, planteamos como posible explicación de dicho fenómeno político al desempeño de la economía nacional. En este caso, nuestra hipótesis es que la bonanza económica que vivió Ecuador fue un factor clave para el mante-

nimiento del apoyo popular a los gobiernos del presidente Correa, tanto en las elecciones celebradas en 2009 como en las de 2013.

En caso de que esta hipótesis se verifique empíricamente surge allí una implicación teórica relacionada con la influencia del ciclo económico sobre la política (Norpoth, 1996, 1984). De forma colateral, un tema que emerge de esta discusión tiene que ver con la ausencia de linealidad en la ubicación de las personas en las dimensiones: ideológica (izquierda-derecha) y de valores (liberal-conservador). Aunque la perspectiva utilizada en el análisis que proponemos no permite generar inferencias específicas, los hallazgos empíricos que se ofrecen pueden constituir una prototeoría sujeta a verificación con mayor evidencia empírica (King, Keohane y Verba, 1994).

Este capítulo se compone de tres secciones. En la primera se presentan los principales hallazgos de la literatura especializada en torno al giro a la izquierda de algunos gobiernos de América Latina. Específicamente evidenciamos las principales variables que se han identificado como explicativas de este fenómeno. En la segunda sección describimos el caso ecuatoriano y planteamos el argumento teórico que utilizamos para explicar el apoyo electoral mantenido por el presidente Correa y que se refiere a la presencia de una bonanza económica como variable decisiva para la permanencia de la “Revolución Ciudadana” en el poder. Asimismo, ofrecemos evidencia empírica para constatar tanto la hipótesis nula (el electorado no es ideológicamente de izquierda) como la conjetura económica que identificamos como posible causa del fenómeno que interesa analizar. Afianzamos la idea de que son variables de orden económico las que explican la permanencia de Rafael Correa en el poder a partir de un análisis de los cambios en la votación recibida por el oficialista movimiento Alianza País durante las últimas dos elecciones seccionales. En la tercera sección presentamos conclusiones y algunas implicaciones teóricas que podrían resultar útiles para futuras agendas de investigación.

¿Qué explica el giro a la izquierda en América Latina?: una breve revisión de la literatura especializada

Los distintos estudios relacionados con el denominado giro a la izquierda de América Latina se han concentrado en explicar el surgimiento de

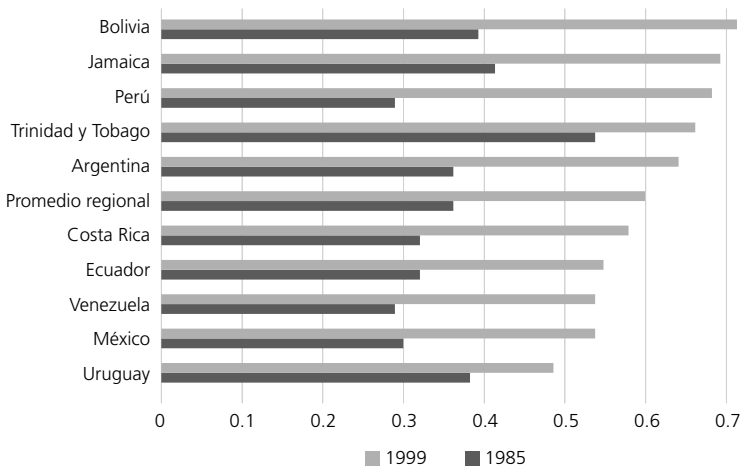
dicho fenómeno. Aunque con variaciones, la principal variable utilizada para el efecto señala que la emergencia de gobiernos de esta tendencia tiene que ver con el rechazo al modelo de ajuste estructural implementado en varios países y cuyo antecedente está en el Consenso de Washington (Arditi, 2008; Thwaites, 2009; French, 2009; Macdonald y Ruckert, 2009). En esa línea, para algunos autores el rechazo al “núcleo duro” de las políticas de ajuste estructural sería el punto nodal para el éxito electoral obtenido por la izquierda en varios países, como Ecuador, Venezuela o Bolivia (Ramírez Gallegos, 2012).

El argumento expuesto resulta válido si y solo si se cumplen al menos dos hechos fácticos. En primer lugar está la cuestión de que los países en los que la izquierda resultó triunfadora y se consolidó sean aquellos en los que se aplicaron efectivamente las principales políticas del programa de ajuste estructural. En segundo lugar, para que el argumento sea plausible, se asumiría que el electorado se sentía insatisfecho con los resultados arrojados por las medidas anotadas y que el descontento haya sido trasladado hacia los actores políticos que las promovieron. Cumplidos ambos hechos, una implicación que debería resultar del argumento sería que, ante una propuesta proselitista diferente, como sería la de las izquierdas, la votación del electorado habría girado en términos ideológicos. Puesto que el razonamiento que antecede se da a partir de mecanismos causales, la ausencia del primer eslabón (aplicación consistente de políticas de ajuste estructural) impide que el vínculo se mantenga y, por tanto, que el argumento tenga validez.

En el plano empírico la secuencia argumental expuesta es extremadamente débil cuando se pretende aplicarla al caso ecuatoriano. En efecto, sostenemos en este capítulo que tanto la llegada como la permanencia de Rafael Correa en el poder no encuentran una explicación sostenida en la idea de que tal actor constituyó una respuesta frente a la presencia de un programa de ajuste estructural. Nuestro argumento es simple y tiene que ver con la ausencia relativa de políticas públicas de este tipo en Ecuador. Al respecto, el trabajo de Lora y Panizza (2002) da cuenta de esta afirmación, pues coloca al Ecuador como uno de los países de América Latina en los que la aplicación de medidas de ajuste estructural fue menos intensa. La gráfica 1 presenta un índice comparativo entre países de la región en el que se describen las diferentes dimensiones de las políticas de ajuste estructural sugeridas por el Consenso de Washington y su grado de aplicación nacional.

1. El fin del giro a la izquierda en Ecuador

Gráfica 1. Índice de reformas estructurales en América Latina (países con mejores y peores índices en 1999)



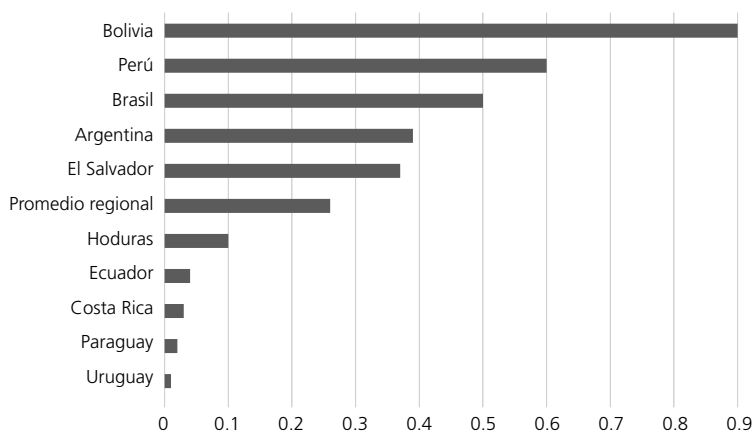
Fuente: Lora y Panizza (2002).

Como se observa, a partir de 1985 y hasta finales de la década de los noventa, Ecuador fue uno de los países de América Latina que menos avanzó en políticas de ajuste en el plano económico, financiero, laboral y fiscal. Adicionalmente, como lo señala el trabajo de Lora y Panizza (2002), el progreso de las reformas fue desigual tanto entre países como entre temáticas. Por ejemplo, en el campo de la desregulación laboral las reformas fueron casi inexistentes en la región, mientras que en el campo de las privatizaciones es donde más avanzaron las recomendaciones surgidas del Consenso de Washington. En efecto, en ese ámbito la mayoría de los países emprendieron procesos de adaptación y traslado de diferentes actividades que estaban en control estatal hacia el sector privado. La gráfica 2 presenta un índice comparado para América Latina en el que se puede observar cuánto privatizaron cada uno de los países durante la época de mayor influencia de las políticas de ajuste estructural.

En la misma línea del argumento previo, Ecuador es uno de los países de América Latina en los que menos sectores se privatizaron. De hecho, Ecuador se encuentra por debajo de la media de la región y junto a Costa Rica, Paraguay y Uruguay es de los países en los que en menor

grado se dieron disposiciones de traslado al sector privado de actividades controladas por el aparato estatal. Como mencionamos previamente, aunque la implementación de medidas de ajuste estructural podría ser una causa para el surgimiento de gobiernos de izquierda en algunos países de América Latina, como Argentina, Bolivia o Brasil, ese no fue el caso para Ecuador. Por tanto, a partir de evidencia empírica y en contraposición con el discurso oficial y de algunos sectores académicos en el sentido de que la llegada de Rafael Correa fue una consecuencia de la denominada “larga noche neoliberal”, aquí constatamos que más allá de las declaraciones políticas en el caso ecuatoriano las medidas de ajuste estructural fueron prácticamente inexistentes.²

Gráfica 2. Índice de privatizaciones en América Latina (países con mejores y peores índices en 1999)



Fuente: Lora y Panizza (2002).

Otra variable que la literatura especializada considera como explicativa del surgimiento y permanencia de los gobiernos de izquierda en

² Una excepción constituye el cambio en la regulación del sector financiero y bancario, materializada en el paso de la Ley de Bancos a la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, aprobada en 1994 durante el gobierno del presidente Durán-Ballén.

América Latina tiene que ver con la aceleración de las desigualdades sociales (Stoessel, 2014). No obstante, el argumento que se plantea es que estas surgen como consecuencia de la aplicación de políticas de ajuste estructural. Por ello, los gobiernos de izquierda ofrecerían al electorado una propuesta posneoliberal en la que el punto nodal es la recuperación del Estado y por esa vía la disminución de las asimetrías existentes (Svampa, 2008). Aunque en determinados casos las desigualdades sociales podrían ser el origen de los gobiernos de izquierda, vincular este fenómeno con políticas de ajuste estructural torna menos convincente el argumento. De hecho, existen países en la región en los que a pesar de que las medidas propuestas por el Consenso de Washington nunca se consolidaron, las desigualdades sociales se hicieron evidentes.

La bonanza económica como factor explicativo del auge de Rafael Correa

Como señalamos al inicio de este capítulo, nuestro interés es desentrañar las variables que explican el apoyo electoral que ha permitido la permanencia de Rafael Correa en el poder luego de los procesos de 2009 y 2013. La primera y más obvia explicación es que los electores giraron ideológicamente hacia la izquierda al ser interpelados por una plataforma proselitista orientada en esa dirección. Nuestro argumento al respecto es que dicha conjetura es errónea y la reflejamos en la hipótesis nula que plantea que el electorado no se encuentra ideológicamente ubicado hacia la izquierda, por lo que ese no es un factor explicativo del apoyo electoral al presidente Correa. Para dar cuenta de este argumento, en primer lugar evidenciamos la posición ideológica del presidente Correa para posteriormente identificar la trayectoria asumida por el votante común del Ecuador a lo largo de los últimos años. A partir de las dos mediciones damos cuenta de la existencia de indicios empíricos suficientes que apoyan la hipótesis nula que planteamos.

Más allá de las propias declaraciones del presidente Correa sobre su pertenencia al socialismo del siglo XXI, hay un consenso en la literatura que estudia el denominado giro a la izquierda que lo incluye en el grupo de jefes de Estado que están dentro de esa tendencia (Stoessel, 2014). Sin embargo, hay que reconocer también que existen diferentes tipos de

izquierda y presidentes alineados ideológicamente en esa dirección. De hecho, Rafael Correa junto con Hugo Chávez y Evo Morales estarían dentro del grupo de gobiernos a los que Castañeda (2006: 29) describe como de izquierda “nacionalista, estridente y cerrada”. Otro segmento de presidentes, como Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, Tabaré Vázquez y Luiz Inácio Lula da Silva, se incluirían en los que el propio Castañeda denomina “modernos, abiertos y reformistas”. Finalmente, tanto para Castañeda como para otros autores, los gobiernos del matrimonio Kirchner-Fernández se ubicarían en un punto intermedio entre los dos grupos ya mencionados (Weyland, 2009; Moreira, Raus y Gómez 2008).

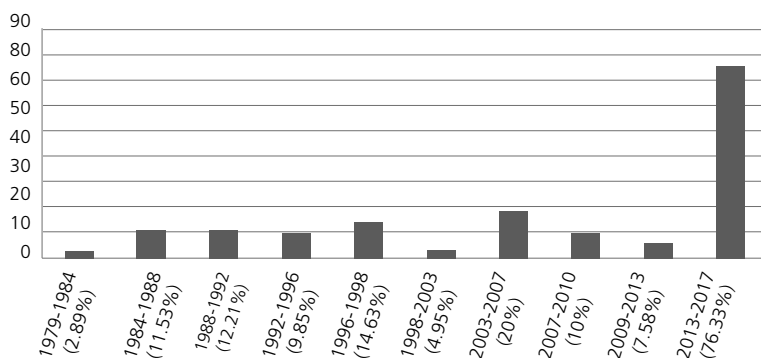
Respecto a la ubicación ideológica del electorado presentamos evidencia empírica que, desde dos perspectivas distintas, da cuenta de que históricamente el votante ecuatoriano de izquierda ha sido y sigue siendo ampliamente minoritario. En primer lugar se presenta el apoyo legislativo alcanzado por los partidos de izquierda desde el retorno a la democracia. Para el efecto recurrimos a información proporcionada por el Consejo Nacional Electoral del Ecuador. Posteriormente nos detenemos en el análisis de la autoubicación ideológica de la ciudadanía, tomando como referente empírico los resultados de las encuestas de opinión diseñadas por el Proyecto Latinoamericano de Opinión Pública (LAPOP, por sus siglas en inglés). Aunque la serie temporal disponible para observar el segundo referente empírico es de menor alcance, en conjunto dan cuenta de la validez de nuestra intuición. La gráfica 3 representa el porcentaje de asientos alcanzados en la legislatura por los partidos de izquierda entre 1979 y 2007. En la medición están agregados los partidos Frente Amplio de Izquierda (FADI), Movimiento Popular Democrático (MPD), Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) y Pachacutick (PCK).³

Excluyendo a los gobiernos de Rafael Correa, el promedio de curules obtenidos por los partidos de izquierda fue de 10.75%, mientras que su representación más baja está en el primer periodo luego del retorno a la democracia (2.89%). La mayor bancada de las izquierdas corresponde al periodo 2003-2007 que es aquel en el que se dio la alianza de gobier-

³ En la década de los noventa el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) y el Frente Amplio de Izquierda (FADI) se fusionaron alrededor de un nuevo partido denominado Partido Socialista-Frente Amplio.

no entre el indigenista PCK y el Partido Sociedad Patriótica (PSP) del expresidente Gutiérrez (20%). Por otro lado, las dos barras del extremo derecho corresponden a la representación legislativa del movimiento oficialista Alianza País (AP) durante los gobiernos de Rafael Correa.⁴ Como se puede observar, las diferencias entre la votación tradicional de la izquierda y la de la AP en los periodos previos dan algunas pistas adicionales para la discusión de la hipótesis nula.

Gráfica 3. Representación legislativa de los partidos de izquierda en Ecuador



Fuente: Archivo de la Asamblea Nacional del Ecuador. Elaboración propia.

La explicación más obvia que se puede plantear es que la votación de la Alianza País corresponde efectivamente a un giro ideológico del electorado hacia la izquierda. Sin embargo, aquello implica asumir algunos hechos que son difícilmente aceptables. El primero es que las preferencias de los electores pueden cambiar de forma tan drástica como lo evidencia la gráfica 3. Aunque los actores modifican tanto la intensidad de sus preferencias como el orden lexicográfico en que se presentan, resulta menos creíble que lo hagan de forma tan abrupta en ausencia de eventos que generen un cambio trascendental

⁴ Cuando Rafael Correa ganó las elecciones presidenciales de 2006 no presentó candidatos al entonces denominado Congreso Nacional.

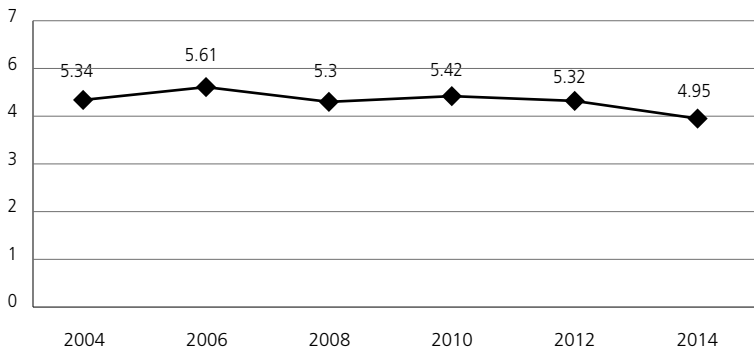
entre las alternativas disponibles. En efecto, cambios drásticos en las preferencias de los electores son más probables cuando se pasa de un régimen dictatorial a un proceso de democratización o cuando se toman decisiones inmediatamente después del cese de una guerra civil, por ejemplo. En el caso ecuatoriano, si bien hay variaciones entre el escenario previo a 2006 y el que se analiza, estos no fueron lo suficientemente dramáticos como para generar un cambio tan fuerte en la posición ideológica del electorado.

El segundo hecho que hace poco creíble una fuerte variación en las preferencias del electorado y que se relaciona con el previamente discutido es que el apoyo histórico a las izquierdas desde 1979 no tiene una tendencia al alza sino que, por el contrario, se ha mantenido estable alrededor de 10%. Como señalamos, incluso el punto más alto de apoyo legislativo a las izquierdas, en el periodo 2003-2007 (20%), debe ser tomado con cautela, pues corresponde a la presentación de listas conjuntas de candidatos entre el indigenista PCK y la agrupación política del candidato y luego presidente Lucio Gutiérrez (PSP). Por tanto, asumir que las preferencias del electorado variaron drásticamente hacia la izquierda a partir del primer gobierno del presidente Correa dan cuenta de una hipótesis poco sostenible empíricamente y que, por el contrario, abre espacios a explicaciones alternas de dicho fenómeno político.

Las dudas señaladas respecto al cambio brusco en las preferencias ideológicas del electorado ecuatoriano se reafirman con los datos obtenidos de las encuestas realizadas por la Universidad de Vanderbilt a través del Latin American Public Opinion Project (LAPOP). En efecto, la gráfica 4 representa la media de las respuestas otorgadas por la ciudadanía frente a la pregunta que solicita ubicarse ideológicamente en un espectro que va de “1”, que corresponde a extrema izquierda y que termina en “10”, que corresponde a extrema derecha. Como consta en la gráfica 4, el votante común ecuatoriano se ha mantenido, al menos desde 2004 hasta la fecha, prácticamente en la misma posición, que corresponde al centro del espacio ideológico. Esta tendencia tiene una ligera variación recién en el año 2014, esto es, luego de las elecciones presidenciales de 2013, las últimas en las que intervino Rafael Correa como candidato. Acorde a los datos presentados, a partir de 2014 hay un ligero giro hacia la izquierda en el autoposicionamiento del electorado ecuatoriano.

1. El fin del giro a la izquierda en Ecuador

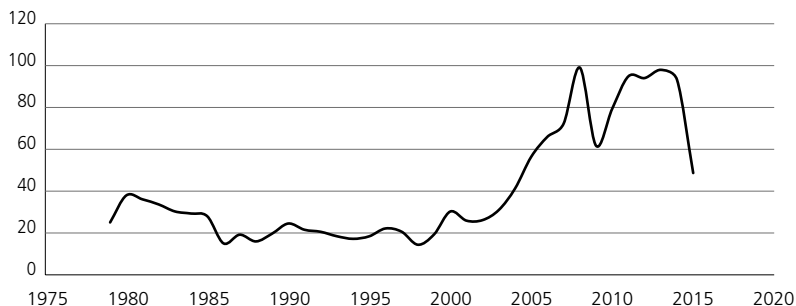
Gráfica 4. Ubicación ideológica promedio en Ecuador (2004-2014)



Fuente: Latin American Public Opinion Project (LAPOP). Elaboración propia.

El hallazgo empírico que discutimos es coherente con la argumentación desarrollada en los párrafos anteriores y da cuenta de que ante la ausencia de un electorado ideológicamente orientado hacia la izquierda la votación masiva otorgada a Rafael Correa en sus distintas campañas electorales se explica por otro tipo de variables. Por tanto, en esta parte argumentamos a favor de nuestra conjetura positiva en la que planteamos que la bonanza económica que vivió el país durante la última década explica, al menos parcialmente, el apoyo electoral mantenido por el presidente Correa.

Puesto que Ecuador es un país que fue y sigue siendo altamente dependiente del petróleo para organizar sus finanzas públicas (Fontaine, 2002), consideramos el precio promedio anual de dicho hidrocarburo como aproximación empírica del estado de la economía nacional. Al respecto, la gráfica 5 presenta el trayecto asumido por este indicador entre 1979 y 2016. Como se observa, 1998 (14.39 dólares) y 1986 (15.04 dólares) son los años en los que el petróleo se situó en los precios más bajos y corresponden a los gobiernos de los presidentes Jamil Mahuad y León Febres Cordero. Por otro lado, los mayores precios se fijaron en 2008 (99.06 dólares) y 2013 (97.98 dólares) que corresponden al segundo y tercer periodo de gobierno de Rafael Correa, respectivamente.

Gráfica 5. Precio promedio anual del petróleo (1979-2016)

Fuente: West Texas Intermediate. Elaboración propia.

Dado que la información proporcionada da cuenta de que los mayores ingresos del Ecuador se concentraron precisamente durante los gobiernos del presidente Correa, allí puede existir un indicio de causalidad respecto al apoyo electoral que ha permitido su permanencia en el poder por alrededor de diez años. En otras palabras, el argumento que planteamos es que la prosperidad económica del país, más que el posicionamiento ideológico, explicaría el éxito electoral y la consiguiente permanencia del proyecto político liderado por Rafael Correa. Una implicación que resulta de este razonamiento es que, a medida que los recursos económicos de la caja fiscal empezaron a decrecer, tal cual sucede a partir de 2014, la hegemonía del presidente Correa también entró en una fase de debilitamiento.

Dos hechos giran en torno a la validez del argumento expuesto. El primero se refiere al vínculo existente entre la decisión presidencial de no postularse a la reelección en las elecciones de febrero de 2017 y la exteriorización de los problemas estructurales de su modelo económico a raíz del vertiginoso descenso del precio internacional del petróleo durante 2015 y 2016 (48.66 y 33.18 dólares, respectivamente). El segundo hecho tiene que ver con el vertiginoso descenso de los espacios alcanzados por el movimiento oficialista Alianza País en las elecciones seccionales —alcaldes municipales y prefectos provinciales— celebradas en febrero de 2014 en comparación con los resultados reportados para similares comicios en

2009. Para explicar la primera situación recurrimos al análisis contrafáctico (“qué habría pasado si”), mientras que para la segunda planteamos una descripción comparativa del número de alcaldías y prefecturas alcanzadas por el movimiento oficialista en las dos elecciones mencionadas.

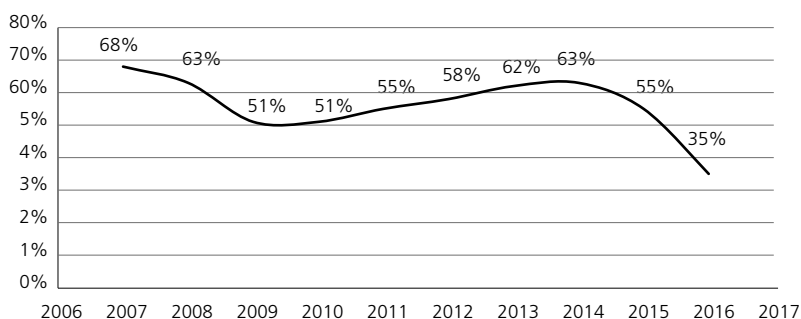
El argumento contrafáctico que sostenemos es que si los precios internacionales del petróleo no hubieran descendido, el modelo económico del presidente Correa se mantendría en buenas condiciones y su candidatura a la reelección en 2017 habría sido un acontecimiento dado. De hecho, si ese hubiera sido el escenario político, las probabilidades de que el presidente Correa alcanzara la reelección hubieran sido altas. Al respecto, la evidencia empírica existente para América Latina y también la que se reporta para el caso de Estados Unidos da cuenta de que los presidentes en funciones que optan por la reelección son prácticamente invencibles (Penfold *et al.*, 2014). Este habría sido el razonamiento que llevó al presidente Correa a presentar en diciembre de 2014 un paquete de enmiendas constitucionales que, en el fondo, buscaba viabilizar la reelección indefinida de todas las autoridades de elección popular, incluida la suya. En la época el país vivía aún la bonanza económica producida por los altos precios internacionales del barril de petróleo (93.25 dólares).

Desafortunadamente para los intereses del presidente Correa, el año 2015 llegó con la caída estrepitosa de los precios del petróleo (48.66 dólares), el consiguiente incremento de la conflictividad social, en especial por temas redistributivos, aunque también por otras demandas y reclamos de diversos sectores, y el descenso en la aceptación ciudadana de su gestión. En medio de dicho escenario, inédito para el presidente Correa desde su llegada al gobierno, para diciembre de 2015 la Asamblea Nacional decidió aprobar las enmiendas constitucionales ya mencionadas, aunque agregando una disposición transitoria que impide a los funcionarios con dos periodos seguidos en el cargo optar por la reelección en 2017.⁵ Siendo una legislatura controlada en sus dos terceras partes por el presidente Correa y su agrupación política es poco creíble que tal restricción constitucional se haya incluido por otras razones que no sean el descenso en el apoyo popular al jefe de Estado.

⁵ A partir de 2017 esta transitoria deja de tener vigencia, por lo que en el futuro no existe ninguna restricción frente a la posibilidad de la reelección indefinida para cualquier cargo público de designación popular.

A partir de la información proporcionada por la firma Cedatos, la gráfica 6 representa la aprobación promedio anual del presidente Correa a partir de 2007. Como se observa, los altos niveles de aprobación presidencial tienden a decrecer en 2015 y son aún menores en mayo de 2016, que es el último dato incluido en este análisis. Si comparamos el comportamiento tanto del precio internacional del petróleo como de la aprobación presidencial, ambas mediciones siguen la misma trayectoria, lo que daría sustento a la hipótesis que planteamos. Esta intuición se confirma al realizar un análisis de correlación. En efecto, existe una correlación positiva y significativa entre las dos variables, tal cual consta en el reporte que incluimos en el anexo 1. Aunque el análisis de estadística descriptiva mencionado no plantea abiertamente la idea de causalidad, al menos es un indicio en torno a la viabilidad del vínculo entre las dos variables mencionadas.

Gráfica 6. Aceptación del presidente (2007-2016)



Fuente: Cedatos. Elaboración propia.

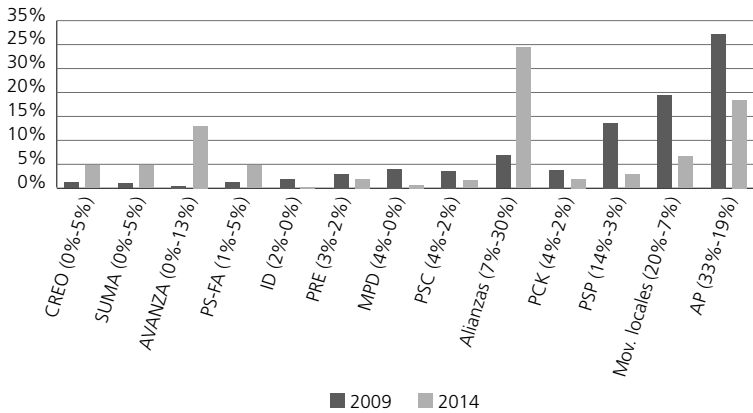
Asumiendo las bondades y limitaciones del análisis contrafáctico (Fearon, 1991), lo que sostenemos en esta parte es que si la bonanza económica se hubiera mantenido, el apoyo electoral al presidente Rafael Correa habría sido como en los años anteriores y su posibilidad de reelección en 2017 sería altamente probable. Aunque existen otras variables que seguramente inciden sobre el apoyo electoral al presidente Correa —incluyendo las atribuibles a su propia personalidad— y a la

permanencia de su proyecto político, lo que hemos tratado de evidenciar es que no son variables relacionadas con la ideología del elector las que han conducido a la hegemonía de Rafael Correa. A la par, las pruebas empíricas ofrecidas nos permiten señalar que existen serias presunciones de que el voto favorable al presidente Correa y a la permanencia del movimiento oficialista Alianza País tiene relación con el estado de la economía nacional.

Como señalamos en párrafos anteriores, un segundo elemento de juicio que da cuenta de la vinculación existente entre la situación de la economía nacional y el apoyo al presidente Correa y su denominada “Revolución Ciudadana” se encuentra en el análisis de las elecciones seccionales de 2009 y 2014. En efecto, durante las elecciones de 2009, cuando los ingresos por el alto precio del barril de petróleo florecían, el movimiento oficialista Alianza País alcanzó una importante representación en términos de alcaldías municipales y prefecturas provinciales. De hecho, dos de las tres ciudades más importantes del país, Quito y Cuenca, tuvieron alcaldes pertenecientes al movimiento del presidente Correa. No obstante, en 2014, cuando la economía del país ingresó en un proceso de recesión, los resultados electorales siguieron la misma trayectoria. Alianza País no solo perdió las alcaldías de Quito y Cuenca sino que también redujo su campo de influencia en otras ciudades del país.

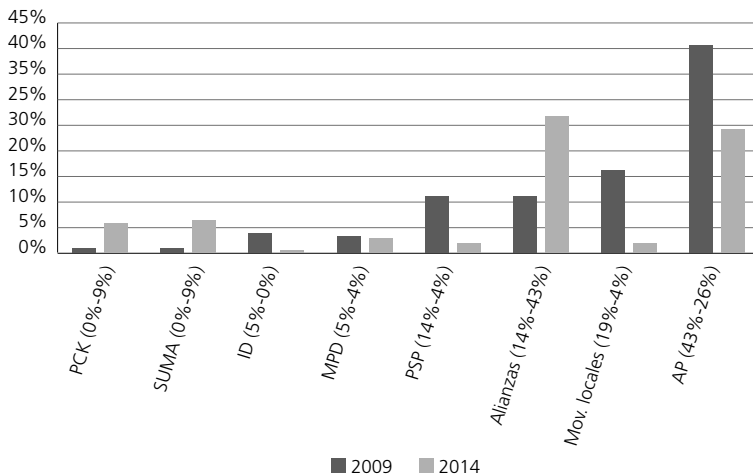
La gráfica 7 presenta los porcentajes de alcaldías por organización política en las elecciones de 2009 y 2014. Tanto en esta gráfica como en la siguiente diferenciamos entre las candidaturas ganadoras presentadas individualmente por cada partido político y aquellas que resultan de alianzas. Asumimos dicha decisión metodológica, pues de esta manera es posible observar de forma más clara el potencial electoral autónomo de cada organización partidista. Como se puede observar, los rendimientos electorales del movimiento oficialista Alianza País se redujeron para 2014 en alrededor de 14 puntos porcentuales respecto a 2009 (33% a 19%), lo que deja entrever el mayor decrecimiento de esta agrupación política respecto a otras que participaron en ambos procesos. Desde luego, hay que tener presente que para 2009 el calendario electoral fue concurrente para la designación de presidente y gobiernos seccionales. Esta circunstancia es clave pues el caudal de votos generados por la candidatura a la reelección del presidente Correa podría haber beneficiado la elección de alcaldes oficialistas.

Gráfica 7. Porcentaje de alcaldías por organizaciones políticas (2009 y 2014)



Fuente: Consejo Nacional Electoral. Elaboración propia.

Gráfica 8. Porcentaje de prefecturas por organizaciones políticas (2009 y 2014)



Fuente: Consejo Nacional Electoral. Elaboración propia.

Un razonamiento similar se puede plantear al analizar los resultados de las elecciones a prefectos provinciales durante los dos procesos ya mencionados y que se encuentran expresados en la gráfica 8. En 2009

Alianza País obtiene casi la mitad de las 21 prefecturas en disputa (43%), mientras que para las elecciones de 2014 su representación en este nivel subnacional desciende drásticamente en 17 puntos porcentuales (43 a 26%). Aunque en este caso también opera la aclaración relacionada con la concurrencia del calendario electoral para la elección de presidente y prefectos provinciales en 2009, si se observan en conjunto los resultados presentados con el análisis contrafáctico previo existen varios indicios de que la fortaleza tanto del presidente Correa como de su proyecto político estuvo anclada a los momentos de bonanza económica que Ecuador vivió durante buena parte de la última década.

Conclusiones y agenda de investigación

En este capítulo exploramos las razones que dan cuenta de la permanencia en el poder del presidente Correa durante la última década. Contrariamente al argumento que señala que la emergencia y consolidación de la izquierda en Ecuador tiene que ver con un cambio en el posicionamiento ideológico de los votantes, planteamos que la bonanza económica que tuvo el país durante los últimos diez años explica de mejor forma el surgimiento de dicho fenómeno político. En otras palabras, evidenciamos que el electorado no apoya a Rafael Correa porque se asuma de izquierda sino por la gran cantidad de recursos económicos que tuvo el país y que sirvieron para que el gobierno mejorara la inversión pública y determinados beneficios sociales. Visto desde la perspectiva del giro a la izquierda en América Latina, lo que en este capítulo resaltamos es que, al menos en el caso ecuatoriano, este cambio está subordinado a la bonanza económica. Luego, sin recursos económicos, es menos probable que la gente siga votando a la izquierda.

A partir de dicho hallazgo empírico, en la segunda parte del capítulo presentamos varios indicios que harían pensar que la gran cantidad de recursos económicos estatales es la variable que explica el mantenimiento de Rafael Correa y su movimiento político Alianza País en la cúspide de la vida política ecuatoriana. En primer lugar, recurrimos a un contrafáctico para evidenciar que los problemas económicos del país han afectado la popularidad del presidente y que, como consecuencia de ello, su movimiento político decidió autoimponerse a la prohibición de que Rafael

Correa sea candidato en 2017. En términos contrafácticos nuestro argumento fue que si el estado de la economía no se hubiera deteriorado, la aceptación ciudadana del presidente Correa seguiría siendo elevada y, por tanto, las reformas constitucionales realizadas a finales de 2015 hubieran viabilizado su reelección inmediata.

Por otro lado, planteamos una comparación entre los resultados de las elecciones seccionales de 2009 y 2014 para de allí inferir que la estrepitosa caída de Alianza País en el último proceso electoral tiene que ver con el deterioro de la situación económica del país. Por tanto, en la medida en que la bonanza estuvo presente los resultados electorales del movimiento oficialista fueron exitosos mientras que, a medida que los problemas económicos empezaron a aparecer, las lealtades del votante fueron en descenso. Desde luego, el análisis presentado debe tener presente el hecho de que el calendario electoral de 2009 estableció la elección concurrente de presidente y autoridades seccionales, lo que pudo generar un efecto de “arrastre” de votos del presidente Correa hacia sus candidatos. Más allá de lo expuesto, consideramos que el indicio presentado permite pensar que el voto económico prevalece al voto ideológico.

Finalmente, a partir de los hallazgos que en este capítulo ofrecemos hay una serie de inquietudes que pueden servir para una agenda de investigación futura. En primer lugar, la viabilidad de algunos proyectos políticos de izquierda parece estar vinculada directamente a la existencia de recursos económicos que puedan movilizar el aparato estatal y sobre esta base generar presidentes imperiales (Basabe-Serrano, 2017). Una vez que esa fuente de ingresos desaparece o disminuye de manera considerable el modelo estatista se tambalea y muestra rápidamente sus debilidades. Ecuador y Venezuela son dos casos empíricos que dan cuenta de este razonamiento. Asimismo, en ambos países no solo se ha recuperado el Estado sino que sobre tal discurso se eliminó cualquier iniciativa desde el sector privado. A diferencia de Bolivia que parece haber asumido la mutua interacción entre estos dos sectores de mejor forma, el caso de Ecuador aquí expuesto ha evidenciado que el modelo económico propuesto por el presidente Correa no tiene asidero sino en escenarios en los que la caja fiscal es robusta.

En ese plano, si bien el referente empírico que utilizamos en este capítulo para valorar el apoyo electoral es el precio del barril del petróleo, ello no debe llevar a la confusión de que allí se encuentra la mayor explicación

del deterioro de la economía ecuatoriana. Aunque la afluencia de recursos provenientes de la venta del hidrocarburo citado es esencial, la ausencia de interacción entre el sector público y privado y la justipreciación de uno y otro en términos macro tiene un peso decisivo para entender las dificultades que ahora afronta la economía ecuatoriana. Desafortunadamente, la oferta del presidente Correa de dejar de lado la dependencia del petróleo ha sido uno de los grandes incumplimientos de la década en la que el país estuvo bajo el gobierno de la “Revolución Ciudadana”. De hecho, el excesivo gasto público anclado a los altos precios del petróleo en la actualidad conspira no solo contra la estabilidad económica del Ecuador sino también, y paradójicamente, contra la futura supervivencia política del propio Rafael Correa y de su agrupación política.

De hecho, la hegemonía del movimiento Alianza País empezó a resquebrajarse en el último proceso electoral. Por primera vez, después de la elección de Rafael Correa en 2009, la contienda presidencial presentó un *ballotage* y el candidato oficialista Lenín Moreno alcanzó la presidencia con una diferencia de apenas 2.3% de los votos válidos. Por otro lado, la representación legislativa del oficialista Alianza País descendió de 52.30% de curules en 2013 a 39.07% en 2017. En el plano económico, a las pocas semanas de gobierno el presidente Moreno anunció la existencia de serios problemas en la caja fiscal y la necesidad inminente de modificar el modelo estatista desarrollado durante la última década.

Por último, los cambios en lo económico que ha anunciado el gobierno, sumados a una reducción de la intolerancia política que caracterizó a las administraciones de Rafael Correa, han derivado en que la principal oposición al presidente Moreno provenga de las propias filas del movimiento oficialista y del exmandatario, ahora residente en Bélgica. Así, la ausencia de recursos económicos para sostener el modelo económico de la década pasada y los constantes escándalos de corrupción que envuelven al vicepresidente Jorge Glas y a varios ministros del anterior gobierno dan algunas señales en torno a las dificultades que tendrá en el mediano plazo Alianza País para sobrevivir políticamente. Respecto al expresidente Correa, la posibilidad de una consulta popular que impida su posible candidatura a la reelección constituiría el evento decisivo que marque el desplome de una estructura política anclada en el caudillismo y la distribución clientelar de recursos públicos.

Referencias

- Arditi, Benjamín (2008). "Arguments about the Left Turn in Latin America", *Latin American Research Review*, vol. 43, núm. 3, pp. 59-81.
- Basabe-Serrano, Santiago (2017). "Las distintas caras del presidencialismo: debate conceptual y evidencia empírica en dieciocho países de América Latina", *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, núm. 157, pp. 3-22.
- Basabe-Serrano, Santiago y Santiago Llanos-Escobar (2014). "La Corte Suprema del Ecuador en el periodo democrático (1979-2013): entre la inestabilidad institucional y la influencia partidista", *América Latina Hoy*, núm. 67, pp. 15-63.
- Castañeda, Jorge (2006). "Latin America's Left Turn", *Foreign Affairs*, vol. 85, núm. 3, pp. 28-43.
- Conaghan, Catherine M. (2012). "Prosecuting Presidents: The Politics within Ecuador's Corruption Cases", *Journal of Latin American Studies*, vol. 44, núm. 4, pp. 649-678.
- Fearon, James D. (1991). "Contrafactuals and Hypothesis Testing in Political Science", *World Politics*, vol. 43, núm. 1, pp. 69-95.
- Fontaine, Guillaume (2002). "Sobre bonanzas y dependencia. Petróleo y enfermedad holandesa en Ecuador", *Íconos. Revista de Ciencias Sociales*, vol. 13, núm. 1, pp. 102-111.
- Freidenberg, Flavia (2015). "¿En tierra de caciques!: liderazgos populistas y democracia en Ecuador", *Revista Opera*, núm. 16, pp. 99-130.
- French, John (2009). "Understanding the Politics of Latin America's Plural Lefts (Chávez/Lula): Social Democracy, Populism and Convergence of the Path to a Post-neoliberal World", *Third World Quarterly*, vol. 30, núm. 2, pp. 349-370.
- Hinich, Melvin J. y Michael C. Munger (2003). *Teoría analítica de la política*, Barcelona, Gedisa.
- King, Gary, Robert Keohane y Sidney Verba (1994). *Designing Social Inquiry. Scientific Inference in Qualitative Research*, Princeton, Princeton University Press.
- Lora, Eduardo y Ugo Panizza (2002). "Un escrutinio a las reformas estructurales en América Latina", documento de trabajo núm. 471, Nueva York, Banco Interamericano de Desarrollo. Disponible en <<http://www.iadb.org/res/publications/pubfiles/pubWP-471.pdf>>.

- Macdonald, Laura y Anne Ruckert (2009). "Post-Neoliberalism in the Americas: An Introduction", en Laura Macdonald y Anne Ruckert (eds.), *Post-Neoliberalism in the Americas*, Londres, Palgrave Macmillan.
- Moreira, Carlos, Diego Raus y Juan Carlos Gómez Leyton (2008). *La nueva política en América Latina. Rupturas y continuidades*, Montevideo, Trilce.
- Norpoth, Helmut (1996). "Presidents and the Prospective Voter", *Journal of Politics*, vol. 58, núm. 3, pp. 776-792.
- Norpoth, Helmut (1984). "Economics, Politics, and the Cycle of Presidential Popularity", *Political Behavior*, vol. 6, núm. 3, pp. 253-273.
- Pachano, Simón (2010). "Ecuador: el nuevo sistema político en funcionamiento", *Revista de Ciencia Política*, vol. 30, núm. 2, pp. 297-317.
- Penfold, Michael, Javier Corrales y Gonzalo Hernández (2014). "Los invencibles: la reelección presidencial y los cambios constitucionales en América Latina", *Revista de Ciencia Política*, vol. 34, núm. 3, pp. 537-559.
- Polga-Hecimovich, John (2013). "Ecuador: estabilidad institucional y la consolidación de poder de Rafael Correa", *Revista de Ciencia Política*, vol. 33, núm. 1, pp. 135-160.
- Ramírez Gallegos, Franklin (2012). "Crisis neoliberal y reconfiguraciones estatales: Ecuador y la heterodoxia sudamericana", *Revista Línea Sur*, vol. 1, núm. 2, pp. 84-104.
- Stoessel, Soledad (2014). "Giro a la izquierda en la América Latina del siglo XXI", *Polis*, núm. 39. Disponible en <<http://polis.revues.org/10453>>.
- Svampa, Maristella (2008). "Argentina: una cartografía de las resistencias (2003-2008)", *Revista del Observatorio Social de América Latina*, OSAL, núm. 24, pp. 17-49.
- Thwaites Rey (2009). "Después de la globalización neoliberal: ¿Qué estado en América Latina?", *Revista del Observatorio Social de América Latina*, OSAL, núm. 27, pp. 19-43.
- Torre, Carlos de la (2013). "El tecnopopulismo de Rafael Correa. ¿Es compatible el carisma con la tecnocracia?", *Latin American Research Review*, vol. 48, núm. 1, pp. 28-43.
- Vera, Sofía, y Santiago Llanos-Escobar (2016). "Ecuador: la democracia después de nueve años de la Revolución Ciudadana de Rafael Correa", *Revista de Ciencia Política*, vol. 36, núm. 1, pp. 45-75.
- Weyland, Kurt (2009). "The Rise of Latin America's Two Lefts: insights from Rentier State Theory", *Comparative Politics*, vol. 41, núm. 2, pp. 145-164.

Anexo 1

Correlación entre aprobación presidencial y precio del petróleo (2007-2016)

		Precio del petróleo	Aprobación presidencial
Precio del petróleo	Correlación de Pearson	1	0.709*
	Sig. (bilateral)		0.022
	N	10	10
Aprobación presidencial	Correlación de Pearson	0.709*	1
	Sig. (bilateral)	0.022	
	N	10	10

* La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral).

Fuente: Elaboración propia.

2. “Mi meme te odia”: redes sociales y giro a la derecha en Brasil

Gisela Zarembeg*

Introducción

En este capítulo analizaremos los factores que contribuyeron a constituir un movimiento de grandes dimensiones centrado en un reclamo contra la corrupción que derivó en un rechazo sin precedentes al Partido de los Trabajadores (PT), a sus dirigentes y a sus simpatizantes en Brasil, en el periodo que va de 2013 a 2016.

En este sentido, este capítulo propone descentrarse del análisis del proceso de desafuero como factor único del giro a la derecha en Brasil. Aquí se considera que este giro no fue un cambio de preferencias electorales en elecciones nacionales presidenciales (dado que no se produjeron al momento de escribir este texto), sino una modificación en los contenidos programáticos de los proyectos de ley aprobados a partir del desafuero que implican transformaciones profundas a favor de una agenda ubicada hacia el espectro de la derecha en lo socioeconómico (como el congelamiento del gasto social por veinte años o la reforma laboral que precariza agudamente condiciones de trabajo) y a favor de una agenda conservadora-religiosa en lo cultural y en las áreas de políticas por la igualdad de género, lésbico-gay y de derechos humanos. También se consideran como giro a la derecha los resultados electorales a nivel municipal reportados el 2 de octubre de 2016 en los que se registró un fuerte retroceso para el PT y la izquierda en general y un avance

* Profesora-investigadora de la Flacso México.

del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) en ciudades clave (especialmente de los cuadros ubicados hacia la derecha dentro del partido) y de candidatos independientes también ubicados en dicho espectro político.¹

Reconociendo por supuesto la importancia del desafuero en la concreción de este giro a la derecha, el capítulo busca, sin embargo, ampliar la mirada hacia un proceso al que no se le ha prestado suficiente atención en el análisis político fuera de Brasil, a saber: la conformación de una movilización que ha esparcido contenidos morales, nacionalistas, de indignación selectiva e intolerancia en contra del PT y todo aquel que simpatice con sus contenidos programáticos y sus liderazgos (incluidos especialmente el Movimiento Sin Tierra —MST— y la Central Única de Trabajadores —CUT—), movilización que ha incidido en la reconfiguración del mapa de preferencias electorales en el país (tal como se apunta en la nota 1).

La ola de protestas contra la corrupción, que derivó en un rechazo concentrado en el PT, ha sido considerada principalmente desde dos conjuntos argumentales en análisis de coyuntura. Por un lado se suele proponer que los grandes medios (especialmente *O Globo*, *Folha de São Paulo* y *Estadão*) manipularon a las personas dirigiendo su indignación exclusivamente contra el partido en el gobierno. Si bien estos medios no actuaron imparcialmente, detrás de este argumento parece prevalecer una imagen en la que los ciudadanos habrían respondido como “tonos culturales” ante dicha manipulación. Por otra parte, tomando algunos elementos presentes en análisis socioeconómicos y demográficos, se suele indicar que la ubicación de la clase media habría sido determinante para

¹ En las últimas elecciones municipales del 2 de octubre de 2016 (primera ronda), el PT perdió un enorme porcentaje de las candidaturas ganadas con respecto a las elecciones anteriores inmediatas para esos cargos. En la elección anterior, en 2012, ganó 644 cargos; en la actual apenas 256, más siete candidaturas que compiten en segunda vuelta. Aun en el mejor escenario (ganando todos esos cargos en segunda vuelta) la reducción sería de 59%. Véase Monteiro (2016). Disponible en <<http://www1.folha.uol.com.br/poder/eleicoes-2016/2016/10/1819287-pt-tem-a-maior-perda-de-votos-receita-e-influencia-tucanos-e-nanicos-crescem.shtml>>, consultado el viernes 28 de octubre de 2016. Al mismo tiempo se registró el triunfo de dirigentes del PSDB ubicados a la derecha dentro del partido, como João Doria Júnior, actual alcalde de la ciudad de São Paulo, y el crecimiento de perfiles de extrema derecha, como Jair Mesias Bolsonaro (militar y político), miembro del Partido Social Cristiano (PSC).

activar en la protesta una "venganza social" ante los costos de la inclusión social lograda durante los gobiernos petistas.²

Aquí argumentaremos que si bien no puede desconocerse el rol de los medios y los clivajes de clase, la conformación de un movimiento de las características mencionadas requiere incorporar en la ecuación el papel jugado por las redes sociales para articular y movilizar a un sector de la población que se encontraba desconectado políticamente. En otras palabras, argumentaremos que el giro a la derecha fue impulsado por una nueva forma de articulación social liderada por movimientos que mostraron una agilidad inusitada para acoplar ciudadanos insatisfechos por medio de las redes sociales. La consideración de estas nuevas modalidades de articulación es importante para entender por qué sujetos pertenecientes a similar posición socioeconómica presentaron diferentes reacciones políticas ante la misma crisis económica y ética. La mediación de las redes sociales es importante para comprender que la forma en que las personas socializan sus opiniones y despliegan sus interacciones importa para entender sus posicionamientos políticos. La nueva forma de articulación ofrecida por movimientos ubicados a la derecha del espectro político mostró mayor vitalidad y potencia para convocar adhesión ciudadana que organizaciones clásicas de izquierda, consideradas anteriormente como verdaderas fortalezas de la expresión ciudadana.

Para ahondar en estos argumentos desarrollaré tres apartados. El primero mostrará la evolución de las protestas de 2013 a 2016, al tiempo que dará referencias sobre las principales organizaciones que movilizaron a la población vía redes sociales. El segundo apartado expondrá las principales tesis que se han elaborado para dar cuenta de dichas protestas y los resultados del análisis estadístico para discriminar factores de la desaprobación a la presidenta, realizado con base en datos de la encuesta Latinobarómetro 2015. Allí se analizarán también las coincidencias con

² Véase la siguiente nota periodística de análisis de coyuntura que presenta algunos de los puntos prevaletentes en estas visiones: Greenwald, Fishman y Miranda (2016). 18 de enero. Disponible en <<https://theintercept.com/2016/03/18/brazil-is-engulfed-by-ruling-class-corruption-and-a-dangerous-subversion-of-democracy/>>, consultado el 30 de septiembre de 2016. Véase también la siguiente nota que ofrece una versión resumida del argumento económico: Klein (2016). 17 de abril. Disponible en <<http://www.valor.com.br/politica/4527533/%3Fvinganca-social%3F-de-classe-media-co-roeu-apoio-ao-pt-diz-cientista>>, consultado el viernes 28 de octubre de 2016.

resultados de otras encuestas aplicadas a manifestantes en 2015. Por último, las conclusiones resumirán los principales hallazgos y apuntarán las preguntas de investigación pendientes.

De la copa al desafuero: historia de una movilización creciente (2013-2016)

Hacia principios de 2013 Brasil presentaba indicadores sociales que destacaban en la región. Especialmente resultaba llamativa la relativa reducción del índice de Gini en un país que se había caracterizado por una profunda y persistente desigualdad (el indicador pasó de 0.61 puntos, en 1990 a 0.53, en 2012) (IBGE, 2014). Con datos que retomaban especialmente los últimos 12 años de los gobiernos petistas, agencias internacionales como el Banco Mundial destacaban, que “en Brasil, varias políticas combinadas han liderado un estrechamiento de la desigualdad, incluyendo las reformas de salud y educación, el aumento del salario mínimo y la creación de trabajos formales, una destacable expansión de las redes de seguridad” (BM, 2016: 13, traducción propia del inglés).

Estos indicadores parecían acompañar una posición consolidada del PT como partido en el gobierno. Para marzo de 2013 la aprobación a la presidenta Dilma Rouseff rondaba 65%. Adicionalmente, a pesar de la excesiva fragmentación del sistema de partidos brasileño (más de treinta partidos políticos registrados) que generaba fuertes recomendaciones de reforma política, la gobernabilidad parecía dispuesta a mantenerse, de todas maneras, dentro de un esquema de “presidencialismo de coalición”.³ La propia coalición del PT con el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que había compuesto la fórmula triunfante para la presidencia, no parecía prever rotundos resquebrajamientos. Aunque las tensiones habían aumentado, hasta ese momento el socio partidario había votado por aproximadamente 80% de los proyectos presentados por

³ La literatura sobre presidencialismo de coalición y el caso brasileño es extensa. Véanse los clásicos textos de Mainwaring (1993a, 1993b, 1999) y de Figueiredo y Limongi (1999, 2000, 2006, 2007). Véanse también Power (2000), Nicolau y Power (2007), Amorim (2008) y Amorim, Cox y McCubbins (2003). Para una discusión básica implicada en el debate sobre presidencialismo de coalición consúltese el clásico texto de Linz (1994).

el Ejecutivo en el Congreso. Ello incluyó los dos primeros años del mandato de Rouseff (Limongi, 2015).⁴

Por otra parte, si bien el *Escândalo do Mensalão* durante el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva había generado graves intranquilidades sobre los grados de corrupción que sostenían los acuerdos entre partidos,⁵ y aunque la economía comenzaba a mostrar signos importantes de agotamiento, las instituciones creadas a partir de la transición democrática y del pacto fundacional de la Constitución de 1988 no parecían mostrar signos fuertes de vulnerabilidad.⁶

En conjunto, con algunas sombras en el horizonte, nada hacía prever que varios de los fundamentos de esos avances serían amenazados en el corto lapso de los dos años siguientes. En este contexto, Brasil había sido nombrado país sede de la Copa Mundial de Fútbol en 2014 y Río de Janeiro, como sede de los Juegos Olímpicos en 2016. Estas designaciones habían sido esgrimidas como prueba del rol de liderazgo que estaría ocupando el país en la región y en el mundo.

⁴ Uno de los escenarios de tensión, que mostró las serias dificultades del gobierno nacional para su timoneo, se presentó en Río de Janeiro, donde desde 2012 el senador del PT Lindbergh Farias amenazaba con disputar la hegemonía del PMDB en el gobierno de ese estado en las próximas elecciones de 2014. Véase Ritto y Oliveira (2012). 14 de octubre. <<http://veja.abril.com.br/brasil/acabou-o-amor-disputa-pelo-governo-do-rio-em-2014-poe-pt-e-pmdb-em-lados-opostos/>>, consultado el 24 de octubre de 2016.

⁵ El escándalo del "mensalao" (grandes salarios mensuales) se refiere a pagos clandestinos que habría hecho el PT a congresistas aliados con el fin de obtener soporte para la agenda legislativa. El escándalo estalló en 2005. La acusación señalaba dinero público circulado a partir de contratos de falsa publicidad firmados por compañías del Estado. Véase *The Economist* (2013). 18 de noviembre. Disponible en <<http://www.economist.com/blogs/economist-explains/2013/11/economist-explains-14>>, consultado el 15 de octubre de 2016.

⁶ Esa misma Constitución garantiza la existencia de una densa ingeniería participativa que sostiene el funcionamiento de consejos gestores de políticas (en promedio al menos cinco consejos por cada uno de los 5400 municipios brasileños). Una impresionante capacidad de descentralización efectiva a nivel local. En dichos consejos participan organizaciones activamente, en áreas de políticas como salud, educación y política social para la niñez y la adolescencia, entre otras. A esta ingeniería de consejos gestores se suman las llamadas Conferencias, que abren la construcción de agendas de políticas a las más diversas comunidades conformadas por organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, empresas y gobierno (Gurza y Barone, 2015; Isunza y Gurza, 2012; Wampler y Avritzer, 2005).

En junio de 2013, sin embargo, el panorama daría un vuelco completamente imprevisto. Una protesta, en principio menor, organizada por un movimiento que combatía el aumento del transporte público (denominado en portugués *Passe Livre*) fue duramente reprimida por la policía militar en São Paulo y en otras ciudades y se expandió rápidamente en todo el país (solo en São Paulo la asistencia a las marchas pasaría de dos mil a diez mil personas luego de dicha represión policial) (véase Tatagiba, Trindade y Chaves, 2015: 200). La protesta no solo creció en adherentes sino que pasó a abarcar un reclamo mayor contra los hechos de corrupción que habían destacado en torno a la construcción de obra pública (estadios, carreteras, etcétera) para la realización de la Copa, en un contexto en que la crisis económica continuaba agravándose (véase Gohn, 2014).⁷

Una de las consecuencias más llamativas de aquellas “protestas de junio” (tal como fueron denominadas por la prensa) fue la estrepitosa y vertiginosa caída de la aprobación presidencial desde 65% de votantes que consideraban la gestión de Dilma Rousseff como óptima/buena en mayo de 2013, a solo 34% que sostenía esa opinión en el mes de julio del mismo año. A partir de entonces, con vaivenes, la aprobación de la presidenta no recuperaría nunca los niveles previos a junio de 2013.⁸

Lo cierto es que la propia protesta fue una experiencia pedagógica sin parangón para una serie de organizaciones nuevas y hábiles en el manejo de redes sociales y que el tema de la corrupción y la antipolítica marcaría la pauta de las futuras movilizaciones desde una nueva derecha en la campaña electoral por la presidencia que se avecinaba en 2014.⁹ Es

⁷ Para ver el avance de la pauta de corrupción en la protesta, véase la encuesta a manifestantes de las “protestas de junio” 2013: G1 (24 de junio de 2013). Disponible en <<http://g1.globo.com/brasil/noticia/2013/06/veja-integra-da-pesquisa-do-ibope-sobre-os-manifestantes.html>>, consultado el 28 de octubre de 2016. Para un análisis de antecedentes a las protestas de junio, pero en el interior de Brasil, véase Machado Tavares y Ribeiro Roriz (2014).

⁸ Véanse las encuestas periódicas de evaluación de la gestión presidencial de Datafolha. Disponibles en <<http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/avaliacaodegoverno/presidente/dilma/indice-1.shtml>>, consultado el 28 de octubre de 2016.

⁹ Las páginas ligadas a un discurso contra la corrupción ganaron millones de adeptos luego de las protestas de junio. La página del movimiento Ciudadanos Contra la Corrupción (ccc) tenía tan solo cien mil “me gusta” (*likes*) antes de junio de 2013 y obtuvo un millón de adeptos después. Estas páginas fueron especialmente exitosas en compartir mensajes en Facebook provenientes de medios de derecha (como la revista

en el periodo preelectoral cuando eclosionan dos procesos y se refuerzan nuevos actores de vital importancia para entender la crisis brasileña.

El 17 de marzo de 2014 se hizo pública la operación denominada Lava Jato (en español, Operación Autolavado)¹⁰ que había sido llevada a cabo con el objetivo de investigar un esquema de lavado de dinero por más de diez mil millones de reales. La investigación, iniciada en Curitiba (un estado brasileño relativamente pequeño) y aún en curso al momento de escribir este texto, descubrió que la red involucraba fondos de Petrobras (la compañía estatal petrolera del país) para favorecer la licitación de empresas a partir de sobornos que incluían a una amplia red de políticos de diversos partidos. A partir de ello se abrió inicialmente una investigación al menos a 47 políticos, entre los que se encontraban el presidente del Senado, Renan Calheiros, y el de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, ambos del PMDB. En total, la operación puso bajo investigación a diputados y senadores actuales y pasados de los siguientes partidos: 31 del Partido Progresista (PP), siete del PMDB, siete del PT, uno del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), uno del Partido Laborista Brasileño (PTB, por sus siglas en portugués). A partir de la aplicación inusitada del mecanismo de delaciones premiadas se procedió al encarcelamiento tanto de empresarios (por ejemplo, Marcelo Obredecht) como de dirigentes políticos, siendo relevante el ingreso a prisión de Paulo Bernardo, exministro de Planificación de los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff.

En conjunto, importantes empresarios, gran parte del arco partidario parlamentario, así como cuatro expresidentes fueron mencionados en los autos del caso. La investigación en curso amenaza con ampliar constantemente al conjunto de implicados en la causa. Mientras escribimos este texto, una nueva delación involucra a José Serra, excandidato a la presidencia por el PSDB en 2010 y actual ministro de Relaciones Exteriores. El propio Michel Temer, actualmente en el cargo de presidente, y cuatro ministros más, han sido también involucrados.

Veja). Las organizaciones tradicionales (sindicatos, partidos, etc.) tuvieron dificultades serias para disputar sentidos en las redes sociales (véase da Silveira, 2015: 218-223).

¹⁰ La operación recibió ese nombre debido al uso de una red de lavanderías de automóviles que tenían por objetivo dar salida a valores de origen ilícito.

En este contexto y con el horizonte de elecciones presidenciales próximas en octubre de 2014, se creó una serie de movimientos que jugarán un papel central. Especialmente tres movimientos denominados *Revoltados on line* (*Rebelados en línea*, RO, por sus siglas en portugués), *Movimiento Brasil Livre* (*Movimiento Brasil Libre*, MBL) y *Ven pra Rua* (*Ven para la Calle*, VR por sus siglas en portugués) pasarán a dominar la escena de la movilización y las redes sociales se convertirán en un medio clave para ello.

Estos tres movimientos se estructuran en torno a dirigencias masculinas, generalmente blancas (con una excepción en el MBL) y jóvenes. Defienden una agenda liberal (privatización de servicios de salud y educación, libre empresa, fin de programas sociales, etc.), se concentran en São Paulo y son altamente expertos en el uso y manejo de redes sociales.¹¹

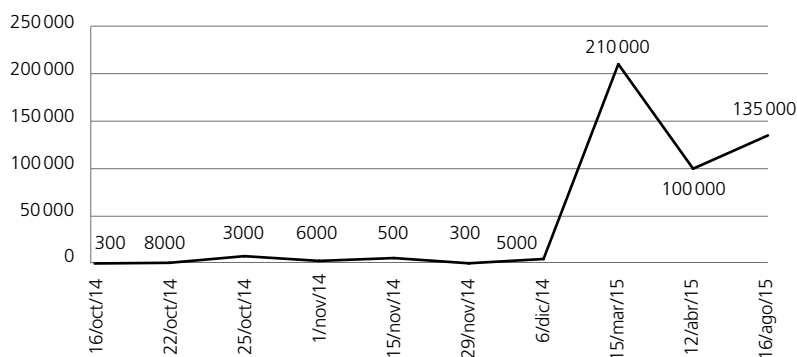
En 2014, a pesar de la baja en popularidad y el aumento de la polarización a niveles imprevistos en Brasil, Dilma Rousseff ganó las elecciones presidenciales por un estrecho margen. Inmediatamente dado a conocer el resultado, el PSDB (partido competidor en segunda vuelta) dio mues-

¹¹ El MBL destaca en este espectro de movimientos. Tiene cerca de 150 organizadores en diez estados del país. Las caras visibles del liderazgo del MBL son Kim Kataguirí, 19 años, con estudios incompletos en Economía en la Universidade Federal de ABC. Es *youtuber* y comenzó viralizando un video en contra del programa Bolsa Familia como respuesta a una clase de su profesor de economía. Alexandre Santos, responsable de la producción gráfica y de videos para el MBL, estaría hoy imputado en procesos judiciales por cierre fraudulento de empresas. Fernando Holliday, de 18 años, el único líder de color, se hizo famoso viralizando un video en Facebook oponiéndose a las cuotas para jóvenes negros en las universidades. Hoy ha sido electo concejal por el DEM (partido Demócrata de centroderecha). Los contenidos del MBL se ubican generalmente en contra de las cuotas, a favor del congelamiento del gasto social, exaltan una moral nacionalista y anticorrupción, aunque no mantienen consensos en contra del aborto, la homofobia o temas de género. Diversas fuentes mencionan el financiamiento del movimiento por los hermanos Koch, empresarios petroleros multimillonarios en Brasil. Sobre los perfiles del MBL: Zalis y Gonçalves (15 de marzo de 2015). Disponible en <<http://veja.abril.com.br/politica/quais-sao-e-compensam-os-movimentos-que-vao-para-a-rua-contra-dilma-no-domingo/>>. Sobre la historia del dirigente de color del MBL: Blog da cidadania (23 de 03 de 2015). Disponible en <<http://www.blogdacidadania.com.br/2015/03/quem-inventou-fernando-holiday/>>. Sobre candidaturas del MBL: Souza (13 de mayo de 2016). Disponible en <http://www.bbc.com/portuguese/brasil/2016/05/160511_futuro_mbl_vempraru_fs>. Sobre el estilo de comunicación, véase: Martín (12 de diciembre de 2014). Disponible en <http://brasil.elpais.com/brasil/2014/12/12/politica/1418403638_389650.html>, consultado el 20 de agosto de 2015.

tras claras de no aceptar la derrota. Entre ellas, este partido inició un proceso en el Tribunal Superior Electoral (TSE) insólitamente a partir de rumores reportados en las redes sociales (Limongi, 2015: 102).

A continuación, entre el periodo posterior a las elecciones y durante el siguiente año se desarrolló una serie de protestas con picos máximos en 2015.¹² Especialmente la marcha convocada el 15 de marzo de 2015 por los tres movimientos al unísono (MBL, VR y RO), fue catalogada como la mayor desde las protestas por elecciones directas (conocidas como *Diretas Já*) a finales de la dictadura militar.

Gráfica 1. Evolución en la cantidad de manifestantes postelecciones 2014-2015



* Se tomó el número de participantes informado por la Policía Militar, aportado por estas autoras.
Fuente: Elaboración propia con base en Tatagiba *et al.* (2016:199).

Sin embargo, los mencionados movimientos promovieron pautas no necesariamente unificadas en torno al desafuero a la presidenta Rousseff. Mientras el VR, más cercano al PSDB, proponía una pauta anticorrupción amplia, el MBL, más radical, hizo del desafuero su principal bandera.

Luego de la marcha del 15 de marzo la siguiente convocatoria sufrió un descenso de adhesión significativo. La convocatoria del 12 de abril de

¹² También se reportan dos cacerolazos, el 8 de marzo y el 6 de agosto de 2015. Ante la aparición de Dilma Rousseff en tv se produjeron cacerolazos en las áreas puentes de varias ciudades, especialmente en São Paulo.

2015, sumó menos de la mitad de manifestantes que la fecha inmediata anterior. El MBL convocó entonces a una marcha hasta Brasília que también tuvo resultados muy débiles.

Por otra parte, en abril de 2015, el PSDB, luego de algunas disidencias internas, había desistido de controlar al movimiento anti PT y comenzó a archivar el proyecto de desafuero. Mientras, la tentativa de los movimientos de ejercer presión sobre los políticos también se iba debilitando. Es en ese momento cuando se da una alianza entre quien fuera el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha (PMDB) (quien tenía atribución institucional para aceptar pedido de desafuero y por lo tanto era un actor clave) y el MBL. Aprovechando una fisura presentada por el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), Cunha pasa al ataque contra el gobierno promoviendo un proceso de desafuero no ya por hechos de corrupción ligados al Lava Jato (dado que no se reportaron delaciones probatorias que involucraran a la presidenta) sino por desprolijidades con relación al manejo de las cuentas públicas en el marco de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Esto ocurrió ante una nueva imputación del propio Cunha dentro del Lava Jato que incluyó el descubrimiento de cuentas no declaradas en Suiza. Tal como afirma Limongi: “a medida que se vio enredado por las investigaciones, Cunha aumentó su oposicionismo” (2015: 108).

Para nuestros fines, cabe detenernos brevemente sobre una evidente paradoja. ¿Cómo un radical movimiento anticorrupción como el MBL se avino a negociar con uno de los políticos más implicados en hechos de corrupción? Los líderes del MBL lo explicaban así: “El PMDB es un partido fisiológico, con varios casos de corrupción, que deploramos por supuesto. Pero el PMDB no es un partido como el PT, que utiliza la corrupción para subvertir las instituciones democráticas y expandir su proyecto de poder”.¹³ En otras palabras, el PT no debía ser tan castigado, o no solo por sus actos de corrupción, sino por su proyecto catalogado como comunista y bolivariano, que supuestamente atentaba contra la democracia y la nación. Luego de una siguiente marcha el MBL dejaría de convocar a manifestaciones y delegaría la estafeta del desafuero al presidente de la Cámara de Diputados.

¹³ “Movimento Brasil Livre: ‘Dilma deve cair até o final do ano’”. Disponible en <http://brasil.elpais.com/brasil/2015/08/14/politica/1439580832_993126.html>, citado por Limongi (2015: 110).

Figura 1. Meme de Eduardo Cunha como *Mi villano favorito*



* La frase, traducida del portugués, dice: cuando el mundo precisó de un héroe, llamaron a un villano. Luego se muestra la imagen de Disney con la cara de Eduardo Cunha sobrepuesta y abajo se despliega la frase “Mi malvado favorito”.

Lo sorprendente es que esta idea se expandió fuertemente en la ciudadanía, más allá de cualquier argumento racional. Los análisis fundados en evidencia muestran con claridad que la izquierda brasileña se mantuvo lejos de semejantes objetivos “bolivarianos” dentro del escenario nacional (aunque mantuvo alianzas internacionales con países del ALBA en el plano internacional). Es de amplio conocimiento que el PT se ha comportado dentro de la institucionalidad electoral, incluso al expandir sus instituciones participativas, entre otras razones, porque fue uno de los partidos protagonistas en la defensa de elecciones libres y directas frente a la dictadura (véase Teixeira, 2013). Sin embargo, el éxito de los nuevos movimientos en las redes instaló como percepción que el proyecto del PT en el gobierno se dirigía a perpetuarse para instalar un proyecto bolivariano “traicionando” los intereses de la nación. En esos términos el PT no era entonces un adversario sino un enemigo que debía desaparecer. Si había que apelar a un político gravemente acusado de corrupción como Cunha, los intereses superiores de la patria lo ameritaban. De manera ingeniosa y reiterada el MBL supo condensar este argumento en un meme que ubicaba simpáticamente a Eduardo Cunha como “el villano favorito”.

Mientras los memes contra la presidenta incluían cobras, brujas y hogueras, uno de los principales implicados en el Lava Jato aparecía en las redes en la figura del simpático personaje de Disney. Los “me gusta” se multiplicaron inmediatamente. Más allá de toda coherencia, los seguidores amaron al personaje aceptando la alianza, por más espuria que pudiera ser, para aniquilar a los que eran presentados como los verdaderos y únicos culpables de la debacle nacional.

La esperable indignación por actos de corrupción dio paso a un clima de intolerancia y linchamiento exclusivamente dirigido al PT, a sus dirigentes e incluso hacia cualquier simpatizante de a pie. Se multiplicaron los actos de agresión verbal y física entre ciudadanos en las calles, las escuelas, hospitales y otros lugares públicos. Por medio de las redes se difundió una lista, llamada Lista de Constantino (por el nombre de su autor en Facebook), que incluyó desde reconocidos personajes de la cultura (como Chico Buarque) hasta profesionales, académicos y empleados acusados de simpatizar con el PT. El objetivo era que no se consumieran bienes ni servicios ofrecidos por estas personas. A exfuncionarios y a simpatizantes de gobiernos petistas se les negaron servicios (por ejemplo, servicios médicos).¹⁴ Salir a la calle con vestimenta de color rojo (color que identifica al PT) se convirtió en motivo de temor ante los actos de agresión que ello desencadenaba. En conjunto, las manifestaciones, en principio centradas en una pauta difusa contra la corrupción, fueron ins-

¹⁴ El *facebooker* Rodrigo Constantino propuso hacer una lista de boicot a simpatizantes del PT (artistas, intelectuales, académicos, profesionales etc.) el 17 de marzo de 2016 con las siguientes palabras (traducidas del portugués): ¡Boicot a los vagabundos, gente! Sin dolor, ni piedad. Ellos quieren transformar a Brasil en una Venezuela, en una Cuba grande. Ellos son comparsas de bandidos que tomaron Brasilia por asalto y atentan contra nuestra democracia. No compren nada de ellos. No lean sus columnas. No frecuenten sus *shows* y piezas. Boicot general al *petralla* —forma despectiva de referirse al simpatizante del PT—. La lista se viralizó y, como respuesta, surgió una petición pública que en solidaridad con los afectados pedía al *facebooker* que los incluyera en su lista. El clima de intolerancia también incluyó agresiones en lugares públicos. Algunos ejemplos son: el exministro de Hacienda visitó a un amigo en un hospital y fue agredido con los gritos de “Vai para o SUS” (Servicio Único de Salud, público) y “Vai para Cuba”. De manera similar, fue agredido el exministro Padilla. Una joven pareja, que no ocupó cargos públicos, llevó a su niño a atención médica privada y se negaron a atenderlos por conocer su simpatía con el PT. Disponible en Avritzer (5 de junio de 2015), en <<http://www.opalheiro.com.br/o-panelaco-e-as-formas-do-protesto-social/>>, consultado el 28 de octubre de 2016.

talando un clima de intolerancia creciente hacia aquellos que no participan de la posición antipetista.

Los mensajes difundidos en las redes, vistos desde un punto de vista externo, podrían catalogarse de delirantes. Por ejemplo, se difundió que Dilma había ganado las elecciones porque había traído cincuenta mil haitianos para votar, o se aseguró que el PT en el gobierno se había propuesto inocular la ideología comunista a los niños desde temprana edad en las escuelas. O que Cuba y Venezuela manejaban el país tras bambalinas y el PT lo entregaba porque sobreponía los ideales comunistas a los nacionales (véase Velasc, Kaysel y Cudas, 2015). Los delirios serían irrelevantes si una mayoría de la población no los hubiera asumido como ciertos en la forma de millones de "me gusta" (*likes*) y comparticiones en las redes (Da Silveira, 2015).

La indignación por corrupción dio paso a una indignación política, ideológica y partidaria selectiva acompañada por una especie de psicosis colectiva. ¿Por qué la evidencia de la amplia gama partidaria involucrada en actos de corrupción severos no dio paso a un enojo generalizado (un "que se vayan todos" tal como aconteció en Argentina en 2001)? ¿Qué permitió este tipo peculiar de giro a la derecha? ¿Qué factores asociados a la adhesión ciudadana pueden ayudar a entenderlo? El próximo apartado ofrece un panorama de los principales argumentos contruidos al respecto y explora, con datos del Latinobarómetro, algunas hipótesis que pueden ayudarnos a comenzar a desentrañar esta pregunta.

Factores asociados a la desaprobación presidencial: acercándonos a un entendimiento del giro a la derecha en la ciudadanía

Para procurar entender los factores que abonaron al fenómeno de movilización ciudadana descrito en los párrafos anteriores, tomamos datos de la encuesta Latinobarómetro 2015, realizada entre el 15 de enero y el 15 de febrero de 2015 en 16 países de América Latina, incluido Brasil.¹⁵ Para dicho país, escogimos la variable "aprobación presidencial" como

¹⁵ En Brasil se aplicó una muestra probabilística modificada en tres etapas, por cuotas en la etapa final, con un total de 1250 casos. Error muestral (intervalos de confianza

aproximación a aquellos que participarían luego de las movilizaciones por el desafuero o que podrían estar más probablemente de acuerdo con aquellos que así lo hicieron. Si bien somos conscientes de los problemas asociados con esta decisión (por ejemplo, es posible que algunas personas no estuvieran de acuerdo con las movilizaciones ni con los organizadores de las mismas, pero de todas formas desaprobaban la gestión presidencial) consideramos que no existe otra pregunta, entre las disponibles en las encuestas aplicadas a la población en general en Brasil durante 2015, que se aproxime mejor a nuestro objeto de estudio. De todas formas, como se verá más adelante, se contrastarán nuestros hallazgos con los resultados de otras encuestas aplicadas a manifestantes para dar más consistencia al análisis.

Para construir las hipótesis puestas a prueba en nuestro modelo estadístico consideramos los argumentos centrales que existen en la literatura. El primero especifica que la adhesión al desafuero y la concentración de la indignación selectiva hacia el PT provienen de sectores de clase media. De manera general, el argumento señala que varios aspectos sociodemográficos, económicos y de movilidad social acaecidos en las dos últimas décadas en Brasil, habrían incidido para que los miembros de esta clase social adoptaran esta actitud política. Se señala por un lado que la movilidad social de miembros de la clase baja hacia estratos medios bajos habría irritado y modificado patrones culturales que impregnaban la vida cotidiana de aquellos que pertenecían con anterioridad a la clase media y media alta. Mezclando datos de tipo socioeconómico y cultural se señalan verdaderos enfrentamientos silenciosos entre una movilidad relativamente ascendente de clases inferiores (por ejemplo, trabajadoras domésticas que adquieren nuevos derechos) y clases medias y medias altas.¹⁶

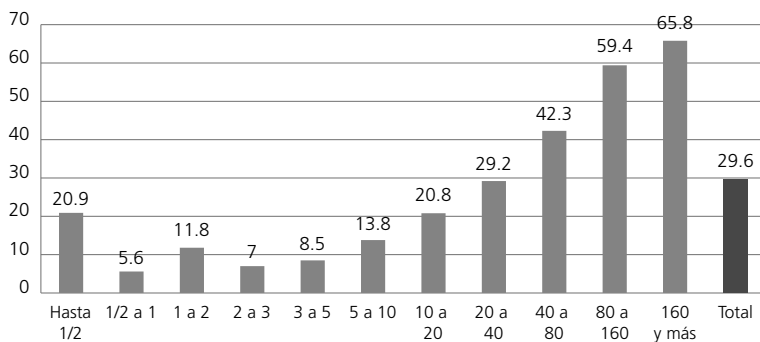
Por otra parte, en algunos análisis basados en conocimiento demográfico y socioeconómico se argumenta que mientras en Brasil ha mejo-

de 95%) de +/- 2.8 y representatividad de 100% del total del país. Disponible en <<http://www.latinobarometro.org/>>.

¹⁶ En la prensa y programas televisivos se expresaron estos enfrentamientos. Por ejemplo, se declaró que gracias al PT ahora “los aeropuertos parecían estaciones de ómnibus”. Otras declaraciones aludían a la molestia que se expresaba por encontrar personas de perfil popular y de color en ámbitos como los centros comerciales. Todos estos espacios antes reservados en exclusiva para un sector de la población diferenciado socioeconómicamente y de color blanco (véase Calvacante, 2015: 189).

rado relativamente la distribución de ingresos (expresada en una mejora del índice de Gini), esta no se ha basado en una reducción de los privilegios de las clases superiores sino en el esfuerzo de la clase media. La alta presión impositiva recae en los sectores medios, que además tienen menores posibilidades de exentar impuestos en comparación con los sectores altos, tal como se muestra en la gráfica 2, en la que se ve que quienes ganan desde 40 hasta 160 salarios mínimos y más disfrutan de la mayor proporción de exención impositiva. De hecho el grupo más pudiente presenta más del doble que el nivel de exención promedio nacional.¹⁷

Gráfica 2. Nivel de exención impositiva en relación a salarios mínimos 2013



Fuente: Valor 10/08/2015 con base en datos de la Receita Federal.

El argumento se muestra especialmente plausible cuando se observaba que la indignación contra la corrupción estuvo acompañada por una ola de protestas con respecto a los programas sociales (en específico el Bolsa Familia y el programa Minha Casa, Minha Vida) que fueron

¹⁷ Registré presencialmente este argumento expuesto por la doctora Marta Arretche en la Mesa de Coyuntura SP01, Simpósio de Conjuntura, 1a. sesión: Coyuntura social, martes 27 de octubre, 20:00 a 21:30, en el 39 Encontro da Anpocs (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais), 26 al 30 de octubre, Minas Gerais (no se encuentra disponible la presentación escrita). Para un excelente análisis de la evolución de la desigualdad en Brasil durante los últimos cincuenta años, véase Arretche (2015).

percibidos como programas con fines clientelares.¹⁸ La lógica del argumento indicaría que mientras la clase media carga con la “manutención” del Estado, este dilapida sus recursos para fines de beneficio personal (argumento que alude a la corrupción) y para mantener un esquema de gobernanza y perpetuarse en el poder (argumento que alude a la supuesta implantación de un régimen comunista por parte del PT). Desde los movimientos descritos en el apartado anterior, varios mensajes y memes se destinaron a difundir esta percepción. Este argumento no era nuevo, en 2007 un movimiento precursor del MBL en São Paulo, denominado Cansei (Me cansé, en español) liderado por el actualmente electo jefe de esta ciudad por el PSDB, João Doria, expresaba: “¿un grito de protesta de clase media es ilegítimo? Esta es hoy el *verdadero ‘negro’ de Brasil*: paga impuestos abusivos y no utiliza ni un miserable servicio del Estado” (las cursivas son mías). Premonitoriamente, la protesta (que en esa fecha no tuvo mayor repercusión) terminó con un exaltado grito de “fuera Lula, fuera el PT” (véase Tatagiba, Trindade y Chaves, 2015: 208).

Los anteriores procesos se habrían relacionado, a su vez, con poderosos componentes de racismo latentes en el seno de la población blanca, en su mayoría perteneciente a la clase media urbana. Estos componentes habrían salido especialmente a la luz en torno a las medidas de promoción de cuotas para el acceso de estudiantes de color a las universidades, medida que sobre todo había defendido el partido en el gobierno. Este racismo imperaría, a pesar de que el nivel de educación de esta población de clase media y media alta es superior al promedio de la población brasileña.

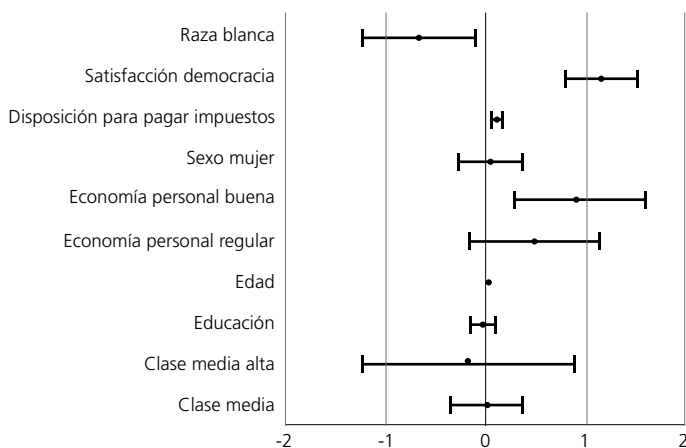
Por último, otra clase de argumentos señala que los sectores que desaprobaron a la presidenta, especialmente los que habían marchado el 15 de marzo de 2015, se caracterizaron por un autoritarismo latente que incluye una aprobación velada a la dictadura. El argumento parecía confirmarse con la presencia de carteles que decían “S.O.S militares” durante la marcha, o en la creciente adhesión a personajes políticos como Jair Bolsonaro, diputado de la bancada de la “Bala”, que defiende proyectos como los de reducción de la mayoría de edad penal o la libre tenencia de

¹⁸ El programa Bolsa Familia es un programa de transferencia en efectivo para la superación de la pobreza. El programa Minha Casa, Minha Vida es un programa de apoyo a la vivienda en sectores populares.

armas de fuego y que declaradamente expresa su apoyo a figuras de la pasada dictadura brasileña.¹⁹

Para poner a prueba esta serie de argumentos nuestro primer modelo incluyó variables que pudieran ser indicadores de los mismos. Por ello se incorporaron las variables de raza, edad, nivel educativo, sexo, satisfacción con la democracia, percepción de la propia situación económica y autoubicación en clase social (véase el anexo). Los resultados iniciales de este primer modelo se muestran a continuación (véase la nota 21 como guía de lectura de la gráfica 3).

Gráfica 3. Factores de aprobación presidencial, Brasil 2015



Fuente: Elaboración propia a partir de un modelo logit. Variable dependiente: Aprobación presidencial. Nivel de confianza: **95%. Con base en Latinobarómetro 2015.

¹⁹ La Bancada, denominada como de la "Bala", defiende proyectos de endurecimiento de la legislación penal, especialmente la reducción de la mayoría de edad penal y el cambio, por lo tanto, del Estatuto de los Niños y los Adolescentes. El diputado Jair Bolsonaro es un exponente paradigmático de esta bancada. Su discurso autoritario incluye la agresión a una diputada espetando que "no merecía ni siquiera ser violada". También fue el diputado que dedicó su voto a favor del desafuero del general que torturó a Dilma Rousseff durante su apresamiento en época de la dictadura en Brasil. Véase Medeiros y Fonseca (18 de febrero de 2016). Disponible en <<http://exame.abril.com.br/brasil/biblia-boi-e-bala-um-raio-x-das-bancadas-da-camara/>>, consultado el 18 de junio de 2016. La fuerte articulación de la bancada de la "Bala" y la bancada de evangelista, denominada como bancada de la "Biblia" muestra el crecimiento y fortalecimiento del sector conservador dentro del Congreso brasileño.

El primer hallazgo muestra que las variables consideradas como de clase media y media alta (autopercepción) no resultan ser significativas para aumentar la probabilidad de aprobar o desaprobar la gestión presidencial.²⁰ Como veremos más adelante, las encuestas a manifestantes coinciden con esta apreciación. Tanto aquellos que salieron a las calles a favor como en contra del desafuero, al menos en las grandes ciudades, pertenecen primordialmente a la clase media (volveremos sobre esto). Sin embargo, estar dispuesto a pagar más impuestos, aumenta la probabilidad de aprobación en 15 puntos porcentuales** (p value: 0.004). Ello podría indicar que el argumento referido a la reacción frente a la presión impositiva podría tener más asidero que la simple ubicación de clase.

Por otra parte, ser una persona de piel blanca es un hecho de importancia para aumentar la probabilidad de desaprobar a la presidenta. Ser blanco, aumenta en 10 puntos porcentuales** esta probabilidad (p value: 0.017), lo cual parece apoyar los argumentos que exponen la existencia de un racismo latente en el tipo de opinión pública y movilización generada durante 2015.

La satisfacción con la democracia y la percepción de una situación económica personal buena contribuyen de manera clave a aumentar significativamente la aprobación presidencial. Pasar de estar insatisfecho a satisfecho con la democracia aumenta la probabilidad de aprobación en 23 puntos porcentuales** (p value: 0.000). En tanto, percibir la situación económica personal como buena, aumenta la probabilidad de aprobación en 18 puntos porcentuales** (p value: 0.004).

Hecho este primer ejercicio, dado que las hipótesis relativas a la pertenencia a clase media constituyen un cuerpo clave de los argumentos que circulan sobre la movilización anti PT y, dado que la variable utilizada en el modelo anterior se basó en una pregunta sobre autopercepción para la ubicación de clase,²¹ decidimos a continuación indagar cómo se comportan las variables que preguntan por posesión de diferentes bienes,

²⁰ La gráfica 3 se lee de la siguiente forma: las variables que pasan por la línea vertical del centro resultaron no significativas en el modelo. Aquellos intervalos que se alejan más de dicha línea hacia la derecha, aumentan la probabilidad de aprobación presidencial. Por el contrario, aquellos que se alejan más hacia la izquierda, disminuyen la probabilidad de aprobación presidencial. Los puntos porcentuales fueron calculados utilizando Clarify.

²¹ La pregunta S6 del Latinobarómetro utilizada en el modelo se estructura como sigue: "La gente algunas veces se describe a sí misma como perteneciente a una clase social.

por considerar que dichas respuestas pueden indicar una pertenencia de clase más objetiva.

Dos valiosos descubrimientos se produjeron al incluir una a una las posesiones de diferentes bienes (casa propia, lavarropas, agua caliente, alcantarillado, etc.), y al incluir luego un índice de bienes en el modelo.

En primer lugar se encontró que solo "contar con agua caliente en la vivienda" aumenta significativamente la probabilidad de desaprobación a la presidenta. Aquellos que cuentan con agua caliente en su vivienda aumentan en 12 puntos porcentuales** la probabilidad de desaprobación la gestión presidencial (p value: 0.002). Se realizaron varias pruebas para encontrar por qué la específica tenencia de este bien reporta tal resultado (y por qué no ocurre lo mismo con variables como la posesión de alcantarilla, o realizar una comida al día, etc.) y se encontró que la posesión de agua caliente en la vivienda está especialmente relacionada con la variable de raza, específicamente con ser de color blanco. Futuras indagaciones tendrán que realizarse para comprender mejor el sentido de esta relación.²²

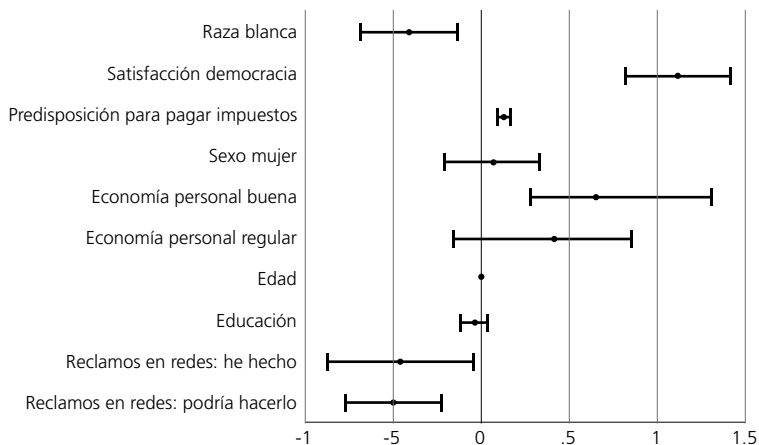
En segundo lugar la tenencia de *smartphone* resultó significativa para aumentar la probabilidad de desaprobación a la presidenta si se mantenían todas las variables excepto la percepción regular de la propia economía. Junto con la mencionada posesión de agua caliente, estas resultaron ser las únicas dos variables significativas para el nuevo ejercicio.

El descubrimiento nos orientó, por lo tanto, a indagar con mayor profundidad el papel de las redes sociales en la desaprobación presidencial. Afortunadamente la encuesta de Latinobarómetro incluye preguntas específicas sobre la utilización de diferentes redes como medio de reclamo. El ejercicio demostró que haber hecho reclamos en redes sociales o considerar que se podrían realizar por este medio aumentaba la probabilidad de desaprobación a la presidenta.

Usted se describiría como perteneciente a la clase: Alta, Media Alta, Media, Media Baja, Baja, No sabe, No responde". Se indica leer las alternativas y marcar una sola.

²² Dado que la posesión de agua caliente en un país tropical como Brasil puede considerarse un lujo, se hicieron diferentes pruebas para indagar si esta tenencia está relacionada con a) la ubicación del encuestado en las diferentes regiones del país, b) la autopercepción de ubicación en clase social, c) la asociación con otros bienes y d) con la raza. Aplicando una prueba de chi cuadrado se descubrió que la posesión de agua caliente se comporta significativamente de manera diferente entre aquellos que son blancos con respecto a los que no lo son. Véase el anexo.

Gráfica 4. Desaprobación presidencial y reclamo en redes



Fuente: Elaboración propia a partir de un modelo logit. Variable dependiente: aprobación presidencial. Nivel de confianza: *90%. Con base en Latinobarómetro 2015.

El haber hecho una queja por medio de redes sociales aumenta la probabilidad de desaprobación a la presidenta en 7.5 puntos porcentuales* (p value: 0.072). Más significativo aún, considerar que las redes son un medio adecuado para reclamar y que se podría hacer uso de ellas en el futuro, aumenta esta probabilidad en 8.5 puntos porcentuales** (p value: 0.019). Para ello, Facebook parece más idóneo que otros medios, como Twitter (que resulta una variable no significativa) (véase el anexo).

Estos hallazgos resultan consistentes con lo que reportan otras fuentes de información. El 13 de marzo de 2015 se llevó a cabo una encuesta, realizada por la Fundación Perseu Abramo, entre los manifestantes que marcharon a favor de la presidenta, el partido en el gobierno y en contra del desafuero. Una de las pautas que se difundió en esta marcha fue la consigna: “a favor de la democracia”. Dicha encuesta se aplicó también, con pocos días de diferencia, el 15 de marzo de 2015, a manifestantes en contra de la presidenta, el PT y que apoyaban el desafuero. Las pautas principales de esta segunda protesta se declararon: “en contra de la

corrupción", "contra Dilma y Lula" y "a favor de Brasil" (véase Fundação Perseu Abramo, 2015).²³

Las encuestas muestran que las diferencias entre estos dos grupos en lo que respecta al perfil etario, educativo, de sexo e incluso de renta, no son tan abrumadoras como cabría esperar. En relación con esto último, las diferencias más importantes se encuentran entre aquellos que declaran ganar solo hasta dos salarios mínimos. Esta población es más numerosa entre los que acudieron a la marcha del día 13 (22% contra 9% de los del día 15). Lo opuesto se presenta entre aquellos que declaran ganar más de diez salarios mínimos. Estos están más presentes entre los opositores al gobierno (35% contra 18%). En cambio entre aquellos que se ubican entre dos y cinco salarios (33% entre los manifestantes del día 13 contra 22% del día 15) y entre 5 y 10 salarios mínimos (23% contra 28%), las diferencias no son tan importantes. La mayor parte de los manifestantes declaran ingresos medios (Fundação Perseu Abramo, 2015).

Igualmente sorprendente es que varias de las opiniones declaradas tampoco reporten las diferencias esperadas. Ambos grupos de manifestantes en su mayoría dicen creer en Dios, no apoyan que las mujeres que se practican abortos sean llevadas a prisión y no están especialmente en contra del casamiento entre parejas de un mismo sexo. La mayor diferencia de opiniones se reporta en relación con la pena de muerte (apoyada fuertemente por los manifestantes del día 15: solo 37% está en contra, mientras que esa cifra ronda 69% de oposición entre los manifestantes del día 13).

Por otra parte, la respuesta a la pregunta de si en ciertas situaciones es mejor una dictadura que un régimen democrático reporta 81% de opinión contraria entre los manifestantes del día 13 frente a 68% entre los del día 15. En cambio, otra casa encuestadora, Datafolha, que también aplicó una encuesta a manifestantes el 15 de marzo de 2015, menciona que la mayoría (85%) cree que la democracia es siempre la mejor forma de gobierno. Solo para 10%, en ciertas circunstancias, es mejor

²³ Encuesta realizada los días 13 (305 encuestas) y 15 de marzo (534 encuestas) al público presente en las manifestaciones en la avenida Paulista, São Paulo, Brasil. Disponible en <<http://novo.fpabramo.org.br/sites/default/files/fpa-pesquisa-manifestacoes.pdf>>, consultado el 18 de junio de 2016.

una dictadura que un régimen democrático, y 3% considera que “les da lo mismo” uno u otro régimen.²⁴ En este punto, las respuestas de los manifestantes se ubican muy por encima del promedio para el mismo tipo de pregunta en América Latina recogido por la mencionada encuesta Latinobarómetro 2015. En esta, solo 57% declara que la democracia es siempre la mejor forma de gobierno, 15% afirma que en ciertas circunstancias la dictadura puede ser mejor que un régimen democrático, y 18.9% declara que le “da lo mismo” un régimen democrático que uno que no lo sea.

Para la siguiente marcha a favor del desafuero, realizada el 12 de abril de 2015, otro equipo encuestador (esta vez a cargo del profesor Jairo Pimentel de la USP) indica que 71% contestó que “es mejor tener una democracia, aunque el crecimiento económico sea bajo” (mientras que 25% respondió que “es mejor tener un gran crecimiento económico aunque sea en régimen militar”). Estas respuestas son relativamente similares a lo analizado en el párrafo anterior. Sin embargo, un dato curioso aparece cuando 39% contesta que estaría “a favor de una intervención militar para sacar de la presidencia a Dilma Rousseff” y 35% sostiene que, en ese caso, algunos partidos deberían ser mantenidos y otros extinguidos (véase Pimentel, 2015).

En conjunto, a pesar de que la pauta de una adhesión a la dictadura se hiciera lugar común para describir a los manifestantes del día 15, la lectura de las encuestas mencionadas no deja un panorama tan claro. Los indicios llaman la atención sobre el hecho de que la insatisfacción con la democracia no estaría seguida necesariamente en todos los casos de un apoyo automático a la intervención de los militares en la política. Por otra parte, la encuesta de Pimentel agrega un ingrediente interesante cuando indica que aparece un margen de aceptación a la intervención militar cuando se suma a la pregunta la preferencia de quitar a Rousseff de la escena. Los manifestantes del día 15 aparecen contradictoriamente declarando, por un lado, un rechazo a la intervención militar, pero por otra parte, parecen relajar en cierta medida ese rechazo cuando se les menciona el nombre del objeto repudiado: Dilma Rousseff. Si eso se conjuga con la narrativa de la conspiración comunista difundida en las redes, la

²⁴ Véase Datafolha (15 de marzo de 2015). Disponible en <<http://media.folha.uol.com.br/datafolha/2015/03/17/manifestacao-15-03.pdf>>, consultado el 18 junio de 2016.

aparición de ese margen puede cobrar sentido. Con certeza, este punto amerita estudios más profundos a futuro.

Algo similar sucede en lo que se refiere al rechazo a los programas sociales. Las opiniones no están exentas de contradicciones por lo que el panorama es más heterogéneo de lo que parece. En otra investigación realizada el 12 de abril de 2015 por los profesores Pablo Ortellado y Esther Solano (también de la USP) y citada por Tatagiba, Trindade y Chaves (2015) se muestra que 70.9% se ubica en contra de las cuotas en las universidades (esa proporción está de acuerdo con la frase que dice que "las cuotas generan más racismo") y 60.4% se manifiesta en contra del Bolsa Familia, coincidiendo con la frase que dice que ese programa "solo financia a vagos". Sin embargo, la inmensa mayoría se posicionó también a favor de servicios de educación y salud gratuitos y universales (97%) y a favor de la tarifa cero en transporte público (47%) (Tatagiba, Trindade y Chaves, 2015: 209). En conjunto, los manifestantes defienden una pauta liberal en torno a los programas sociales focalizados, pero no liberal en lo que se refiere a las políticas sociales universales. En estos momentos en que el proyecto de congelamiento del gasto social por veinte años (Proposta de Emenda à Constituição —PEC— 241/55) se está discutiendo en el Congreso, probablemente podrá verse hasta qué punto este sector de la ciudadanía está dispuesto a sacrificar lo segundo por lo primero.

Hecho este recorrido, queda por resaltar un punto central de coincidencia entre esta serie de encuestas y nuestro análisis, a saber: las diferencias más contundentes entre los manifestantes de los días 13 y 15 de marzo se reportan en relación con la forma en que se comunicaron y articularon para asistir a la protesta y en el tipo de participación política que detentan. De acuerdo con la encuesta de la Fundación Perseu Abramo, mientras que los que asistieron el día 13 declaran mayoritariamente que supieron del acto por medio de grupos de acción política a los que pertenecen (29% contra solo 1% para el caso de los manifestantes del día 15) o por colegas del trabajo y de la escuela (11% contra 4%); los manifestantes del día 15 respondieron abrumadoramente que se enteraron a través de las redes sociales (75% contra 23% del grupo contrario). Ambos mencionaron en proporciones similares que amigos (22% el día 13 contra 28% el día 15) y familiares (3% en ambos casos) los habían convocado.

Por otra parte, los perfiles también son completamente diferentes en lo referente a la membresía organizacional. Los manifestantes del día 13

declararon pertenecer a sindicatos (27%), movimientos sociales (24%), partidos políticos (24%), asociaciones de barrio (11%), gremios, centros académicos, agrupaciones estudiantiles (6%) y grupos religiosos (10%). En tanto que los manifestantes del día 15 prácticamente no reportan afiliación alguna a este tipo de espacios. En sindicatos se ubica 6%, en movimientos sociales 3%, en partidos políticos y en asociaciones de barrio 2%. Los perfiles solo se acercan en cuanto a la participación en grupos religiosos, que en el caso de los manifestantes del día 15 fue de 8%, próxima al 10% del grupo contrario.

La encuesta de Datafolha también destaca esta diferencia. Mientras 83% de los manifestantes del 15 de marzo declara que las redes tienen mucho prestigio, poniéndolas por encima de la prensa (61%), solo 67% de los asistentes a la marcha del 13 de marzo otorga prestigio a las redes, por encima de la prensa (50% en este caso). Adicionalmente, los manifestantes del día 15 declaran que las redes tienen “mucho poder” (89%) por encima de la prensa (77%). En tanto, los manifestantes del día 13 invierten levemente la ecuación ubicando a la prensa como un poco más poderosa (82%) que las redes sociales (80%).

En conjunto, estos datos muestran un perfil completamente diferente en lo que hace al tipo de participación y articulación política de los manifestantes. Mientras que entre los que apoyaron la gestión presidencial y al partido en el gobierno predominó la membresía en organizaciones de corte más clásico (sindicatos, partidos, movimientos sociales), en el grupo opositor, coincidentemente con nuestros hallazgos, predomina un perfil muy articulado en torno a las redes sociales al tiempo que desconectado de una membresía más permanente en organizaciones de corte político tradicional.

Conclusiones

De 2013 a la fecha Brasil no solo ha vivido un giro a la derecha, sino una crisis institucional, política y social profunda que algunos han denominado como un verdadero “terremoto” del que todavía se registran réplicas.

En este capítulo analizamos solo un aspecto específico de ese “terremoto”, a saber: los factores que abonaron a la generación de una movilización sin precedentes desde la salida de la dictadura. Esta movilización

logró difundir contenidos de profundo rechazo hacia el PT, sus dirigencias e incluso hacia ciudadanos, simpatizantes de a pie, ubicados en el espectro de izquierda cercanos a dicho partido. Ello implicó un proceso en el que la indignación por los graves hechos de corrupción se fue orientando hacia la construcción de una culpabilidad centrada en el partido que había ocupado la presidencia en los últimos 12 años. La selectividad de la indignación incluyó la difusión y aceptación por parte de una buena sección de la población de narrativas conspirativas centradas en un supuesto proyecto comunista de perpetuación en el poder, que atacaba a la nación.

En este contexto las hipótesis prevalecientes señalaron a las clases medias urbanas como protagonistas de esta movilización conservadora que en teoría sería monolítica y coherentemente autoritaria. El análisis realizado aquí muestra que el panorama, en cambio, es más complicado.

Por un lado, la desaprobación de la presidenta Rousseff parece anclarse más en componentes de raza que de clase. La única señal relativa a la clase se refiere levemente a la disposición a pagar impuestos, hecho que se asociaría, a su vez, con la fuerte crítica a programas sociales asistenciales focalizados como Bolsa Familia y Minha Casa Minha Vida. Por lo demás, ni la autopercepción de clase ni la tenencia de bienes apunta en este sentido. Las encuestas aplicadas los días 13 y 15 de marzo, refuerzan el hallazgo. Si bien en los extremos la manifestación del 13 convocó a más personas por debajo de dos salarios mínimos, y la del 15, por el contrario, a más sujetos por encima de los diez salarios mínimos, la mayor parte de los asistentes a dichas manifestaciones se ubicó dentro de la clase media. Considerando esto es legítimo preguntarse por qué sujetos ubicados en posiciones de clase similares tuvieron reacciones políticas diferentes.

Por otra parte, la insatisfacción relacionada con el régimen democrático de manera general y con la situación económica personal en particular son dos elementos que aparecen constantemente en todas las pruebas realizadas, como factores que inciden en la aprobación/desaprobación de la gestión presidencial. Sin embargo, la observación de algunas respuestas presentes en las encuestas consultadas nos invita a ser cautos sobre todo con la interpretación que podamos dar al contenido referido a la insatisfacción con la democracia. Los participantes de la marcha del 15 de marzo parecen estar menos satisfechos con las bondades democráticas, pero no por ello se declaran completamente a favor de

una intervención militar. Estos datos requieren que sigamos analizando los sentidos más específicos implicados en la insatisfacción con la democracia que presentaron quienes respondieron y su relación con las manifestaciones consideradas.

El análisis realizado muestra centralmente que el uso de las redes sociales es un factor de suma importancia para entender mejor las movilizaciones y opiniones bajo estudio. El giro a la derecha tiene entonces un componente relacional clave. No se trata de la simple inoculación individual de ideas a través de los medios (aunque estos hayan sido elementos ineludibles del proceso). Tampoco se trata de reacciones que van desde la posición socioeconómica estructural, sin mediación alguna, hacia la desaprobación y la protesta. Lo analizado muestra que estamos ante una nueva forma de articular voluntades que estaban desconectadas de la participación y la membresía organizacional clásica en sindicatos, partidos o movimientos. Esta forma de articulación ha sido conducida por una nueva generación que parece haber encontrado un espacio para ejercer liderazgo, innovación y creatividad comunicacional. Nos gusten o no los contenidos difundidos y el tipo de adhesiones generadas, lo logrado pone en cuestión la vitalidad y el alcance de las formas organizativas que fueron centro de la transición democrática en Brasil durante las décadas de los ochenta y noventa. La era de los memes ha demostrado que la viralización de mensajes en las redes, en un contexto específico de indignación como el brasileño, puede amplificar las pasiones transformándolas en adhesiones y en acciones concretas.

El reporte de un perfil apolítico clásico en los manifestantes del 15 de marzo nos lleva a preguntarnos si la intensidad de los memes tuvo el efecto de compensar el desequilibrio de una apatía o desconexión política previa, para lograr movilizar efectivamente a este tipo de ciudadanos. Si esto fuera así, los futuros planteos políticos que quieran disputar el terreno tendrán que considerar más seriamente el poder de las emociones dentro de sus narrativas. Y deberán hacerlo en un lenguaje dinámico, casi instantáneo, el de los memes contagiando velozmente ideas, emociones y adhesiones en las redes sociales. Si el contagio es más factible de ser viralizado por medio de un enemigo al que odiar, es algo que nos resta indagar con mayor profundidad. El caso analizado sugiere que ese contenido, articulado con cierto orden de preferencias políticas y con nuevas formas de conectividad social, no es irrelevante.

Referencias

- Amorim Neto, Octavio (2008). “O governo presidencial e a sustentação parlamentar: uma historia tragico-marítima?”, en José Rivas Vieira (ed.), *Constituição cidadã de 1988: efetivação e impasse institucional?*, Río de Janeiro, Editora Forense, pp. 59-68.
- Amorim Neto, Octavio, Gary Cox y Mathew D. McCubbins (2003). “Agenda Power in Brazil’s Camara dos Deputados, 1989 to 1998”, *World Politics*, vol. 55, núm. 4, pp. 550-578.
- Avritzer, Leonardo (2015). “O panelaço e as formas do protesto social”, 5 de junio. Disponible en <<http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/O-panelaco-e-as-formas-do-protesto-social/4/33657>>, consultado el 28 de octubre de 2016.
- Banco Mundial (2016). *Poverty and Shared Prosperity 2016: Taking on Inequality*, Washington, D. C., World Bank. Disponible en <<https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/25078>>, consultado el 3 de noviembre de 2016.
- Barbosa, Gisele Heloise (2015). “Protestos de Junho de 2013 no Brasil e as instituições participativas: um breve mapeamento”, trabajo presentado en el VIII Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, organizado por la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (Alacip). Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, del 22 al 24 de julio de 2015.
- Blog da cidadania (23/03/2015). “Quem inventou Fernando Holiday?”. Disponible en: <<http://www.blogdacidadania.com.br/2015/03/quem-inventou-fernando-holiday/>>, consultado el 20 de agosto de 2015.
- Cavalcante, Sávio (2015). “Classe média e conservadorismo liberal”, en Sebastian Velasco e Cruz, André Kaysel y Gustavo Cotas (orgs.), *Direita, Volver! O Retorno da direita e o ciblo político brasileiro*, São Paulo, Fundação Perseu Abramo, pp. 177-195.
- Datafolha (2015). “Manifestação na avenida Paulista”. Disponible en <<http://media.folha.uol.com.br/datafolha/2015/03/17/manifestacao-15-03.pdf>>, consultado el 18 junio de 2016.
- Datafolha (s. f.). “Encuestas periódicas de evaluación de la gestión presidencial”. Disponibles en: <<http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/avaliacaodegoverno/presidente/dilma/indice-1.shtml>>, consultado el 28 de octubre de 2016.

- Da Silveira, Sergio Amadeu (2015). "Direita nas redes sociais online", en Sebastian Velasco e Cruz, André Kaysel y Gustavo Coda (orgs.), *Direita, Volver! O Retorno da direita e o ciblo político brasileiro*, São Paulo, Fundação Perseu Abramo, pp. 213-230.
- Figueiredo, Argentina y Fernando Limongi (2007). "Instituições políticas e governabilidade: desempenho do governo e apoio legislativo na democracia brasileira", en Carlos Ranulfo Melo y Manuel Alcantara Sáez (eds.), *A democracia brasileira: Balanço e perspectivas para o século XXI*, Belo Horizonte, Editora UFMG, pp. 147-198.
- Figueiredo, Argentina y Fernando Limongi (2006). "Poder de agenda na democracia brasileira: desempenho do governo no presidencialismo pluripartidário", en Gláucio Ary Soares y Lúcio Renno (eds.), *Reforma política: lições da história recente*, Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, pp. 249-280.
- Figueiredo, Argentina y Fernando Limongi (2000). "Presidential Power, Legislative Organization, and Party Behaviour in the Brazilian Legislature", *Comparative Politics*, vol. 32, núm. 2, pp. 151-170.
- Figueiredo, Argentina y Fernando Limongi (1999). *Executivo e legislativo na nova ordem constitucional*, Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas.
- Fundação Perseu Abramo (2015). Encuesta realizada los días 13 (305 encuestas) y 15 de marzo (534 encuestas) al público presente en las manifestaciones en la avenida Paulista, São Paulo, Brasil. Disponible en <<https://fpabramo.org.br/publicacoes/publicacao/manifestacoes-20152016-comparativo/>>, consultado el 18 de junio de 2016.
- G1 (2013). "Veja pesquisa completa do Ibope sobre os manifestantes", 24 de junio. Disponible en <<http://g1.globo.com/brasil/noticia/2013/06/veja-integra-da-pesquisa-do-ibope-sobre-os-manifestantes.html>>, consultado el 28 de octubre de 2016.
- Gohn, Maria da Gloria (2014). "A sociedade brasileira em movimento: vozes das ruas e seus ecos políticos e sociais", *Cad. CRH*, vol. 27, núm. 71, pp. 431-441.
- Greenwald, Glenn, Andrew Fishman y David Miranda (2016). "Brazil Is Engulfed by Ruling Class Corruption —and a Dangerous Subversion of Democracy", 18 de enero. Disponible en: <<https://theintercept.com/2016/03/18/brazil-is-engulfed-by-ruling-class-corruption-and-a-dangerous-subversion-of-democracy/>>, consultado el 30 de septiembre de 2016.
- Gurza Lavalle, Adrián y Leonardo Sangali Barone (2015). "Conselhos, Associações e Desigualdade", en Marta Arretche (org.), *Trajetórias das desigual-*

- dades: *Como o Brasil mudou nos últimos cinquenta anos*, São Paulo, UNESP/CEM, pp. 51-76.
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2014). *Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD)*, Brasília, IBGE. Disponible en <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2014/default_sintese.shtm>, consultado el 2 de agosto de 2016.
- Isunza Vera, Ernesto y Adrián Gurza Lavalle (2012). "Arquitetura da participação e controles democráticos no Brasil e no México", *Novos Estudos*, Cebrap, vol. 92, pp. 105-121.
- Klein, Cristian (2016). "'Vingança social' de classe média corroeu apoio ao PT, diz cientista", 17 de abril. Disponible en <<http://www.valor.com.br/politica/4527533/%3Fvinganca-social%3F-de-classe-media-corroeu-apoio-ao-pt-diz-cientista>>, consultado el viernes 28 de octubre de 2016.
- Limongi, Fernando (2015). "O Passaporte de Cunha e o Impeachment. A crônica de uma tragédia anunciada", *Novos Estudos*, Cebrap, vol. 103, pp. 99-112.
- Linz, Juan J. (1994). "Presidential or Parliamentary Democracy: Does It Make a Difference?", en Juan J. Linz y Arturo Valenzuela (eds.), *The Failure of Presidential Democracy: The Case of Latin America*, Baltimore, Johns Hopkins University Press, pp. 3-87.
- Mainwaring, Scott (1999). *Rethinking Party Systems in the Third Wave of Democratisation: The Case of Brazil*, Stanford, Stanford University Press.
- Mainwaring, Scott (1993a). "Democracia presidencialista multipartidaria: o caso do Brasil", *Lua Nova*, núms. 28/29, pp. 21-74.
- Mainwaring, Scott (1993b). "Presidentialism, Multipartyism, and Democracy: The Difficult Combination", *Comparative Political Studies*, vol. 2, núm. 2, pp. 198-228.
- Martín, María (2014). "Não é uma banda de indie-rock, é a vanguarda anti-Dilma". Disponible en <http://brasil.elpais.com/brasil/2014/12/12/politica/1418403638_389650.html>, consultado el 20 de agosto de 2015.
- Machado Tavares, Francisco y João Henrique Ribeiro Roriz (2014). "Antes de junho, as ruas de maio: apreensões de ativistas goianienses sobre o Estado e a política institucional", IX Encontro da ABCP, Brasília. 4-7 de agosto.
- Medeiros, Elore y Bruno Fonseca (2016). "Bíblia, boi e bala: um raio-x das bancadas da Câmara". Disponible en: <<http://exame.abril.com.br/brasil/biblia-boi-e-bala-um-raio-x-das-bancadas-da-camara/>>, consultado el 18 de junio de 2016.

- Monteiro, André (2016). “PT tem a maior perda de votos, receita e influência; tucanos e 'nanicos' crescem”. Disponible en <<http://www1.folha.uol.com.br/poder/eleicoes-2016/2016/10/1819287-pt-tem-a-maior-perda-de-votos-receita-e-influencia-tucanos-e-nanicos-crescem.shtml>>, consultado el 28 de octubre de 2016.
- Nicolau, Jairo y Timothy Joseph Power (eds.) (2007). *Instituições representativas no Brasil: balanço e reformas*, Belo Horizonte, Editora UFMG.
- Oliveira, Ribamar (2015). “As pessoas mais ricas no Brasil têm 65,8% do total dos rendimentos isentos”, 10 de agosto. Disponible en: <<http://www.valor.com.br/brasil/4172304/pessoas-mais-ricas-no-brasil-tem-658-do-total-dos-rendimentos-isentos>>, consultado el 18 de junio de 2016.
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) (2010). *Estadísticas tributarias en América Latina 1990-2010*. Disponible en <<https://www.oecd.org/ctp/taxglobal/Consolidated%20LAC%20country%20notes.pdf>>, consultado el 28 de octubre de 2016.
- Pimentel, Jairo (2015). *Relatório Pesquisa Manifestação-SP*, abril de 2015. Resultados mostrados en la reunión del Núcleo Democracia y Acción Colectiva (NDAC), mayo de 2015, São Paulo, Cebrap.
- Power, Timothy Joseph (2000). *The Political Right in Postauthoritarian Brazil: Elites, Institutions, and Democratisation*, Pensilvania, The Pennsylvania State University Press.
- Ritto, Cecilia y Oliveira, Pâmela (2012). “Acabou o amor: disputa pelo governo do Rio em 2014 põe PT e PMDB em lados opostos”. Disponible en: <<http://veja.abril.com.br/brasil/acabou-o-amor-disputa-pelo-governo-do-rio-em-2014-poe-pt-e-pmdb-em-lados-opostos/>>, consultado el 24 de octubre de 2016.
- Souza, Felipe (2016), “Após impeachment, MBL lançará nomes na política e promete atos contra ministros investigados na Lava Jato”. Disponible en: <http://www.bbc.com/portuguese/brasil/2016/05/160511_futuro_mbl_vempraru_fs>, consultado el 20 de agosto de 2015.
- Tatagiba, Luciana, Thiago Trindade y Ana Claudia Chaves Teixeira (2015). “Protestos à direita no Brasil (2007-2015)”, en Sebastian Velasco e Cruz, André Kaysel y Gustavo Codas (orgs.), *Direita, Volver! O Retorno da direita e o ciclo político brasileiro*, São Paulo, Fundação Perseu Abramo, pp. 197-212.
- The Economist* (2013). What is Brazil's “mensalão”?, 18 de noviembre. Disponible en: <<http://www.economist.com/blogs/economist-explains/2013/11/economist-explains-14>>, consultado el 15 de octubre de 2016.

- Teixeira Chaves, Ana Claudia (2013). "Para além do voto: uma narrativa sobre a democracia participativa no Brasil (1975-2010)", tesis de doctorado, Unicamp, Premio Capes, São Paulo.
- Velasco e Cruz, Sebastian, André Kaysel y Gustavo Cotas (orgs.) (2015). *Direita, Volver! O Retorno da direita e o ciclo político brasileiro*, São Paulo, Fundação Perseu Abramo.
- Wampler, Brian y Leonardo Avritzer (2005). "The Spread of Participatory Budgeting in Brazil: from radical democracy to Participatory Good Government", *Journal of Latin American Urban Studies*, vol. 7, pp. 37-52.
- Zalis y Gonçalves (2015). "Quais são e como pensam os movimentos que vão para a rua contra Dilma no domingo", 15 de marzo. Disponible en: <<http://veja.abril.com.br/politica/quais-sao-e-como-pensam-os-movimentos-que-vao-para-a-rua-contradilma-no-domingo/>>, consultado 20 agosto 2015.

3. Ascenso, auge y ocaso del kirchnerismo en Argentina

*Juan C. Olmeda**

Introducción

Quienes concurrieron a las urnas el 27 de abril de 2003 para elegir presidente en Argentina no imaginaron que ese momento marcaría el inicio de un periodo de 12 años en los que el matrimonio conformado por Néstor y Cristina Kirchner detentaría el poder de manera continua y que sus gobiernos se convertirían en uno de los referentes del llamado “giro a la izquierda” que tuvo lugar en América Latina en la primera década del siglo *xxi*. Las cualidades que marcaron el principio de ese proceso, así como el hecho de que una esposa sucediera en el poder a su cónyuge, dejan en evidencia sin embargo que la experiencia kirchnerista tuvo varios elementos excepcionales que la diferenciaron de lo observado en otros países de la región.

El caso argentino también revela otro elemento distintivo (por lo menos a noviembre de 2016): de todos los países que experimentaron un viraje hacia la izquierda ha sido casi el único, junto con Chile, en el que dicho ciclo concluyó como resultado de la decisión de los votantes de elegir en noviembre de 2015 a un candidato identificado con valores de centro-derecha —Mauricio Macri— y quien desde su llegada a la presidencia ha impulsado políticas orientadas a revertir mucho de lo plasmado durante las gestiones de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).¹

* Profesor-investigador de El Colegio de México.

¹ En otros países en donde ha habido un “giro a la derecha” derivado del desplazamiento de presidentes de izquierda, como Brasil, esto ha sido resultado de un pro-

El objetivo de este trabajo es explorar tanto las cualidades propias de la experiencia kirchnerista como los elementos que muestran sus similitudes con otros procesos observados en América Latina de la izquierda en el poder. De tal manera que el análisis se construye a partir de la identificación de cuatro grandes etapas que se sucedieron históricamente y que marcan diferentes momentos de las administraciones kirchneristas (2003-2015): la llegada al poder (2003), el auge (2004-2008), la reinención luego de la gran crisis experimentada al empezar el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner (2009-2011) y el ocaso (2011-2015). Intento mostrar que durante las primeras dos etapas las medidas de orientación de izquierda se combinaron de manera pragmática con otras más ortodoxas, con el objetivo final de consolidar el poder en la figura presidencial. No obstante, el giro hacia posturas más radicales se afianzó en las últimas dos etapas, aun cuando los efectos en términos de transformaciones institucionales no resultaron tan profundos como los observados en otros países de la región. Concluyo mostrando de qué manera la llegada de Macri al poder supuso un giro en la orientación ideológica que primó particularmente en las últimas dos etapas.

El kirchnerismo como objeto de estudio

Comúnmente se habla del “kirchnerismo” para hacer referencia al movimiento político que inicia con la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia de Argentina en mayo de 2003 y que durante los siguientes 12 años dominó la vida política del país. Diferentes aspectos deben ser tenidos en cuenta para caracterizar las diversas aristas de esta experiencia. En primer lugar, el matrimonio de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner controló la presidencia durante dicho periodo, sucediéndose ambos cónyuges en el poder. En ambos casos tanto Cristina durante

ceso que no ha implicado directamente a los votantes. Lo mismo puede decirse de lo acontecido en Paraguay con la salida del presidente Lugo o en Honduras con el fin del gobierno de Zelaya. En el caso de Perú, en donde la población eligió en junio de 2016 a Pedro Pablo Kuczynski, pueden plantearse dudas de que la orientación ideológica del anterior gobierno de Ollanta Humala pueda ser caracterizado como de izquierda.

la presidencia de Néstor como Néstor durante la primera presidencia de Cristina² asumieron roles políticos relevantes y muchos no tardaron en señalar el importante papel que jugaban en la toma de decisiones. En segundo lugar, a pesar de que previamente ocupaban un espacio secundario en el peronismo, desde su posición de poder el matrimonio logró tomar control del partido y encuadrarlo en una nueva fuerza política bautizada como Frente para la Victoria que los tenía como sus máximos referentes. Uno de los hitos de este proceso de conquista del aparato partidario fue la elección de Néstor Kirchner como presidente del Partido Justicialista en abril de 2008, poco tiempo después de dejar su cargo como presidente de la nación.

En tercer lugar, ambos líderes se autoposicionaron desde un inicio como parte de la ola izquierdista que avanzó en la región desde inicios del siglo XXI y buscaron estrechar lazos con otros mandatarios identificados con la misma postura.

Como resultado de la combinación de estos elementos se construyó una matriz que, tanto en términos discursivos como en el tipo de políticas públicas adoptadas, conjugaba posturas tradicionales del peronismo con aquellas de los sectores más a la izquierda dentro del partido que habían ganado posiciones a costa del ala más conservadora. Para lograrlo, sin embargo, fundamentalmente Néstor y en menor medida Cristina recurrieron a la construcción de alianzas que buscaban hacer base tanto en sectores progresistas que desde los años noventa se habían distanciado del peronismo como en figuras y estructuras tradicionales que incluían tanto a sectores del movimiento sindical como a caudillos tradicionales de la periferia del país.

Probablemente las complejidades de esta construcción política expliquen que si bien la experiencia kirchnerista comúnmente es enlistada como parte del “giro a la izquierda” observado en América Latina, diversos autores difieran en cuanto a dónde incluirla dentro de las diferentes corrientes identificadas en dicha “ola”. Así, por ejemplo, en la clásica distinción planteada por Castañeda (2006) la caracterización ubica al entonces presidente Kirchner en el grupo que el autor describe como la “izquierda equivocada”, populista y radical, junto con Hugo Chávez y Evo

² Hasta su muerte en octubre de 2010.

Morales. Sin embargo, en otro trabajo publicado casi al mismo tiempo Cleary (2006) propone que en realidad estamos en presencia de una versión de la izquierda moderada. En paralelo, Schamis (2006) destaca que, igual que en el caso de Venezuela y Bolivia, la llegada de Kirchner al poder debe entenderse como resultado de un sistema de partidos desarticulado, lo cual genera incentivos para la radicalización y apelación a canales no institucionales para hacer política. Más recientemente, Weyland, Madrid y Hunter (2010) plantean que se trata de un caso localizado en la frontera entre la izquierda moderada y la contestataria, mientras que en un intento por superar las caracterizaciones dicotómicas Levitsky y Roberts (2011) lo proponen como un ejemplo de lo que denominan “máquina populista”.

Si bien cada autor presenta razones sólidas para justificar la caracterización, las diferencias existentes parecen dejar en evidencia que el kirchnerismo aparece como un caso más complejo que otros más fácilmente clasificables.

El análisis desarrollado en las siguientes secciones sirve para revelar este carácter particular al mismo tiempo que para resaltar los elementos que vinculan a la experiencia kirchnerista con los otros casos.

El ascenso (2003). Kirchner, un presidente por accidente

Sin duda uno de los primeros elementos que hace difícil de catalogar el proceso kirchnerista tiene que ver con la forma en la que Néstor Kirchner llegó al poder. En diferentes trabajos se ha destacado que dicho ascenso no puede explicarse sin hacer referencia a la crisis económica, social y política experimentada en Argentina desde finales de 2001 que puso en entredicho el rol de las figuras y los partidos tradicionales. En este sentido, la aparición de Kirchner tendría similitudes con la emergencia de Chávez, Morales o Rafael Correa como figuras antisistema. Esta visión resulta sin embargo bastante simplista: al momento de emerger en la escena nacional como candidato presidencial Kirchner no solo era un político profesional que desde 1987 había ocupado cargos relevantes en la administración pública,³ sino que formaba parte de una de

³ En 1987 Néstor Kirchner fue electo intendente (alcalde) de la ciudad de Río Gallegos en la provincia de Santa Cruz. Dicho cargo le permitió construir una reputación que

las instituciones políticas argentinas (el Partido Justicialista) que no solo había jugado un rol central en la vida del país desde mediados del siglo xx sino que había controlado la presidencia por casi 12 años desde el regreso de la democracia en 1983.⁴ Además, si bien desde mediados de los noventa Kirchner había planteado posturas críticas contrarias al entonces presidente Menem, en los inicios de su gestión como gobernador a comienzos de dicha década se había contado como uno de los apoyos fundamentales a la agenda neoliberal impulsada por el mandatario.⁵ Por otra parte, su candidatura presidencial no solo no se mostraba contraria a la postura de los líderes tradicionales del partido sino que en los hechos solo había sido posible como resultado del apoyo explícito del otrora presidente Eduardo Duhalde (con influencias directas en el funcionamiento de la maquinaria política del peronismo de la provincia de Buenos Aires), y por lo tanto era vista por muchos como una mera continuación de dicho mandato. Estas cualidades también marcaban diferencia entre el camino seguido por Kirchner y el recorrido por líderes como Luiz Inácio Lula da Silva o Tabaré Vázquez, referentes de partidos históricos de izquierda que construyeron su poder desde la oposición criticando el modelo neoliberal y habían ganado poder a nivel subnacional, pero habían sido derrotados en numerosos intentos previos por acceder a la presidencia.

En caso de intentar una comparación, y salvando las distancias, la llegada de Kirchner a la presidencia en Argentina parecería guardar más paralelos con Ricardo Lagos o con Michelle Bachelet a similar posición en Chile que con cualquier otra de las experiencias de la izquierda latinoamericana.

A diferencia del caso chileno, sin embargo, en donde la concertación contaba con reglas claras que aseguraban al Partido Socialista la

lo llevó en 1992 a ganar la gobernación de la provincia de Santa Cruz. Desde entonces, gracias a una reforma constitucional que implantó la reelección indefinida, permaneció en dicho cargo hasta su elección como presidente en 2003.

⁴ De los veinte años desde la vuelta a la democracia en 1983 hasta la elección de Kirchner en 2003 el Partido Justicialista había controlado la presidencia por más de la mitad del periodo por medio de Carlos Menem (1989-1999) y Eduardo Duhalde (2002-2003).

⁵ Mucho se ha señalado por ejemplo el decidido apoyo brindado por Kirchner a la privatización de la empresa petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en 1992 y la excelente relación que primaba en los tempranos noventa entre él y el ministro de Economía Domingo Cavallo, artífice de las políticas de reforma económica.

candidatura presidencial luego de dos periodos de gobiernos democratacristianos y los votantes identificaban claramente a los candidatos postulados por dicho partido como referentes de la izquierda, en el caso argentino tanto la obtención de la candidatura como los motivos que llevaron a los electores a votar por Kirchner tuvieron que ver más con causas coyunturales que ideológicas, en un contexto en el que el peronismo se encontraba fragmentado y la Unión Cívica Radical (UCR, el otro partido tradicional en Argentina) atravesaba una profunda crisis después de la salida del poder de Fernando de la Rúa. Como ya ha quedado claro por diferentes análisis históricos, el presidente Duhalde buscó primero convencer a otros líderes peronistas de competir en las elecciones bajo su ala (figuras como Carlos Reutemann y José Manuel de la Sota, identificadas con la centroderecha) y solo entonces se decantó por Kirchner (Novaro, Bonvecchi y Cherny, 2014; Miguez, 2013). Por otro lado, a pesar de que desde hacía tiempo el futuro presidente venía mostrando posturas críticas de la ortodoxia neoliberal, el apoyo de los votantes fue más bien resultado de un “voto estratégico” orientado a evitar una nueva llegada de Carlos Saúl Menem a la presidencia. De hecho, otros dos candidatos (Elisa Carrió por la Alianza Afirmación de una República Igualitaria —ARI— y Adolfo Rodríguez Saá por una fracción del peronismo) concentraban más claramente entonces el apoyo de sectores progresistas o nacional-populares.

Otro elemento que se suma a profundizar la paradoja del inicio de la experiencia kirchnerista tiene que ver con que, en contraposición con las otras experiencias de la izquierda latinoamericana triunfante, Kirchner no solo no logró un abrumador apoyo electoral sino que tampoco resultó ganador de la contienda. De hecho, en la primera vuelta que tuvo lugar el 27 de abril de 2003 solo alcanzó 22% de los votos, quedando por detrás de Menem, quien obtuvo 24.5%. Solo la renuncia de este último a disputar la segunda vuelta a pocos días de que esta tuviera lugar el 18 de mayo del mismo año, intentando así evitar una derrota catastrófica anunciada por las encuestas, permitió que Kirchner fuera investido como presidente.

Más allá de sus posturas ideológicas personales, fue probablemente esta debilidad de origen la que planteó al presidente electo la necesidad de construir un liderazgo propio e impulsar una serie de políticas orientadas a cimentar su popularidad, lo cual a mi entender explicó su reco-

rrido hacia la izquierda. Para lograr dicho objetivo Kirchner desarrolló una estrategia que combinó tanto una apelación directa a la población, en sintonía con lo hecho por líderes de izquierda que no contaban con estructuras propias como Chávez, Morales o Correa, como recurriendo a decisiones pragmáticas y a la consolidación de su vínculo con actores tradicionales, tal como hicieron Lula en Brasil, Lagos y Bachelet en Chile e incluso Vázquez en Uruguay.

En relación con el primer elemento, Kirchner aprovechó su rol hasta entonces periférico en la política argentina (toda su carrera la había desarrollado hasta entonces en la lejana provincia de Santa Cruz al sur del país) para venderse como un *outsider* (Novaro, Bonvecchi y Cherny, 2014). Esta postura se vio plasmada en un discurso refundacional del sistema político (que recuperaba algunos de los reclamos hechos oír en contra de los partidos tradicionales desde 2001) y en su decisión inicial de plantear una confrontación y polarización con actores y poderes tradicionales sumamente desprestigiados (como la Corte Suprema, las Fuerzas Armadas y las empresas de servicios públicos privatizadas). Por otro lado, y ante la necesidad de incrementar su autonomía respecto del expresidente Duhalde y las estructuras del peronismo tradicional, planteó un paulatino alejamiento de su figura y la apelación a sectores progresistas por fuera del partido, en algo que se presentó como la *transversalidad*. El alejamiento de Duhalde derivó con el tiempo en una confrontación abierta. La misma se saldó en las elecciones intermedias de 2005 en las que se dio una disputa en la elección de senadores por la estratégica provincia de Buenos Aires (bastión tradicional de Duhalde) entre dos candidatas para el puesto: por un lado Cristina Fernández de Kirchner, apoyada por el presidente, y por el otro, Hilda Chiche Duhalde, esposa del exmandatario.⁶ La victoria de la primera no dejó dudas acerca de que Kirchner se había consolidado como la líder indiscutida del peronismo “matando a su padre”.

Asimismo, comenzó a quedar claro que el país tendría “dos líderes al precio de uno”, dado el activo rol que Cristina Fernández comenzó a jugar desde inicios de la presidencia de su marido.

⁶ La contundencia del triunfo resultó abrumadora: mientras que la lista encabezada por Cristina Fernández de Kirchner obtuvo 45.8% de los votos, la de Hilda Duhalde solo consiguió 20.4 por ciento.

El auge 2004-2008: construyendo el modelo kirchnerista

La construcción del liderazgo de Kirchner, sin embargo, no solo tuvo que ver con su faceta discursiva sino con la implementación de políticas que se propusieron como la contracara de lo que había sido la norma en los años neoliberales de las presidencias de Menem y de De la Rúa. A pesar de su rompimiento político con Duhalde, el nuevo presidente conservó el rumbo fundamental en la política económica (que se tradujo en la confirmación de Roberto Lavagna al frente del Ministerio de Economía y en su puesto desde abril de 2002 por designación de Duhalde) y en la política social, al tiempo que promovía algunas medidas en otros ámbitos que mostraban sello propio. Este esquema determinó que si bien el nuevo presidente planteó desde su llegada posturas más radicales en términos discursivos, en la práctica las acciones concretas tuvieron un carácter moderado.

En el área económica la intención del nuevo gobierno fue mantener un tipo de cambio alto (resultado de la devaluación que se había experimentado desde la salida de la convertibilidad a inicios de 2002) que les sumara competitividad a las exportaciones argentinas en un contexto en el que comenzaba a vislumbrarse un progresivo aumento en el precio y en la demanda de *commodities*. Al mismo tiempo, en consonancia con su receta ya implementada como gobernador, Kirchner hizo gala desde un inicio de un compromiso profundo con la disciplina fiscal para mantener las cuentas públicas bajo control. En un proceso ya iniciado en la presidencia anterior, la recaudación continuó teniendo como uno de sus pilares los impuestos al comercio exterior (principalmente las exportaciones de materias primas). La combinación de estos elementos llevó a que durante el periodo se registraran los llamados “superávits gemelos” (comercial y fiscal), que sirvieron para asegurar el repunte sostenido de la economía. En paralelo, durante dichos años tuvo lugar otro importante proceso: la renegociación con los acreedores de la deuda sobre la que el país había declarado una moratoria unilateral a finales de 2001. Las anteriores medidas parecen haber sido el resultado de consideraciones pragmáticas, orientadas a cimentar el crecimiento económico del país, antes que ideológicas.

Sin embargo, otras líneas de acción emparentaron a Kirchner con otros gobiernos de izquierda en la región: por un lado, la confrontación

con las empresas privadas a cargo de brindar servicios públicos (en manos del Estado hasta las reformas de Menem en los años noventa) y, por el otro, la decisión de buscar autonomía respecto del Fondo Monetario Internacional. En relación con lo primero, las consideraciones fueron en gran medida pragmáticas (intentando evitar que las empresas pudieran trasladar la devaluación a las tarifas y que esto se tradujera en un aumento de la inflación), pero se plasmaron en un discurso anticorporaciones y en la decisión de buscar renegociar los contratos que estaban vigentes desde el momento de las privatizaciones. La similitud con casos como el de Chávez y Evo Morales también se observó en la concreción de algunas nacionalizaciones, aunque estas fueron limitadas y respondieron más bien a faltas graves en la prestación del servicio por parte de los privados.⁷ Respecto del segundo punto, el gobierno decidió (casi al mismo tiempo en que Brasil adoptó una postura similar) cancelar de manera adelantada sus deudas con el organismo con la intención de limitar el protagonismo que el mismo había tenido en la vida política y económica argentina en la década anterior.

En el plano del desarrollo social, si bien Kirchner apostó por la continuidad de un amplio programa de ayuda social iniciado por el gobierno de Duhalde (Jefes y Jefas de Hogar) que guardaba semejanzas con los programas de transferencia condicionada que se popularizaron en la región en dichos años, el esquema nunca llegó a institucionalizarse plenamente y tendió a reducirse a medida que se dejaba atrás la crisis. En contraposición, el esfuerzo estuvo puesto tanto en la creación de empleo como en la mejora de las condiciones del mismo, a través de una política salarial y laboral activa que a partir de la apuesta fuerte por las negociaciones colectivas les volvió a dar poder a los sindicatos y permitió que mejorara la participación de los trabajadores en el ingreso (Etchemendy, 2011). En paralelo, se puso énfasis en ampliar la seguridad social fortaleciendo el sistema de pensiones a partir de la generación de mecanismos para que una mayor cantidad de trabajadores pudiera gozar de él. Asimismo, se tomaron medidas para revertir en parte el esquema generado en los años noventa con la privatización de los fondos de pensión en manos ahora de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP).

⁷ Entre las empresas estatizadas en dicho momento destacan el Correo Argentino y Aguas Argentinas, ambas privatizadas durante el gobierno de Carlos Menem.

En términos políticos, el proclamado proyecto refundacional no derivó, tal como sí fue el caso en Venezuela, Bolivia o Ecuador, en un intento de reformular el marco institucional del país a partir de una nueva Constitución, sino que se concentró en intentar depurar algunas instituciones fuertemente desprestigiadas (como la Corte Suprema de Justicia, las Fuerzas Armadas y en menor medida el propio Partido Justicialista). Dicha línea de acción apuntó particularmente a promover un recambio de sus miembros y máximas autoridades, apostando a que ello sirviera para consolidar la figura del presidente como un exponente de la “nueva política”. Al mismo tiempo, ganó relevancia en la agenda del gobierno la política de derechos humanos, particularmente sensible para el caso argentino dados los efectos derivados de la dictadura militar que gobernó el país de 1976 a 1983. En este punto, el presidente también intentó mostrar su contraposición con anteriores gobiernos, como el de Menem y, en menor medida, el de Alfonsín, que habían limitado el trabajo de la justicia en la persecución y castigo de delitos de lesa humanidad.⁸ Esta postura se tradujo asimismo en una mayor vinculación con organismos como Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, tradicionalmente críticos y alejados de gobiernos anteriores.

Como en los otros planos, sin embargo, tampoco en el ámbito político se observó una ruptura radical con el pasado y el presidente continuó teniendo estrecha vinculación con referentes de la “vieja política”. Después del fracaso del modelo de la transversalidad, muchos líderes tradicionales del peronismo se convirtieron en pilares y aliados centrales del gobierno. Incluso al final de su mandato el presidente impulsó una alianza electoral con sectores de la tradicional UCR que resultó clave para que su esposa ganara las elecciones de octubre de 2007 en primera vuelta.⁹

⁸ Por impulso del presidente Kirchner, el Congreso aprobó en la segunda mitad de 2003 la derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que habían sido dictadas durante la presidencia de Alfonsín por presión de las Fuerzas Armadas. Esto permitió que se reactivaran numerosas causas por violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad durante la dictadura, la mayoría de las cuales terminaron en condena para los imputados.

⁹ La fórmula encabezada por Cristina Fernández de Kirchner obtuvo 45.29% de los votos, duplicando el apoyo obtenido por la candidatura de Elisa Carrió, que se ubicó en segundo lugar con 23.04% de los sufragios.

En donde la sintonía con otros líderes de la izquierda latinoamericana resultó más clara fue quizás en el plano de las relaciones internacionales. En este aspecto, el acercamiento con figuras como Chávez, Lula, Morales, Correa y en menor medida Lagos y Tabaré Vázquez fue concomitante con el progresivo alejamiento de Estados Unidos, enfriando una relación que había sido central para Argentina durante la década anterior. Esto se tradujo en intentos por profundizar la integración económica y política regional (vía el Mercosur y luego la Unasur) y el rol de Kirchner fue clave tanto para abortar el proyecto del ALCA en la reunión de líderes iberoamericanos en Mar del Plata en 2005 como para promover el ingreso de Venezuela al bloque económico.

De este modo, la acción política se convirtió en el método utilizado por el presidente para consolidar su liderazgo y superar la debilidad inicial. Al finalizar su periodo de gobierno en diciembre de 2007, su nivel de aprobación había ascendido a cerca de 60 por ciento.

La reinención (2009-2011): el momento de Cristina

Como ya se mencionó, Cristina Fernández de Kirchner fue electa como presidenta de Argentina y sucesora de su marido en las elecciones que tuvieron lugar en octubre de 2007 y hacia el inicio su gobierno se propuso como una continuidad del anterior, aunque con promesas de mejora en la calidad institucional (un aspecto que paulatinamente comenzó a ser criticado conforme avanzaba el gobierno de Néstor Kirchner).

A pesar de ganar los comicios con una amplia ventaja, el periodo 2008-2009 resultó crítico para su administración y condujo a un deterioro significativo de su popularidad y liderazgo. La crisis tuvo como punto de inicio un conflicto con el sector agropecuario (que había crecido y se había fortalecido en los años anteriores como resultado del aumento de las exportaciones de productos primarios), ante el intento del gobierno de elevar, a partir de una resolución administrativa, los tributos que dicho sector pagaba por sus exportaciones. Con el paso de los meses la disputa no solo fue escalando sino que permitió que el conjunto de la oposición (integrada por actores tanto económicos como políticos) se abroquelara detrás del reclamo, algo que no había ocurrido durante el gobierno de Néstor Kirchner. El intento de la presidenta de lograr una legitimación

de la medida haciéndola aprobar por el Congreso resultó tan contraproducente que llevó al gobierno al borde del abismo: no solo debió asumir el rechazo del proyecto de ley en el Senado (que dominaba el oficialismo), sino que este revés se logró con el voto negativo del propio vicepresidente (quien debe emitir su posición cuando la votación se encuentra empatada, como fue el caso). Esto llevó a una ruptura en los hechos de la coalición de gobierno e inclusive de los propios bloques legislativos peronistas en ambas cámaras.

El debilitamiento de la figura presidencial como consecuencia de esta catástrofe política derivó y al mismo tiempo fue profundizado por la derrota del oficialismo en las elecciones legislativas de medio término de 2009. Esto se tradujo no solo en que el partido gobernante perdiera su mayoría en la Cámara de Diputados, sino que se pusiera en cuestión incluso la propia figura del expresidente Kirchner, quien encabezó la lista de diputados que quedó en segundo lugar en cantidad de votos en la estratégica provincia de Buenos Aires.

La crisis enfrentada en esos primeros años de su administración impuso que el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner debiera reinventarse, y el camino elegido se materializó con la promoción de una serie de iniciativas que evidenciaron un mayor movimiento a la izquierda del gobierno, retomando muchas de las reivindicaciones que los sectores progresistas habían impulsado desde tiempo atrás.

En primer lugar, las nacionalizaciones se convirtieron en una política buscada de manera más activa por el Ejecutivo. Dos resultaron particularmente emblemáticas. Por un lado, en 2008 se reestatizó el sistema de jubilaciones y pensiones que, como ya se mencionó anteriormente, se había privatizado durante la presidencia de Menem. Con esta medida, aprobada por el Congreso, el gobierno no solo ganó potestad sobre una masa importante de recursos provenientes de los ahorros de los trabajadores sino que pasó a controlar acciones de diversas empresas que los fondos privados de pensión habían adquirido con dicho dinero y avanzó en ocupar los puestos en los directorios de dichas firmas a los que tenía derecho como accionista.¹⁰ En segundo lugar, en 2008 se renacionalizó

¹⁰ La medida se materializó en noviembre de 2008, a partir de la aprobación por parte de ambas cámaras del Congreso del proyecto enviado por el Ejecutivo. En la votación, al bloque oficialista se sumaron legisladores de otros partidos.

la emblemática empresa de aviación Aerolíneas Argentinas, también privatizada durante el menemismo y que se encontraba en una situación de virtual quiebra.¹¹

En segundo lugar, el oficialismo promovió y logró aprobar (pocos días antes de que cambiara la composición de la Cámara de Diputados en diciembre de 2009) la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (popularmente conocida como “Ley de Medios”), que buscaba democratizar el control de los medios de comunicación, atacar a los monopolios en dicho ámbito y promover el desarrollo de medios alternativos y comunitarios controlados por instituciones y organizaciones de la sociedad civil. Esta iniciativa desató una reacción de los medios tradicionales (que habían pasado a ser corporaciones multimedios desde los años noventa y en algunos casos habían sido aliados de Kirchner durante su administración) que hasta finales del segundo mandato de Cristina Fernández en 2015 se tradujo en un conflicto abierto entre los mismos y el gobierno (Kitzberger, 2011). En su batalla contra el principal grupo mediático (el Grupo Clarín) la presidenta avanzó incluso contra uno de sus principales negocios, la transmisión del fútbol, que también pasó a ser administrada directamente por el Estado nacional. En este plano, el gobierno de Cristina se comportó de manera similar a los de presidentes como Correa en Ecuador o Chávez y Maduro en Venezuela, que también hicieron de la pelea con las corporaciones mediáticas una de las banderas centrales de sus gobiernos.

Un avance significativo también se logró en el plano de los derechos civiles con la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario en mayo de 2010, que consagró el reconocimiento a los matrimonios de personas del mismo sexo. Esta medida de alcance nacional no solo resultó de vanguardia en América Latina sino que mostró una distancia significativa con otras izquierdas de la región, mucho más conservadoras en términos de valores.

En el ámbito de la política social, la recuperación del control de la agenda política por parte del gobierno se tradujo en la implementación de

¹¹ La medida se anunció en julio de 2008 y fue el resultado de un acuerdo entre el gobierno y los entonces propietarios de la aerolínea para que el Estado se hiciera cargo de la empresa. El rescate definitivo fue aprobado por el Congreso en septiembre de dicho año. El proyecto final modificó la propuesta original, lo que posibilitó que varios legisladores de la oposición se unieran en el voto afirmativo a los bloques oficialistas.

una nueva iniciativa que se convirtió en pilar de las acciones de gobierno: la Asignación Universal por Hijo (AUH). Se trató de un amplio programa basado en el otorgamiento de un subsidio monetario a todas aquellas familias que no estuvieran en el mercado formal de trabajo. Si bien este esquema reproducía en términos generales el modelo de los programas de transferencia condicionada que se habían convertido en eje de la política social de otros gobiernos de izquierda (Pribble, 2013), en Argentina se planteó sin embargo como más ambicioso, ya que partió de la consigna de que se trataba de la concreción del derecho de todo ciudadano a contar con el apoyo en la crianza y cuidado de los hijos por parte del Estado, antes que como un paliativo para combatir la pobreza (Repetto, 2011).

En el plano internacional, el país también profundizó su rol en el ámbito regional, convirtiéndose en activo protagonista tanto en el Mercosur como en la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). El expresidente Kirchner asumió un rol significativo como líder sudamericano, participando como mediador en la liberación de rehenes en manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en ese país y convirtiéndose en el primer secretario general de la Unasur en mayo de 2010. Desde dicha posición se transformó en pieza clave para la resolución de conflictos intra e inter estatales en diversos países de la región.

Finalmente, la organización de los festejos del bicentenario en mayo de 2010, con diferentes espectáculos públicos que atrajeron a una multitudinaria concurrencia, marcó un punto de inflexión en cuanto al fortalecimiento de la política comunicacional del gobierno (con la cultura como uno de sus pilares) y la centralidad que aún más que antes ganó la faceta discursiva.

Sin embargo, el fortalecimiento del liderazgo de Cristina que se potenció con estas iniciativas políticas no logró su punto máximo en esta etapa sino hasta la muerte de Néstor Kirchner en octubre de 2010. Esto por dos motivos: por un lado, porque el suceso derivó en una inesperada muestra de apoyo popular a la presidenta, que se tradujo, por ejemplo, en la asistencia de miles de personas al velatorio del expresidente en la Casa de Gobierno, Y por el otro, porque ante la desaparición de quien cargaba hasta entonces con una porción importante del trabajo político y la vinculación informal del gobierno con diferentes actores políticos y sociales el poder se concentró exclusivamente, para bien o para mal, en la figura de Cristina.

El ocaso (2011-2015): gobernar con unos pocos

Esta última etapa tuvo su punto de inicio en las elecciones presidenciales de octubre de 2011, ganadas en primera vuelta por Cristina Fernández de Kirchner con 54% de los votos. Este resultado no solo permitió a la presidenta obtener su reelección, sino que la convirtió en la candidata que obtuvo mayor apoyo electoral desde el retorno a la democracia en 1983. Asimismo, dejó en evidencia la debilidad de la oposición: quien resultó segundo en cantidad de votos, Hermes Binner, candidato del Frente Amplio Progresista, solo alcanzó 16.81% del total (casi 40% puntos menos que la presidenta reelecta).

La contundencia del triunfo mostró que el poder en el sistema de partidos argentino estaba concentrado fundamentalmente en una fuerza, y muchos dentro de la misma interpretaron que la única que podía atribuirse el mérito de la victoria era Cristina.

Ante este panorama parecería difícil argumentar que fue este momento el que marcó el inicio de la caída del kirchnerismo. ¿Cómo es posible pensar que la mayor victoria electoral de la fuerza contuviera las semillas de su decadencia? En gran medida la respuesta tiene que ver con el tipo de dinámicas políticas que se derivaron del resultado electoral: el poder se concentró en torno de la figura de la presidenta, quien además decidió que en esta nueva etapa solo delegaría autoridad en un núcleo cercano de funcionarios leales. Por otro lado, a pesar de la distancia hasta la siguiente elección presidencial, ante el hecho de que (de no medir una reforma constitucional) esta fuese la última oportunidad para Cristina de reelegirse y la ausencia física de Néstor (a quienes muchos habían considerado potencial candidato nuevamente en 2015), se abrió un gran interrogante acerca de quién podría convertirse en el sucesor o sucesora.

Además, la falta de una oposición fuerte generó una situación en la cual los diferentes sectores internos del oficialismo carecían de incentivos para abroquelarse ante una amenaza externa y sacó a la luz diferencias y peleas que hasta el momento se habían mantenido dormidas.

Lo anterior derivó en dos grandes rupturas que marcarían el camino que transitaría el kirchnerismo durante esta última etapa. Ambas estuvieron explicadas en su momento por la incapacidad de la presidenta y su grupo más cercano de gestionar la coalición de gobierno, por la monopolización de la toma de decisiones por un grupo reducido de funcionarios

y por la negativa a otorgar espacios a quienes no formaran parte de este conjunto limitado de personas. Esta concentración del poder no solo tuvo efectos negativos en términos de la relación del gobierno con otros actores políticos y sociales, sino que comenzó poco a poco a ser percibida por crecientes sectores de la población, en gran medida como resultado de la insistencia de los medios de comunicación en el punto, como expresión de un “estilo populista” de ejercer el poder que podría poner en cuestión la viabilidad de las instituciones democráticas. Este talante decisionista emparentó al caso argentino con otros de la izquierda gobernante en América Latina, en particular los de corte más radical, como los de Chávez, Morales o Correa. Sin embargo, como ya se mencionó, en Argentina nunca se tradujo en cambios constitucionales orientados a reforzar esta dinámica.

Una primera gran disputa enfrentó a la presidenta con los sindicatos encuadrados en la Confederación General del Trabajo (CGT) y en particular con el secretario general de la organización y líder del gremio de los camioneros, Hugo Moyano. La CGT constituyó históricamente una de las patas del peronismo y Moyano se había convertido desde la presidencia de Néstor Kirchner en uno de los apoyos centrales del gobierno. El rompimiento tuvo que ver con reclamos por parte del sindicalismo acerca del poco lugar que se les había otorgado a sus representantes en las listas legislativas en las elecciones concurrentes con las presidenciales, listas que habían estado pobladas de candidatos del núcleo cercano a la presidenta. Cristina, por su lado, desconfiaba de las ambiciones políticas del líder sindical.

La segunda división aconteció al aproximarse las elecciones legislativas intermedias de 2013. En ese contexto Sergio Massa, uno de los dirigentes centrales del peronismo de la provincia de Buenos Aires y quien además había cumplido funciones como jefe de Gabinete durante el primer mandato de Cristina, decidió separarse del oficialista Frente para la Victoria y formar una nueva fuerza, el Frente Renovador, para competir con una lista propia que lo llevaría como primer candidato a diputado. Esta decisión, que se convirtió en una reedición de anteriores quiebres del peronismo desde el regreso a la democracia, se tradujo en una sangría de importantes dirigentes del oficialismo que siguieron a Massa, quien además durante la campaña reiteradamente planteó que una derrota del gobierno era la única manera de impedir un supuesto intento de la presi-

denta de reformar la constitución con el objetivo de habilitar nuevamente su reelección. Desde diferentes sectores se interpretó la movida como el primer paso de la construcción de la candidatura presidencial de Massa para 2015, lectura que se fortaleció cuando la lista del Frente Renovador resultó la más votada en los comicios en el distrito y relegó al Frente para la Victoria a un segundo lugar. Si bien el resultado se tradujo en un modesto número de diputados de la nueva fuerza en el Congreso, perder en la provincia más poblada del país y bastión histórico del peronismo significó un importante golpe de efecto para la presidenta y reveló su debilidad a tan solo dos años de lograr una votación histórica.¹²

Al interior del gobierno, la concentración de poder se tradujo en una creciente influencia de un grupo de dirigentes cercanos al hijo de la presidenta reunidos en la agrupación La Cámpora, que fueron ganando posiciones tanto dentro de la estructura de la administración central como en el Congreso. El ascenso de este sector tuvo como uno de sus puntos culminantes el nombramiento de Axel Kicillof al frente del estratégico Ministerio de Economía en noviembre de 2013. Si bien el flamante ministro ya era un funcionario clave de dicha dependencia, a partir de entonces su poder se consolidó y se convirtió en la segunda figura en importancia dentro del gobierno luego de la presidenta. Otros dirigentes de la agrupación pasaron a ocupar cargos relevantes como segundas líneas del Ministerio de Justicia, la Cancillería, el Ministerio del Interior, la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Desarrollo Social y a controlar la dirección de Aerolíneas Argentinas, la estratégica embajada en los Estados Unidos y, a partir de febrero de 2015, la Secretaría General de la Presidencia.

En paralelo a estas redefiniciones en el balance de poder y a la emergencia de conflictos en el oficialismo el gobierno comenzó a experimentar sustantivos problemas para controlar algunas variables centrales de la macroeconomía.

Esto fue resultado de la combinación de un panorama externo más complicado para Argentina con la decisión del gobierno de evitar promover cambios radicales tanto en la política monetaria como en la cambiaria. En cuanto a lo primero, la caída en los precios de los *commodities* hizo

¹² En la provincia de Buenos Aires el Frente Renovador obtuvo 43.92% de los votos, contra 32.18% del Frente para la Victoria. El partido de la presidenta también sufrió derrotas en provincias como Santa Fe, Córdoba, Mendoza y en la ciudad de Buenos Aires.

evidente la dependencia de la economía argentina respecto de la exportación de materias primas y la restricción externa que seguía pesando sobre la misma. Esto, conjugado con un tipo de cambio asentado en la sobrevaluación del peso argentino, generó una creciente presión por las divisas necesarias para financiar la compra de bienes e insumos importados. En este contexto, para evitar una devaluación que pudiese traducirse en mayor inflación, el gobierno optó por una salida opuesta a la ortodoxia basada en dos elementos: el establecimiento de un esquema de control de cambios (conocido popularmente en Argentina como “el cepo”) junto con la profundización de la restricción en las importaciones. Uno de los resultados de esta dinámica fue el surgimiento de un mercado de cambios paralelo que dio pie a que desde la oposición y los medios de comunicación se comenzaran a trazar paralelismos con la situación venezolana.

En relación con el segundo punto, y en línea con la visión prokeynesiana que Kicillof venía pregonando inclusive desde antes de llegar a ser ministro, el gobierno evitó por todos los medios recurrir a un recorte del gasto público al tiempo que comenzó a utilizar la emisión monetaria como mecanismo de financiamiento. Como resultado, la inflación se estacionó en niveles elevados al tiempo que se incrementó el déficit fiscal. En este marco, el rol del Estado en la economía se acrecentó a partir de la profundización de la política de nacionalizaciones y el intento por regular de manera más activa el comercio a partir del control de precios. Uno de los hitos centrales de esta etapa fue la estatización de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en 2012, privatizada durante la década de los noventa por el gobierno de Menem.¹³ En términos discursivos, esta decisión se presentó como una acción orientada a recuperar la soberanía energética del país y recomponer la inversión en la explotación y producción de petróleo, que, se alegó, había sido dejada de lado por la empresa española Repsol y se había traducido en un descenso de los barriles diarios producidos por YPF. Por otro lado, el esquema de control de precios supuso apostar a un modelo de concertación con las empresas productoras y comercializadoras con el objetivo de mantener estables los valores de una canasta básica de productos y limitar de esta manera

¹³ En concreto, se trató de la expropiación de 51% del capital accionario de la empresa, hasta entonces en manos de la española Repsol. El proyecto impulsado por la presidenta fue aprobado por el Congreso en junio de 2012.

la profundización de las tendencias inflacionarias. El éxito de este tipo de medidas fue relativo y, junto con el control a las importaciones y las restricciones cambiarias, llevó a tensar aún más las relaciones conflictivas con el empresariado.

Finalmente, otra de las coyunturas críticas de esos años fue el conflicto desatado a partir de 2012 por la decisión de un juez de distrito de Estados Unidos de hacer lugar al reclamo de un conjunto de fondos de inversión de alto riesgo que exigían el pago completo de bonos que el Estado argentino había *defaulteado* en 2001 y que no habían entrado en los canjes de 2005 y 2010. A pesar del intento del gobierno argentino de llevar el caso ante la Corte Suprema estadounidense para lograr un fallo favorable, la sentencia se mantuvo firme y fue confirmada incluso por otras instancias judiciales. Esta situación puso al gobierno y a la presidenta Fernández de Kirchner en una encrucijada. Por un lado, la decisión del juez estableció que se deberían congelar los pagos a otros acreedores del país hasta que se saldara la deuda con los demandantes; el magistrado incluso prohibió a los bancos a través de los que se canalizaban estas operaciones de pago que realizaran las mismas. En segundo lugar, el gobierno argentino se enfrentaba a la posibilidad, si es que cumplía con lo establecido por el juez, de ser demandado por los bonistas que había ingresado al canje, ya que una de las cláusulas del mismo había establecido que el gobierno argentino no podría ofrecer un mejor trato a quienes se habían negado a hacerlo. Por último, la decisión afectó las negociaciones que Argentina estaba llevando a cabo para recomponer su relación con otros acreedores, como los bancos nucleados en el Club de París. Los efectos negativos de la situación se hacían sentir aún más dado que el país se encontraba en un contexto en el que más que nunca necesitaba divisas y le resultaba cada vez más caro acceder a crédito externo. Al igual que en otros ámbitos, la decisión de cómo encarar el tema obedeció fundamentalmente a consideraciones políticas antes que económicas. En las negociaciones con los fondos de inversión el gobierno argentino se opuso a cumplir tanto lo dictado por el juez como a hacerles a los demandantes una oferta distinta a aquellas que habían aceptado los bonistas que habían entrado previamente en el canje. Ante el congelamiento del pago a los otros acreedores (que implicó entrar en un default técnico), el Ejecutivo argentino impulsó un proyecto para canjear dichos bonos por otros emitidos bajo jurisdicción nacional. La discusión se enmarcó en torno a

un discurso que proclamaba la medida como el único camino para proteger la soberanía nacional y adquirió el tono de una gesta patriótica contra los denominados “fondos buitres”.¹⁴

En este contexto, y tal como puede verse en detalle en la siguiente sección, la evolución de las principales variables de la economía mostró una dinámica negativa: el crecimiento prácticamente se detuvo desde 2014 al tiempo que la inflación continuó en niveles altos.

En paralelo, comenzaron a ganar cada vez más relevancia las denuncias sobre casos de corrupción que involucraban a altos funcionarios del gobierno, llegando a incluir tanto a la presidenta como al vicepresidente. Diversas investigaciones, judiciales y periodísticas, comenzaron a develar la existencia de un esquema que involucraba el otorgamiento de obras públicas a firmas manejadas por empresarios cercanos al gobierno y cuyas fortunas habían crecido de manera inexplicable desde la llegada de Néstor Kirchner al poder. La actuación de algunos jueces comenzó a dejar en evidencia que incluso existían vínculos comerciales entre los primeros y el expresidente y la presidenta, quienes se sospechaba que podían ser los beneficiarios finales de dichas maniobras. Si bien la corrupción ya había sido un tema denunciado por varios referentes opositores, en un contexto de estancamiento económico su efecto pareció ganar relevancia.

Como reacción frente a los puntos señalados anteriormente, comenzó a crecer principalmente en las clases medias urbanas el malestar frente al gobierno. Estos sectores ya habían mostrado su oposición al kirchnerismo durante el conflicto con los productores agropecuarios, pero en algunos casos habían vuelto a apoyar a Cristina en las elecciones de 2011. El descontento se tradujo en una serie de manifestaciones de protesta ocurridas a partir de 2013, convocadas en muchos casos desde las redes sociales y sin referentes políticos claros. En otras palabras, el creciente distanciamiento entre estos sectores y la presidenta no se derivó inmediatamente en un fortalecimiento de la oposición política, que aún se encontraba disgregada en varios grupos.

Esta situación profundizó un clima de polarización política que dividió cada vez más a la sociedad entre los opositores y los leales al gobier-

¹⁴ Valga aclarar que la posición de Argentina fue apoyada por diferentes mandatarios y economistas alrededor del mundo, e inclusive contó con el respaldo del gobierno de Estados Unidos.

no, una grieta que sin embargo no implicaba, como podría pensarse, un movimiento de la población hacia extremos ideológicos.

En este marco comenzó a perfilarse la elección presidencial de 2015, que puso en evidencia una debilidad sustantiva del oficialismo: la ausencia de un sucesor con peso electoral propio y cercano a la presidenta.

Antes de abordar este punto, sin embargo, conviene dedicar la siguiente sección a revisar algunos datos que permitan hacer un balance sobre los resultados de las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner y ver cómo se corresponden con cada una de las etapas abordadas hasta aquí.

El kirchnerismo en el poder: balance de sus resultados

Cualquier análisis de los resultados de los 12 años kirchneristas debe comenzar considerando la evolución de las principales variables macroeconómicas. La gráfica 1 muestra que la primera etapa (2003-2007) coincidió con un proceso de crecimiento continuado en la economía, algo que no había tenido lugar en la década de los noventa pese a las reformas llevadas adelante durante esos años. Luego de los efectos funestos que tuvo para la economía argentina la recesión iniciada en 1999 y el posterior estallido hacia finales de 2001 (que derivó en que durante 2002 el PIB se redujera en casi 10%), el periodo 2003-2007 se caracterizó por un crecimiento interanual cercano en promedio a 10%. Como ya se explicó, este fue uno de los pilares que posibilitaron la consolidación del poder de Néstor Kirchner.

Sin embargo, el crecimiento se desaceleró en 2008 y la economía argentina se estancó definitivamente en 2009. Dichos años coincidieron con la gran crisis financiera internacional (al exterior) y, como ya se analizó, con la primera etapa del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Si bien la derrota electoral de 2009 fue el resultado de una combinación de factores, el nulo crecimiento de la economía seguramente explica parte de ese desenlace.

Del mismo modo, si bien la contundente victoria en 2011 obedeció a diversas causas, el hecho de que la economía mostrara una rápida recuperación desde 2010 permitió que el gobierno retomara la iniciativa política sin tener que dedicar mucha energía a lidiar con una crisis.

Finalmente, la etapa que ha sido definida como la de “la caída” coincidió con un nuevo estancamiento que no pudo ser revertido antes de que Cristina culminara su segundo mandato.

Gráfica 1. Argentina: variación del PIB (1990-2016)



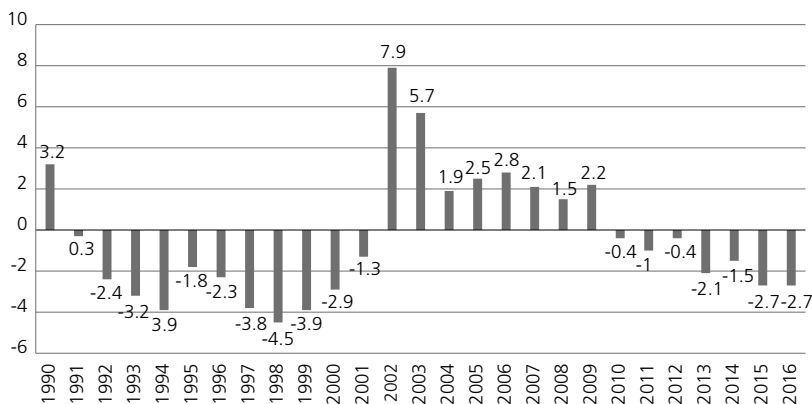
Fuente: CEPAL.

Estas dinámicas de la economía argentina durante el periodo no solo muestran similitudes con lo acontecido en otros países de la región, sino que comparten una misma causa: el incremento del precio y la demanda de materias primas acontecido durante dichos años, que posibilitó un aumento significativo de las exportaciones. En el caso argentino, el crecimiento tuvo su motor en los productos agropecuarios (en particular, la soya) y en el ascenso de China como quien los demandaba.

Esto explica que durante el periodo 2002-2009 el país registró un constante superávit en la balanza comercial (uno de los pilares de los “superávits gemelos” mencionados en una sección anterior) que se contrapuso de manera categórica a la situación observada durante los noventa. Esta tendencia llegó sin embargo a su término hacia finales de la primera década de los 2000, lo cual coincidió con la desaceleración china y generó una presión importante sobre el tipo de cambio. Como ya se mencionó, la falta de divisas se convirtió en uno de los principales problemas que afectó a la economía argentina en los últimos años del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, dada la dificultad

de compensar la creciente reducción con financiamiento en el mercado financiero internacional.

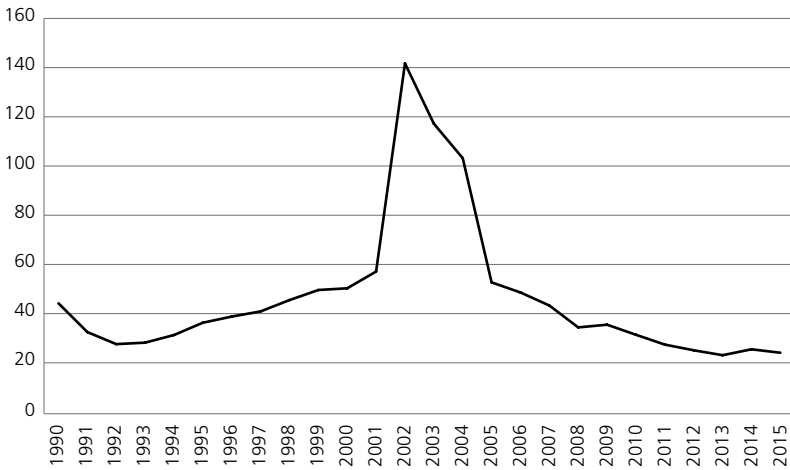
Gráfica 2. Argentina: saldo de la balanza comercial como porcentaje del PIB



Fuente: CEPAL.

Otro elemento a considerar es el referido al tamaño de la deuda externa. Como ya se mencionó, una de las consecuencias del estallido de la crisis económica hacia finales de 2001 fue la decisión del breve gobierno de Adolfo Rodríguez Saá de declarar la moratoria de pagos. Si esta medida buscó generar un efecto simbólico, también obedeció a la imposibilidad del país de hacer frente a los vencimientos (una situación que se había tornado particularmente agobiante durante todo 2001). Por otra parte, la devaluación que siguió a la salida del régimen de convertibilidad disparó el tamaño de la deuda medida en términos de la moneda local. Para 2002 dicha deuda representaba cerca de 130% del PIB argentino (véase la gráfica 3). El cambio más sustantivo observado a partir de mediados de los 2000 fue resultado de la renegociación con los acreedores que derivó en una quita sustancial. Lo anterior, conjugado con la decisión del país de limitar su participación en los mercados financieros internacionales como tomador de deuda y con un flujo de divisas creciente generado por el superávit comercial, posibilitó que la deuda como porcentaje del PIB se redujera de manera sostenida hasta llegar a representar poco más de 25% en la última etapa del periodo kirchnerista.

Gráfica 3. Argentina: Deuda externa como porcentaje del PIB



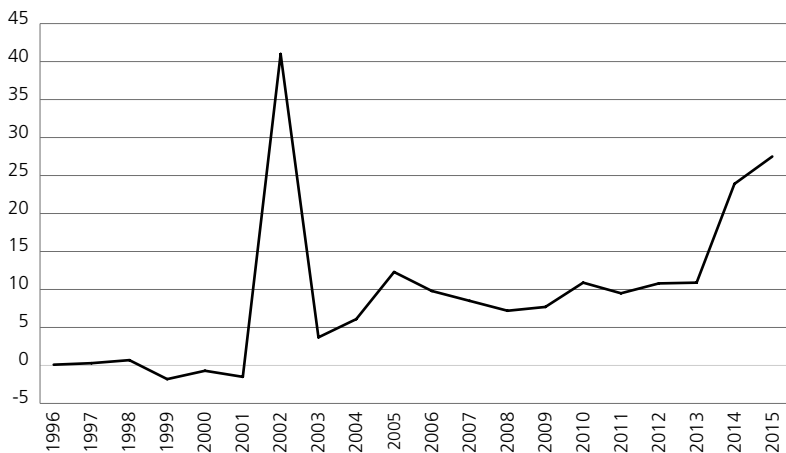
Fuente: CEPAL.

Siguiendo con las variables macroeconómicas, un problema que se hizo recurrente ya desde 2005 fue la creciente inflación. La relevancia del asunto está dada por dos elementos. Primero, porque se convirtió en una característica crónica de la economía que desde el primer mandato de Néstor Kirchner el gobierno prefirió asumir como consecuencia inevitable del crecimiento económico, y que por lo tanto debía tolerarse. De hecho, tanto el entonces presidente como luego su esposa se opusieron a diferentes propuestas orientadas a detener la subida de precios a costa de “enfriar” la economía y prefirieron compensarla pugnando por aumentos de salarios equivalentes. Esta dinámica derivó en incrementos crecientes del índice que hicieron que para 2014-2015 llegara a niveles cercanos a 40% y pusieran a Argentina como el segundo país con la inflación más alta del mundo, solo por detrás de Venezuela. En un contexto en el que además se intentó evitar una devaluación del tipo de cambio, la combinación llevó a un aumento de los precios relativos de las exportaciones del país y su consiguiente pérdida de competitividad. En la etapa correspondiente al segundo mandato de Cristina, la inflación se convirtió en uno de los temas de mayor preocupación

para la ciudadanía, de acuerdo con diversos estudios de opinión, y en eje de las críticas de la oposición.

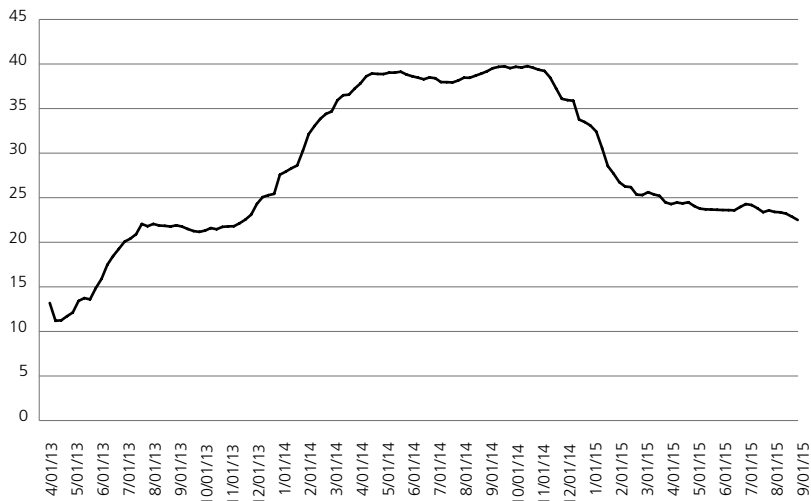
La segunda cuestión refiere al hecho de que desde el mandato de Néstor Kirchner el gobierno intentó ocultar el problema interviniendo el organismo encargado de producir las estadísticas oficiales (el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC) y manipulando los datos para mostrar valores por debajo de los reales. Es por eso que debemos asumir que inclusive los datos procesados por organismos internacionales (como los reflejados en la gráfica 4, obtenidos de la CEPAL) basados en las estadísticas producidas por el Estado argentino pueden estar subestimando los valores concretos. Esto queda claro si se considera que las mediciones realizadas por consultoras privadas mostraban niveles de aumento de precios muy por encima de lo reportado en los datos gubernamentales (véase la gráfica 5). Más allá de las distorsiones generadas por esta práctica en términos del funcionamiento de la economía, la situación derivó en constantes recriminaciones de la oposición, que terminó convirtiendo la normalización del INDEC en uno de sus ejes de campaña y en una muestra del empecinamiento del gobierno por intentar negar la realidad.

Gráfica 4. Argentina. Tasa de inflación



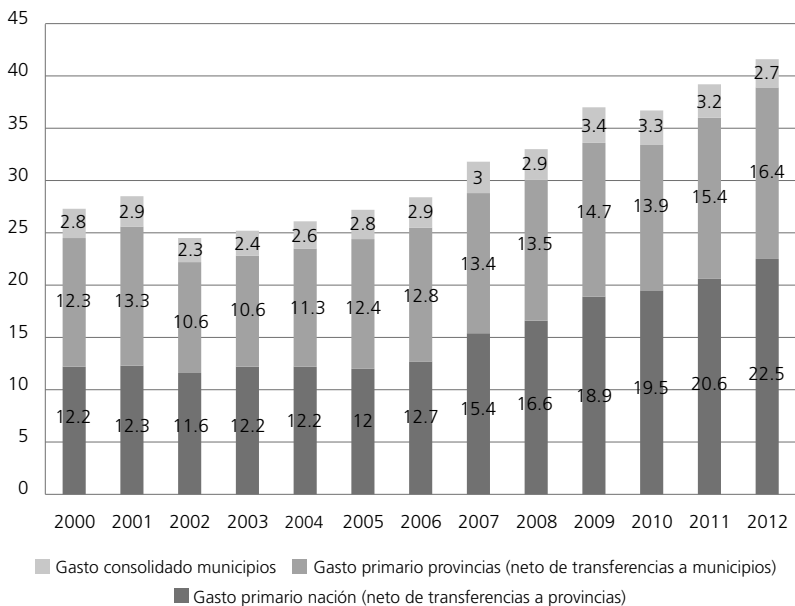
Fuente: CEPAL.

Gráfica 5. Argentina. Inflación (2013-2015)



Fuente: Consultora Elysis.

Gráfica 6. Argentina. Gasto público como porcentaje del PIB



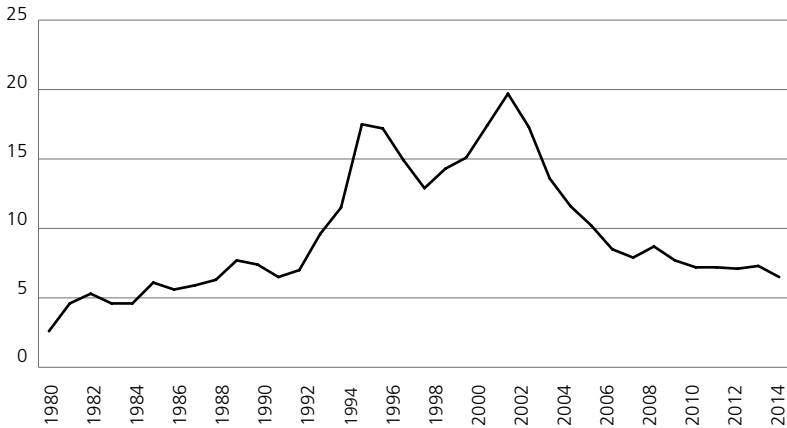
Fuente: IARAF con base en MECON, DNEC y estimaciones propias.

Otra de las tendencias observadas durante todo el periodo kirchnerista fue el crecimiento sostenido del gasto público. Como ya se mencionó, tanto la extensión de las políticas sociales como el rol más activo asumido por el Estado en diferentes sectores de la economía llevaron a que entre 2003 y 2012 el gasto pasara de representar alrededor de la cuarta parte del PIB a ubicarse por encima de 40%. Tal como puede observarse en la gráfica 6, el incremento se explicó en gran medida por el aumento del gasto ejercido por el gobierno nacional, pero también por un crecimiento sostenido del gasto de las provincias. Una de las fuentes más importantes de este incremento tuvo que ver con la ampliación de los subsidios gubernamentales a empresas privadas prestadoras de servicios públicos con el objetivo de mantener las tarifas prácticamente congeladas.

En cualquier caso, una de las prioridades tanto durante la presidencia de Néstor Kirchner como en los dos mandatos de Cristina fue intentar, por un lado, transferir los beneficios del crecimiento a la mejora de ciertas variables sociales y, por el otro, proteger estos logros durante los momentos de desaceleración económica. Los efectos positivos observados en la mayoría de estos indicadores dejaron en evidencia un claro contraste con la situación precedente a la llegada de Kirchner al poder. Así, por ejemplo, la caída de la economía resultado de la crisis de 2001 llevó a que el desempleo se ubicara en una cifra récord por encima de 20%. La recuperación económica que la sucedió se tradujo, sin embargo, en una caída constante de dichos valores hasta su estabilización alrededor de 8%. Un dato a resaltar es que el desempleo no aumentó desde entonces a pesar de la desaceleración y estancamiento de la economía del periodo 2008-2009 y a partir de 2012 (véase la gráfica 7).

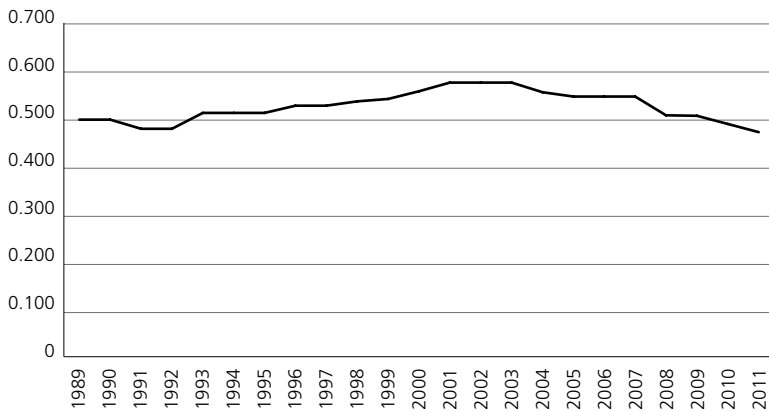
Esta dinamización del empleo puede servir para explicar la caída en los niveles de desigualdad observada desde 2003. Como muestra la gráfica 8, también en este caso la tendencia general a partir de entonces contrastó con la dinámica observada durante los años noventa, cuando la desigualdad de ingresos había crecido de manera sustantiva hasta alcanzar su pico hacia principios de los 2000 en el marco de la crisis económica. Los años kirchneristas implicaron, por el contrario, una reducción significativa de estos niveles, que llegaron en 2011 a situarse por debajo de los existentes a finales de los años ochenta.

Gráfica 7. Argentina. Evolución de la tasa de desempleo



Fuente: CEPAL.

Gráfica 8. Argentina. Evolución del índice de GINI



Fuente: CEPAL.

¿El fin? Las elecciones presidenciales de 2015

Si bien el resultado de las elecciones de 2015 no se explica por un único factor, es posible argumentar que varias de las cuestiones señaladas en secciones anteriores tuvieron peso para explicar la victoria del frente

opositor Cambiemos y su candidato Mauricio Macri, con una visión ideológica en muchos aspectos totalmente opuesta a la enarbolada por el kirchnerismo (particularmente en lo que refiere a sus últimos años en el poder).

Un aspecto a destacar es que si bien la aprobación de la presidenta cayó de manera sustantiva a inicios de 2015 como resultado de la misteriosa muerte del fiscal Nisman, para mediados de año se había estabilizado y mostraba una percepción positiva de más de la mitad de la población. Asimismo, otros estudios ponían en evidencia que una parte importante de la ciudadanía valoraba positivamente varias de las políticas llevadas adelante por el gobierno, por ejemplo que ciertas empresas de servicios estuvieran en manos del Estado o programas como el de la Asignación Universal por Hijo. Esto no solo entre quienes se identificaban como oficialistas sino también incluso entre potenciales votantes de la oposición.

En este marco, las dinámicas que signaron tanto la definición del candidato del oficialismo (y sus efectos derivados) como la construcción de un polo opositor unificado se convirtieron en relevantes.

Tal como se comentó anteriormente, una de las debilidades del modelo kirchnerista, que comenzó a ganar relevancia al acercarse las elecciones, fue la dificultad para nombrar como candidato a un sucesor leal. Esta cualidad muestra una similitud compartida con las otras experiencias latinoamericanas de gobiernos de izquierda centrados en la figura y carisma de un líder. Ante este escenario, la presidenta tomó una decisión pragmática: apoyar al entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, pero forzarlo a que fuese acompañado por uno de sus asesores más cercanos, Carlos Zanini. Si bien Scioli había formado parte del proceso kirchnerista desde sus inicios (de hecho había ocupado la vicepresidencia durante el mandato de Néstor Kirchner), era resistido por los más cercanos a la presidenta por su postura moderada en términos económicos y su pasado menemista. Paradójicamente, era ese carácter moderado el que lo hacía popular en sectores de clase media. Su nominación generó una tensión constante con los sectores kirchneristas más radicales, que nunca terminaron de convencerse de su candidatura. Esto se vio potenciado por la decisión de la presidenta de no hacer campaña junto él, lo que llevó a una extraña situación en la que el candidato oficialista no solo careció del apoyo explícito de muchas figuras relevantes

del gobierno, sino que incluso era criticado públicamente por otros candidatos del Frente para la Victoria. Al mismo tiempo, Scioli nunca pudo resolver la tensión entre tener que sobreactuar su lealtad a la presidenta para no perder el voto duro y diferenciarse para intentar ganar la simpatía de los votantes más moderados.

Por el lado de la oposición, y a diferencia de lo acontecido en 2011, cuando el voto contrario al gobierno resultó fragmentado entre una multiplicidad de candidatos, en el proceso hacia 2015 diferentes fuerzas trabajaron fuertemente para generar un frente común. Esto derivó en la formación de una coalición electoral que llevó la denominación “Cambemos” y que incluyó al PRO, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica. Dicha conjunción tuvo la virtud de combinar las fortalezas de cada una de las partes y contrarrestar sus limitaciones: mientras que el PRO contaba con un candidato popular, pero carecía de una estructura territorial expandida nacionalmente, la UCR se asentaba en un aparato partidario con presencia a lo largo de todo el país, aunque no había podido consolidar una candidatura competitiva. Por otra parte, la Coalición Cívica había construido en la figura de su líder Elisa Carrió un referente del combate a la corrupción.

La dinámica de la campaña llevó a que las elecciones terminaran convirtiéndose en una suerte de plebiscito acerca de los gobiernos kirchneristas y la decisión entre dos modelos de país: uno que seguiría estando construido en los pilares plantados durante los 12 años anteriores y otro que proponía una revisión profunda de la mayoría de ellos. Pese a que el candidato oficialista salió victorioso en la primera vuelta, Macri se impuso en la segunda con 51.34% de los votos (frente a 48.66% de Scioli). Los resultados finales mostraron que una proporción significativa de la población (poco menos de la mitad) prefería seguir por la senda de la continuidad y valoraba positivamente los resultados del modelo kirchnerista.

Conclusiones

A lo largo del presente capítulo he realizado un recorrido por la evolución del modelo kirchnerista durante los 12 años que controló el poder. Tal como planteé desde un inicio, si bien puede observarse una inclinación hacia una postura ideológica de izquierda desde sus inicios, du-

rante los primeros años primó el pragmatismo. Solo en la última etapa las políticas económicas adquirieron un carácter abiertamente estatista. Más allá de los planteamientos discursivos, la pretendida redefinición del sistema político no se tradujo en el caso del kirchnerismo en transformaciones profundas en términos institucionales como las acontecidas en otros países gobernados por la izquierda en América Latina. Ni siquiera está claro si el proclamado deseo de reformar la Constitución a mediados del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner para permitir su segunda reelección fue realmente una opción planteada en el seno del oficialismo o se limitó más bien a una mera estratagema electoral utilizada por la oposición. La concentración del poder en manos de un grupo reducido durante los últimos años del proceso no impidió que la oposición pudiera organizarse y propinarle las derrotas al partido gobernante, que fueron reconocidas como tales y su resultado acatado. Tampoco la renovación de ámbitos como la Corte Suprema de Justicia dio lugar a que esta se convirtiera en un apéndice del gobierno como en otros casos latinoamericanos. En definitiva, la “radicalidad” del kirchnerismo parece haber estado más en las formas que en el contenido de las políticas y por lo tanto la comparación con casos como el de Venezuela resulta exagerada o malintencionada.

La llegada de Macri al poder supuso un giro sustantivo en la mayoría de las políticas desarrolladas por los gobiernos kirchneristas en casi todos los ámbitos. En el plano económico, dos de las acciones fundamentales llevadas adelante por la nueva administración en los primeros meses de gobierno fueron la eliminación de las restricciones cambiarias (lo cual se tradujo en una devaluación del tipo de cambio oficial de casi 50%) y un acuerdo con los “fondos buitres” que fue presentado como el requisito necesario para que Argentina pudiera volver a los mercados internacionales. Por otra parte, se anunció una reducción significativa de los impuestos al comercio exterior (las famosas retenciones) al tiempo que se apuntó a una reducción del gasto público disminuyendo de manera significativa los subsidios (lo que se tradujo en un aumento sustantivo de tarifas). Al mismo tiempo, se llevaron adelante políticas de racionalización del aparato del Estado que derivaron en la reducción del personal y la finalización de algunos programas de las administraciones anteriores.

El cambio también fue notorio en el plano de las relaciones con el resto del mundo. Desde el inicio de su mandato el presidente Macri buscó

alejarse de Venezuela e incluso propuso adoptar una política activa de denuncia de la situación de la democracia en dicho país. Esto contrastó con el acercamiento a las potencias tradicionales y al mundo financiero internacional. Por primera vez en casi una década y media el presidente argentino concurrió a la cumbre de Davos al tiempo que se buscó estrechar la relación con Estados Unidos. Esto último se tradujo en la visita de Barack Obama a Argentina en marzo de 2016, más de diez años después de la última vez que un mandatario estadounidense pisó suelo argentino.

En términos políticos, si bien Cristina Fernández de Kirchner dejó su cargo con relativamente altos niveles de valoración, la salida del poder junto con su decisión de permanecer al margen de la discusión política debilitaron tanto su liderazgo como el peso relativo del kirchnerismo dentro del peronismo. Esto se potenció por la derrota sufrida por candidatos cercanos a su figura en contiendas clave como la de la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Dicha debilidad fue además aprovechada por el gobierno y coincidió con la activación de un conjunto de causas judiciales por corrupción que la involucran y que ya llevaron a la cárcel a exfuncionarios y empresarios centrales desde que se iniciara al ciclo kirchnerista.

A pesar de lo anterior, la decisión de la expresidenta de competir en las elecciones intermedias de 2017 por una banca en el Senado representando a la provincia de Buenos Aires la pondrá nuevamente en el centro del escenario político durante los próximos años.

Referencias

- Castañeda, Jorge (2006). "Latin America's Left Turn", *Foreign Affairs*, vol. 85, núm. 3, pp. 28-43.
- Cleary, Matthew (2006). "Explaining the Left's Resurgence", *Journal of Democracy*, vol. 17, núm. 4, pp. 35-49.
- Etchemendy, Sebastián (2011). "El sindicalismo argentino en la era pos-liberal (2003-2011)", en Andrés Malamud y Miguel De Luca (coords.), *La política en tiempos de los Kirchner*, Buenos Aires, Eudeba.
- Kitzberger, Philip (2011). "La madre de todas las batallas: el kirchnerismo y los medios de comunicación", en Andrés Malamud y Miguel De Luca (coords.), *La política en tiempos de los Kirchner*, Buenos Aires, Eudeba.

- Levitsky, Steven y Kenneth Roberts (eds.) (2011). *The Resurgence of the Latin American Left*, Baltimore y Londres, The Johns Hopkins University Press.
- Miguez, Daniel (2013). *Diez años. Una década de gobierno kirchnerista*, Buenos Aires, Planeta.
- Novaro, Marcos, Alejandro Bonvecchi y Nicolás Cherny (2014). *Los límites de la voluntad. Los gobiernos de Duhalde, Néstor y Cristina Kirchner*, Buenos Aires, Ariel.
- Pribble, Jennifer (2013). *Welfare and Party Politics in Latin America*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Repetto, Fabián (2011). “Las políticas sociales de transferencias de ingresos: avances hacia una mayor equidad”, en Andrés Malamud y Miguel De Luca (coords.), *La política en tiempos de los Kirchner*, Buenos Aires, Eudeba.
- Schamis, Hector (2006). “Populism, Socialism and Democratic Institutions”, *Journal of Democracy*, vol. 17, núm. 4, pp. 20-34.
- Weyland, Kurt, Raúl L. Madrid y Wendy Hunter (2010). *Leftist Governments in Latin America: Success and Shortcomings*, Cambridge, Cambridge University Press.

4. Paraguay: el cuestionable giro a la izquierda

*Juan Mario Solís Delgadillo**

*Sarah Patricia Cerna Villagra***

Introducción

En Paraguay no ha existido un giro a la izquierda a pesar de lo que muchos sostienen. En cualquier caso, lo que se presentó en 2008 con la elección de Fernando Lugo como presidente fue una epifanía que no logró cristalizarse con plenitud en la realidad. En este capítulo se explican las razones que dan pie a la afirmación con la que arrancamos. Para tal efecto, el documento se divide en seis partes en las que se dará cuenta de: a) las características del sistema político paraguayo, b) el contexto de la alternancia política de 2008, c) el proceso de elección de Fernando Lugo, d) el gobierno de la Alianza Patriótica para el Cambio (APC), e) la salida (abrupta) del gobierno, y f) la distribución territorial del poder.

El hilo conductor de este trabajo muestra, con evidencia empírica, que lo ocurrido en Paraguay entre 2008 y 2012 obedeció más a coyunturas críticas muy particulares y a estrategias pragmáticas por parte de una buena cantidad de actores que dieron vida a lo que se conoció como Alianza Patriótica para el Cambio (APC), y no a un proyecto político

* Profesor-investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Doctor y máster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Salamanca. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (Conacyt, México).

** Candidata a doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México y en Estado de Derecho y Gobernanza Global por la Universidad de Salamanca. Máster en Ciencia Política por la USAL. Docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Miembro del Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores (Conacyt, Paraguay).

programático con visión progresista, e incluso bolivariana, como algunas voces académicas y sociales sostienen en el interior y el exterior del país. Pero, además, puntualiza que, a pesar de algunos logros sociales y de gestión pública de la administración que son innegables, el ala de la izquierda paraguaya nunca tuvo un control real del gobierno, y que por mucho que les pese a algunos, la izquierda, como corriente política, dista mucho de tener una presencia competitiva en el país cuando con dificultades puede superar el techo de 10% de los votos y no controla ningún territorio subnacional por sí misma.

En un país como Paraguay resulta difícil hablar de giro a la izquierda cuando incluso dentro de este campo político hay gente que definiéndose como tal, e incluso como progresista, en cuestión de valores resulta ser al mismo tiempo bastante conservadora y, por ende, no es exactamente la impulsora más entusiasta de la agenda de ampliación de derechos para aprobar cuestiones como el matrimonio igualitario, la despenalización del aborto, la legalización de la marihuana, los derechos de las mujeres o las causas indígenas. Estas páginas diseccionan estas cuestiones para explicar un caso confuso —pero no desviado— como lo es el paraguayo.

El sistema político paraguayo: rasgos de una identidad política interesante

Si hay algo que distingue al sistema político paraguayo frente a la mayoría de países de la región latinoamericana es la longevidad de sus principales actores políticos. La Asociación Nacional Republicana (ANR), mejor conocida como Partido Colorado, y el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) son estructuras políticas que no solo han disputado el poder en las urnas, sino también por otras vías, y quizá más importante que eso, definen identidades políticas como en algunos países también lo hacen los clubes de fútbol. En pocas palabras, en Paraguay, bajo esta lógica, uno nace —y no se hace— colorado o liberal.

Esta estructura mayoritariamente dicotómica o bipartidista, a su vez, no se ha distinguido por ser una de las más estables de la región, sobre todo cuando se echa un vistazo a las interrupciones constitucio-

nales, los autoritarismos y las inestabilidades políticas derivadas de la tendencia de llevar a juicio político a los presidentes del último cuarto de siglo en democracia, así como también los intentos de golpe de Estado que se han suscitado en ese mismo periodo (1996 y 2000). Pero, sobre todo, es importante comprender que las disputas políticas en Paraguay, y las de sus élites políticas en concreto, han estado históricamente vinculadas a la propiedad agrícola, y al acaparamiento de tierras que ha dado como resultado que este asunto se haya convertido con el paso del tiempo en el corazón de los problemas estructurales del país. Problemas que para Barreda y Bou (2010: 158) tienen tres aristas: *a*) una perniciosa estructura socioeconómica, *b*) un acentuado clientelismo, y *c*) un problema sistémico de agencia.

A esto habrá que agregar que, al igual que en otros países de la región, la propensión a liderazgos fuertes y carismáticos es una de las características que más sobresalen en la cultura política paraguaya, como subraya Uharte (2012: 39). Sobre esta cuestión, la propia literatura se ha ocupado, y ha sido Roa Bastos quien ha diseccionado mejor que nadie este rasgo en su novela *Yo, el supremo* (1974), en la que hace una descripción crítica de uno de los próceres paraguayos más emblemáticos como lo es Gaspar Rodríguez de Francia. La tendencia a liderazgos de ascendencia, vigorosos e incluso vehementes ha sido frecuente en la historia paraguaya; en cualquier caso, todos estos se han caracterizado por la defensa a ultranza de lo que han definido como los valores paraguayos: un cúmulo de nociones imaginarias con un claro cariz conservador.

En ese contexto, la germinación de la izquierda paraguaya no ha sido sencilla, o al menos no ha estado exenta de vicisitudes. La dominación del escenario político por parte de actores claramente conservadores como lo son los colorados y los liberales (véase la gráfica 1), y su fuerte arraigo en la sociedad paraguaya, ha dificultado que la izquierda haya podido abrirse paso, sobre todo a raíz del último autoritarismo cuando fue vista y tratada con desconfianza y desprecio, y presentada ante la sociedad como la portadora de todos los males (presentes y futuros) del país.

A la izquierda paraguaya le ha costado mucho recuperarse de la desarticulación que sufrió durante los años del stronismo, cuando varios de sus líderes y militantes fueron perseguidos, torturados, exiliados, ejecutados o desaparecidos, y también sus formaciones fueron proscritas.

No obstante, a ello también habrá que sumar su particular tendencia a la fragmentación y confrontación dentro de sus propias filas. Todas estas, razones que permiten comprender su debilidad como fuerza política relevante, o al menos creíble entre la sociedad.

Sin embargo, nadie puede discutir que el sistema político paraguayo ha cambiado y que en los últimos años, tras el retorno de la democracia después de más de tres décadas de autoritarismo militar, ha experimentado una notoria transformación al pasar de ser un sistema preponderantemente hegemónico a uno de pluralismo moderado en el que coexisten cada vez más otros actores —no necesariamente nuevos— y otras plataformas con visiones de la sociedad diferentes. Una revisión a la evolución del número efectivo de partidos (NEP) en las tres arenas de competencia nacional más relevantes permite observar con nitidez cómo es que a pesar de algunos rasgos inamovibles en el sistema, sobre todo en lo que concierne a actitudes y valores, en Paraguay existe una tendencia a que más voces tengan un peso relevante en su vida política.

Cuadro 1. Evolución del NEP (1993-2013)

	1993	1998	2003	2008	2013
Presidente	1.68	2.18	3.91	3.34	2.91
Diputados	1.74	2.19	4.21	4.39	4.32
Senadores		2.25	4.75	4.66	4.97

Fuente: Elaboración propia.

Aunado a lo anterior, merece también un comentario el armazón institucional que da razón de ser al sistema político paraguayo: la Constitución de 1992. Este documento forma parte de lo que se conoce como nuevo constitucionalismo latinoamericano, fue producto de las transiciones desde gobiernos autoritarios en un contexto internacional más amplio, como el final de la Guerra Fría, e introdujo modificaciones drásticas al diseño institucional, muchas de ellas pautadas por el miedo a una posible regresión autoritaria. En tal virtud, el constituyente estableció, entre otras cosas, un cúmulo de facultades a favor del Poder Legislativo y en detrimento del Poder Ejecutivo con el fin de descomprimir y desarticular el hiperpresidencialismo de la era stronista, y con ello estableció umbrales muy bajos para entablar juicio político al pre-

sidente aunado a la explícita prohibición de reelegir al primer mandatario en el cargo.¹

No obstante, las reglas emanadas de la Constitución no han cambiado sustancialmente al sistema político del país, que sigue siendo uno de los más variables de América Latina en tanto ha presentado episodios de continua inestabilidad política traducidos en intentos de golpes de Estado (1996, 2000), asesinatos políticos (1999), escándalos de corrupción y disrupción de presidentes por amenaza o concreción de juicio político (1999, 2012).

El contexto político de la alternancia de 2008

En la antesala de los comicios de abril de 2008 el país atravesaba una situación complicada reflejada en el crecimiento económico exiguo, a pesar del repunte manifestado en el año previo cuando el PIB creció a razón de 6.8%. En términos generales, el país arrastraba cuando menos una década de desempeño económico bajo e incluso recesivo (véase el cuadro 2), con tasas de inflación si no muy altas —salvo en 2002 y 2003—, sí lo suficientemente inquietantes para un país cuya población se desempeña sobre todo en actividades del sector primario o en la informalidad, es decir, en faenas de poca paga, o bien, en ocupaciones con ingresos inestables.

Cuadro 2. Desempeño de la economía paraguaya (1999-2008)

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Crecimiento del PIB	-1.5	-3.3	2.1	0.0	3.8	4.1	2.9	4.3	6.8	5.8
Inflación	6.8	9.0	7.3	10.5	14.2	4.3	6.8	9.6	8.1	8.3
Ingresos tributarios	9.9	9.9	10.8	10	10.3	11.9	11.8	12	11.6	n. d.

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial.

¹ El debate sobre la reelección presidencial ha estado presente en la vida política paraguaya de este último cuarto de siglo de manera intermitente, y en la fecha en la que fue escrito este capítulo el tema ha vuelto a recobrar centralidad en la agenda pública paraguaya de cara a una posible habilitación de esta figura jurídica que le permita optar por la reelección al presidente Horacio Cartes. Sin embargo, el escenario no es tan claro pues las opiniones se dividen en todas las arenas políticas.

A lo antes dicho habrá que agregar que Paraguay es uno de los países con los ingresos tributarios más bajos de la región y que hasta hace muy pocos años no gravaba las rentas personales. Esto quiere decir que los principales ingresos a las arcas públicas provenían, y provienen aún hoy en día, del cobro del IVA y de los famosos *royalties* (regalías) de las hidroeléctricas binacionales de Itaipú y Yacyretá compartidas con Brasil y Argentina, respectivamente.

Si bien es cierto que en los años previos durante la administración de Nicanor Duarte se verificaron algunos avances sociales y económicos como evitar la suspensión de pagos, aumentar las reservas nacionales, incrementar el PIB, multiplicar las exportaciones, ampliar el presupuesto a la sanidad pública o reducir la pobreza (Banco Central del Paraguay, s. f.), no es menos cierto que el desempleo y una serie de conflictos sociales y políticos marcaron los años previos a la alternancia política de 2008.

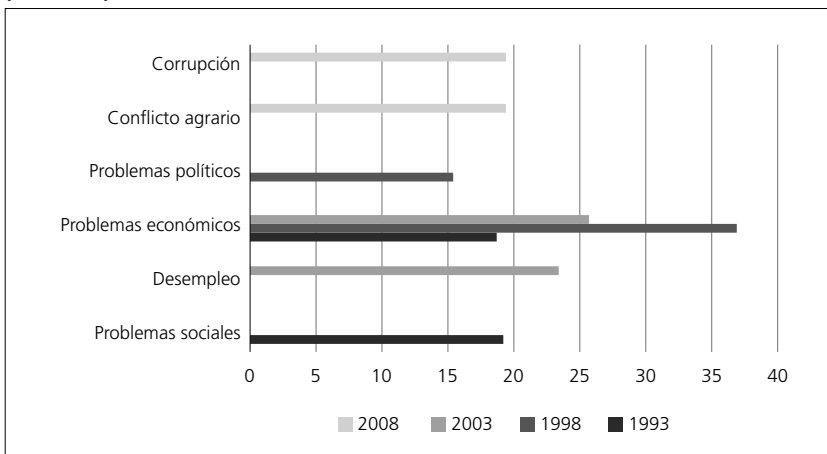
En efecto, si pudiéramos resumir en cinco rasgos el contexto político anterior a los comicios que dieron paso al gobierno de la APC se podría considerar lo siguiente: *a)* los intentos del presidente Duarte por enmendar la Constitución con el fin de conseguir para sí la habilitación de la reelección y con ello mantenerse en el poder por cinco años más; *b)* el incremento de la protesta social por los malos manejos de la administración pública, sobre todo por los constantes casos de corrupción en el entorno más cercano al presidente; *c)* las divisiones internas en los partidos políticos, pero en especial en el Partido Colorado con las desavenencias entre el presidente Duarte y su vicepresidente Luis Castiglioni; *d)* los conflictos del jefe del Ejecutivo con un sector de la prensa opositora a su gobierno, y *e)* la aparición y ascenso mediático del obispo de San Pedro, Fernando Lugo Méndez, quien se convirtió en poco tiempo en el líder que aglutinó el malestar ciudadano en un contexto político, económico y social revuelto (Cerna y Solís, 2012; Abente, 2007). En palabras de Uharre (2012: 26), Lugo se transformó en un personaje que con suma habilidad logró articular a sectores políticos ideológicamente en las antípodas.

Esta condición, aunada a la dificultad en las filas liberales de encontrar un líder indiscutible que contendiera en las elecciones de abril de 2008, dio paso a que estos cortejaran a Lugo y le ofrecieran coaligarse para vencer a una ANR desgastada y dividida. La APC se convirtió, pues, en un vehículo sui generis que contemplaba en su programa electoral una serie de propuestas que giraban en torno a: *a)* la reforma agraria integral,

4. Paraguay: el cuestionable giro a la izquierda

b) la reactivación de la economía, c) el combate a la corrupción, d) la independencia del Poder Judicial, e) la recuperación de la soberanía nacional, y f) la resolución de los problemas sociales más urgentes (Fretes, 2012: 79). Un vistazo histórico a los principales problemas del país, según la percepción de los legisladores, ayuda a comprender de manera muy concreta lo que hasta aquí se ha dicho.

Gráfica 2. Principales problemas que han enfrentado los gobiernos paraguayos en democracia (1993-2008)



Fuente: Elaboración propia con base en datos de PELA.

El triunfo de la APC y el ascenso de Fernando Lugo

Así como ocurrió en México en el año 2000, si por algo fue emblemática la elección presidencial de 2008 en Paraguay se debió a que supuso la caída del Partido Colorado tras más de sesenta años ininterrumpidos en el poder, 35 de ellos bajo un férreo autoritarismo militar. Esto implicó también la derrota del último bastión hegemónico en América Latina (Solís y Cerna, 2016).

Por otro lado, este proceso electoral también fue muy significativo porque culminó involucrando a muchos actores provenientes de ámbitos muy distintos al de la política tradicional: movimientos sociales, organizaciones campesinas, comunidades de base, colectivos estudiantiles,

comunidades artísticas, grupos feministas, entre otros. Todos ellos jugaron un papel muy importante en el proceso de la alternancia política. No obstante, es conveniente subrayar que la alianza que le permitió a Fernando Lugo llegar al poder contaba con socios cuyas posiciones ideológicas eran muy distantes, sin descontar que el peso de sus estructuras políticas era (y es) muy dispar. En ese sentido, es significativo el valor de la marca del PLRA en el éxito electoral de 2008, especialmente si se toma en cuenta que sin mayores variaciones sus apoyos electorales siempre han oscilado entre 20 y 24% de las preferencias electorales de los paraguayos, mientras que los partidos de izquierda, en su conjunto, con dificultades superan el umbral de 10% de los votos válidos en las elecciones generales (véase el cuadro 3) (Solís y Cerna, 2014).

Tal como sostenemos en otro trabajo (Solís y Cerna, 2016), si hubiera que resaltar el proceso electoral paraguayo de 2008 en tres ideas clave estas serían las siguientes: *a*) la naturaleza contradictoria en términos ideológicos de la APC, *b*) la fragmentación en el Partido Colorado y el descontento de una parte importante de la militancia hacia su candidata Blanca Ovelar (propuesta y respaldada por el presidente Duarte), y *c*) la reaparición pública de Lino Oviedo, antiguo militar golpista, quien fue capaz de aglutinar al coloradismo disidente, en especial el más conservador y militar, que había sido desplazado por las nuevas cúpulas dirigentes.

Un análisis más detallado de los resultados electorales al cargo de presidente de la República entre 1998 y 2013 permitiría ver cómo el bipartidismo tradicional se fue fragmentando y, sobre todo, cómo esa fragmentación se dio en la derecha del espectro político en agrupaciones como la Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (Unace) y el Partido Patria Querida (PPQ), cuya principal característica es que se trataba de partidos que estaban hechos a la medida de sus fundadores, Lino Oviedo y Pedro Fadul, respectivamente. Ambas opciones políticas se han ido extinguendo, ya sea por el retiro o la muerte de sus líderes, sin embargo, es por demás interesante observar cómo a raíz del declive de estos partidos, los tradicionales, principalmente el Colorado, han mejorado sus resultados electorales. En cambio, la izquierda, sobre todo la verla desagregada en 2013 y a poco menos de un año de la destitución de Fernando Lugo, apenas logra acumular 9.2% de las preferencias electorales.

4. Paraguay: el cuestionable giro a la izquierda

Cuadro 3. Resultados históricos de las elecciones presidenciales paraguayas (1998-2013)

	1998	2003	2008	2013
ANR	53.8	37.1	30.7	45.8
PLRA	42.6	24		
APC			40.9	
APA				36.9
Unace		13.5	22.0	0.8
PPQ		21.3	2.4	1.1
Avanza País				5.9
Frente Guazú				3.3
Participación electoral	80.5	64.3	65.6	68.6
APC: Alianza Patriótica para el Cambio, alianza entre el PLRA y otros partidos				
APA: Alianza Paraguay Alegre entre el PLRA y la Unace				

Fuente: Elaboración propia con base en datos del TSJE.

Precisamente por lo antes expuesto resulta cuando menos poco verosímil asumir que la victoria de Fernando Lugo haya sido un triunfo de la izquierda, o de un proyecto de izquierda propiamente. Máxime cuando está claro que alrededor de cuatro de cada cinco electores paraguayos votan por opciones políticas de derecha.

Otro botón de muestra, al amparo del acuerdo entre el PLRA y sus socios de izquierda está la composición del Congreso electo en los comicios del 20 de abril de 2008. De los ochenta escaños de la Cámara de Diputados, tan solo cinco fueron ocupados por los socios más afines a Lugo, mientras que en el Senado de 45 bancas apenas tres pertenecían al bloque legislativo de la izquierda. Con este escenario, resulta cuando menos preciso cuestionar: ¿es verdad que en Paraguay hubo un giro a la izquierda? La crudeza de los datos y la sucesión de acontecimientos dicen que no. En todo caso hubo una serie de coyunturas que favorecieron a un líder carismático, emergente y *outsider* que sacó el mejor partido a un estado de malestar colectivo.

No obstante, y para ser justos, no se puede dejar de lado un hecho incontrovertible que vino de la mano del proceso electoral de 2008: la consolidación del pluralismo democrático en el sistema de partidos paraguayo. Esta no es una cuestión baladí si se considera que cinco años atrás el sistema comenzó a abrirse por la derecha del espectro ideológico, y que en 2008 comenzó a mostrar movimiento por la izquierda.

Cuadro 4. Distribución y porcentaje de escaños en las cámaras de Diputados y Senadores (2008)

<i>Partido</i>	<i>Diputados</i>	<i>% escaños</i>	<i>Senadores</i>	<i>% escaños</i>
ANR	30	37.5	15	33.3
PLRA	27	33.7	14	31.1
Unace	15	18.7	9	20.0
PPQ	3	3.7	4	8.8
MPT	1	1.2	1	2.2
ADB	1	1.2	-	-
APC	2	2.5	-	-
PDP ^a	1	1.2	1	2.2
PPS ^b	-	-	1	2.2

a Partido Democrático Progresista.

b Partido País Solidario.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de TSJE y Observatorio de Instituciones Representativas-Universidad de Salamanca.

En resumen, lo que para muchos ha sido considerado como un giro a la izquierda en Paraguay con la elección de Fernando Lugo como presidente cuesta mucho sostenerlo, porque si bien Lugo fue arropado por numerosos movimientos sociales y partidos políticos de izquierda, su mayor caudal electoral provino de votantes conservadores y de ciudadanos que antes que emitir un voto ideológico sufragaron por la APC para castigar y con ello rechazar a la ANR.

El gobierno de la Alianza Patriótica para el Cambio (APC)

La gestión gubernamental de la APC se puede definir como una administración de luces y sombras. Entre las luces cabe señalar: *a)* una fuerte vocación en lo social, *b)* un manejo responsable de las finanzas públicas, *c)* una genuina intención de profesionalizar la burocracia, *d)* la atención a los grupos vulnerables, y *e)* la ampliación de derechos políticos. Y entre las sombras no pueden dejar de mencionarse cuestiones como: *a)* la pendiente reforma agraria, *b)* la inacabada reforma al sistema de justicia, *c)* la expansión del narcotráfico y de los mercados ilegales, *d)* los problemas de seguridad pública, y *e)* la falta de impulso de una agenda progresista más abarcadora. Cuestiones todas que se detallarán más adelante.

En otro orden de ideas, y no menos importante, no deben perderse de vista las tensiones políticas que entre los socios de gobierno se ventilaban públicamente. Fueron conocidos los diferendos y el paulatino distanciamiento del presidente Lugo y su vicepresidente Federico Franco. Morínigo (2009) explicaría que el desencuentro entre estos dos personajes reflejaba con meridiana claridad la disparidad de enfoques democráticos a los que aspiraban.

De acuerdo con las encuestas levantadas por el proyecto de Élités Parlamentarias de la Universidad de Salamanca (PELA, 2008), los legisladores apreciaban una considerable distancia ideológica entre el presidente y el vicepresidente al ubicarlos en promedio en el 3.35 y el 6.79, respectivamente, en una escala del 1 al 10 en donde uno es extrema izquierda y 10 es extrema derecha.

En los hechos, la prensa hizo eco de estas malas relaciones incluso a los pocos días de haber asumido el poder. El diario *ABC Color* (25 de agosto de 2008) hablaba de la desconfianza mutua entre estos dos actores y señalaba la “amenaza potencial” de que empeorando esa relación la situación derivara en una “crisis de proporciones”. Esto se vio reflejado en las distintas visiones que sobre el papel del gobierno tenían los ministros más afines a Lugo que bregaban por políticas de inclusión social y reducción de la desigualdad, y el grupo de ministros liberales, encabezados por Franco, que estaban claramente inclinados a lo que Uharte denominaba un “proyecto más funcional al de las élites económicas” (2012: 37).

Más allá de estas divisiones, no se puede soslayar que, en la distribución de cargos en el gabinete presidencial de Lugo, los liberales ocuparon la mayoría de las carteras más importantes, o al menos las de más trascendencia dado el perfil económico del país. Y aunque haya existido un equilibrio casi paritario en el reparto de las posiciones entre los partidos de izquierda y los liberales, lo cierto es que, dado el valor de los ministerios y el peso en el Congreso de estos últimos, quienes tenían la sartén por el mango para chantajear al presidente, o bien bloquearlo, eran precisamente los liberales. Un vistazo general a los ministros que acompañaron a Lugo en sus cuatro años de gobierno ilustra adecuadamente este argumento (véanse los cuadros 5 y 6).²

² La información de los cuadros 5 y 6 se obtuvo a partir de una revisión hemerográfica. Una de las fuentes más precisas fue <<http://web.archive.org/web/20090310011035/>

Si a esta condición se suma la oposición cada vez más articulada de los colorados, que con el pasar de los años de gobierno se fueron fortaleciendo, y que son ideológicamente más próximos a los liberales, es relativamente comprensible que terminaran uniéndose para echar al presidente, que en todo momento se comportó como un “intruso en casa ajena” y con poca habilidad para sortear las obstrucciones que le presentaban sus otrora socios de gobierno (Cerna y Solís, 2012).

Cuadro 5. Gabinete presidencial (2008-2012)

<i>Ministerio</i>	<i>Ministro</i>	<i>Partido</i>	<i>Orientación</i>
Relaciones Exteriores	Alejandro Hamed	P-MAS ^a	I
	Héctor Lacognata	P-MAS	I
	Jorge Lara Castro	FG ^b	I
Hacienda	Dionisio Borda	Ind.	
Interior	Rafael Filizzola	PDP	I
	Carlos Filizzola	PPS ^c	I
Defensa	Luis Bareiro	PC	I
	Cecilio Pérez Bordón	ANR	D
Industria y Comercio	Martín Heisecke	PLRA	D
Agricultura y Ganadería	Cándido Vera Bejarano	PLRA	D
Justicia y Trabajo	Blas Llano	PLRA	D
Obras Públicas	Efraín Alegre	PLRA	D
	Cecilio Pérez Bordón	ANR	D
Salud Pública	Esperanza Martínez	Tekojoja	I
Educación	Horacio Galeano Perrone	ANR	D
	Luis Riart	PLRA	D
	Víctor Ríos	PLRA	D
Medio Ambiente	José Luis Casaccia	ANR	D

a Partido del Movimiento al Socialismo.

b Frente Guazú.

c Partido País Solidario.

Fuente: Elaboración propia.

De los cuadros anteriores se pueden extraer algunas consideraciones adicionales muy puntuales: a) los ministerios clave estaban mayori-

http://www.elpueblopresidente.com/INTERNACIONAL/150808_lugoparaguay.html.

4. Paraguay: el cuestionable giro a la izquierda

tariamente en manos de los liberales, así como también la Senave y las hidroeléctricas de Itaipú y Yacyretá; *b*) los partidarios de la izquierda se concentraron principalmente en carteras de corte social; *c*) la presencia de las mujeres fue mayor en el gabinete ampliado que en el núcleo duro del gobierno en donde solo hubo una ministra, y *d*) los encargos encomendados a las mujeres, en su mayoría, se enfocaron a tareas estereotipadamente femeninas, reforzando de esta manera roles de género y el papel de supermadres que en muchos lugares se les asigna.

Cuadro 6. Secretarías de Estado del gabinete presidencial (2008-2012)

<i>Secretaría</i>	<i>Secretario</i>	<i>Partido</i>	<i>Orientación</i>
Acción Social	Paulino Cáceres	Tekojoja	I
Mujer	Gloria Rubin	Ind.	
Emergencia Nacional	Camilo Suárez	P-MAS ^a	I
Niñez y Adolescencia	Liz Torres	P-MAS	I
Cultura	Ticio Escobar	Ind.	
Función Pública	Lilian Soto	PPS ^b	I
Turismo	Liz Cramer	ANR	D
Deportes	Javier Dakar	Ind.	
Instituto de Previsión Social	Amado Gill	Ind.	
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave)	Luis Llano	PLRA	D
Dirección de Beneficencia	María Angélica Fernández	PDC	
Instituto Nacional del Indígena	Margarita Mbywangi	Tekojoja	I
Itaipú	Carlos Mateo Balmelli	PLRA	D
Yacyretá	Carlos Cardozo	PLRA	D

a Partido del Movimiento al Socialismo.

b Partido País Solidario.

Fuente: Elaboración propia.

Ahora bien, un análisis un tanto más pormenorizado de la administración que encabezó Fernando Lugo permitiría apreciar que en materia económica al manejo responsable de las finanzas públicas al que se hizo mención párrafos arriba, hay que sumar la consolidación de la estabilidad macroeconómica del país, la promoción de inversiones privadas y públicas, la puesta en marcha de un programa nacional de protección social, el

fortalecimiento de las empresas públicas y la implementación gradual del presupuesto por resultados (Presidencia de la República, 2010).

Es importante destacar que a diferencia de los gobiernos de izquierda que han emergido en la región, en Paraguay durante los años del gobierno de la APC no se amplió la actividad económica del Estado y tampoco se realizaron nacionalizaciones ni privatizaciones. Esto en sí mismo es un dato muy interesante, ya que habla de un mantenimiento del *statu quo* por parte del gobierno de Lugo, quien evitó confrontaciones con los grandes capitales del país y, de esta manera, con los grandes señores de la tierra en Paraguay.

Por otro lado, no se debe perder de vista que el país se vio beneficiado, como casi todas las economías de la región, con la expansión de las exportaciones de materias primas a otros mercados, especialmente al asiático, que demandaba de Paraguay productos como la soya y la carne. Esta coyuntura permitió que el país creciera a tasas de hasta 15% del PIB como ocurrió en 2010 y se convirtiera en el país de la región con mayor crecimiento durante esos años. Esto fue posible, además de por las condiciones externas favorables ya comentadas, por un alto crecimiento del crédito, un fuerte impulso monetario y una cosecha sin precedentes en la historia del país, lo que se reflejó, a su vez, en los ingresos tributarios que tuvieron un importante incremento.

Con la caja llena, el gobierno pudo acometer políticas públicas que implicaron cambios significativos en materia de salud, protección social, economía y relaciones internacionales, y dio un impulso a la profesionalización de las administraciones públicas con el objetivo de combatir la corrupción, identificada como uno de los principales males del país.

En materia de salud, por ejemplo, se aseguró la atención gratuita en todos los hospitales, centros y puestos de salud dependientes del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social; se crearon las Unidades de Salud de la Familia, que permitieron el acceso a este derecho a familias del espacio rural que viven en situación de pobreza, y en términos generales, los esfuerzos gubernamentales se centraron en la atención primaria en salud.

En el rubro de protección social, se ampliaron los programas de acceso a la vivienda social, así como el número de beneficiarios de programas sociales de transferencias económicas condicionadas, además se creó la pensión alimentaria para personas mayores en situación de pobreza. En cuanto a los grupos vulnerables, se apreciaron avances en materia de de-

rechos indígenas y mayor protección a los derechos de los niños paraguayos.³ Por lo que a las facultades políticas se refiere, el gobierno de Lugo se distinguió por el impulso que le dio a la aprobación del voto de los paraguayos en el extranjero. Y por lo que toca al ámbito de las relaciones internacionales es importante subrayar los esfuerzos de la diplomacia para renegociar el tratado de Itaipú con Brasil.

Ahora bien, no se pueden dejar de lado cuestiones que quedaron pendientes en el gobierno de Lugo, ya sea porque no se abordaron aun cuando estaban contempladas en el programa electoral, o bien porque en términos generales no se compartía del todo una parte de la agenda progresista internacional. En concreto nos referimos a cuestiones como la reforma agraria y la reforma judicial, por un lado, y la promoción del matrimonio igualitario, la despenalización del aborto, la legalización del consumo de marihuana o el impulso de una agenda de género más proactiva, por el otro. Sobre estas últimas cuestiones conviene reflexionar que su falta de impulso bien pudo obedecer a dos factores: a) el papel de actores de veto que juegan tanto liberales como colorados en estos temas, y b) la posición “valoralmente” conservadora de buena parte de la izquierda paraguaya de la que Lugo es parte. En otras palabras, esto quiere decir que si esta agenda progresista no ha sido promovida por un gobierno definido como de izquierda, ello se debe a que quizás en el fondo los actores de este campo ideológico en Paraguay se perciban como progresistas en términos ideológicos, pero en cuestión de valores son tan conservadores como los colorados y los liberales.

La salida (abrupta) del gobierno

A diferencia de otros casos en los que la salida de los llamados gobiernos de izquierda se ha dado a través de las urnas, en Paraguay (2012) de la misma manera que en Brasil (2016) esta se ha presentado a través de la figura del juicio político, un recurso constitucional muy cuestionado no tanto por su legalidad, sino por el uso (a veces indiscriminado) que se hace de

³ En el gobierno luguista se logró la titularidad de más de 128 000 hectáreas de tierras para los pueblos originarios (ABC Color, 2011).

él, o bien por la facilidad que existe para entablarlo derivado de causalidades legales ambiguas.

En Paraguay, según reportes de prensa, entre 2008 y 2012 el presidente Lugo fue amagado 23 veces con la intención de incoarle un juicio político (Paraguay.com, 2015). Si bien esto llama la atención, lo cierto es que no es una novedad en el sistema político paraguayo en el que casi todos los presidentes electos en democracia desde 1993 han sido amenazados con esa figura jurídica. Esta espada de Damocles que se cierne sobre los mandatarios paraguayos ha producido efectos variados que han ido desde la renuncia de algún presidente (Raúl Cubas en 1999) hasta la efectiva destitución como ocurrió con Fernando Lugo (2012).

Las constantes amenazas de juicio político hablan de la inestabilidad del sistema político paraguayo, de las pugnas internas entre los partidos y las malas relaciones entre poderes. Una revisión a las causas por las que se chantajea a los presidentes de este país da cuenta de lo variado y ambiguo que resulta el artículo 225 de la Constitución nacional cuando se refiere al mal desempeño de la función presidencial. Bajo este argumento, algunos presidentes han sido intimidados por irregularidades en la declaración de bienes, la posesión de un automóvil ilegal, la designación de ministros o la pretendida nominación a una candidatura. No se pone aquí en tela de juicio la seriedad o gravedad de algunas de estas imputaciones, no obstante, es bien cierto que en Paraguay casi cualquier cosa es objeto de juicio político bajo el fundamento del “mal desempeño en las funciones”. El caso de Fernando Lugo no fue la excepción.

Un análisis comparado entre los distintos presidentes paraguayos desde 1993 con base en el argumento teórico de Pérez Liñán (2008) sobre las causas que permiten al menos la amenaza de enjuiciar políticamente a los presidentes evidencia que entre distintas variables que hipotéticamente inciden en ese resultado como lo pueden ser la movilización social, los escándalos de corrupción, la falta de apoyos legislativos y la disciplina partidista al presidente, es precisamente esta última la variable decisiva para entender por qué los presidentes paraguayos son tan vulnerables ante el Congreso. Un modelo realizado por análisis cualitativo comparado (QCA, por sus siglas en inglés) así lo expone y se muestra en los cuadros 7 a 9.⁴

⁴ La variable disciplina partidista ha sido incluida por nosotros porque observamos que a pesar de que los presidentes paraguayos en su mayoría han contado con bancadas

4. Paraguay: el cuestionable giro a la izquierda

Cuadro 3. Valores de entrada del modelo QCA sobre amenaza de juicio político a los presidentes paraguayos

<i>Presidente</i>	<i>Amenaza de juicio</i>	<i>Mayoría Relativa</i>	<i>Mayoría Absoluta</i>	<i>Movilizaciones sociales</i>	<i>Escándalos corrupción</i>	<i>Disciplina</i>
Andrés Rodríguez	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí
Juan Carlos Wasmosy	Sí	Sí	No	Sí	No	No
Raúl Cubas Grau	Sí	No	Sí	Sí	Sí	No
Luis González Macchi	Sí	No	Sí	Sí	Sí	No
Nicanor Duarte Frutos	Sí	Sí	No	No	Sí	No
Fernando Lugo Méndez	Sí	No	No	Sí	No	Sí

Fuente: Elaboración propia.

Imagen 1. Solución compleja del modelo de QCA sobre factores que favorecen la amenaza de juicio político a los presidentes paraguayos

	<i>Raw Coverage</i>	<i>Unique Coverage</i>	<i>Consistency</i>
~mayabs*mayrel*movsoc*~esccorr*~dis	0.200000	0.200000	1.000000
~mayabs*mayrel*~movsoc*esccorr*~dis	0.200000	0.200000	1.000000
~mayabs*~mayrel*movsoc*~esccorr*dis	0.200000	0.200000	1.000000
mayabs*~mayrel* movsoc*esccorr*~dis	0.400000	0.400000	1.000000
Solution coverage	1.000000		
Solution consistency	1.000000		

Fuente: Elaboración propia.

Imagen 2. Solución parsimoniosa del modelo de QCA sobre factores que favorecen la amenaza de juicio político a los presidentes paraguayos

	<i>Raw Coverage</i>	<i>Unique Coverage</i>	<i>Consistency</i>
~dis	0.800000	0.400000	1.000000
~esccorr	0.400000	0.000000	1.000000
~mayabs	0.600000	0.000000	1.000000
Solution coverage	1.000000		
Solution consistency	1.000000		

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con el modelo confeccionado, existen dos soluciones para comprender por qué los presidentes paraguayos suelen ser constantemente asediados por la figura del juicio político. La primera de ellas

mayoritarias, no han sido necesariamente obedientes a los presidentes de turno debido fundamentalmente a las divisiones dentro de su partido.

indicaría que cuando un presidente cuenta con una bancada mayoritaria, pero esta es indisciplinada, y se conjugan movilizaciones sociales y escándalos de corrupción entonces será desafiado con el juicio político ($\text{amjuic} = \text{mayabs} * \sim \text{mayrel} * \text{movsoc} * \text{escor} * \sim \text{dis}$). Esta configuración se presenta en 40% de los casos reales (*complex solution*). Ahora bien, si un presidente no cuenta con disciplina partidista ($\text{amjuic} = \sim \text{dis}$), o bien no tiene mayoría absoluta ($\text{amjuic} = \sim \text{mayabs}$), entonces es más susceptible a recibir amenazas de juicio político en Paraguay. Estas configuraciones causales se presentan en 80 y 60% de los casos efectivamente verificados, así como en el cúmulo de configuraciones teóricamente posibles o contrafácticas como lo muestra el resultado de la solución parsimoniosa del modelo (*parsimonious solution*). En cualquiera de los casos, tan importante es contar con mayoría (preferentemente absoluta) como tener disciplina partidista. En otras palabras, esto quiere decir que la mayoría es importante, pero de nada sirve si los legisladores son indisciplinados con el presidente, al que más pronto que tarde van a desafiar con incoarle un juicio político (Ragin, Drass y Davey, 2006; Ragin, 2006; Pérez Liñán, 2009).⁵

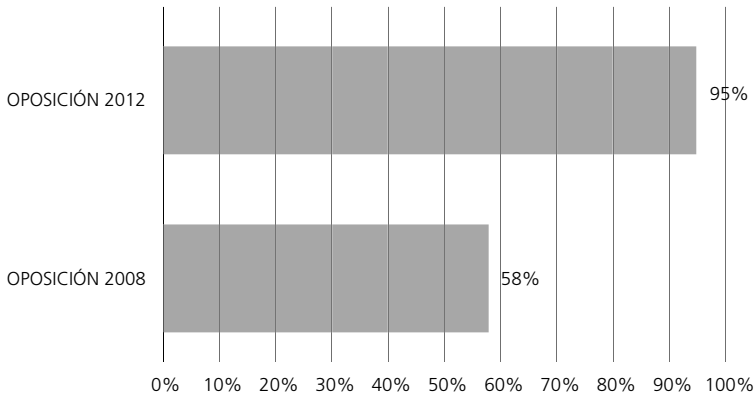
Con un escenario como el hasta aquí presentado, en el que el presidente no contaba con amplios apoyos legislativos propios y tenía un gabinete fragmentado y cada vez más distante, las probabilidades de iniciar acciones de juicio político al presidente eran muy altas. En efecto, los 23 intentos ya referidos son una muestra de ello. Si se observa, por ejemplo, el porcentaje de diputados que se consideraban oposición cuando recién comenzó la legislatura en 2008, tenemos que 58% de los legisladores así se posicionaban. Esto representaba casi la totalidad de los diputados de la ANR, la Unace y el PPQ. Si esta cifra se compara con los votos a favor del juicio político entre los diputados se tiene que, tras

⁵ Se llega a este resultado luego de una minimización lógica de las condiciones necesarias y suficientes para obtener el resultado de interés, de lo cual se desprenden tres tipos de soluciones, una compleja, una parsimoniosa y una intermedia. Para el caso que nos ocupa, la solución compleja asigna un valor de 0 a todos los contrafácticos, por lo que los considera como falsos por no estar presentes en la realidad observada; cuestión que varía en la solución parsimoniosa en la que a los *remainders* se les estima como verdaderos, por lo que agrega más casos a los que se presentaron en la realidad y produce un resultado más minimizado al tomar más elementos con los cuales simplificar. Esta solución es más simple, ya que al tomar en cuenta configuraciones extras se eliminan con mayor facilidad los factores de la solución compleja gracias a la minimización.

4. Paraguay: el cuestionable giro a la izquierda

cuatro años en el gobierno, Lugo quedó prácticamente abandonado, pues apenas 5% de los diputados (cuatro en total) respaldaron al presidente (véase la gráfica 4).

Gráfica 4. Evolución de la oposición al gobierno de Fernando Lugo



Fuente: Elaboración propia con base en datos de PELA e información periodística.

Por otro lado, en un entorno en el que priman las redes clientelares, las cadenas de favor y una aceitada estructura de corrupción, salta a la vista la poca confianza que los legisladores profesaban a la mayoría de las instituciones del país, salvo a la Iglesia católica, que tradicionalmente ha representado los valores más conservadores, y el Congreso, cuya valoración es muy positiva como producto del “efecto entrevista”.

Sin embargo, llama poderosamente la atención cómo a raíz de 2008 la confianza hacia las Fuerzas Armadas entre los legisladores dio un salto cualitativo, al pasar de “Poca” (1998: 47.7%; 2003: 45.7%) a “Bastante” (2008: 66.7%), y al mismo tiempo cómo descendió la confianza hacia el presidente de la República de “Mucha” (1998: 32.8%; 2003: 56.2%) a “Poca” (2008: 50%) (Observatorio de Élités Parlamentarias de América Latina, 2008, 2015).

Estos datos demuestran que Lugo era una especie de “intruso en casa ajena” que no merecía la confianza de los actores tradicionales, quienes además radicalizaron algunas de sus posturas en una clara actitud

defensiva en la preservación de sus intereses tanto de clase dominante cuanto de carácter patrimonial (Cerna y Solís, 2012).

El motivo que dio pie al juicio político que terminó destituyendo al presidente Lugo fue la matanza de once campesinos y seis policías en un intento de desalojo de labradores sin tierra en una controvertida propiedad de la empresa ganadera Campos Morombí perteneciente a un político y empresario colorado en la zona de Curuguaty, departamento de Canindeyú. El incidente fue muy significativo por la pérdida de vidas humanas, así como por tratarse de un hecho violento en torno a uno de los principales ejes de campaña del propio Lugo como lo era la reforma agraria. Reforma que fue sistemáticamente bloqueada en el Congreso por los intereses de buena parte de la clase política —colorada y liberal, principalmente— a las rentas del campo y al modelo sojero (Cerna y Solís, 2012).

Sin embargo, también hay que señalar que los avances de la administración en materia agraria fueron tímidos y en algún punto contradictorios, pues el propio presidente llegó a ofrecer apoyo a los terratenientes para preservar sus campos antes que atender a los campesinos que reclamaban la recuperación de sus tierras (Uharte, 2012; Palau, 2010). Lo ocurrido en Curuguaty en junio de 2012 es una muestra de esa decisión política de preservar los intereses de la clase terrateniente del país. Una decisión que derivó en desastre, y por ende en el pretexto ideal para deshacerse de un presidente que se había tornado incómodo, no tanto por su ideología política cuanto por su inhabilidad para tender puentes de diálogo con sus socios en el gobierno y con los grupos parlamentarios en el Congreso.

En palabras de Cerna Villagra y Solís Delgadillo (2012), Lugo no tuvo control de riesgos, lo que a la postre no solo le costó la pérdida de los apoyos de los movimientos sociales y las organizaciones campesinas, sino incluso de sus socios de gobierno más distantes, con lo que permitió, según Alcántara (2012), que la tenaza implementada por liberales y colorados resultara coherente dada la mínima distancia ideológica y de intereses que los separa.⁶

⁶ Con los hechos consumados, los partidarios de Lugo y algunas voces del mundo académico e intelectual no han dudado en llamar a lo ocurrido golpe de Estado parlamentario, no obstante, quienes escribimos esto preferimos adherirnos a la figura que en realidad es: un juicio político. Esto en aras de evitar el estiramiento conceptual (Sartori, 1979 [2012]), y, sobre todo, en virtud de preservar el vocabulario del que somos

La distribución territorial del poder

Una última cuestión a tomar en cuenta en torno a la inexistencia de un giro a la izquierda en Paraguay tiene que ver con la distribución territorial del poder, es decir, cuán grande es la fuerza de los partidos en los distintos departamentos del país para controlar por la vía electoral los espacios de poder político. Una aproximación a los resultados electorales a nivel subnacional desde 1998, permite apreciar que ha habido muy pocos cambios en la cartografía del poder, pues son los partidos tradicionales los que dominan ampliamente esta arena, y esto, por supuesto, no es una cuestión menor.

A diferencia de lo que se observa en el ámbito nacional, en donde se ha visto un desplazamiento de un sistema de partido hegemónico o predominante hacia otro de pluralismo moderado en el que otras fuerzas políticas han alcanzado peso y relevancia, en la arena departamental se aprecia una fuerte tendencia hacia el bipartidismo en el que los partidos tradicionales concentran la gran mayoría de las preferencias electorales. No obstante, la ANR sobresale porque controla, y siempre lo ha hecho, la mayoría de estos espacios de poder desde el retorno a la democracia.

Si bien es cierto que en la mayoría de los departamentos del país se han vivido procesos de alternancia política, no se puede ocultar que, tras cada proceso electoral, el Partido Colorado siempre ha controlado más de la mitad de las gobernaciones e incluso ha dominado cuatro de cada cinco departamentos como ocurrió en 1998.⁷

El cuadro 10 ilustra cómo en los últimos cuatro procesos electorales tanto la ANR como el PLRA se han repartido el poder de las gobernaciones del país. Esto es muy significativo porque refuerza uno de los argumentos centrales propuestos para este trabajo: demostrar que la izquierda en Paraguay dista mucho de tener una presencia competitiva en el país y que no controla ni lo ha hecho antes ningún territorio subnacional por sí misma. El cuadro destaca la distribución de las gobernaciones por partido en 2008, donde se pueden apreciar dos cosas: a) que no hay

depositarios quienes hacemos ciencia política, y que nos distingue de los “opinadores” de la política, tal como lo refiere Pasquino (1997 [2011]).

⁷ A nivel subnacional solo seis departamentos han permanecido bajo el control hegemónico de la ANR: Guairá, Caazapá, Itapúa, Paraguari, Alto Paraguay y Canindeyú.

una desviación en la tendencia de preferencias por parte de los electores, pues estos se siguieron decantando por los partidos tradicionales, y b) que el PLRA fue el partido que sacó más provecho a la coyuntura de esas elecciones generales, pues obtuvo sus mejores resultados en la historia en ese nivel (Cerna y Solís, 2017).

Cuadro 10. Partidos triunfadores en las elecciones para gobernador a nivel departamental y principal tendencia (1998-2013)

	1998	2003	2008	2013	
Departamento	Partido político	Partido político	Partido político	Partido político	Tendencia
Concepción	Alianza (PLRA-PEN)*	PLRA	PLRA	ANR	Competitivo
San Pedro	ANR	ANR	PLRA	ANR	Alternancia
Cordillera	ANR	ANR	PLRA	PLRA	Competitivo
Guairá	ANR	ANR	ANR	ANR	Bastión colorado
Caaguazú	ANR	PLRA	PLRA	ANR	Competitivo
Caazapá	ANR	ANR	ANR	ANR	Bastión colorado
Itapúa	ANR	ANR	ANR	ANR	Bastión colorado
Misiones	ANR	ANR	PLRA	ANR	Alternancia
Paraguarí	ANR	ANR	ANR	ANR	Bastión colorado
Alto Paraná	ANR	PLRA	ANR	ANR	Alternancia
Central	Alianza (PLRA-PEN)	PLRA	PLRA	PLRA	Bastión liberal
Ñeembucú	ANR	ANR	ANR	PLRA	Alternancia
Amambay	ANR	PLRA	PLRA	PLRA	Bastión liberal
Canindeyú	ANR	ANR	ANR	ANR	Bastión colorado
Pdte. Hayes	ANR	ANR	ANR	Alianza Pasión Chaqueña***	Alternancia
Alto Paraguay	ANR	ANR	ANR	ANR	Bastión colorado
Boquerón	Alianza (PLRA-PEN)	ANR	ADB**	ANR	Competitivo

* Partido Encuentro Nacional.

** Alianza Democrática de Boquerón.

*** La Alianza Pasión Chaqueña es una colación entre amplia y heterogénea entre el PLRA, PEN, el PPQ y el PDP.

Fuente: Elaboración propia con base en datos del TSJE.

Luego de cinco años, y tras la salida del gobierno nacional de Lugo primero, y de los liberales después, los colorados han vuelto al poder de

la mano de otro *outsider*; pero este retorno ha sido tan fuerte que en el ámbito de lo local han llegado a conquistar más de 70% de las gobernaciones, obteniendo de este modo sus mejores resultados desde 1998. Cabe pues preguntarse: ¿cómo se puede hablar de giro a la izquierda en un país en el que este campo ideológico no ha sido capaz de superar 10% de la votación en elecciones nacionales y nunca ha controlado ningún territorio subnacional? En ese sentido, la llegada de Lugo se explica más como resultado de una coyuntura de votantes cansados de la ANR, y de colorados enconados y divididos que distribuyeron sus votos entre otras alternativas, de las cuales la APC resultó ser la estructura más beneficiada.

Que Lugo haya encabezado la alianza no significa necesariamente que triunfó la izquierda cuando, como se ha visto aquí, el mayor caudal de votos que recibió su fórmula presidencial provino del PLRA y de ciudadanos que sufragaron para castigar a la ANR. En resumen, Lugo llegó al Palacio de López de la mano de votantes conservadores que antes de tener una visión de izquierda optaron por él y sus socios porque representaban simple y sencillamente un cambio que no trastocaba los valores tradicionales de la paraguayidad.

Conclusiones

Tras este recorrido se puede asegurar que en Paraguay no hubo un giro a la izquierda en el marco de la llegada de varios gobiernos de este signo a lo largo y ancho de América Latina. El caso paraguayo en ese sentido se presta a confusiones, pero en ningún momento puede considerarse como un caso atípico o desviado. Esto es así porque, como se ha visto en este capítulo, la tendencia histórica y mayoritaria de los votantes paraguayos se ha decantado por opciones de corte conservador, lo cual ni es un defecto ni una calamidad, sino simplemente una característica que describe una situación, así como en otros países de la región los votantes también comparten este perfil.

La fuerza y ascendencia de los partidos tradicionales paraguayos es tal que las identidades políticas en este país se definen en el propio seno familiar; uno nace —y no se hace— colorado o liberal. Esto ha afectado a la izquierda pues ha tenido muchas dificultades para abrirse paso en un

entorno en el que incluso ha sido señalada como “peligrosa”; eso sin contar los golpes y pérdidas que, a lo largo de los años, sobre todo durante el stronismo, sufrió.

En ese contexto es cuando menos verosímil puede considerarse que el triunfo de la APC encabezada por Fernando Lugo es un triunfo de la izquierda, sobre todo si se toman en cuenta los siguientes factores: a) que la izquierda nunca ha superado el umbral de 10% de los votos en unas elecciones generales, y b) que no posee ningún bastión electoral en el ámbito departamental.

La APC fue un vehículo sui géneris que fue alimentado fundamentalmente por los votantes liberales clásicos que históricamente representan casi un cuarto de los votos válidos en cada elección, así como también por simpatizantes colorados que disgustados por las pugnas al interior de su partido migraron sus votos a otras opciones, entre las cuales la alianza de Lugo y los liberales resultó ser la más beneficiada. Esto da pie a afirmar que la llegada del exobispo de San Pedro a la primera magistratura del país se debió a una combinación de coyunturas que dividieron los votos, no así a la adhesión de ciudadanos que percibieron un proyecto de izquierda progresista.

Ya en el poder, la soberbia de Lugo de pensar que él y solo él había ganado la elección de 2008 tuvo serias consecuencias al momento de encontrar resistencia por parte de los ministros liberales, que a su vez controlaban la mayoría de las posiciones clave del gobierno. Esto, sumado a la intransigencia del presidente que nunca entendió la importancia de sostener buenas relaciones con el Legislativo, en donde estaba en franca minoría, trajo como resultado la activación del recurso más usado en la democracia paraguaya para resolver conflictos: el juicio político. Juicio que tuvo como consecuencia la efectiva destitución de un presidente que se había convertido en un estorbo para los intereses políticos de las élites tradicionales. No se avala aquí la destitución del presidente, no obstante, se entiende que la estrategia adoptada por liberales y colorados fue coherente si se echa un vistazo al historial de juicios políticos en el país, pero también ha sido el resultado de la inhabilidad política de un *outsider* que fue fagocitado por una clase política que en cuestión de valores no es muy distinta a él. La epifanía no es primavera, y en Paraguay no hubo un giro a la izquierda sino más bien un espejismo deformado.

Referencias

- ABC Color (2011). "Lugo destaca trabajos en obras públicas y ayuda para indígenas", [en línea], en ABC Color. Disponible en <<http://www.abc.com.py/nacionales/lugo-destaca-trabajos-en-obras-publicas-y-ayuda-para-indigenas-278041.html>>, consultado el 25 de abril de 2016.
- ABC Color (2008). "Hay temor de que se deterioren las relaciones entre Lugo y Federico", [en línea], en ABC Color. Disponible en <<http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/hay-temor-de-que-se-deterioren-las-relaciones-entre-lugo-y-federico-1096098.html>>, consultado el 25 de abril de 2016.
- Abente Brun, Diego (2007). "Paraguay en el umbral del cambio", *Revista de Ciencia Política*, volumen especial, pp. 221-233.
- Alcántara Sáez, Manuel (2012). "La crisis paraguaya desde la perspectiva de sus legisladores", [en línea], en *Infolatam*. Disponible en <<http://www.infolatam.com/2012/07/09/la-crisis-paraguaya-desde-la-perspectiva-de-sus-legisladores/>>, consultado el 25 de abril de 2016.
- Banco Central del Paraguay (s. f.). "Estadísticas 2003-2008", [en línea], en *Banco Central del Paraguay*. Disponible en <www.bcp.gov.py>, consultado el 27 de abril de 2016.
- Banco Mundial (s. f.). "País en datos", [en línea], en *Banco Mundial*. Disponible en <<http://datos.bancomundial.org/pais/paraguay>>, consultado el 26 de abril de 2016.
- Barreda, Mikel y Marc Bou (2010). "La calidad de la democracia paraguaya: un avance sobre caminos tortuosos", *América Latina Hoy*, núm. 55, agosto, pp. 133-161.
- Cerna Villagra, Sarah Patricia y Juan Mario Solís Delgadillo (2017). "Los resortes colorados del poder: nacionalización de los partidos y el sistema de partidos paraguayo (1998-2013)", *Colombia Internacional*, núm. 91, julio-septiembre, pp. 151-184.
- Cerna Villagra, Sarah Patricia y Juan Mario Solís Delgadillo (2012). "La crisis institucional de 2012 a la luz de las élites parlamentarias", *Boletín Élités Parlamentarias Latinoamericanas*, núm. 42, octubre.
- El Pueblo Presidente!* (2105). "Fernando Lugo asume presidencia paraguaya", [en línea], 15 de agosto. Disponible en <http://www.elpueblopresidente.com/INTERNACIONAL/150808_lugoparaguay.html>, consultado el 2 de mayo de 2016.

- Fretes Carreras, Luis Antonio (2012). "La consolidación democrática en Paraguay", *América Latina Hoy*, núm. 60, abril, pp. 67-82.
- Morínigo, José N. (2009). *Auge de la producción rural y crisis campesina*, Asunción, Fondec.
- Observatorio de Instituciones Representativas-Universidad de Salamanca (OIR-USAL) (s. f.). "Paraguay", [en línea], en *Legislatina*. Disponible en <<http://americo.usal.es/oir/legislatina/paraguay.htm>>, consultado el 1 de mayo de 2016.
- Observatorio de Élités Parlamentarias de América Latina (PELA) (2015). Disponible en <<http://americo.usal.es/oir/elites/>>, consultado el 1 de mayo de 2016.
- Observatorio de Élités Parlamentarias de América Latina (PELA) (2008). *Paraguay. Estudio 69*. Disponible en <[http://americo.usal.es/oir/elites/Eliteca/datosagregados/Paraguay/Marginales_Paraguay_69\[1\].pdf](http://americo.usal.es/oir/elites/Eliteca/datosagregados/Paraguay/Marginales_Paraguay_69[1].pdf)>, consultado el 1 de mayo de 2016.
- Organización de Estados Americanos (OEA) (s. f.). "Constitución Nacional de la República del Paraguay", [en línea]. Disponible en <http://www.oas.org/juridico/spanish/par_res3.htm>, consultado el 1 de mayo de 2016.
- Palau, Tomás (2010). "La política y su trasfondo. El poder real en Paraguay", *Revista Nueva Sociedad*, núm. 229, septiembre-octubre, pp. 134-150.
- Paraguay.com (2015). "Las 23 amenazas de juicio a Lugo", [en línea], en *Paraguay.com*. Disponible en <<http://www.paraguay.com/nacionales/las-23-amenazas-de-juicio-a-lugo-129833>>, consultado el 27 de abril de 2016.
- Pasquino, Gianfranco (2011). *Nuovo corso di scienza politica*, Bologna, Il Mulino.
- Pérez Liñán, Aníbal (2009). "Instrucciones para utilizar fs/QCA (versión 2.0 2007)", [en línea], en *Instituto de Iberoamérica, USAL*. Disponible en <http://www.pitt.edu/~asp27/USAL/Instrucciones_fsQCA.pdf>, consultado el 18 de abril de 2016.
- Pérez Liñán, Aníbal (2008). "Instituciones, coaliciones callejeras e inestabilidad política: perspectivas teóricas sobre las crisis presidenciales", *América Latina Hoy*, núm. 49, agosto, pp. 105-126.
- Presidencia de la República (2010). "Informe General de Gobierno Fernando Lugo Méndez", [en línea], en *Presidencia de la República*. Disponible en <http://catalogo.bacn.gov.py/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=4750>, consultado el 27 de abril de 2016.
- Ragin, Charles C. (2006). *User's Guide to Fuzzy-Set/Qualitative Comparative Analysis 2.0*, Tucson, University of Arizona.

4. Paraguay: el cuestionable giro a la izquierda

- Ragin, Charles C., Kriss A. Drass y Sean Davey (2006). *Fuzzy-Set/Qualitative Comparative Analysis 2.0*, Tucson, University of Arizona.
- Roa Bastos, Augusto (1974 [2011]). *Yo, el supremo*, Madrid, Debolsillo.
- Sartori, Giovanni (1979 [2012]). *La política. Lógica y método en las ciencias sociales*, México, FCE.
- Solís Delgadillo, Juan Mario y Sarah Patricia Cerna Villagra (2016). “De la mitra episcopal a la banda presidencial: la elección de Fernando Lugo y la caída del Partido Colorado en Paraguay (2008)”, en *Elecciones en Latinoamérica 1985-2015. 30 años de transformación democrática*, Buenos Aires, Dunker, pp. 119-129.
- Solís Delgadillo, Juan Mario y Sarah Patricia Cerna Villagra (2014). “El darwinismo guaraní: evolución y extinción de las especies políticas paraguayas (2013)”, *Revista Latinoamericana de Política Comparada*, núm. 8, pp. 95-117.
- Tribunal Superior de Justicia Electoral (2013, 2008, 2003, 1998). “Datos electorales para gobernadores”, [en línea]. Disponible en <<http://tsje.gov.py/>>.
- Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) (2008). *Cartografía electoral 2003-2008. Paraguay*, Asunción, TSJE.
- Uharte Pozas, Luis Miguel (2012). “El proceso de democratización paraguayo: avances y resistencias”, *América Latina Hoy*, núm. 60, abril, pp. 17-42.

5. ¿Giro a la derecha en Bolivia?

*Mario Torrico Terán**

El triunfo electoral de Evo Morales el 18 de diciembre de 2005 fue un acontecimiento notable que tuvo amplia atención académica y mediática en el continente. La llegada a la presidencia del líder del Movimiento al Socialismo (MAS) supuso un punto de inflexión de aquellos que no dejan lugar a dudas para quienes lo están viviendo. Por primera vez era presidente alguien claramente indígena que, además, reivindicaba sus orígenes y enarbolaba un discurso que planteaba la refundación del Estado. También por primera vez en más de veinte años ganaba una candidatura que no solo cuestionaba abiertamente el modelo económico de libre mercado que se había impulsado durante dos décadas en Bolivia, sino que lo acusaba de la pobreza extendida. Asimismo, resultaba una novedad que el partido gobernante no formaba parte del sistema de partidos que se había construido durante veinte años; es más, lo responsabilizaba de la corrupción e ineficiencia pública. En suma, Evo Morales y el MAS planteaban que el modelo estatal, el modelo económico y el sistema político debían ser remplazados.

El gobierno de Morales supuso la culminación de un periodo de crisis política en Bolivia en el que: a) Gonzalo Sánchez de Lozada, ganador de las elecciones de 2002, se vio forzado a renunciar y autoexiliarse en Estados Unidos luego de reprimir violentamente a sectores populares movilizadas en octubre de 2003, b) su vicepresidente, Carlos Mesa, lo remplazó pero fue incapaz de culminar el periodo de gobierno también por presiones sociales y firmó su renuncia veinte meses después, y c) las

* Profesor-investigador de la Flasco México.

autoridades del Poder Legislativo se hicieron a un lado de la línea de sucesión constitucional para que el presidente de la Corte Suprema de Justicia asumiera la presidencia del país y convocara a elecciones anticipadas. Sin embargo, el periodo 2002-2005, de intensa inestabilidad política, fue solo el punto culminante de un proceso gradual de desgaste de los partidos políticos y de desafección con el funcionamiento de la democracia, así como de intensificación de la protesta y de la movilización social. Por tanto, el triunfo del MAS no fue resultado de la coyuntura política de mediados de la década pasada, aunque ciertamente algunos aspectos coyunturales, como la recesión económica de inicios del siglo XXI, contribuyeron a que se produzca.

Durante los más de diez años en los que Evo Morales ha ocupado la presidencia de Bolivia se han impulsado importantes cambios que alteraron las reglas políticas, la distribución del poder, la identidad de los actores relevantes, el rol del Estado en la economía e incluso la distribución de la riqueza. El país del tercer gobierno del MAS es diferente al de 2005. En muchos sentidos hubo inclusión social y más democracia, pero en otros hubo concentración del poder y poca tolerancia a la disidencia. Entre esas luces y sombras se realizó el referéndum de febrero de 2016 en el cual la población rechazó una nueva postulación presidencial de Morales, prevista para 2019. Aunque por estrecho margen, fue la primera derrota electoral del actual presidente y para muchos el principio del fin de la hegemonía de su partido. Sin embargo, no pueden preverse los escenarios futuros sin examinar los factores que llevaron a Morales a la presidencia, los cambios institucionales y las políticas que su gobierno impulsó, los resultados económicos de su gestión y si existe un fortalecimiento político de la oposición. El presente capítulo realiza dicho análisis.

¿Qué propició el giro a la izquierda en Bolivia?

Con el gobierno de Hernán Siles Zuazo (1982-1985)¹ comenzó el periodo democrático contemporáneo después de la salida definitiva de los militares del poder y tuvo que lidiar con una situación explosiva que mar-

¹ Hernán Siles había ganado las elecciones presidenciales de 1980, pero no pudo tomar posesión del cargo a raíz del golpe militar de Luis García Meza. Tras la caída de este

có el funcionamiento de la democracia en los veinte años siguientes. Siles enfrentó una mayoría opositora recalcitrante en el Congreso que rechazaba cualquier iniciativa para hacer frente a la peor crisis hiperinflacionaria de la historia, lo que agravó el deterioro de la economía y lo llevó a iniciar una huelga de hambre como acción desesperada de protesta. Ante la parálisis política, la emergencia económica, las masivas manifestaciones en las calles y el temor de un nuevo retroceso autoritario, los principales líderes (con la mediación de la Iglesia católica) acordaron el adelantamiento de las elecciones. El episodio crítico dejó dos aprendizajes traumáticos en la política boliviana: la estabilidad económica debe ser una prioridad y para gobernar se requiere de mayorías legislativas.

A partir de 1985 se inició un periodo de competencia centripeta en la política boliviana en la que los sucesivos gobiernos aplicaron políticas económicas restrictivas y de libre mercado para garantizar la estabilidad, y establecieron coaliciones de gobierno que incluyeron al menos a un partido adicional al del presidente para otorgar mayoría congresal al oficialismo (Pachano, 2006; Mayorga, 2008; Romero, 2016). Así, se llegó a un consenso interpartidista en torno a garantizar la *estabilidad* y la *gobernabilidad*. La primera se pudo alcanzar en virtud de los acuerdos firmados con organismos financieros internacionales mediante los cuales se facilitaron recursos para la reactivación a finales de los ochenta y principios de los noventa² y por el desprestigio de las políticas de intervencionismo estatal en la economía que antecedieron a la crisis hiperinflacionaria. La segunda fue posible gracias al diseño del sistema electoral presidencial.

Según la Constitución Política de 1967 resultaba electo como presidente quien obtuviera mayoría absoluta de votos en las elecciones, y en caso de que ningún candidato obtuviera esa victoria el Congreso decidiría la presidencia entre los tres candidatos más votados.³ Esta regla generó

y dos breves gobiernos de transición, finalmente pudo asumir la presidencia con la anuencia del Congreso a finales de 1982.

² Por ejemplo, el acuerdo Enhanced Structural Adjustment Facility (ESAF) firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) el 27 de julio de 1988 con fecha de conclusión al 31 de mayo de 1994, comprometía a tres sucesivos gobiernos a cumplir un programa de estabilización y de reformas estructurales avalado por este organismo para poder acceder a financiamiento externo multilateral y bilateral. Un recuento de los acuerdos firmados por Bolivia con el FMI se encuentra en Morales (2012).

³ Este sistema también existió en Chile (antes de la dictadura de Pinochet), en El Salvador hasta 1983 y en Guatemala hasta 1985 (Torricó, 2014).

incentivos para la proliferación de candidaturas en la primera vuelta con miras a ganar fuerza negociadora para la segunda vuelta congresal. Debido a la fragmentación del electorado, todos los presidentes entre 1982 y 2002 tuvieron que ser designados por el Legislativo, lo que propició que se formaran coaliciones interpartidistas para elegir al gobernante que luego se transformaban en coaliciones de gobierno,⁴ las que le garantizaban al oficialismo mayoría entre los legisladores para poder gobernar.⁵ El cuadro 1 presenta un resumen de los resultados electorales entre 1980 y 2014 y de las coaliciones de gobierno establecidas.

Cuadro 1. Elecciones presidenciales (1980-2014)

<i>Año de elección presidencial</i>	<i>Núm. de candidatos</i>	<i>Núm. efectivo de partidos</i>	<i>Porcentaje de votos del ganador</i>	<i>Votos de MNR+ADN+MIR</i>	<i>Partido del presidente</i>	<i>Partidos en la coalición de gobierno</i>
1980	13	4.35	38.74%	75.72%	MNRI	MIR
1985	18	4.58	32.83%	73.37%	MNR	ADN
1989	10	5.02	25.64%	72.64%	MIR	ADN
1993	14	5.15	33.84%	53.87%	MNR	UCS, MBL
1997	10	5.91	22.30%	57.30%	ADN	MIR, CON-DEPA, UCS, NFR
2002	11	5.77	22.50%	42.20%	MNR	MIR, UCS, NFR
2005	8	2.62	53.72%	6.46%	MAS	-
2009	8	2.06	64.20%	-	MAS	-
2014	5	2.25	61.36%	-	MAS	-

Fuente: Elaboración propia.

El cuadro 1 revela varias características de la democracia boliviana y de los cambios que ocurrieron a partir de la llegada de Evo Morales a la presidencia. Así, podemos observar que entre 1980 y 2002: a) el sistema de partidos era fragmentado, ya que en ninguna elección hubo menos de

⁴ La única excepción fue el gobierno de Hernán Siles, el cual si bien contaba con coalición interpartidista de gobierno no gozaba de mayoría legislativa, lo que propició su salida anticipada.

⁵ Este rasgo del régimen político en Bolivia hizo que se le conozca en la literatura como presidencialismo atenuado (Mayorga, 1992), presidencialismo híbrido (Gamarra, 1992), presidencialismo parlamentarizado (Mayorga, 2003) o semipresidencialismo-semiparlamentarismo (Verdesoto, 2005).

diez candidaturas; *b*) también existió fragmentación electoral, puesto que ninguna candidatura se acercó siquiera a la mayoría absoluta de votos requerida para llegar al gobierno en la primera vuelta electoral. Esa fragmentación aumentó en el tiempo, lo que se refleja en que el porcentaje de votos obtenidos por los candidatos ganadores fue cada vez menor (¡en 1997 y en 2002 el vencedor no llegó siquiera a 23%!) y en que el número efectivo de partidos era cada vez mayor; *c*) existían tres partidos dominantes (Movimiento Nacionalista Revolucionario, Acción Democrática Nacionalista y Movimiento de Izquierda Revolucionaria)⁶ que en los ochenta concentraban tres cuartas partes del voto, pero paulatinamente su apoyo electoral fue disminuyendo, lo que muestra un descontento creciente de la población. Los líderes de esos tres partidos en algún momento ocuparon la presidencia, y *d*) debido a la creciente fragmentación del voto, las coaliciones de gobierno debieron incorporar cada vez a más partidos para garantizar que el Ejecutivo tuviera mayoría en el Congreso.

Todo lo anterior cambió a partir de las elecciones de 2005, en que resultó vencedor Evo Morales. Desde entonces el número de candidatos presidenciales disminuyó (aunque la tendencia a la baja venía desde antes) y en 2014 se observó el mínimo en más de treinta años; desapareció la fragmentación del voto y se produjo más bien una concentración del mismo; los tres partidos principales desaparecieron y, con ellos, todo el sistema de partidos; el MAS emergió como partido dominante y pudo llegar a gobernar sin necesidad de establecer ninguna coalición de gobierno en virtud de que todos sus triunfos fueron por mayoría absoluta (en 2005 eso fue una novedad, en 2014 ya era algo previsible), con lo que también se esfumó el multipartidismo. ¿Qué propició una transformación de tal magnitud?

La información del cuadro 1 muestra con claridad el creciente desgaste del sistema de partidos ante la población, en particular a partir de los noventa. Ante ese deterioro surgieron partidos liderados por figuras públicas externas a la política, siendo los más importantes Conciencia de Patria (Condepa) y Unidad Cívica Solidaridad (UCS). El primero lo fundó Carlos Palenque, excantante, dueño de un canal de televisión y conductor de programas populares en donde la gente externaba sus problemas

⁶ MNR, MIR y ADN, respectivamente. El Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda (MNRI) de Siles era la corriente izquierdista del MNR.

personales y recibía ayuda; en tanto que el segundo fue creado por Max Fernández, dueño de la cervecería más grande de Bolivia y filántropo que regalaba obras públicas en los pueblos más pobres y en algunas ciudades. Ambos crecieron en popularidad con un discurso de crítica a los “partidos tradicionales” y lograron cierto éxito electoral (en especial a nivel municipal, ya que sus partidos gobernaron durante varias gestiones las dos ciudades más grandes, La Paz y Santa Cruz), pero terminaron adhiriéndose a la lógica de pactos y fueron parte de las coaliciones de gobierno.⁷ En consecuencia, se sumaron al consenso del sistema de partidos de garantizar la estabilidad económica y la gobernabilidad política. No obstante, el descontento de los electores crecía, lo que abría la posibilidad de que surgieran otras opciones políticas que pudieran explotarlo.

La desafección ciudadana con los partidos no pasó desapercibida por ellos, por lo que en los noventa aprobaron varios cambios normativos y una reforma constitucional dirigidos a fortalecer a las instituciones políticas, a dar mayor credibilidad sobre su funcionamiento y a acercar el sistema de partidos a la población. Entre los principales se pueden mencionar:

- 1) Se definió que los vocales de la Corte Nacional Electoral (CNE) debían tener independencia partidista y serían nombrados por el voto de dos tercios del Congreso (1994).
- 2) Para fortalecer al Poder Judicial se creó el Tribunal Constitucional, el Consejo de la Judicatura y la Defensoría del Pueblo. Todos sus titulares y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia también se nombrarían por dos tercios del Congreso (1994).
- 3) Se impulsó la descentralización administrativa con la Ley de Participación Popular (1994), que permitió la transferencia de recursos y competencias a favor de los municipios.
- 4) Se reconocieron territorios a grupos indígenas de tierras bajas (a partir de 1990), se proclamó en la Constitución el carácter pluricultural y multiétnico del país y se emprendió una reforma educativa que impulsaba la educación bilingüe, en castellano y en alguna lengua indígena (1994).

⁷ UCS se manejó con mucha habilidad política y fue parte de tres gestiones presidenciales consecutivas.

- 5) Se reemplazó el sistema electoral de la Cámara de Diputados de representación proporcional con listas cerradas y bloqueadas (que hacía que los electores solo pudieran votar por algún candidato presidencial, y a partir de esos votos se conformaban también las dos cámaras del Congreso) por un sistema mixto en el que la mitad de los diputados era electa a partir de listas partidarias y la otra mitad directamente por los ciudadanos en circunscripciones uninominales y por mayoría simple (vigente a partir de 1997).
- 6) Se adoptaron cuotas de género en las candidaturas al Senado, a la Cámara de Diputados y en las elecciones municipales (25% en 1997 y 30% en 1999).
- 7) Se promulgó una Ley de Partidos Políticos (1999) dirigida a regular la vida partidaria, promover su democratización interna y disponer controles en su financiamiento, para lo que se estableció una subvención pública permanente que facilitara su funcionamiento. La CNE, además, se encargaría de la fiscalización de esos recursos (Romero, 2016).

Los cambios mencionados fueron sin lugar a dudas un avance democrático. Reformas similares se emprendieron en otros países y han sido positivas para la democracia (aunque obviamente son insuficientes para garantizar su buen funcionamiento),⁸ en especial las que tienen que ver con el nombramiento de autoridades a través de mayoría calificada en el Congreso, con descentralización administrativa, con cuotas de género y con institucionalización de los partidos. Sin embargo, no detuvieron el desprestigio del sistema de partidos, e incluso la satisfacción con la propia democracia se llegó a deteriorar de forma importante. Así, entre 2001 y 2004 un 92% en promedio de los encuestados por Latinobarómetro señaló no confiar en los partidos, y 82% declaró sentirse insatisfecho con la democracia. Ambos porcentajes son los más altos que esa encuesta registró históricamente en Bolivia. ¿Por qué?

El principal mecanismo de preservación de las coaliciones de gobierno era que a los partidos miembros se les permitía establecer prácticas clientelares y de prebendas en los órganos públicos a su cargo (Pachano,

⁸ Al respecto, véase Payne *et al.* (2006), Stein *et al.* (2006) y los estudios contenidos en Casas-Zamora *et al.* (eds.) (2016).

2006). Así, cada ministerio, prefectura de departamento, órgano desconcentrado, etc. era asignado a un partido de la coalición oficialista y, a partir de ese acuerdo inicial, se distribuían todos los cargos públicos, tanto a militantes como a familiares de líderes políticos. Si emergían escándalos en la prensa por nepotismo, conflicto de intereses o corrupción, la mayoría legislativa de la coalición de gobierno se encargaba de bloquear cualquier intento de fiscalización o investigación que se planteaba en el Congreso (Lozada y Saavedra, 1998). En la medida en que las coaliciones se fueron haciendo más numerosas por la fragmentación del voto, se redujeron los espacios a disposición de cada partido, que de todas formas debía satisfacer las demandas de recursos de sus dirigentes y de su militancia. Ello provocó una multiplicación de los escándalos de corrupción y la percepción pública de que el fenómeno estaba fuera de control. Por ejemplo, en 1996 el 75% de los encuestados por Latinobarómetro señaló que la corrupción había “aumentado mucho”, cifra que en 2001 se incrementó y llegó a 91 por ciento.⁹

En el plano económico se aplicó desde 1985 un programa de ajuste económico que fue exitoso en términos de detener la crisis hiperinflacionaria, pero que tuvo altos costos sociales debido a un severo ajuste fiscal que provocó el despido de miles de trabajadores de empresas públicas, en particular del sector minero (ILDIS-CEDLA, 1994). En los noventa se emprendieron las reformas económicas de libre mercado que el FMI y el Banco Mundial impulsaron en América Latina (destacando la privatización de empresas estatales y la apertura comercial), en cuya aprobación resultaron clave las mayorías legislativas de las coaliciones de gobierno. Con ello se mantuvo la anhelada estabilidad económica (inflación de un dígito año tras año y cuentas fiscales en equilibrio); sin embargo, aunque el crecimiento económico volvió a valores positivos, fue menor respecto a las expectativas que los propios gobernantes habían creado (4% anual en los noventa en promedio) y se concentró en los sectores de mayores ingresos. Así, entre 1990 y 2000 el índice de Gini pasó de 42.2 a 54.2 y la pobreza aumentó en 15 puntos

⁹ Las opciones de respuesta eran que la corrupción había: a) aumentado mucho, b) aumentado poco, c) permanecido igual, d) disminuido poco, y e) disminuido mucho. Esa pregunta se modificó en ediciones posteriores de la encuesta, con lo que se perdió comparabilidad con el pasado.

porcentuales,¹⁰ convirtiendo a Bolivia en el país más desigual de América Latina y en el más pobre de Sudamérica.

La recesión económica de inicios de este siglo a raíz de las crisis económicas de Brasil y Argentina empeoró la situación (el crecimiento por habitante entre 1999 y 2003 fue prácticamente nulo: 0.08%) y el descontento social estalló. A partir de la guerra del agua en Cochabamba en 2000 se produjo una serie de episodios en los que la protesta popular movilizada se enfrentó a las fuerzas del orden. En ese clima de insatisfacción Evo Morales obtuvo un sorpresivo segundo lugar en las elecciones presidenciales de 2002, lo que muestra que parte creciente del electorado seguía buscando una alternativa política distinta a los partidos tradicionales. En síntesis, fue la combinación de las malas prácticas políticas de los partidos con los escasos resultados positivos de la economía lo que generó el descrédito social de este sistema. Esas condiciones facilitaron la llegada al poder del MAS y el giro a la izquierda en Bolivia.

El Movimiento al Socialismo y su agenda de reformas

Las reformas mencionadas en el apartado anterior tuvieron algunos efectos no anticipados por los principales líderes políticos que contribuyeron al debilitamiento del sistema de partidos. Así, la transferencia de recursos que se generó con la Ley de Participación Popular fortaleció a los municipios y otorgó protagonismo político a los alcaldes de las principales ciudades (Romero, 2016), varios de los cuales buscaron la presidencia, lo que fragmentó aún más al electorado.¹¹ En municipios rurales se potenció a dirigentes locales a expensas del control de las dirigencias partidistas. Por otro lado, la elección de diputados uninominales permitió que líderes campesinos pudieran acceder al Congreso a partir de un capital político propio. Entre ellos se encontraba

¹⁰ Según datos de los indicadores de desarrollo mundial del Banco Mundial. Disponibles en <<http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators>>.

¹¹ El más exitoso de ellos fue Manfred Reyes Villa, alcalde de Cochabamba entre 1993 y 2000, quien fundó Nueva Fuerza Republicana (NFR) y contendió en las elecciones de 2002, obteniendo el tercer lugar. Su partido fue parte de las coaliciones de gobierno de Bánzer (1997-2002) y Sánchez de Lozada (2002-2003). En 2009 volvió a competir por la presidencia, pero fue derrotado de manera contundente por Evo Morales.

Evo Morales, dirigente de los productores de hoja de coca, quien en 1997 fue el candidato que en toda Bolivia obtuvo el porcentaje de votos más alto en su circunscripción. Finalmente, la Ley de Partidos Políticos exigía la democratización de estos, pero claramente no estaban preparados para ello porque su funcionamiento siempre fue vertical y sus líderes eran más bien caudillos (Sánchez de Lozada en el MNR, Bánzer en ADN y Paz Zamora en el MIR). Dicha ley generó profundas pugnas partidistas y profundizó su desprestigio.

De forma simultánea al creciente deterioro de la imagen de los partidos y de la aprobación de las reformas políticas de los noventa, la dirigencia nacional campesina aprobó en su VI Congreso la creación de un *instrumento político* que estaría libre de la intromisión de los partidos, que surgiría de las comunidades y se convertiría en un verdadero poder político, y que fue nombrado Asamblea por la Soberanía de los Pueblos (ASP). Esta nació con la finalidad de “transformar la estructura estatal excluyente y racista que desconoce a las naciones originarias y que es producto de la mentalidad colonialista tanto de la derecha como de la izquierda política” (CSUTCB, 1994).¹² Frente al diagnóstico de que “los partidos nos dividen” (Zuazo, 2009), el movimiento campesino planteó que la única forma de conseguir respuesta a sus demandas era contando con representantes propios al interior de las estructuras del poder estatal y, así, combinar la acción política en esas instancias con la movilización y presión social (Torrico, 2006). En las resoluciones del mencionado congreso se resume esta estrategia de forma clara: “utilizar los espacios que proporciona la democracia” (CSUTCB, 1994).

El instrumento político campesino tuvo su primera prueba en las elecciones municipales de 1995, a las que se presentó con el nombre prestado de Izquierda Unida. En ellas ganó diez alcaldías, todas en la zona cocalera del trópico de Cochabamba. El éxito se repitió en las elecciones generales de 1997, en las que ganó cuatro diputaciones uninominales y aglutinó 70% de los votos de la provincia Chapare, la más poblada de Bolivia y en la que se concentraron los esfuerzos de erradicación de la hoja de coca de los distintos gobiernos con asistencia estadounidense. Esos resultados le otorgaron al sector cocalero el liderazgo

¹² Esta postura tiene origen en los planteamientos de reivindicación étnico-cultural campesina del *katarismo* de inicios de los setenta. Al respecto, véase Rivera (2003).

dentro del movimiento campesino, incluso a expensas de la dirigencia aymara del altiplano andino, que era la que tenía una agenda plenamente indigenista (relacionada con derechos y territorio). En cambio, la demanda principal de los cocaleros era que se eliminara la erradicación de plantaciones de coca.

Movimiento al Socialismo es el nombre con el que el instrumento político campesino se ha presentado a todas las elecciones desde 2002. Debido a que se trata de un partido que surge de las organizaciones campesinas, son estas su base de afiliación; es decir, los individuos miembros de un sindicato campesino en automático quedan afiliados al MAS. Ello le ha proporcionado una amplia base social y el dominio del voto rural.¹³ Sin embargo, en su éxito también contribuyó el vasto respaldo de sectores urbanos a su propuesta electoral (Mayorga, 2008). En 2005 la candidatura de Evo Morales fue la única que abordó todos los temas críticos relevantes: crisis de legitimidad del Estado, crisis del sistema político (en especial del sistema de partidos) y crisis del modelo económico (en un contexto de recesión). Para hacerles frente propuso:

- 1) Reducir los gastos del Estado (a través de una nueva escala salarial para todo el sector público, eliminando los gastos reservados, prohibiendo la subvención a los partidos políticos, reduciendo los sueldos de diputados y senadores, y anulando los salarios de los diputados suplentes).
- 2) Recuperar el protagonismo central del Estado en el desarrollo (regulando el mercado, controlando el excedente económico y volviendo a constituir empresas públicas en sectores estratégicos que permitan recuperar e industrializar los recursos naturales).
- 3) Convocar a una Asamblea Constituyente para refundar el país y desterrar el Estado neoliberal, excluyente, discriminador y colonial (Torrico, 2016a).

¹³ El voto campesino e indígena no solo se ubica en el ámbito rural, pero ciertamente este es muy importante en términos electorales en Bolivia. Así, a inicios de la década pasada solo 60% de la población se concentraba en las ciudades, lo que contrasta notablemente con, por ejemplo, los casos de Argentina, Chile, Brasil o México, donde los habitantes urbanos eran en esos años 90, 86, 81 y 75% de la población, respectivamente.

En la propuesta electoral del MAS se puede apreciar su carácter políticamente antisistémico y su visión intervencionista de la economía, que contrasta con el consenso neoliberal de los partidos tradicionales. El contundente triunfo que obtuvo le permitió llegar al gobierno sin requerir una segunda vuelta congresal y, además, obtener mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. No obstante, debido a que su votación se concentró en los departamentos del occidente (que son los más poblados) no alcanzó esa mayoría en el Senado, y en las elecciones prefecturales que se realizaron simultáneamente solo pudo ganar en tres departamentos.¹⁴ Ambos hechos generaron conflictos posteriores, pero de cualquier manera el partido de Evo Morales tenía suficiente apoyo social y electoral como para emprender las reformas planteadas.

Cambios institucionales del gobierno del MAS

En su discurso de posesión como presidente, el 22 de enero de 2006, Evo Morales anunció que una de las primeras acciones de su gobierno sería re-fundar Bolivia mediante una Asamblea Constituyente. Así, en julio de ese año se eligió a los asambleístas en elecciones en las que el Movimiento al Socialismo obtuvo nuevamente mayoría absoluta, aunque no pudo alcanzar dos tercios de mayoría calificada que requería para aprobar de manera unilateral el proyecto constitucional que luego debía ser ratificado por la población en un referéndum. A ello se sumó que el nuevo partido gobernante no contaba con mayoría en el Senado ni entre los nuevos prefectos electos. La oposición (que estaba conformada por varios partidos y por diversas fuerzas regionales) se aglutinó en un solo bloque y ejerció un veto que impedía avanzar en la agenda de reformas oficialista, lo que originó serias pugnas. Así, la primera gestión presidencial de Morales fue la de mayor conflicto y en la que la dinámica política cambió. Desde entonces el sistema político ya no está estructurado en torno a partidos, sino a dos bloques: el MAS y el antimasismo (Romero, 2016).

¹⁴ Hasta 2005 los prefectos (que son las máximas autoridades en los departamentos) eran designados por el presidente. A partir de ese año se los elige por voto popular. Una explicación detallada al respecto se encuentra en Torrico (2016b).

Para hacer frente al bloque opositor, varias organizaciones campesinas e indígenas afiliadas al Movimiento al Socialismo y otras cercanas a él fundaron el Pacto de Unidad, una instancia de coordinación que redactó la propuesta constitucional oficialista y que articuló los intereses de esos sectores en la Asamblea Constituyente (Zuazo, 2010).¹⁵ El desarrollo del cónclave no pudo ser más conflictivo. Tan solo la discusión del reglamento de debates duró alrededor de siete meses, las discusiones se estancaron en un tema que no era sustancial (si la capital debía ser Sucre o La Paz), hubo enfrentamientos entre civiles y para la aprobación en lo general del nuevo texto constitucional los asambleístas del oficialismo tuvieron que reunirse en un cuartel militar, bajo el resguardo de sectores movilizadores del Pacto de Unidad, en una sesión a la que no se permitió el ingreso de los asambleístas de la oposición. Para la aprobación en detalle se trasladó la sede de la Asamblea a otra ciudad (de Sucre a Oruro), medida que tuvo que aprobarse en el Congreso. Para tener éxito en ambas instancias se repitió la estrategia del MAS: se cercaron las sesiones con sectores movilizadores y se impidió por la fuerza que ingresaran los miembros de la oposición (Deheza, 2008).

Frente a las acciones del gobierno, la oposición también pasó a la ofensiva. En los departamentos en que gobernaban los prefectos opositores se efectuaron referéndums para forzar el reconocimiento de autonomías departamentales (que le quitaban competencias al gobierno central), los que a pesar de su ilegalidad generaron mayor tensión. El clima de enfrentamiento alcanzó su apogeo en septiembre de 2008, cuando un choque entre simpatizantes y opositores al gobierno en el departamento de Pando arrojó el saldo de veinte personas muertas y el apresamiento del prefecto de ese departamento. Entre acusaciones e investigaciones,¹⁶ el oficialismo

¹⁵ Compuesto por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB), la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo (Conamaq), la Federación Nacional de Mujeres Indígenas, Originarias y Campesinas de Bolivia Bartolina Sisa (FNMBC-BS), la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC), el Movimiento de Trabajadores Campesinos Sin Tierra de Bolivia (MST-B), la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEMB) y la Asociación Nacional de Regantes y Sistemas Comunitarios de Agua Potable y Saneamiento (Anarescapys).

¹⁶ El suceso fue investigado por una Comisión de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

y la oposición se sentaron en las instalaciones del Congreso a negociar el texto constitucional aprobado en Oruro. En sentido estricto ese acto era ilegal, pero la posibilidad de mayores enfrentamientos era palpable. Además, el Pacto de Unidad había organizado un nuevo cerco para forzar a que se convocara al referéndum que aprobara la nueva Constitución, lo que podía derivar en nuevos episodios de violencia.

Los cambios introducidos al proyecto constitucional aprobado en la Asamblea Constituyente fueron sustanciales y afectaron a casi una cuarta parte de sus artículos (Ugla, 2009). A pesar del descontento de los sectores movilizadas del Pacto de Unidad, ese texto fue el que se sometió a consulta popular. Finalmente, el referéndum constitucional se realizó el 25 de enero de 2009 y allí fue aprobada la nueva Constitución con el 61.4% de los votos a favor.

Los conflictos del periodo 2006-2009 se debieron al choque entre una coalición política declinante (compuesta por los miembros de los partidos tradicionales) que aún retenía espacios de poder desde los que dificultaba los cambios impulsados por el gobierno, y una ascendente (el MAS y sus aliados del Pacto de Unidad) que estaba poco dispuesta a negociar su agenda de reformas. De ese periodo escabroso salió fortalecida la última, no solo porque logró que se aprobara una nueva Constitución con amplio respaldo social, sino también porque los líderes de la anterior terminaron pagando la mayor parte del costo del enfrentamiento. Poco antes de los episodios trágicos de Pando se efectuó un referéndum revocatorio del presidente y de todos los prefectos, en el que Evo Morales fue ampliamente respaldado y dos prefectos de la oposición fueron depuestos.¹⁷ La consulta había sido aprobada en un intento del gobierno y de un sector de la oposición de destrabar la situación política. Así, la destitución de las autoridades departamentales de la oposición debilitó a esta notablemente.

Los cambios en las reglas formales que efectuó el Movimiento al Socialismo durante sus más de diez años en el poder son básicamente los contenidos en la nueva Constitución. Eso explica su poca disposición a negociar hasta que hubo serios enfrentamientos y la posibilidad de que la violencia escalara aún más. Sin embargo, a pesar de los cambios in-

¹⁷ Morales logró el respaldo de más de 67% de los electores. Los prefectos derrotados fueron Manfred Reyes Villa, de Cochabamba, y José Luis Paredes, de La Paz.

troducidos de último momento y que provocaron el rechazo de varios de sus aliados, la Constitución de 2009 representa un notable avance en términos de inclusión política. Los principales cambios de la nueva norma contemplan:

- 1) Instauración de mecanismos de democracia participativa (referéndum, iniciativa legislativa ciudadana,¹⁸ revocatoria de mandato, asamblea, cabildo y consulta previa) y reconocimiento de procedimientos democráticos comunitarios (para los pueblos indígenas).
- 2) Reconocimiento de las naciones y pueblos indígenas y campesinos, a quienes se les dio el derecho de ser consultados previamente a la aprobación de medidas susceptibles de afectarles, en especial cuando se trata de la explotación de recursos naturales en el territorio que habitan. También se otorgó a la justicia indígena comunitaria el mismo estatus que a la justicia ordinaria.
- 3) Elección mediante sufragio universal de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental, del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Constitucional (en este último hay representación del sistema ordinario y del sistema indígena).
- 4) Inclusión de territorios indígenas originarios campesinos como parte de la organización territorial de Bolivia (junto a los departamentos, las provincias y los municipios).
- 5) Establecimiento de cuotas para los indígenas en el Tribunal Supremo Electoral (dos de siete vocales) y en la Cámara de Diputados (siete de 130 diputados).
- 6) Aceptación de que las naciones y pueblos indígenas pueden elegir a sus representantes políticos de acuerdo con sus formas propias de elección.
- 7) Disposición de que la reforma total de la Constitución tendrá lugar a través de una Asamblea Constituyente, activada mediante referéndum, y de que cualquier reforma parcial necesitará de un referéndum aprobatorio.

¹⁸ El referéndum y la iniciativa legislativa ciudadana habían sido introducidos en la última reforma de la Constitución de 1967, en 2004, en un contexto en que ambos temas eran ya parte de la agenda política.

- 8) Señalamiento de que el presidente y el vicepresidente pueden ser reelectos por una sola vez de manera continua (antes solo era posible de manera discontinua). Además, es posible su revocatoria de mandato a través de un referéndum, en cuyo caso se convocará de forma inmediata a elecciones a la presidencia (Torrico, 2016a).¹⁹

A partir de la aprobación constitucional, y habiendo sido prácticamente derrotada la oposición, desde 2009 el clima político cambió, ya que el MAS se convirtió en el partido dominante y en el único con presencia nacional. En esas condiciones Evo Morales fue reelecto en diciembre de ese año con una mayoría aplastante (64.2%) y logró mayoría absoluta en ambas cámaras legislativas. El éxito se repitió de manera casi idéntica en 2014 (61.3% de los votos), en unas elecciones polémicas porque la postulación de Morales tuvo que ser aprobada previamente por el Tribunal Constitucional. Los únicos conflictos desde 2009 fueron los derivados de la demanda de distintos actores de implementar las disposiciones de la Constitución²⁰ y los que se originaron por errores en la gestión pública o por escándalos de corrupción.

Cambios en la política económica

Con la llegada del Movimiento al Socialismo al gobierno se rompió el consenso sobre el funcionamiento de la economía que había imperado desde la segunda mitad de los ochenta, que consideraba que la liberación de mercados y una mínima intervención del Estado eran centrales para garantizar la estabilidad. Como se vio anteriormente, la candidatura de Evo Morales planteaba recuperar el protagonismo estatal en el

¹⁹ La Constitución de 2009 también introdujo un conjunto de cambios simbólicos que rescatan la heterogeneidad étnica boliviana. Por ejemplo, el país pasó a llamarse Estado Plurinacional de Bolivia (en remplazo de República de Bolivia), el Congreso Nacional se convirtió en la Asamblea Legislativa Plurinacional, y la Corte Nacional Electoral ahora se denomina Órgano Electoral Plurinacional.

²⁰ El más importante fue la represión en septiembre de 2011 que el gobierno ordenó a una marcha indígena que demandaba la paralización de la construcción de una carretera que atravesaba un área natural protegida y territorios indígenas. Los dirigentes señalaban que se había violado el derecho de consulta previa que la Constitución otorga a sus comunidades.

desarrollo. Sin embargo, esta intención se confrontaba con una indiscutible realidad: la muy escasa disponibilidad de recursos públicos. La solución inicial fue pragmática: el Estado no se haría cargo directamente de los sectores estratégicos de la economía, pero se aseguraría de que las empresas encargadas tributaran más. Fue ese pragmatismo el que guió la *nacionalización de los hidrocarburos*.

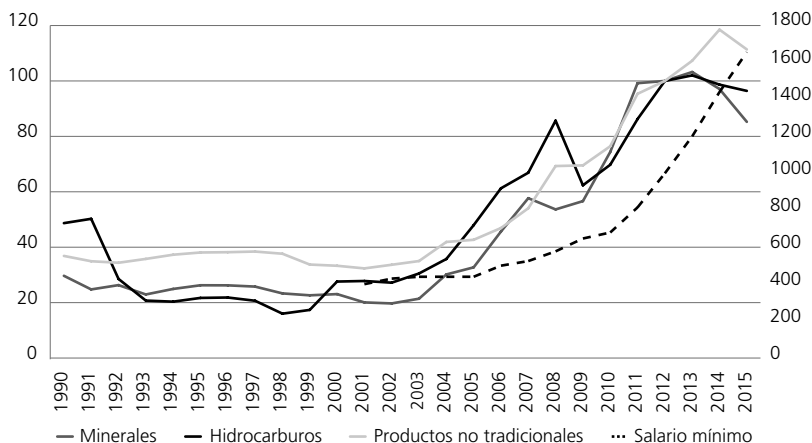
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), empresa pública que gozaba del monopolio en hidrocarburos y que aportaba más de 40% de los ingresos públicos, fue privatizada en 1996.²¹ Luego de ello la contribución fiscal del sector se redujo a menos de 20%, pero en contrapartida las empresas emprendieron intensas actividades de exploración. Así, las reservas probadas de gas natural se incrementaron de 5.69 a 54.9 trillones de pies cúbicos en el periodo 1996-2003,²² lo que permitió que Bolivia comenzara a exportarlo a Brasil.

En el periodo de inestabilidad 2003-2005, el tema del gas fue central debido a que lo que propició el inicio de las protestas sociales que culminaron con la renuncia de Sánchez de Lozada fue el anuncio oficial de que se exportaría gas a Estados Unidos a través de Chile, país con el que existe un conflicto desde hace más de un siglo a raíz de la pérdida boliviana de su acceso al mar. A los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden que provocaron la muerte de más de sesenta personas se les denominó “Guerra del Gas”. A partir de entonces cobró fuerza la demanda de recuperar los hidrocarburos y en 2005 el gobierno de Carlos Mesa, previa aprobación en referéndum, subió los impuestos a las empresas petroleras a 50% del valor de la producción (anteriormente la mayor parte de la producción solo pagaba 18%). Posteriormente, en mayo de 2006 Evo Morales subió a 82% los impuestos que debían pagar los campos petrolíferos de mayor producción, medida a la que llamó *nacionalización de los hidrocarburos*, a pesar de que no se expropió nada. Debido a que los precios internacionales iban en aumento, las empresas no protestaron (Morales, 2014); es más, su producción aumentó al igual que la de los principales productos de exportación. El *boom* de las materias primas había comenzado.

²¹ Para ser privatizada YPFB fue dividida en tres empresas: dos dedicadas a la exploración y explotación de hidrocarburos, y otra a su comercialización. Estas fueron luego vendidas a empresas extranjeras.

²² Una explicación detallada al respecto se encuentra en Torrico (2009).

Gráfica 1. Índice de precios internacionales de los principales productos de exportación* (2012=100) y salario mínimo (en bolivianos)**



* En Bolivia se suele llamar productos tradicionales a los minerales y a los hidrocarburos. Los no tradicionales son los que cobraron importancia en las últimas tres décadas, principalmente las oleaginosas.

** El eje izquierdo corresponde a las exportaciones y el derecho al salario mínimo.

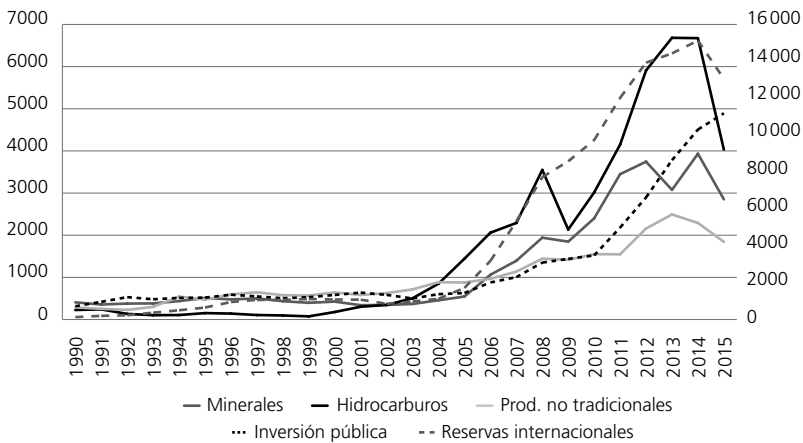
Fuente: Elaboración propia con datos de UDAPE.

En la gráfica 1 se puede observar que los precios de minerales y de los productos no tradicionales estuvieron inalterados durante los noventa, cayeron ligeramente a inicios de este siglo (en el periodo de recesión) y a partir de 2004 se incrementaron sostenidamente hasta 2013. Los precios de los hidrocarburos sufrieron una fuerte caída en la década de los noventa y desde 2004-2005 tuvieron un alza muy importante (con una breve disminución en 2009 y 2010, que fueron los años de la crisis financiera internacional). Desde 2014 se aprecia una tendencia a la baja en todos ellos, aunque sus niveles actuales son todavía mucho más altos que el patrón anterior. Este auge en los precios de las materias primas de exportación permitió ingresos extraordinarios a los sectores público y privado que se reflejaron en el salario mínimo, el cual se había mantenido estático durante varios años, pero que a partir de 2006 también muestra un crecimiento sostenido.

La gráfica 2 permite observar que las exportaciones estuvieron prácticamente estancadas hasta 2004. A partir de ese año se produjo un incremento sostenido en todos los sectores, en especial en el de hidrocarburos,

que en los noventa casi no exportaba nada. La crisis financiera internacional tuvo un impacto circunstancial en este último, pero que no afectó al resto. Exportaciones crecientes y precios internacionales en máximos históricos permitieron un aumento sustancial de la inversión pública, la cual pasó de estar prácticamente inalterada entre 1990 y 2005 a elevarse como nunca antes, en especial a partir de 2010. Las reservas internacionales del Banco Central también tuvieron un aumento exponencial, lo que dio garantías para la estabilidad de la economía. Sin embargo, al igual que en la gráfica anterior, a partir de 2013-2014 se observa una tendencia a la baja en todos los indicadores señalados, con excepción de la inversión pública, aunque los registros actuales aún están muy por encima de los anteriores al auge de la década pasada.

Gráfica 2. Exportación de minerales, hidrocarburos y productos no tradicionales, inversión pública y reservas internacionales (en millones de dólares)*



* El eje izquierdo corresponde a todas las exportaciones y a la inversión pública, el derecho a las reservas internacionales.

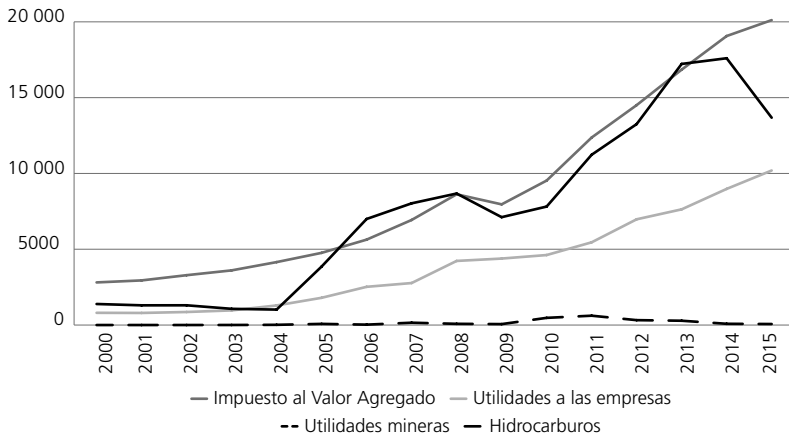
Fuente: Elaboración propia con datos de UDAPE.

El *boom* de las materias primas hizo posible que el crecimiento promedio de la economía desde que Evo Morales es presidente sea de 5.04%, algo inédito en la historia boliviana. El PIB per cápita aumentó en más de dos mil dólares, la pobreza se redujo de 63 a 38% y la desigualdad

también disminuyó (el índice de Gini pasó de 0.60 a 0.47). ¿Todo eso se logró en solo una década! ¿En estos resultados tan favorables influyeron las decisiones económicas del gobierno del MAS o todo se debió solo al contexto externo?

Evo Morales ciertamente tuvo la enorme fortuna de que el *boom* coincidiera casi exactamente con su periodo de gobierno. Sin embargo, sí se puede señalar que algunas decisiones ayudaron a incrementar los recursos públicos (en especial la nacionalización de los hidrocarburos, que mantuvo muchas disposiciones de la reforma que impulsó Mesa previamente) y que otras tuvieron un componente social importante (salario mínimo e inversión pública).²³ En ese sentido, su gobierno significó un giro a la izquierda en la política económica. Sin los recursos extraordinarios disponibles esto no hubiera sido posible, o al menos no en la magnitud observada, pero sin duda las decisiones tomadas fueron diferentes a las del pasado. Sin embargo, un ámbito en el que no se efectuaron cambios en un sentido de izquierda (es decir, hacia una mayor progresividad) fue en la estructura impositiva.

Gráfica 3. Recaudación de los principales impuestos (en millones de bolivianos)



Fuente: Elaboración propia con datos de UDAPE.

²³ Siguiendo una tendencia regional, se crearon programas de transferencias monetarias para mujeres embarazadas, para niños en edad escolar y para ancianos.

El impuesto cuya recaudación se incrementó más en el tiempo es el que grava al sector de hidrocarburos, a pesar de que sufrió una breve caída en los años de la crisis financiera internacional y una reducción importante en 2015 (esta tendencia inició en 2005, año de la reforma de Mesa); sin embargo, es el IVA el que contribuye en mayor medida al Estado, y así ha sido durante la mayor parte del periodo 2000-2015. Es más, la brecha entre este y el impuesto a las utilidades a empresas se ha ampliado en el tiempo, lo que significa que la estructura impositiva es predominantemente regresiva; es decir, que las personas de menores ingresos a través de su consumo contribuyen a las arcas fiscales en mayor medida que las de mayores ingresos. Esto ha sido posible en virtud de que el crecimiento económico experimentado ha potenciado el consumo, lo que podría revertirse en caso de que se produzca un ciclo económico a la baja. Pero lo que más llama la atención de la gráfica 3 es que la contribución del impuesto a las utilidades mineras es ínfima, a pesar del aumento de sus precios internacionales y de sus exportaciones, lo que revela que el sector minero ha sido en los años del gobierno de Evo Morales altamente beneficiado.

Los datos exhibidos muestran que los años de gobierno de este mandatario han sido de bonanza económica, lo que sin duda ha contribuido a que se consolide el dominio político del MAS. No obstante, se empiezan a observar indicios de una tendencia a la baja en los precios internacionales de los principales productos de exportación, en el valor de las exportaciones y en la recaudación fiscal, que de mantenerse en el tiempo provocarán sin duda la disminución del crecimiento y un aumento de la pobreza. Lo más probable es que la economía no caerá a los niveles previos al *boom* de las materias primas, pero el gobierno tendrá que recortar buena parte de su gasto, lo que podría generar tensiones con quienes ahora se benefician de él. Resulta lamentable que este periodo de recursos extraordinarios no haya servido para potenciar la industrialización de la economía²⁴ ni para modificar la estructura tributaria regresiva. La economía boliviana sigue siendo tan vulnerable a los factores externos como en los años previos a este ciclo favorable.

²⁴ Es más, se dio un proceso de reprimarización. En 2000 el 29% de las exportaciones eran manufacturas, las que en 2015 cayeron a 4.8 por ciento.

Del dominio al desgaste político

Desde diciembre de 2005 el MAS ha ganado de manera contundente tres elecciones presidenciales y dos referéndums nacionales, ha ampliado su apoyo electoral en todo el país (en 2014 solo perdió en uno de los nueve departamentos) y ha expandido su presencia en los gobiernos departamentales (de tres en 2005 a seis en 2015). Desde 2010 gobierna prácticamente sin contrapesos institucionales²⁵ y a la fecha no existe otro partido en Bolivia que rivalice con él. No obstante, es muy claro que depende en extremo de la figura de Evo Morales, lo que se refleja en que el porcentaje de votos que obtiene en elecciones presidenciales es siempre mayor en al menos 15 puntos que en las de gobernadores. Es por ello que buscó aprobar una nueva repostulación del presidente a través del referéndum de 2016 que, sorpresivamente, perdió por escaso margen.²⁶ El resultado fue inesperado, además, dado que el rotundo triunfo que le permitió una tercera gestión de gobierno se había producido apenas 16 meses antes. ¿Por qué se produjo la derrota? ¿Es el inicio del fin del dominio del Movimiento al Socialismo?

A continuación se presenta un modelo de regresión que, usando datos de Latinobarómetro, estima los determinantes del voto por el MAS en todos los años que lleva gobernando. En él se incluyeron variables sociodemográficas, ideológicas, de desempeño de gobierno y de liderazgo. Los hallazgos nos permitirán plantear una explicación tentativa de los acontecimientos políticos más recientes y vislumbrar escenarios futuros posibles. En ningún caso debe tomarse este análisis como una predicción de lo que sucederá a futuro en Bolivia.

En el cuadro 2 los coeficientes positivos se relacionan con un voto hacia el MAS, y viceversa. Allí podemos ver que la buena percepción que se tiene sobre la situación de la economía aumenta las probabilidades de votar por el partido de gobierno, lo que en la última década de bonanza ha contribuido a su dominio político (aunque la tendencia a la baja observada desde 2014 provocaría la reducción de su apoyo electoral). Una mayor satisfacción con la democracia opera en el mismo sentido, y el ofi-

²⁵ Véase Mendoza-Botelho (2014) y Alberti (2016).

²⁶ El 51.3% de los electores votó por el No a una nueva reelección.

cialismo también se ha beneficiado de ello, ya que durante los años de Evo Morales en la presidencia esta ha aumentado.²⁷ Por otro lado, ubicarse en la izquierda del espectro ideológico lleva a votar por el Movimiento al Socialismo, lo que muestra que este efectivamente representa la visión de la mayor parte de la izquierda boliviana (algo notable, ya que históricamente esta no consideraba aspectos como los derechos indígenas o los mecanismos de participación democrática directa). Sin embargo, es importante notar que el electorado boliviano no es predominantemente de izquierda, sino más bien de centro.²⁸

Cuadro 2. Determinantes de la intención de voto por el MAS (2006-2015)^a

Constante	-0.252 (0.349)
Percepción sobre la economía	-0.389*** (0.051)
Satisfacción con la democracia	-0.162*** (0.047)
Escala izquierda-derecha	-0.118*** (0.017)
Sexo	-0.110 (0.069)
Edad	-0.008*** (0.002)
Percepción sobre la corrupción	-0.118*** (0.042)
Nivel educativo	-0.074*** (0.023)
Acceso a internet	0.115*** (0.042)
Confianza en el Poder Judicial	0.000 (0.045)
Confianza en los partidos políticos	-0.007 (0.044)

²⁷ En 2005, de los encuestados 23% se declaró “muy satisfecho” o “más bien satisfecho” con la democracia. En 2015 esa cifra fue de 52 por ciento.

²⁸ En todos los años del periodo 2000-2015 la mediana y la moda de la escala izquierda-derecha fue 5 (justo el centro de la distribución). En ningún año hubo más de una moda. Esto es diferente en algunos países. Por ejemplo, los estudios sobre México muestran a un electorado más bien de centro-derecha y una distribución trimodal (véase Moreno, 2009).

Cuadro 2. Continuación

Aprobación presidencial	2.527***
	(0.118)
N	6.184
R2	0.341

^a Variable dependiente: voto por el MAS (1 = Sí; 0 = No).

Percepción sobre la economía: 1 = muy buena; 2 = buena; 3 = regular; 4 = mala; 5 = muy mala.

Satisfacción con la democracia: 1 = muy satisfecho; 2 = más bien satisfecho; 3 = no muy satisfecho; 4 = nada satisfecho.

Escala izquierda-derecha: valores de 0 a 10 (0 = izquierda.....10 = derecha).

Sexo: 1 = masculino; 2 = femenino.

Percepción sobre la corrupción: 1 = se redujo mucho; 2 = se redujo algo; 3 = se redujo poco; 4 = no se redujo nada.

Nivel educativo: 1 = analfabeto; 2 = básica incompleta; 3 = básica completa; 4 = secundaria incompleta; 5 = secundaria completa; 6 = superior incompleta; 7 = superior completa.

Acceso a internet: 1 = diario; 2 = ocasionalmente; 3 = casi nunca; 4 = nunca.

Confianza en el Poder Judicial: 1 = mucha; 2 = algo; 3 = poca; 4 = ninguna.

Confianza en los partidos políticos: 1 = mucha; 2 = algo; 3 = poca; 4 = ninguna.

Aprobación presidencial: 0 = no aprueba; 1 = aprueba.

* Significancia al 90 por ciento.

** Significancia al 95 por ciento.

*** Significancia al 99 por ciento.

Otros hallazgos son que el sexo del elector no es una variable relevante para explicar el voto por el MAS, que la población joven es la que más apoya a este partido y que cuando se percibe que no ha habido avances en la lucha contra la corrupción la gente vota por otros partidos. Esto último es muy importante, ya que 2015 y 2016 han estado marcados por dos escándalos de corrupción mayúsculos. El primero reveló el desvío de 15 millones de dólares a cuentas privadas de dirigentes del MAS que estaban destinados a obras rurales y en comunidades indígenas. El segundo, conocido tres semanas antes del último referéndum, destapó una red de tráfico de influencias entre la expareja de Evo Morales y empresas chinas que se adjudicaron obras por más de 560 millones de dólares en modalidad de invitación directa (sin licitación).

Nivel educativo y acceso a internet son dos variables que operan en contra del voto por el MAS, ya que la mejora que se ha producido en Bolivia en los últimos años en cuanto a mayor escolaridad y mayor acceso a internet²⁹ provoca que la votación se incline a otros partidos. Para el ofi-

²⁹ En 2005 las personas de 15 años o más que tenían al menos ocho años de estudios representaban 55%. En 2015 esa cifra subió a 65%. En cuanto a internet, en 2006 el 4.92% declaraba acceder a él diariamente, lo que aumentó en 2015 a 11.34 por ciento.

cialismo esto ha sido una sorpresa, en especial el efecto del uso de la red, que había sido muy subestimado.³⁰ Por qué sucede ello es una incógnita de la mayor importancia que debe responder otro estudio. Por otro lado, resulta un tanto sorprendente que en la intención de votar por el oficialismo no influya la confianza que se tenga en otros componentes sustanciales del sistema político. Ello refleja que el Movimiento al Socialismo ya no es un partido antisistema (como efectivamente lo fue al principio de este siglo) que se nutre del desgaste de las instituciones políticas.

Por último, es de destacar que la variable que más explica (y por mucho) el voto por el MAS es la aprobación del presidente. Ella sola es más relevante que todas las demás juntas, lo que refleja el grado extremo en que dicho partido depende de la figura de Evo Morales (siempre y cuando la opinión sobre él sea favorable)³¹ y explica por qué el oficialismo insiste en su repostulación en 2019, aun a pesar de haber perdido el referéndum de 2016 y de que esa posibilidad es muy controversial jurídicamente.

Los resultados del cuadro 2 muestran que el voto por el Movimiento al Socialismo es multicausal. Los ciudadanos deciden al respecto con base en su orientación ideológica, en su evaluación del desempeño del gobierno en varias áreas (economía, corrupción, democracia) y en cómo juzgan la labor del presidente. También se ha visto que los cambios educativos tienen un impacto significativo. Todo esto es una buena noticia para la democracia, ya que así como existe un voto guiado por la ideología (como en todos los países), también hay electores que no están dispuestos a dar un cheque en blanco al gobierno y que evalúan su desempeño (algo importante para que los gobernantes se esfuercen por una buena gestión pública).

¿Está debilitado el Movimiento al Socialismo? No a nivel político (es decir, en lo relativo a poder imponer sus decisiones, capacidad de movilización, de control, de cooptación, etc.). Sigue siendo el partido más poderoso y el único con presencia nacional. También conserva a sus principales aliados en los sectores sindicales, campesinos e indígenas, los que

³⁰ Para atender esta falencia, inmediatamente después de la derrota en el referéndum de 2016 Evo Morales abrió su cuenta en Twitter.

³¹ En 2015, de los encuestados por Latinobarómetro 78.5% señalaba aprobar la gestión de Evo Morales, lo que lo convirtió en el presidente con mayor aprobación en América Latina.

están reunidos en la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), instancia que surgió a iniciativa de Evo Morales para enfrentar situaciones de crisis política y movilización electoral, actuando como un brazo sindical del gobierno (Mayorga, 2011).³² A pesar de que algunos sectores indígenas importantes se alejaron del gobierno (siendo la Cidob el principal) y de que renombrados líderes han acusado al oficialismo de traicionar al movimiento indígena y a la propia Constitución de 2009,³³ no existe un partido ni un líder en la oposición que rivalicen a nivel nacional con el MAS ni con Evo Morales.

Si bien a nivel político el Movimiento al Socialismo es aún muy poderoso, en lo electoral se ha debilitado. En la derrota del referéndum de 2016 influyeron en su contra las variables del cuadro 2, y todo indica que la tendencia a la baja de la economía va a persistir en los próximos años y que los escándalos de corrupción no se van a detener. Además, el desgaste natural por llevar más de una década en el poder hace vislumbrar que el MAS podría tener problemas para ser reelecto en 2019, en especial si su candidato no es Evo Morales. Sin embargo, el oficialismo no contempla siquiera la posibilidad de que su líder no lo encabece en las próximas elecciones presidenciales, lo que será una seria fuente de conflicto en los próximos años.

¿Hay un giro a la derecha en Bolivia? No en el electorado. Los resultados del cuadro 2 indican que hay un buen grado de pragmatismo en los votantes. Si en las elecciones presidenciales de 2019 apoyan o no mayoritariamente a un candidato de derecha dependerá de varios factores; por ejemplo, de la magnitud de la desaceleración económica, de si hay mayor desgaste del gobierno y de si la oposición se articula en un frente común alrededor de un candidato atractivo. Actualmente sigue fragmentada y la única figura política que podría vencer a Evo Morales (en caso de que este pudiera presentar su candidatura) es, según encuestas, el expresidente Carlos Mesa.³⁴ Por otro lado, en el ámbito

³² En los hechos, la Conalcam reemplazó al Pacto de Unidad y le dio al gobierno un mayor control sobre las organizaciones y los movimientos sociales (Zuazo, 2010).

³³ Véanse las numerosas entrevistas a Silvia Rivera Cusicanqui, en especial <<http://ojarasca.jornada.com.mx/2016/11/11/lo-verdaderamente-indio-esta-dentro-de-todos-nosotros-silvia-rivera-cusicanqui-9581.html>>.

³⁴ Véase <<http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20160804/encuesta-carlos-mesa-emerge-potenciales-candidatos-opositores>>.

económico, el gobierno del MAS tendrá que comenzar a aplicar medidas que no corresponden tradicionalmente con una visión de izquierda debido a la tendencia a la baja de la economía: recorte del gasto, reducción de personal público, entre otras. Al respecto, se vislumbra que el giro a la derecha vendrá más bien por el lado de la necesidad real de aplicar políticas restrictivas en un contexto de menor dinamismo económico.

Conclusiones

La democracia en Bolivia se ha mantenido de manera ininterrumpida por casi 35 años a pesar de enfrentar condiciones muy adversas en términos de la extendida pobreza de la población,³⁵ de la amplia movilización social y, en algunas circunstancias, de la polarización de las élites. Los periodos de crisis e inestabilidad (1982-1985 y 2002-2005) han dado lugar a avances democráticos incluso contra las peores previsiones. Si bien el conflicto y la tensión son una constante en la política boliviana, parece que también son el motor de la ampliación de la democracia.

El periodo 1985-2005 en que los partidos tradicionales dominaron la política a través de las coaliciones de gobierno e impusieron una estricta disciplina fiscal, tuvo como resultado favorable la estabilidad política y económica de un país que nunca antes había gozado de ambas. Aunque sus prácticas clientelares y prebendalistas los alejaron de la población (y pagaron un precio alto por ello), no puede negarse que las reformas que emprendieron en los noventa tuvieron un efecto democratizador importante. Tanto así que incluso se llevó a ellos mismos por delante.

El ascenso al poder de Evo Morales y el MAS no significó una ruptura con el pasado, pero sí un cambio de rumbo. El nuevo gobierno nunca cuestionó la importancia de la estabilidad económica, mantuvo

³⁵ Shugart y Carey (1992) encontraron que la amplia pobreza de la población es un motivo por el que la democracia en países subdesarrollados no sobrevive, y Przeworski *et al.* (2000) determinaron que por encima de un PIB per cápita de cuatro mil dólares la democracia puede considerarse a salvo de un retroceso autoritario. Bolivia solo atravesó ese umbral en el segundo gobierno del MAS.

las finanzas públicas en equilibrio, no obstante modificó el modelo económico de mercado involucrando nuevamente al Estado en la economía y aumentando el gasto social, aunque sin caer en los excesos del pasado que llevaron a la crisis de los ochenta. El pragmatismo económico dio buenos réditos y se pudieron aprovechar las favorables condiciones externas para mejorar las condiciones de la población, aunque no haber aprovechado los recursos extraordinarios disponibles para impulsar una reconversión productiva puede ser un error histórico que se lamentará en unos años.

La Constitución de 2009 mantuvo varias reformas efectuadas en años anteriores por los partidos tradicionales, pero también amplió los derechos de ciertos sectores de la población (en especial de los indígenas) y los mecanismos de participación y representación política. En ese sentido, la nueva norma constituye un avance democrático. Sin embargo, aún está pendiente su estricto cumplimiento y la implementación de varios de sus señalamientos, algo que resulta difícil para el propio gobierno y que le ha costado la ruptura con algunos de sus aliados.

Los más de diez años que lleva Evo Morales en la presidencia sí significaron un giro a la izquierda en Bolivia en el sentido de inclusión política y económica de sectores previamente excluidos. Sin embargo, la insistencia del Movimiento al Socialismo de prorrogar a su líder en el poder y de no contemplar siquiera la posibilidad de alternancia política revelan la dificultad del partido de gobierno de lidiar con la pluralidad. En realidad, el MAS y sus aliados han mostrado en reiteradas ocasiones poca tolerancia a la pluralidad (lo que no es precisamente un valor democrático), por ejemplo, cuando cercaron la Asamblea Constituyente y el Congreso para impedir el ingreso de la oposición. Ese rasgo no era tan problemático en condiciones económicas favorables en que se podían atender múltiples demandas de sectores descontentos, pero puede desatar el conflicto cuando esas condiciones hayan desaparecido, lo que cada vez es más probable. En la medida en que avance la tendencia a la baja de la economía y el desgaste del gobierno, es muy probable que resurjan conflictos violentos. Para evitarlos deberá imponerse una práctica que los partidos tradicionales manejaban bien (aunque dentro de los márgenes del consenso de estabilidad y gobernabilidad) y que el propio MAS en ocasiones ha seguido (pero solo en situaciones límite): la negociación.

Referencias

- Alberti, Carla (2016). "Bolivia: la democracia a una década del gobierno del MAS", *Revista de Ciencia Política*, vol. 36, núm. 1, pp. 27-49.
- Casas-Zamora, Kevin et al. (eds.) (2016). *Reformas políticas en América Latina: tendencias y casos*, Washington, Secretaría General de la Organización de Estados Americanos.
- CSUTCB (1994). *VI Congreso de la CSUTCB. Documentos y Resoluciones*, La Paz, CEDOIN.
- Deheza, Grace Ivana (2008). "Bolivia: ¿Es posible la construcción de un nuevo Estado? La Asamblea Constituyente y las Autonomías Departamentales", *Revista de Ciencia Política*, vol. 28, núm. 1, pp. 61-79.
- Gamarra, Eduardo (1992). "Presidencialismo híbrido y democratización", en René Mayorga (ed.), *Democracia y gobernabilidad en América Latina*, Caracas, Nueva Sociedad.
- ILDIS-CEDLA (1994). *Informe social Bolivia 1. Balance de indicadores sociales*, La Paz, ILDIS/CEDLA.
- Lozada, Blithz y Marco Saavedra (1998). *Democracia, pactos y élites. Genealogía de la gobernabilidad en el neoliberalismo*, La Paz, UMSA.
- Mayorga, Fernando (2011). *Dilemas. Ensayos sobre democracia intercultural y Estado plurinacional*, La Paz, CESU-UMSS/Plural.
- Mayorga, Fernando (2008). "El gobierno de Evo Morales: cambio político y transición estatal en Bolivia", en Yusuke Murakami (ed.), *Tendencias políticas actuales en los países andinos*, Kyoto, Center for Integrated Area Studies-Kyoto University, pp. 21-39.
- Mayorga, René (2003). "Presidencialismo parlamentarizado y gobiernos de coalición en Bolivia", en Jorge Lanzaro (ed.), *Tipos de presidencialismo y coaliciones políticas en América Latina*, Buenos Aires, Clacso, pp. 101-135.
- Mayorga, René (ed.) (1992). *Democracia y gobernabilidad en América Latina*, Caracas, Nueva Sociedad.
- Mendoza-Borelho, Martín (2014). "Bolivia 2013: al calor preelectoral", *Revista de Ciencia Política*, vol. 34, núm. 1, pp. 37-57.
- Morales, Juan Antonio (2014). "La economía boliviana de los últimos cincuenta años: reflexiones sobre el desarrollo de largo plazo", *Ciencia y Cultura*, núm. 33, pp. 107-135.
- Morales, Juan Antonio (2012). *La política económica boliviana 1982-2010*, La Paz, UCB/Plural.

- Moreno, Alejandro (2009). *La decisión electoral. Votantes, partidos y democracia en México*, México, Miguel Ángel Porrúa.
- Pachano, Simón (2006). "El peso de lo institucional: auge y caída del modelo boliviano", *América Latina Hoy*, núm. 43, pp. 15-30.
- Payne, J. Mark et al. (2006). *La política importa: democracia y desarrollo en América Latina*, Washington, BID.
- Przeworski, Adam et al. (2000). *Democracy and Development*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Rivera, Silvia (2003). *Oprimidos pero no vencidos. Luchas del campesinado aymara y quechwa 1900-1980*, La Paz, Hisbol.
- Romero, Salvador (2016). "El sistema de partidos en Bolivia (1952-2015): del partido hegemónico al partido predominante", en Flavia Freidenberg (ed.), *Los sistemas de partidos en América Latina 1978-2015. Tomo 2: Cono Sur y Países Andinos*, México, UNAM/INE, pp. 271-338.
- Shugart, Matthew Soberg y John M. Carey (1992). *Presidents and Assemblies: Constitutional Design and Electoral Dynamics*, Nueva York, Cambridge University Press.
- Stein, Ernesto et al. (2006). *La política de las políticas públicas. Progreso económico y social en América Latina: Informe 2006*, Washington, BID.
- Torrico, Mario (2016a). "Evo Morales: una década en el poder. Lecciones pasadas y necesidades futuras de la democracia boliviana", *Foreign Affairs Latinoamérica*, vol. 16, núm. 3, pp. 36-46.
- Torrico, Mario (2016b). "Reformas constitucionales y competencia política en Bolivia", *Bolivian Studies Journal*, vol. 22, pp. 136-161.
- Torrico, Mario (2014). "Bolivia: nuevo sistema electoral presidencial y coordinación política de los partidos", *Perfiles Latinoamericanos*, núm. 43, pp. 77-102.
- Torrico, Mario (2009). "Cuando la política sirve: la negociación boliviana de los contratos de hidrocarburos", en Dante Avaro y Daniel Vázquez (comps.), *Derrumbando un mito: instituciones exitosas en Latinoamérica contemporánea*, Uruguay, Distribuidum/Flacso México.
- Torrico, Mario (2006). *La economía política del periodo democrático y neoliberal en Bolivia en el orden mundial*, tesis de Maestría en Ciencias Sociales, México, Flacso.
- UDAPE (2016). *Dossier de estadísticas sociales y económicas*, La Paz, Ministerio de Planificación del Desarrollo. Disponible en <http://www.udape.gob.bo/portales_html/dossierweb2016/htms/dossier26.html>.

- Uggla, Fredrik (2009). "Bolivia: un año de vivir peligrosamente", *Revista de Ciencia Política*, vol. 29, núm. 2, pp. 247-273.
- Verdesoto, Luis (2005). *El proceso constituyente en Bolivia*. La Paz, Plural/ILDIS.
- Zuazo, Moira (2010). "¿Los movimientos sociales en el poder? El gobierno del MAS en Bolivia", *Nueva Sociedad*, núm. 227, pp. 120-135.
- Zuazo, Moira (2009). *¿Cómo nació el MAS? La ruralización de la política en Bolivia*, La Paz, Fundación Ebert.

6. Venezuela y el fin del giro a la izquierda en América Latina: desempeño económico y liderazgo

Rodrigo Salazar-Elena*

Adriana Diego**

Introducción

El 6 de diciembre de 1998, con la elección de Hugo Chávez como presidente de Venezuela, da inicio lo que después se llamó el “giro a la izquierda” en América Latina (Arditi, 2009; Baker y Greene, 2011; Calvo, 2009; Cleary, 2007; Castañeda, 2006; Lanzaro, 2007; Levitsky y Roberts, 2011; Weyland, Madrid y Hunter, 2010; Wiesehomeier y Doyle, 2013), refiriéndose con ello a la elección de presidentes de este signo ideológico en 14 países de América Latina entre 1998 y 2014 (Diego, 2016). El acceso inicial al poder por parte de estas opciones debe mucho al descontento con los resultados de gobiernos de derecha (Wiesehomeier y Doyle, 2013). Posteriormente, la coyuntura económica favorable propiciada por el *commodity boom* a partir de 2000 ayudó a que en nueve de estos países el partido de izquierda se mantuviera en el poder por la vía electoral al menos por un periodo adicional, incluyendo seis países en los que el presidente fue reelecto para el siguiente ciclo.¹

En la actualidad, Venezuela también protagoniza lo que puede ser visto como un “contragiro”, en el sentido de ser parte de un conjunto de eventos recientes en los que los partidos de izquierda han sufrido retrocesos. En las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2015 el frente opositor Mesa de la Unidad Democrática (MUD) obtuvo 56.2%

* Profesor-investigador de la Flacso México.

** Instituto Electoral de la Ciudad de México.

¹ Véase la contribución de Mario Torrico a este volumen.

de los votos y 112 de los 167 escaños de la Asamblea Nacional (o 67.1 por ciento).²

Un eventual fin del giro a la izquierda como tendencia regional no significaría que necesariamente el continente tendrá ahora presidentes mayoritariamente de derecha. Más bien significa que posiblemente en el futuro la orientación ideológica del gobierno obedecerá a las circunstancias específicas y coyunturales de la política democrática de cada país. Esto último, sin embargo, podría no ser cierto para el caso de Venezuela. Mientras se escriben estas líneas (septiembre de 2017), el país se encuentra en una crisis política severa, intensificada en octubre de 2016 con la decisión de la autoridad electoral de suspender indefinidamente el proceso de revocación del mandato del presidente Nicolás Maduro, proceso iniciado por la oposición en abril de ese año. Esta decisión atendía a las medidas cautelares ordenadas por cinco tribunales penales, tras admitir denuncias interpuestas por integrantes del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que acusaban irregularidades en el proceso de recolección de las firmas de votantes legalmente necesarias para respaldar la petición (Cannon y Brown, 2017; López Maya, 2017).

Nicolás Maduro asumió la presidencia venezolana en marzo de 2013, en virtud de ocupar la vicepresidencia del país al momento de fallecer el presidente en funciones, Hugo Chávez.³ El 14 de abril del mismo año tuvieron lugar elecciones presidenciales en las que Maduro obtuvo el triunfo con 50.6% de los votos, frente a 49.1% obtenido por Henrique Capriles, de la MUD. Los problemas económicos originados durante la gestión de Chávez se agravaron de manera pronunciada con la caída de los precios internacionales del petróleo que comenzó al año siguiente

² Los otros eventos del “contragiro” son el triunfo de Mauricio Macri en las elecciones presidenciales de Argentina (22 de noviembre de 2015); en Bolivia, el rechazo por referéndum a una reforma constitucional que habría habilitado a Evo Morales a presentarse a reelección por tercera vez (21 de febrero de 2016), y la separación de Dilma Rousseff de su cargo como presidenta de Brasil a través de juicio político (12 de mayo de 2016).

³ Chávez designó presidente a Maduro a los pocos días de su triunfo en la elección presidencial del 7 de octubre de 2012. En junio de 2011 Chávez anunció públicamente que padecía cáncer, pasando posteriormente largas temporadas en Cuba recibiendo atención. En enero de 2012 afirmó que se encontraba recuperado. Sin embargo, en mensaje televisado de diciembre de 2012 reconoció que su enfermedad podría ser fatal y convocó al pueblo a elegir a Maduro cuando se presentara a elecciones.

(Santos, 2017). De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, los ingresos petroleros del Estado pasaron de ochenta mil millones de dólares en 2013 a un estimado de entre veinte y veinticinco mil millones en 2016 (McCarthy, 2016). Esto afectó los recursos del gobierno para financiar su política social. Adicionalmente, el bajo nivel de las reservas internacionales hizo que la caída de los ingresos petroleros redujera la capacidad de importación, generando problemas de desabasto que fueron, a su vez, potenciados por la política de control de precios instituida por el gobierno para evitar una devaluación. En este contexto, la aprobación del presidente Maduro se desplomó rápidamente.

El referéndum de revocación del mandato presidencial es una figura reconocida en la Constitución de 1999. El 15 de agosto de 2004 Hugo Chávez enfrentó un proceso de este tipo, venciendo con 59.1% de los votos. El proceso no fue de ninguna forma terso y se llevó a cabo muy a pesar del presidente. A comienzos de ese año el país aún sufría las consecuencias económicas de la huelga de 2002 de la petrolera estatal.⁴ Tampoco puede decirse que el proceso se haya conducido con imparcialidad. La autoridad electoral obstruyó la recolección de firmas solicitando el referéndum y, más aún, se ejercieron represalias contra personas que firmaron la solicitud, gracias a la publicación de la lista por un legislador progubernamental.⁵

Sin embargo, el referéndum revocatorio fue producto de un acuerdo entre el gobierno y la oposición, y su objetivo era poner fin al conflicto político que había producido en 2012 un golpe de Estado, la huelga antes mencionada y varias muertes en las incontables manifestaciones. A esto se añade que la validez del proceso fue reconocida por una misión de observación integrada por la Organización de Estados Americanos y el Centro Carter. El gobierno terminó por concluir que la mejor forma de

⁴ A finales de 2002 la federación patronal, Fedecámaras, y la federación sindical, Confederación de Trabajadores de Venezuela, convocaron a un paro nacional en demanda de la renuncia de Chávez. El paro afectó a bancos, escuelas, tiendas, restaurantes y fábricas. Sin embargo, su expresión más importante fue el paro de la producción de Petróleos de Venezuela (PDVSA), afectando a la economía venezolana durante los dos años siguientes.

⁵ Para iniciar el proceso de revocación se requería que la petición fuera respaldada con la firma de al menos 20% de los votantes con registro, equivalente a alrededor de 2.4 millones de personas. Sobre los detalles del revocatorio de 2004, véanse Kornblith (2005) y McCoy (2006).

salvar la crisis política era obteniendo un apoyo popular tal que fuese difícil para la oposición seguir cuestionando su legitimidad.

El cambio de actitud mostrado por el gobierno actual tiene una clara explicación. En el momento en que la oposición buscaba el referéndum revocatorio contra Maduro, el resultado más probable era la derrota del presidente.⁶ El nivel de rechazo al gobierno en la actualidad es tal que cabe esperar que el desempeño electoral del PSUV y sus aliados ponga en duda su propia viabilidad. Esto anula una de las condiciones que, de acuerdo con Przeworski (1991), son indispensables para que los gobernantes abandonen voluntariamente el poder en situaciones autoritarias: la expectativa de que tienen una oportunidad razonable de volver a él por la vía democrática.

Más recientemente, Nicolás Maduro tomó una decisión que al mismo tiempo enfatizó los rasgos autoritarios del régimen y reveló la nueva actitud del gobierno hacia las elecciones. El 31 de mayo de 2017 Maduro convocó a elecciones para una Asamblea Constituyente. Las reglas de la elección estaban claramente diseñadas para favorecer a la coalición gobernante,⁷ combinando la representación sectorial con la elección de un legislador en cada municipio, al margen del tamaño de la población. De igual forma, la autoridad electoral prescindió de salvaguardas previamente utilizadas (incluyendo 14 auditorías al sistema automatizado de votación y el uso de tinta indeleble), permitió el voto en cualquier lugar del país (en vez de en la zona de registro) y diseñó boletas en las que los candidatos eran identificados con números en vez del nombre.

Las reglas establecidas garantizaban que el Congreso opositor electo en diciembre de 2015 sería sustituido por una Asamblea Constituyente plenamente alineada al gobierno. La oposición decidió boicotear la elección, realizada el 30 de julio, y no presentó candidaturas.

Otra muestra de la aversión al riesgo electoral desarrollada por el régimen está dada por la decisión de la autoridad en esta materia, en octubre de 2016, de posponer las elecciones regionales y municipales, originalmente programadas para diciembre de ese año. Al día de hoy, las

⁶ De acuerdo con una encuesta de Datanalisis, en octubre de 2016 el 62.3% de la población adulta habría votado en contra de Maduro en un revocatorio. Véase <<https://informe21.com/politica/623-de-venezolanos-votaria-contra-maduro-en-revocatorio>>.

⁷ Véase una descripción detallada en McCoy (2017).

elecciones regionales están programadas para diciembre de 2017 y no hay fecha para las municipales.⁸

El gobierno de Hugo Chávez se caracterizó por minar la división de poderes a un nivel incompatible con las normas democráticas, tanto por la vía jurídica como por la de los hechos. Por lo tanto, buena parte de la reacción de Maduro al triunfo opositor en las elecciones legislativas sigue un patrón ya establecido previamente.⁹ Lo notable de los eventos recientes sería que el régimen por él construido se viera en una situación en la que no pudiera contar con el apoyo electoral de la mayoría. Por supuesto, la coyuntura económica es importante, pero se verá que, siendo Chávez presidente, el desempeño de la economía no necesariamente cuenta toda la historia electoral del partido en el gobierno. Piénsese en el referéndum revocatorio de 2004 enfrentado por Chávez. Si bien en ese año el PIB per cápita real creció 16% con respecto al año anterior, en 2002 y 2003 había caído 10.5 y 9.3%, respectivamente, y su valor era aún inferior en 5.7% al registrado en 2001. Aun así, como se vio, Chávez salió victorioso con una mayoría holgada.

De esta forma, una de las características de lo que se conoce como “chavismo” consiste en el recurso a las mayorías electorales como forma de cimentar el poder presidencial, incluso en contextos de deterioro económico. En la actualidad, el mismo régimen prefiere enfrentar la

⁸ La autoridad electoral no proporcionó explicaciones sobre la motivación de su decisión, pero voceros oficiales mencionaron la existencia de una “guerra económica” contra el gobierno (Cawthorne, 2017).

⁹ La estrategia del gobierno consistió en hacer uso del Poder Judicial para dejar sin efectos las facultades y decisiones del Poder Legislativo. Antes de que los legisladores elegidos en diciembre de 2015 asumieran funciones, la Asamblea saliente reemplazó a 13 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, garantizando de esta forma una corte alineada a la presidencia. Este Tribunal ordenó suspender los resultados de las elecciones en el estado de Amazonas, de modo que la MUD perdió la mayoría calificada en la Asamblea Nacional. En marzo de 2017, con una serie de resoluciones el Tribunal asumió diversas facultades de la Asamblea, incluyendo la autoridad para aprobar transacciones financieras y préstamos. Aunque posteriormente Maduro ordenó al Tribunal revertir su decisión parcialmente, prevalecieron aspectos como el traslado a Maduro de poderes para aprobar empresas de riesgo compartido en los hidrocarburos. En julio la Asamblea reincorporó a los diputados de Amazonas. En respuesta, el Tribunal declaró que la Asamblea se encontraba en “desacato”, que todos sus actos previos carecían de validez, y que el Tribunal asumía de nueva cuenta las facultades de la Asamblea. El desacato, cabe precisar, es una figura del derecho penal que parece poco aplicable a los poderes públicos, más allá de que no está mencionada en la Constitución venezolana.

crisis política evitando la celebración de elecciones. Este artículo explora las posibles razones de esta variación. La respuesta tentativa está en el cambio de liderazgo no anticipado debido al fallecimiento de Hugo Chávez en marzo de 2013. El argumento tiene implicaciones sobre la naturaleza de la *accountability* electoral en sistemas políticos en los que un liderazgo personalista sustituye al sistema de partidos, así como sobre las perspectivas de democratización en Venezuela.

El régimen de Hugo Chávez

Hugo Chávez Frías asumió la Presidencia de Venezuela el 2 de febrero de 1999 y ocupó el puesto de manera ininterrumpida hasta su muerte, ocurrida el 5 de marzo de 2013.¹⁰ En esta sección describiremos dicho periodo en tres dimensiones. Una, la ideológico-programática. Aunque en ocasiones el discurso de Chávez caía en la ambigüedad y tanto sus mensajes como el contenido de sus acciones se radicalizaron hacia mediados de su mandato, no hay duda sobre el hecho de que el programa y las políticas de Chávez siempre pudieron caracterizarse con toda propiedad como de “izquierda”.

Las otras dos dimensiones tienen que ver con las transformaciones del régimen político en este periodo. A partir de 1999, lo que era una democracia bipartidista se transformó en un régimen caracterizado por a) una alta concentración del poder, *de facto* y *de iure*, en la presidencia, pasando por un gradual debilitamiento de las instituciones de separación de poderes, y b) un fuerte respaldo popular al gobierno manifestado en mayorías electorales, reiteradas constantemente en virtud de las figuras de democracia directa instituidas en la Constitución de 1999.

Hasta principios de los años noventa el sistema político venezolano se caracterizaba por la alternancia en el poder desde 1959 de dos partidos políticos, el socialdemócrata Acción Democrática (AD) y el de-

¹⁰ Excepto del 12 al 14 de abril, cuando en un golpe militar se instauró como presidente a Pedro Carmona, líder de la organización patronal Fedecámaras. Si bien Chávez llegó a renunciar verbalmente frente a los generales golpistas, se rehusó a asentarlo por escrito en una carta de renuncia firmada, lo que tuvo cierta importancia en el resultado final de estos acontecimientos. Véase Nelson (2009).

mócrata cristiano Comité Político Electoral Independiente (Copei). La estabilidad del país en condiciones democráticas contrastaba con la frecuencia (y la brutalidad) de las interrupciones autoritarias de la región. Sin embargo, la caída en los precios internacionales del petróleo a partir de 1982 y el posterior paquete de ajuste estructural implementado por el presidente Carlos Andrés Pérez (AD) en 1989 produjeron un nivel de descontento social que tuvo múltiples ramificaciones.

Una de ellas fue el intento de golpe de Estado el 4 de febrero de 1992 por un grupo de militares de rango medio agrupados en el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200). El grupo se formó en 1983 y, operando de manera clandestina, había establecido contactos con organizaciones partidistas de izquierda radical. El golpe fracasó, pero dio a conocer a su líder, el teniente Hugo Chávez. En 1994 el entonces presidente Rafael Caldera le concede la libertad. Para 1996 una nueva recesión y un segundo paquete de ajuste incrementan el descontento social. En 1997 Chávez crea el Movimiento V República, con el que inicia una campaña por la presidencia. Chávez denunciaba la corrupción que permeaba a la esfera política y la falta de voluntad de las élites para satisfacer las demandas sociales (Lander y López Maya, 1999), a la vez que establecía lazos de familiaridad y confianza con la población (Romero, 2001, 2005).

En esos años, Chávez surgió como el líder alternativo, sin antecedentes en la política, que ofrecía opciones atractivas y se perfilaba como la única figura capaz de generar un cambio radical (Ramírez Gallegos, 2006). Él mismo se asumió explícitamente como el defensor del cambio real durante la campaña de 1998 (Cameron y Major, 2001). Consiguió establecer una relación líder-masa que le permitió convocar a una movilización social para derribar las viejas estructuras, prometiendo mejores condiciones para los sectores más vulnerables (Arenas, 2005; Ellner, 2005; Ramírez Gallegos, 2006).

Entre 1995 y 1997 Chávez recorrió el país exponiendo su proyecto político, cuyos ejes principales consistían en la refundación de la República, una reforma constitucional para establecer nuevas lógicas de representación de los intereses del pueblo a través de una democracia participativa, la expansión del gasto público y la redistribución del ingreso para atender los problemas sociales. En las elecciones presidenciales de 1998 obtuvo el triunfo con 56.2% de los votos, convirtiéndose en

el primer presidente en casi cuatro décadas sin vínculos con los partidos tradicionales.¹¹

Desde la fundación del MBR-200 la retórica de Chávez siempre tuvo como referencia la figura del héroe de la independencia Simón Bolívar. Como orientación programática, el “bolivarianismo” se define principalmente por el nacionalismo y el desarrollismo (López Maya, 2008), elementos que por sí mismos no bastan para situarlo en el eje izquierda-derecha. Sin embargo, Chávez encabezó un gobierno de clara orientación a la izquierda. Así, por ejemplo, si atendemos a los criterios expuestos por Alcántara (2008) para definir la tendencia ideológica de los gobiernos contemporáneos, la propuesta programática de Chávez comparte varios de los rasgos distintivos de la izquierda latinoamericana, como son el objetivo de la igualdad, la intervención del Estado en la economía, la democracia participativa y la movilización de la sociedad. Principios como la validez de los derechos sociales y la obligación del Estado de garantizarlos fueron incluso incorporados en la Constitución de 1999.

A estas grandes orientaciones se añade una serie de promesas específicas, como elevar el empleo, disminuir la pobreza y mejorar los servicios educativos, de salud y de acceso a la vivienda, con el objetivo de incorporar a quienes habían resultado excluidos en los gobiernos previos (Arenas, 2005; Ellner, 2005; Lagos, 2006; Lander y López Maya, 1999; Romero, 2005). Como hace notar López Maya (2011), el alcance de estas características del ideario chavista es incluso más notable si se toma en cuenta que se dan en un momento en el que, en América Latina, aún predominan los diagnósticos y recetas de corte neoliberal.

Pasando del terreno discursivo al de los hechos, la política social expansiva se convirtió en una de las fuentes del apoyo popular al gobierno de Chávez. Entre 1998 y 2006 el gasto social per cápita aumentó 314% (Weisbrot, 2008). Más allá de este notable incremento cuantitativo, la política social bajo el gobierno de Chávez tuvo importantes componentes de innovación en las llamadas “misiones”. En parte

¹¹ En las elecciones de 1993 Rafael Caldera obtuvo el triunfo bajo la etiqueta de Convergencia Nacional, siendo así el primer presidente desde 1959 que no es postulado por AD o Copei. Sin embargo, previamente había sido fundador del Comité, partido por el que fue candidato presidencial cuatro veces, hasta que obtuvo el cargo en 1968.

una política del gobierno para mitigar con acciones de emergencia los efectos de la huelga petrolera sobre el nivel de vida de los más pobres, en parte una medida para mejorar las perspectivas del gobierno de cara al referéndum revocatorio de 2004 aprovechando el incremento del precio internacional del petróleo (Carroll, 2013), las misiones llevaron servicios básicos a la población menos favorecida mediante estructuras paralelas a las ya existentes en el aparato estatal (López Maya, 2011). Con la misión Barrio Nuevo, por ejemplo, se prestó atención médica a unos 15 millones de personas, proporcionada por personal médico enviado por el gobierno cubano a cambio de petróleo. Otras misiones destacadas fueron la misión Robinson, con el objetivo de combatir el analfabetismo, y la misión Mercal, que llegó a distribuir alimentos subsidiados a 40% de la población.

A partir de 2002, y más claramente desde 2005, se observa una radicalización de la retórica y las acciones del gobierno. Es en este último año que Chávez se declara por primera vez un socialista y que se comienza a hablar de “socialismo del siglo xxi”. Empiezan a observarse experimentos como las unidades productivas con participación social conocidas como Núcleos de Desarrollo Endógeno, o una intervención más directa del Estado, como los poderes concedidos por la Asamblea Nacional a Chávez que le permitieron nacionalizar sectores “estratégicos” de la economía. Esta radicalización también toca el terreno de la diplomacia, donde se observan acciones dirigidas a contrarrestar la hegemonía de los Estados Unidos, incluyendo una oposición abierta a la integración comercial del continente americano propuesta por ese país. El impulso a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), creada en 2004, es una expresión de esta propuesta de integración basada en principios distintos a los intereses comerciales, como la “solidaridad” y la “cooperación”.¹²

La radicalización pudo haber sido producida en parte como reacción a la estrategia abiertamente subversiva seguida por la oposición entre los años 2002 y 2004, en parte como producto de la creciente influencia de

¹² Una vez más, la ofensiva diplomática de Chávez será mejor calibrada si se toma en cuenta que, a finales de los años noventa y principios del siglo xxi, parecía haber un consenso en las élites latinoamericanas sobre lo deseable de que se diera la integración comercial. Véase Salazar-Elena (2008).

Cuba que se da en esos años. Aun así, se trata de una radicalización y no de un cambio de la naturaleza ideológica del régimen: en Chávez y buena parte de su coalición el compromiso programático era una realidad que orientó sus acciones desde el inicio del gobierno.

Para la retórica chavista, el nuevo gobierno constituye una ruptura con el pasado, una refundación, discurso que será retomado por los gobiernos de Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador (De Lara, 2015). En estos tres casos, un aspecto relevante de la plataforma política pasó por la construcción de un nuevo Estado mediante la aprobación de nuevas constituciones en las que se asentaran las bases para romper con las prácticas de exclusión del pasado, a partir de elementos institucionales que combinan la democracia participativa con la concentración del poder en manos del presidente (Corrales, 2010; López Maya, 2008; Ramírez Gallegos, 2006).

Las transformaciones institucionales a partir de la Constitución de 1999 alteraron la naturaleza del régimen político, apartándolo del modelo de democracia liberal. De acuerdo con el análisis de la literatura realizado por Hawkins (2016), estos cambios afectaron solo de forma moderada el terreno de la competencia electoral, con violaciones al principio de imparcialidad y restricciones al ejercicio de las libertades civiles. En cambio, las desviaciones más severas fueron en el ámbito de la división de poderes, especialmente en lo que se refiere a la independencia del Poder Judicial y en la renuncia del Legislativo de sus atribuciones al otorgar al presidente facultades legislativas extraordinarias sin que la situación política o económica lo justificara. Desde el punto de vista de las facultades constitucionales, Chávez se convirtió en uno de los presidentes más poderosos de América Latina (Corrales, 2010).

La otra característica distintiva del régimen es su aspecto “participativo”. En un modelo seguido después por otros gobiernos de orientación similar, la Constitución de 1999 incluye instrumentos de democracia directa como el referéndum y la revocación de mandato. Entre 1999, cuando Chávez asume la presidencia, y 2013, año en el que falleció, Venezuela tuvo tres elecciones presidenciales y cuatro legislativas, y seis referéndums (incluyendo el revocatorio de 2004). Únicamente en uno de ellos el gobierno perdió. A diferencia de los sistemas unipartidistas, e incluso de aquellos en los que la oposición es meramen-

te tolerada, estas elecciones fueron en general altamente competidas y el triunfo del gobierno no siempre podría darse por descontado *a priori*.¹³

No se afirma aquí que las condiciones de la competencia fueran equitativas ni que las prácticas electorales hayan sido plenamente consistentes con el principio de elecciones libres y limpias. Por una parte, la composición del Consejo Nacional Electoral, organismo encargado de estos procesos, ha tenido un perfil abiertamente favorable al gobierno, siendo cuatro de sus cinco integrantes miembros del PSUV (Alarcón, Álvarez e Hidalgo, 2016). Por la otra, existe evidencia de irregularidades y anomalías a partir del referéndum de 2004 (Jiménez e Hidalgo, 2014; Jiménez, Hidalgo y Klimek, 2017). Sin embargo, no parece ser el caso que el régimen haya recurrido a la alteración fraudulenta de los votos (Hausmann y Rigobon, 2011) y después de 2004 la oposición aceptaba los resultados que daban el triunfo a Chávez. Todo esto es indicativo de un nivel de apoyo en la población que le permitía al régimen anticipar una probabilidad razonable de triunfo en cada ronda electoral, incluso con una oposición independiente y competitiva, sin recurrir a un fraude masivo o a una alteración dramática de las reglas.

En este sentido, a pesar de que el régimen chavista presenta rasgos claramente autoritarios en lo relativo a la concentración del poder, se trata de un autoritarismo plebiscitario, caracterizado por el apoyo popular reiterado en sucesivas elecciones competidas. Cabe preguntarse, entonces, cuál es la fuente de este respaldo popular.

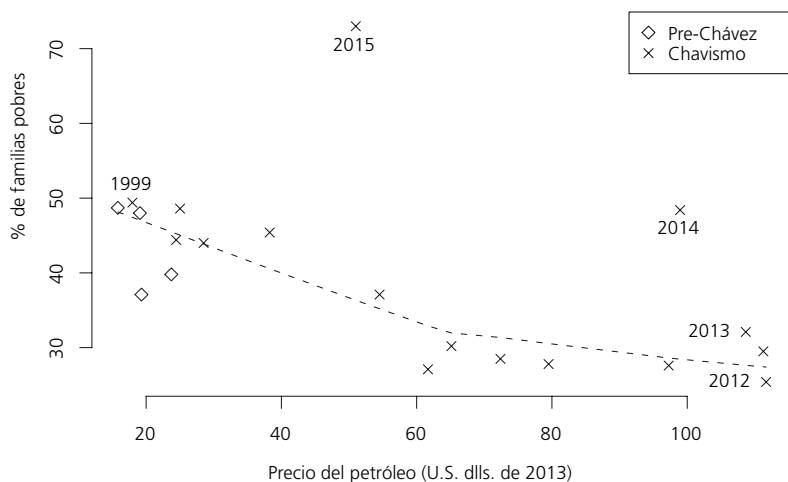
Desempeño económico y desempeño electoral

Durante el gobierno de Chávez, la tradicional dependencia tanto de la economía venezolana como del gasto social respecto de las exportaciones petroleras no disminuyó (y posiblemente aumentó). Por lo tanto, no es de extrañar que el grado de pobreza en Venezuela siga muy de cerca al comportamiento del precio internacional del petróleo, como se muestra

¹³ La excepción fue la elección legislativa de 2005, en la que la oposición decidió no participar.

en la gráfica 1¹⁴ en la que se distinguen los valores previos al acceso de Chávez al poder, mostrando que la línea de ajuste no parece estar determinada por estas observaciones. Asimismo, se destacan los años a partir de 2013, cuando comienza la caída de los precios internacionales del petróleo, y en los que se observa un correspondiente incremento en los niveles de la pobreza.

Gráfica 1. Venezuela: Precio del petróleo y pobreza (1990-2015)



Fuente: Los datos de pobreza provienen de World Bank (2016), salvo los correspondientes a 2014 y 2015, tomados de UCAB-UCV-USB (2015). La información del precio del petróleo proviene de USEIA (2017). La línea de ajuste se obtuvo por regresión local.

Dada la vulnerabilidad de la economía y de la política social hacia el precio del petróleo, cabe esperar que una reducción de estos como la registrada a partir de 2013 se traslade en una caída en los niveles de bienestar en la población que, a su vez, reduzca el apoyo hacia el gobierno.

Esta impresión se fortalece si se toma en cuenta que la disminución de los ingresos petroleros vino a agravar problemas ya presentes y los de-

¹⁴ El gobierno venezolano publicó anualmente estadísticas de pobreza hasta 2013. A partir de 2014 no se dispone de estimaciones oficiales de pobreza. Si se suprimen los datos no oficiales, la línea de ajuste tiene exactamente la misma forma.

rivados de una gestión económica deficiente. En particular, para 2008 la escasez de bienes de consumo y la inflación, de 25.8%, habían obligado al gobierno a retirar divisas, reducir el presupuesto, incrementar el impuesto al valor agregado, declarar moratoria para la deuda de PDVSA y, en 2010, a una devaluación importante (Corrales, 2010).

La expectativa de consecuencias electorales negativas para el gobierno, finalmente, se sustenta en el cuerpo de investigación empírica que, de manera consistente, reporta un vínculo sólido entre el desempeño económico de los gobiernos latinoamericanos y su suerte electoral.¹⁵ Adicionalmente, el hecho de que la Constitución de 1999 haya habilitado la reelección presidencial consecutiva tendría que fortalecer el llamado “voto económico”, pues la reelección puede ser considerada un factor institucional que fomenta la “claridad de la responsabilidad” (Powell y Whitten, 1993). Y si bien, como se verá aquí, en términos generales el electorado venezolano es sensible al estado de la economía, en situaciones específicas Chávez pudo obtener victorias electorales en condiciones financieras adversas.

La gráfica 2 muestra la diferencia entre el logaritmo natural del PIB per cápita real en cada año a partir de 1999 y este mismo logaritmo en 1998. Así, la gráfica compara el desempeño económico en cada año bajo gobiernos chavistas con el estado de la economía el año previo al acceso de Chávez al poder. Los valores negativos indican una situación económica peor a la de 1998, y los positivos, una mejoría con respecto a ese año.

La gráfica revela dos momentos de vulnerabilidad para la continuidad del chavismo y previos al actual, asumiendo que los problemas económicos se transforman automáticamente en reducción del apoyo al gobierno. El primer año del gobierno de Chávez presenta una reducción en el PIB per cápita explicada por las secuelas de la crisis asiática de 1997-1998. Tras dos años de razonable recuperación, se presenta un periodo de crisis entre 2001 y 2003. La vulnerabilidad, propiamente, termina en 2005, cuando se alcanzan los niveles previos a la crisis, pero es solo en 2006 cuando se puede decir que la economía está en mejor situación que

¹⁵ Para una revisión completa de esta abundante literatura, véase Lewis-Beck y Stegmaier (2008). Para resultados más recientes que confirman este hallazgo, véanse Gélinau y Singer (2015), Lewis-Beck y Ratto (2013), Nadeau, Bélanger y Didier (2017) y Singer (2013).

al arribo de Chávez. A partir de 2006, el PIB per cápita ya es tal que el gobierno tiene bases para afirmar que sus resultados constituyen una mejora. Sin embargo, en 2009 y 2010 Venezuela siente los efectos de la crisis económica mundial.¹⁶

Gráfica 2. Venezuela: desempeño económico del chavismo (1999-2014)



Fuente: World Bank (2016).

En la medida en que el estado de la economía influye en la fuerza electoral del gobierno, las tres veces en las que Chávez se presentó a reelección el calendario electoral coincidió con buenos momentos del ciclo económico: en 2000 se registra crecimiento con respecto a 1999; 2006 es el primer año en que la situación económica es mejor a la de 1998, y 2012 es el segundo año consecutivo de recuperación económica. Más aún, de las tres elecciones, la de 2006 es la que registra un mayor margen

¹⁶ Si bien es cierto que objetivamente esta crisis no puede ser atribuida al gobierno venezolano, lo cierto es que las crisis económicas representan un riesgo electoral para el gobierno, al margen de su grado de responsabilidad objetiva. Por ejemplo, en Europa occidental los partidos en el gobierno sufrieron importantes pérdidas como consecuencia de la gran recesión (Hernández y Kriesi, 2016).

de victoria, de 27 puntos porcentuales, a la vez que es aquella en la que el PIB per cápita presenta un mayor incremento porcentual.¹⁷

Sin embargo, como se comentó, el régimen de Chávez se distinguió por una alta exposición a las batallas electorales. Y de hecho ganó varias en momentos en los que la situación económica no resultaba tan favorable. Se mencionó antes el referéndum revocatorio de 2004. Ciertamente, en ese año la economía ya estaba creciendo. Sin embargo, se estaba saliendo de una crisis muy aguda y el PIB per cápita aún representaba solo 90% del valor de 1998. Existen al menos otros dos momentos similares. En 2009, primer año de recesión económica, se llevó a cabo un referéndum sobre una reforma que retiraba restricciones al número de reelecciones consecutivas permitidas al presidente y a otros cargos de elección popular. La medida fue aprobada con 54.9% de los votos. La relativa independencia de las elecciones con respecto al desempeño económico del gobierno es confirmada por el hecho de que así se aprobó una medida que había sido rechazada en un referéndum celebrado en 2007, un año de crecimiento económico robusto. De igual forma, en 2010, segundo consecutivo de la recesión, se celebraron elecciones para la Asamblea Nacional, en las que el PSUV obtuvo la mayoría de los votos y de los escaños.

Por supuesto, no se afirma aquí que en estos casos la situación política fue inmune al estado de la economía. En las elecciones del 2010 la diferencia entre el PSUV y la MUD fue de poco más de cien mil votos. De igual forma, el referéndum de 2004 fue antecedido por tres años de alta conflictividad política y social que incluyeron manifestaciones antigubernamentales masivas, un golpe de Estado de corta duración y una huelga general. Sin embargo, en los tres casos el gobierno pudo afianzar su poder gracias a que los efectos políticos de los problemas económicos no fueron de tal grado que anularan su capacidad para obtener mayorías electorales.

Esta particularidad del comportamiento electoral venezolano ya había sido detectada de alguna forma en otras investigaciones. Por un lado, en el análisis sistemático realizado por Gélineau y Singer (2015) sobre países latinoamericanos para diversos años, el caso venezolano se destaca por la considerable variación del efecto de la economía sobre el voto,

¹⁷ En 2000 el PIB per cápita creció 1.7% y en 2012, 4.1%. Los márgenes de victoria fueron de 22.3 y 11 puntos, respectivamente.

siendo fuerte dicho efecto en algunos periodos y, en otros, débil.¹⁸ Por su parte, Corrales (2010) también comentó sobre este relativo aislamiento del régimen venezolano con respecto a las consecuencias del ciclo de los precios del petróleo, si bien lo atribuye a la erosión de los mecanismos de rendición de cuentas que han minado la democracia venezolana. Esta explicación, nos parece, no se aviene del todo al carácter plebiscitario del régimen y al hecho de que el autoritarismo chavista tiene atributos que no pasan por la supresión de la competencia electoral.

El hecho a explicar, así, no es por qué bajo Maduro el gobierno venezolano está menos dispuesto que con Chávez a someterse a un veredicto electoral. En esta sección se concluye que el electorado le pasaría a Maduro la factura por la situación económica en un grado mayor al que se había mostrado antes con Chávez. Podría argumentarse que la menor severidad hacia Chávez se explica por la estrategia insurgente escogida por la oposición en los primeros años de su gobierno. En el periodo entre 2002 y 2004 la oposición eligió confrontar al gobierno con acciones como movilizaciones, un golpe de Estado y una huelga general que de manera directa e indirecta afectaron la situación económica.¹⁹ Como argumenta Duch (2007), si los votantes son capaces de distinguir en el ambiente factores ajenos al control de los representantes electos, pero que afectan a la economía, entonces el estado de la economía será menos importante en la determinación del voto.

Aunque sin duda la oposición venezolana dio buenos motivos para que se le atribuya gran parte de la mala situación económica de esos años, una explicación de este tipo bien podría aplicar al gobierno de Maduro, pues, por incompetente que haya sido su gestión, no se le puede responsabilizar del precio internacional del petróleo. Esto es, en la medida en que la atribución de responsabilidad a factores ajenos al control del presidente debilita la fuerza del voto económico, quedaría por explicar por qué esta exculpación funcionó con Chávez, pero no con Maduro.²⁰ En la siguiente sección se presenta una explicación alternativa.

¹⁸ Un estudio previo, con datos distintos, también había encontrado evidencia de esta variación en las elecciones venezolanas (Gélineau, 2007).

¹⁹ Actitudes exculpatorias de este tipo son consistentes con los resultados reportados por Nadeau, Bélanger y Didier (2013) en una muestra de ciudadanos venezolanos recogida en 2010.

²⁰ Por ejemplo, 65% de una muestra encuestada en noviembre de 2015 estuvo en desacuerdo con la afirmación de Maduro según la cual una conspiración de agentes econó-

Cómo se vota en Venezuela en perspectiva comparada: el papel del liderazgo

La situación venezolana de la actualidad es problemática, desde un punto de vista analítico, por la negativa del régimen fundado por Hugo Chávez a someterse al juicio electoral, cuando en el pasado se caracterizó por utilizar las mayorías electorales como un recurso para cimentar el poder presidencial. Por supuesto, en esto influye la coyuntura económica. Desde 2013, cuando comienzan a caer los ingresos petroleros, la economía venezolana entró en una etapa recesiva que no ha concluido. En las elecciones legislativas de 2015, los votantes le cobraron la factura al gobierno por los malos resultados económicos. Es altamente probable que en la certeza de una derrota esté la motivación de la negativa de Maduro a someterse a un referéndum revocatorio y a evitar en general una confrontación electoral. La alteración de las reglas para elegir a la Asamblea Constituyente es, asimismo, sintomática de la preocupación del grupo gobernante respecto de los resultados que obtendría en condiciones más equitativas. La novedad es que en pasadas situaciones, incluso en medio de crisis económicas más graves, el gobierno y su partido podían contar con una expectativa razonable para obtener el triunfo.

En la presente sección se ofrece una respuesta de carácter tentativo, a partir de un análisis comparado de los criterios usados por los votantes de 18 países de América Latina. Para ello se utilizan los datos del estudio de opinión realizado por Latinobarómetro en 2015. Para cada uno de los 18 países considerados en el estudio (con un total de 8105 observaciones con datos) se estima el modelo logístico

$$\ln \left(\frac{p}{1-p} \right) = \ln \left(\frac{P_G}{P_O} \right) + \alpha \ln E - \beta \ln \left(\frac{D_G}{D_O} \right),$$

donde p es la probabilidad de votar por el partido en el gobierno, E es el juicio de cada votante sobre el estado de la economía, $\frac{D_G}{D_O}$ es la razón de la distancia ideológica del votante con respecto al partido en el gobierno (D_G) sobre la distancia ideológica con respecto al partido de la oposición más cercano (D_O), $\frac{P_G}{P_O}$ es la utilidad percibida por el elector si vota por el

micos privados con intereses extranjeros había desatado una guerra económica contra Venezuela (Alarcón, Álvarez e Hidalgo, 2016).

partido del gobierno en vez del partido de la oposición más cercano, en caso de que el desempeño económico del gobierno sea igual al que cabe esperar de otro partido, y la distancia ideológica del votante con respecto al partido en el gobierno sea exactamente la misma que la distancia ideológica con respecto al partido de la oposición más cercano.

Para modelar p , se utiliza la respuesta a la pregunta: “Partido por el que votaría si este domingo fueran las elecciones”. Como operacionalización de E , se usa la respuesta a la pregunta sobre la situación económica del país con respecto a la del año anterior. A la respuesta “Mucho peor” se le asigna un valor de 0.5; a “Un poco peor”, 0.75; a “Igual”, 1; a “Un poco mejor”, 1.25, y a “Mucho mejor”, 1.5.²¹ Para obtener D_G , se utiliza la autoubicación en una escala donde 0 es la extrema izquierda y 10 la extrema derecha. Este valor se sustrae del valor asignado por Baker y Greene (2011) a la ideología del partido de quien ocupaba la presidencia en el momento de la encuesta (convirtiendo el valor a la escala 0 a 10). El valor absoluto de esta sustracción es $D_G \cdot D_0$ es el valor mínimo cuando se aplica el mismo procedimiento a todos los partidos de oposición.²² Finalmente, $\ln \frac{D_G}{D_0}$ está dado por la constante del modelo logístico.²³

Dado que los estimadores de las 18 ecuaciones así obtenidas no tienen en sí mismos un interés sustantivo, se presentan los resultados en términos de probabilidades de voto.²⁴ La gráfica 3 resume los resultados del modelo para los 18 países. El eje vertical, “voto partidista”, representa la probabilidad de votar por el partido en el gobierno asumiendo que se considera que la situación económica del país es igual a la del año ante-

²¹ Al tomar el logaritmo, esta codificación es tal que los votantes castigan el deterioro económico más de lo que premian la mejoría. Esto es, alrededor de una situación sin cambios, los votantes son “adversos a la pérdida”, en el sentido de Tversky y Kahneman (1991).

²² Propiamente, a la sustracción se le suma el número 1, con el fin de evitar situaciones en las que $D_0 = 0$.

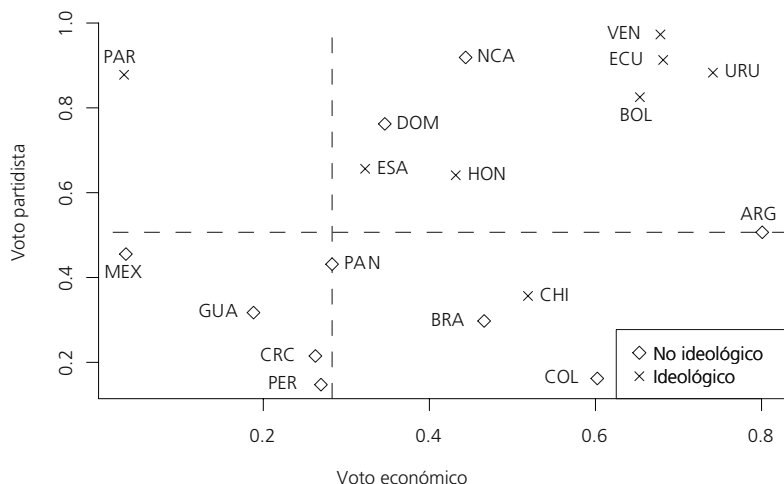
²³ La motivación teórica del modelo está explicada con detalle en Salazar-Elena y Salazar-Elena (2016), donde se justifica la interpretación de la constante. A grandes rasgos, el término E corresponde a la escuela del voto retrospectivo (Ferejohn, 1986), mientras que $\frac{D_G}{D_0}$ corresponde al modelo espacial (Black, 1948; Downs, 1957). El modelo también incorpora el hallazgo de Bartels (2002), según el cual las percepciones sobre el desempeño están condicionadas por la identificación partidista, y lo extiende a las percepciones sobre la distancia ideológica.

²⁴ Para las estimaciones que a continuación se presentan, se utiliza el paquete *Clarify* (King, Tomz y Wittenberg, 2000).

rior y que la distancia ideológica con respecto al partido en el gobierno es exactamente igual a la distancia con respecto al partido de oposición más cercano. La línea horizontal rayada está ubicada en $p = 0.5$. Así, en los países que aparecen por encima de esa línea el partido en el gobierno tiene el triunfo prácticamente garantizado aun si su desempeño económico, es mediocre y en términos ideológicos no se distinguen de la mejor oferta entre la oposición. Nótese que la probabilidad de voto en estas condiciones es superior 0.8 para cuatro países destacados del bloque ALBA: Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela.

El “voto económico” del eje horizontal representa el cambio en la probabilidad de voto cuando se pasa de considerar que la economía está “mucho peor” a pensar que la economía está “mucho mejor” y la razón de las distancias ideológicas es igual a 1. La línea vertical rayada está puesta justo sobre el valor de Panamá debido a que, salvo Costa Rica, en todos los casos para los que este cambio en la probabilidad de voto es inferior al de Panamá, dicho cambio es estadísticamente indistinguible de cero. En todos los casos a la derecha de la línea vertical rayada, el efecto de la percepción de la economía sobre el voto es significativo. Se puede ver que el voto económico es particularmente fuerte en Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela y Uruguay.

Gráfico 3. América Latina 2015: voto económico, partidista e ideológico



Fuente: Estimación propia con datos de Corporación Latinobarómetro (2015).

Finalmente, para todos los países se calculó el cambio en la probabilidad de voto por el partido en el gobierno cuando la razón de las distancias ideológicas pasa del valor máximo al valor mínimo de cada país, en un intervalo de confianza de 95% (mientras que se considera que la economía sigue igual). Únicamente en ocho países este cambio fue significativo, de modo que solo en ellos se puede decir que la ideología es un factor que influye en el voto. Estos países están identificados con una cruz en la gráfica. En Venezuela el voto tiene un componente ideológico importante.

De esta forma, se puede decir que el perfil de los votantes de un país determinado es similar al de los votantes venezolanos cuando *a)* el voto partidista es favorable al partido en el gobierno, *b)* existe voto económico y *c)* existe voto ideológico. Estos países son Bolivia, Ecuador, El Salvador, Honduras y Uruguay. Nótese que, con excepción de Honduras, en todos los casos un partido de izquierda detenta la presidencia.

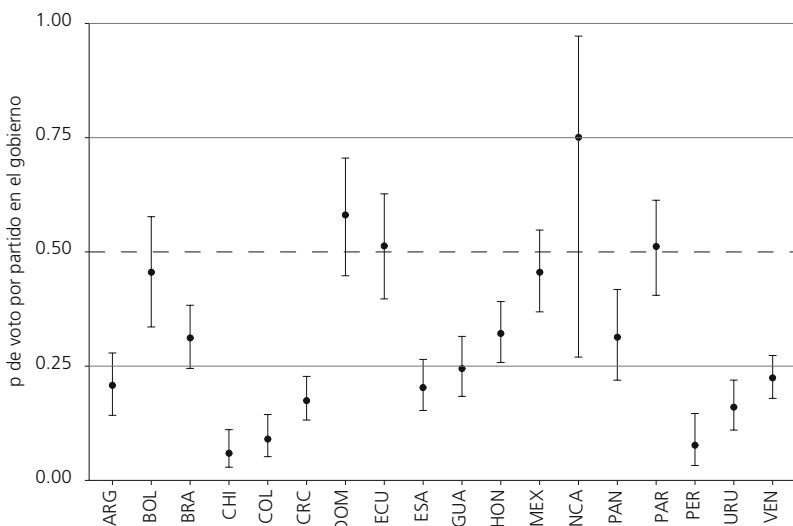
¿Cómo reaccionarían estos votantes a una situación de deterioro económico y polarización ideológica como la que vive Venezuela? La gráfica 4 simula la probabilidad de voto por el partido en el gobierno cuando se asume en las dos variables de la ecuación el valor mediano observado en Venezuela: la situación económica del país está “un poco peor”, y la razón entre la distancias ideológicas es igual a 3 (es decir, la distancia ideológica con respecto al partido en el gobierno es tres veces mayor que la distancia ideológica con respecto a la oposición).

En estas condiciones adversas, la probabilidad de voto por el partido en el gobierno para Venezuela es menor a 0.25. Sin embargo, en prácticamente todos los casos el voto por el gobierno se hace muy improbable. Ahora bien, en seis casos el intervalo de confianza pasa por $p = 0.5$, lo que indica que el partido en el gobierno tiene una oportunidad razonable de triunfo aun en un contexto tan desfavorable. Estos son: Bolivia, República Dominicana, Ecuador, México, Nicaragua y Paraguay. De ellos, solo Bolivia y Ecuador pertenecen al grupo antes señalado de casos similares a Venezuela en cuanto a perfil de votación. Asimismo, como se destacó, la ideología del gobierno es también similar.

Pero las similitudes de los tres casos no acaban ahí. A diferencia, por ejemplo, de Uruguay o El Salvador donde los partidos de izquierda que llegaron a la presidencia lo hicieron después de un largo periodo de participación electoral continuada, en los casos de Hugo Chávez, Rafael Correa y Evo Morales se trató del acceso al poder de *outsiders* de la política

tradicional cuyos respectivos partidos, en ese momento, fueron creados para dar una etiqueta a candidaturas altamente personalistas en un proceso de desmoronamiento del sistema de partidos vigente hasta el momento (De Lara, 2015; Mainwaring, 2006). A esto se añade que en los tres países se ha seguido un patrón similar de concentración del poder en la presidencia a costa de la división de poderes y con base en técnicas plebiscitarias (Weyland, 2013).

Gráfica 4. Voto por el gobierno en América Latina-2015
(simulación con valores típicos de Venezuela)



Fuente: Estimación propia con datos de Corporación Latinobarómetro (2015). En todos los casos se asume que la situación económica del país está "un poco peor", y que la razón entre la distancias ideológicas es igual a 3.

Entonces, ¿qué explica la diferencia? ¿Por qué los partidos en el gobierno de Bolivia y Ecuador tienen una considerable oportunidad de triunfo electoral en condiciones adversas, mientras que en Venezuela, bajo las mismas condiciones, la derrota está prácticamente garantizada? Reducida la comparación a estos tres casos, parece razonable inferir que la condición explicativa es el liderazgo. En Bolivia y Ecuador la utilidad percibida de votar por el partido en el gobierno (aun en condiciones

adversas) es indistinguible de la utilidad de votar por el presidente en turno, Morales y Correa, respectivamente. Esto era cierto también en Venezuela hasta antes del fallecimiento de Chávez.

Con esto no se afirma que los problemas actuales de Venezuela no serían tan graves si Chávez siguiera al frente. Al menos en el terreno de la gestión económica, esta afirmación es muy discutible. Pero el hecho de que haya gente que piensa así es consistente con la hipótesis que sugiere nuestro análisis: si Chávez estuviera enfrentando los mismos problemas económicos que enfrenta Maduro, la factura electoral no sería tan alta. Dadas las similitudes, la probabilidad de voto reportada para Bolivia y Ecuador en la gráfica 4 puede ser vista como un contrafáctico: lo que observaríamos en Venezuela si Chávez fuera presidente en vez de Maduro. No se trata únicamente de afirmar que Maduro no tiene los atributos de liderazgo que tenía Chávez o que tienen Correa y Morales, algo que vagamente podríamos denominar “carisma”. Más que eso, nuestro análisis sugiere que ciertos tipos de liderazgo amortiguan los efectos electorales del mal desempeño económico.

Chávez, Correa y Morales son ejemplos de liderazgo populista,²⁵ y la literatura que define al populismo por las propiedades del discurso puede darnos una orientación (Bonikowski y Gidron, 2016; Hawkins, 2009; Mudde, 2004; Schedler, 1996; Weyland, 2001). Los líderes populistas, en estas definiciones, se distinguen por un discurso maniqueo en el que se presentan junto al pueblo en una lucha contra alguna élite. Conseguir que dicho discurso sea *convinciente* otorga una herramienta poderosa para diversos objetivos políticos. En estos tres casos, las acciones políticas de los presidentes (Chávez, Correa y Morales) fueron justificadas en términos de esta lucha contra una oligarquía o partidocracia en defensa de los intereses de la mayoría. Las mismas acciones dirigidas a minar las instituciones de separación de poderes fueron presentadas como una forma de dar a estos líderes las herramientas para enfrentarse a las élites enquistadas en las estructuras del sistema político anterior.

En la medida en que este discurso sea convincente, sus efectos no son transferibles de una persona a otra. A diferencia de la identificación par-

²⁵ Véanse, por ejemplo, Castañeda (2006), Freidenberg (2007), Gratiús (2009), Lanzaro (2007), Moncagatta y Safranoff (2013), Panizza (2008), Ramírez Gallegos (2006) y Weyland (2013).

tidista, que adscribe a los integrantes del partido las orientaciones afectivas dirigidas a la organización, el discurso populista no tiene elementos para que el cambio de liderazgo sea acompañado de una transferencia de las cualidades que hacen que un sujeto se presente de forma verosímil como el representante del pueblo en su lucha contra la élite.

Se entiende entonces que Maduro, aun si encabeza el régimen fundado por Hugo Chávez, carezca de las herramientas para mitigar el impacto electoral de mal desempeño y de la polarización ideológica, al menos en la medida en que su antecesor lo conseguía. Más bien, Maduro es valorado con los mismos criterios con los que son juzgados otros líderes de izquierda como Tabaré Vázquez o Sánchez Cerén, para los que la distancia ideológica y el mal desempeño no solo son costosos, sino que se refuerzan mutuamente en la reducción al mínimo de las perspectivas de triunfo electoral del partido en el gobierno.

Conclusiones

En el presente capítulo se postuló una explicación tentativa del cambio de la actitud registrada por el régimen venezolano con respecto a la celebración de elecciones como mecanismo para resolver conflictos políticos. Esta transformación se debe a la certeza por parte del gobierno de que perdería un referéndum para obtener la permanencia de Maduro en la presidencia en una coyuntura de deterioro económico y polarización ideológica. En esto último, el actual gobierno de Venezuela no se distingue del tipo de *accountability* al que deben responder otros gobiernos bajo partidos de izquierda (o de derecha, si es el caso). Para la mayoría de los partidos de la izquierda partidista “institucionalizada” presentar malos resultados o implementar un programa alejado de las preferencias de la mayoría es costoso electoralmente.

Sin embargo, esto no es así para toda la izquierda. Los líderes de la izquierda populista parecen gozar de una relativa protección contra el mal desempeño. A pesar de que los y las votantes de Bolivia y Ecuador son sensibles a los resultados económicos y al contenido programático, para Morales y Correa las elecciones no necesariamente están perdidas si su desempeño no es bueno en coyunturas determinadas. Durante su gobierno Chávez se sometió al juicio electoral en todo tipo de

circunstancias y triunfó. Si las elecciones no representan un riesgo muy alto de perder el poder, entonces la celebración de elecciones frecuentes es un lujo que el gobierno se puede permitir. Maduro, que corresponde a un liderazgo más “rutinizado”, no puede dárselo.

De confirmarse este hallazgo, tendríamos que bajo los líderes populistas efectivamente se reduce la rendición de cuentas electoral. Pero no (o no necesariamente) por vía de la reducción de la competitividad electoral. Más bien, en virtud de que los costos electorales del mal desempeño no son tan drásticos como lo son para las izquierdas en las que el partido está menos ligado a una persona particular. Si bien se trata de un atributo del liderazgo que al parecer no es transferible, este efecto podría ayudar a generar expectativas sobre la relación entre elecciones y desempeño bajo el liderazgo populista.

En lo que se refiere al caso venezolano, el hecho de que la transición de Chávez a Maduro haya alineado al juicio electoral con la norma en otras democracias no significa que el régimen político abandonará sus características institucionales autoritarias. Únicamente significa que el régimen no puede recurrir a las elecciones para salir favorablemente de las crisis políticas. Esto bien podría llevar al gobierno a evitar los riesgos electorales proscribiendo a la oposición o recurriendo (como en la elección para la Constituyente) a modificar las reglas en forma tal que se minimice el riesgo del triunfo de la oposición.²⁶ En tal caso, el resultado sería una dictadura unipartidista, lo que es un bicho distinto a lo que conocíamos como “chavismo”.

Referencias

- Alarcón, Benigno, Ángel E. Álvarez y Manuel Hidalgo (2016). “Can Democracy Win in Venezuela?”, *Journal of Democracy*, vol. 27, núm. 2, pp. 20-34.
- Alcántara Sáez, Manuel (2008). “La escala de la izquierda: La ubicación ideológica de presidentes y partidos de izquierda en América Latina”, *Nueva Sociedad*, núm. 217, pp. 72-85.

²⁶ Los resultados del estudio de Kendall-Taylor y Franz (2016) sobre las consecuencias de la muerte de los dictadores hacen pensar que este escenario es altamente probable.

- Arditi, Benjamín (2009). "El giro a la izquierda en América Latina: ¿Una política post-liberal?", *Ciencias Sociais Unisinos*, vol. 45, núm. 3, pp. 232-246.
- Arenas, Nelly (2005). "El gobierno de Hugo Chávez: Populismo de otrora y de ahora", *Nueva Sociedad*, núm. 200, pp. 38-50.
- Baker, Andy y Kenneth F. Greene (2011). "The Latin American Left's Mandate: Free-market Policies and Issue Voting in New Democracies", *World Politics*, vol. 63, núm. 1, pp. 43-77.
- Bartels, Larry M. (2002). "Beyond the Running Tally: Partisan Bias in Political Perceptions", *Political Behavior*, vol. 24, núm. 2, pp. 117-150.
- Black, Duncan (1948). "On the Rationale of Group Decision-making", *Journal of Political Economy*, vol. 56, núm. 1, pp. 23-34.
- Bonikowski, Bart y Noam Gidron (2016). "The Populist Style in American Politics: Presidential Campaign Discourse, 1952-1996", *Social Forces*, vol. 94, núm. 4, pp. 15-93.
- Calvo Salazar, Cindy (2009). "La 'nueva' izquierda latinoamericana: Características y retos futuros", *Reflexiones*, vol. 88, núm. 1, pp. 55-65.
- Cameron, Maxwell A. y Flavie Major (2001). "Venezuela's Hugo Chávez: Savior or Threat to Democracy", *Latin American Research Review*, vol. 36, núm. 3, pp. 255-266.
- Cannon, Barry y John Brown (2017). "Venezuela 2016: El año de vivir peligrosamente", *Revista Ciencia Política*, vol. 37, núm. 2, pp. 613-633.
- Carroll, Rory (2013). *Comandante: Hugo Chávez's Venezuela*, Nueva York, The Penguin Press.
- Castañeda, Jorge G. (2006). "Latin America's Left Turn", *Foreign Affairs*, vol. 85, núm. 3, pp. 28-43.
- Cawthorne, Andrew (2017). "Venezuela Delays State Elections to 2017, Opposition Angry", 18 de octubre, Reuters, <<http://www.reuters.com/article/us-Venezuela-politics/Venezuela-delays-state-elections-to-2017-opposition-angry-idUSKCN12I2QN>>.
- Cleary, Matthew R. (2007). "A 'Left Turn' in Latin America? Explaining the Left's Resurgence", *Journal of Democracy*, vol. 17, núm. 4, pp. 35-49.
- Corporación Latinobarómetro (2015). *Latinobarómetro 2015*. Disponible en <<http://www.latinobarometro.org/lat.jsp>>.
- Corrales, Javier (2010). "Chávez's New Politics and Old Economics", en Kurt Weyland, Raúl L. Madrid y Wendy Hunter (eds.), *Leftist Governments in Latin America: Successes and Shortcomings*, Nueva York, Cambridge University Press, pp. 25-86.

- De Lara, Felipe B. (2015). "Todo por la patria: Refundación y retorno del Estado en las revoluciones bolivarianas", *Íconos. Revista de Ciencias Sociales*, vol. 19, núm. 52, pp. 19-41.
- Diego, Adriana (2016). *Análisis de los factores que favorecieron el giro a la izquierda en América Latina: ¿Por qué México no fue parte del patrón?*, tesis de Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos, México, Flacso México.
- Downs, Anthony (1957). *An Economic Theory of Democracy*, Nueva York, Harper and Row.
- Duch, Raymond M. (2007). "Comparative Studies of the Economy and the Vote", en S. C. Stokes y C. Boix (eds.), *The Oxford Handbook of Comparative Politics*, Nueva York, Oxford University Press, pp. 805-844.
- Ellner, Steve (2005). "Revolutionary and Non-revolutionary Paths of Radical Populism: Directions of the "Chavista" Movement in Venezuela", *Science & Society*, vol. 69, núm. 2, pp. 160-190.
- Ferejohn, John (1986). "Incumbent Performance and Electoral Control", *Public Choice*, vol. 50, vol. 1/3, pp. 5-25.
- Freidenberg, Flavia (2007). *La tentación populista: Una vía al poder en América Latina*, Madrid, Síntesis.
- Gélineau, François (2007). "Presidents, Political Context, and Economic Accountability", *Political Research Quarterly*, vol. 60, núm. 3, pp. 415-428.
- Gélineau, François y Matthew M. Singer (2015). "The Economy and Incumbent Support in Latin America", en Ryan E. Carlin, Matthew M. Singer y Elizabeth J. Zechmeister (eds.), *The Latin American Voter: Pursuing Representation and Accountability in Challenging Contexts*, Ann Arbor, University of Michigan Press, pp. 281-299.
- Gratius, Susanne (2006). *Reflexiones sobre izquierda y populismo en América Latina*, Bilbao, Ceinik.
- Hausmann, Ricardo y Roberto Rigobon (2011). "In Search of the Black Swan: Analysis of the Statistical Evidence of Electoral Fraud in Venezuela", *Statistical Science*, vol. 26, núm. 4, pp. 543-563.
- Hawkins, Kirk A. (2016). "Chavismo, Liberal Democracy, and Radical Democracy", *Annual Review of Political Science*, vol. 19, núm. 1, pp. 311-329.
- Hawkins, Kirk A. (2009). "Is Chávez Populist? Measuring Populist Discourse in Comparative Perspective", *Comparative Political Studies*, vol. 42, núm. 8, pp. 1040-1067.

- Hernández, Enrique y Hanspeter Kriesi (2016). "The Electoral Consequences of the Financial and Economic Crisis in Europe", *European Journal of Political Research*, vol. 55, núm. 2, pp. 203-224.
- Jiménez, Raúl y Manuel Hidalgo (2014). "Forensic Analysis of Venezuelan Elections During the Chávez Presidency", *PLOS ONE*, vol. 9, núm. 6, p. e100884.
- Jiménez, Raúl, Manuel Hidalgo y Peter Klimek (2017). "Testing for Voter Rigging in Small Polling Stations", *Science Advances*, vol. 3, núm. 6, p. e1602363
- Kendall-Taylor, Andrea y Erica Frantz (2016). "When Dictators Die", *Journal of Democracy*, vol. 27, núm. 4, pp. 159-171.
- King, Gary, Michael Tomz y Jason Wittenberg (2000). "Making the Most of Statistical Analyses: Improving Interpretation and Presentation", *American Journal of Political Science*, vol. 44, núm. 2, pp. 347-361.
- Kornblith, Miriam (2005). "The Referendum in Venezuela: Elections versus Democracy", *Journal of Democracy*, vol. 16, núm. 1, pp. 124-137.
- Lagos, Marta (2006). "A aparse de la fantasía: Hugo Chávez y los liderazgos en América Latina", *Nueva Sociedad*, núm. 205, pp. 92-101.
- Lander, Luis E. y Margarita López Maya (1999). "Venezuela: La victoria de Chávez. El polo patriótico en las elecciones de 1998", *Nueva Sociedad*, núm. 160, pp. 4-19.
- Lanzaro, Jorge (2007). "La 'tercera ola' de las izquierdas latinoamericanas: entre el populismo y la socialdemocracia", *Encuentros Latinoamericanos*, vol. 1, núm. 1, pp. 20-57.
- Levitsky, Steven y Kenneth M. Roberts (eds.) (2011). *The resurgence of the Latin American Left*, Baltimore, Johns Hopkins University Press.
- Lewis-Beck, Michael S. y María C. Ratto (2013). "Economic Voting in Latin America: A General Model", *Electoral Studies*, vol. 32, núm. 3, pp. 489-493.
- Lewis-Beck, Michael S. y Mary Stegmaier (2008). "The Economic Vote in Transitional Democracies", *Journal of Elections, Public Opinion and Parties*, vol. 18, núm. 3, pp. 303-323.
- López Maya, Margarita (2017). "Cronología de los eventos que condujeron a la suspensión del RRP y la mesa de diálogo", *LASA Forum*, vol. XLVIII, núm. 1, pp. 47-52.
- López Maya, Margarita (2011). "Venezuela: 'Hugo Chávez and the Populist Left'", en Steven Levitsky y Kenneth M. Roberts (eds.), *The Resurgence*

- of the *Latin American Left*, Baltimore, Johns Hopkins University Press, pp. 213-238.
- López Maya, Margarita (2008). "Venezuela: Hugo Chávez y el bolivarianismo", *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, vol. 14, núm. 3, pp. 55-82.
- Mainwaring, Scott P. (2006). "The Crisis of Representation in the Andes", *Journal of Democracy*, vol. 17, núm. 3, pp. 13-27.
- McCarthy, Michael (2016). "6 Things You Need to Know about Venezuela's Political and Economic Crisis", *The Washington Post*, 18 de mayo. Disponible en <https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2016/05/18/6-things-you-need-to-know-about-Venezuelas-political-and-economic-crisis/?utm_term=.788f67893d9f>.
- McCoy, Jennifer L. (2017). "Venezuela's Controversial New Constituent Assembly, Explained", *The Washington Post*. Disponible en <https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2017/08/01/Venezuelas-dubious-new-constituent-assembly-explained/?utm_term=.e07128baafa9&wpisrc=nl_cage&wpm=1>.
- McCoy, Jennifer L. (2006). "The 2004 Venezuelan Recall Referendum", *Taiwan Journal of Democracy*, vol. 2, núm. 1, pp. 61-80.
- Moncagatta, Paolo y Ana Safranoff (2013). "¿Quién apoya a la izquierda 'populista' latinoamericana?", *Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública*, vol. 2, núm. 1, pp. 29-48.
- Mudde, Cas (2004). "The Populist Zeitgeist", *Government and Opposition*, vol. 39, núm. 4, pp. 541-563.
- Nadeau, Richard, Eric Bélanger y Thomas Didier (2013). "The Chávez Vote and the National Economy in Venezuela", *Electoral Studies*, vol. 32, núm. 3, pp. 482-488.
- Nadeau, Richard, Michael S. Lewis-Beck, Eric Belanger y François Gelineau (2017). *Latin American Elections: Choice and Change*, Ann Arbor, University of Michigan Press.
- Nelson, Brian A. (2009). *The Silence and the Scorpion: The Coup against Chávez and the Making of Modern Venezuela*, Nueva York, Nation Books.
- Panizza, Francisco (2008). "Fisuras entre populismo y democracia en América Latina", *Stockholm Review of Latin American Studies*, núm. 3, pp. 81-93.
- Powell, G. Bingham y Guy D. Whitten (1993). "A Cross-national Analysis of Economic Voting: Taking Account of the Political Context", *American Journal of Political Science*, vol. 37, núm. 2, pp. 391-414.

- Przeworski, Adam (1991). *Democracy and the Market: Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America*, Nueva York, Cambridge University Press.
- Ramírez Gallegos, Franklin (2006). “Mucho más que dos izquierdas”, *Nueva Sociedad*, núm. 205, pp. 30-44.
- Romero, Juan E. (2005). “Discurso político, comunicación política e historia en Hugo Chávez”, *Ámbitos. Revista Internacional de Comunicación*, núm. 13-14, pp. 357-377.
- Romero, Juan E. (2001). “El discurso político de Hugo Chávez (1996-1999)”, *Espacio Abierto*, vol. 10, núm. 2, pp. 229-245.
- Salazar-Elena, Rodrigo (2008). “La política exterior de Hugo Chávez”, *Revista Mexicana de Política Exterior*, núm. 83, pp. 217-238.
- Salazar-Elena, Rodrigo y Juan C. Salazar-Elena (2016). “La función de utilidad del voto: Un modelo de estimación”, inédito.
- Santos, Miguel A. (2017). “Venezuela: Running on Empty”, *LASA Forum*, vol. XLVIII, núm. 1, pp. 58-62.
- Schedler, Andreas (1996). “Anti-political-establishment Parties”, *Party Politics*, vol. 2, núm. 3, pp. 291-312.
- Singer, Matthew M. (2013). “Economic Voting in an Era of Non-crisis: The Changing Electoral Agenda in Latin America, 1982-2010”, *Comparative Politics*, vol. 45, núm. 2, pp. 169-185.
- Tversky, Amos y Daniel Kahneman (1991). “Loss Aversion in Riskless Choice: A Reference-dependent model”, *The Quarterly Journal of Economics*, vol. 106, núm. 4, pp. 1039-1061.
- UCAB-UCV-USB (2015). Encuesta sobre condiciones de vida en Venezuela, Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, Universidad Central de Venezuela, Universidad Simón Bolívar.
- USEIA (2017). “Cushing, OK WTI Spot Price Fob (Dollars per Barrel)”. Disponible en <<https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=pets&s=rwtc&f=a>>.
- Weisbrot, Mark (2008). “An Empty Research Agenda: The Creation of Myths about Contemporary Venezuela”, *Issue Brief*, Washington, D. C., Center for Economic and Policy Research.
- Weyland, Kurt (2013). “The Threat from the Populist Left”, *Journal of Democracy*, vol. 24, núm. 3, pp. 18-32.
- Weyland, Kurt (2001). “Clarifying a Contested Concept: Populism in the Study of Latin American Politics”, *Comparative Politics*, vol. 34, núm. 1, pp. 1-22.

- Weyland, Kurt, Raúl L. Madrid y Wendy Hunter (eds.) (2010). *Leftist Governments in Latin America: Successes and Shortcomings*, Nueva York, Cambridge University Press.
- Wiesehomeier, Nina y David Doyle (2013). "Discontent and the Left Turn in Latin America", *Political Science Research and Methods*, vol. 1, núm. 2, pp. 201-221.
- World Bank (2016). World Development Indicators. Disponible en <<http://www.umich.edu/~varel%20,%20https://www.github.com/vincentarel-bundock/WDI>>

7. ¿La calle es de los revolucionarios...?

Postotalitarismo y activismo opositor en Cuba. El caso de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu)*

*Armando Chaguaceda***

*Carlos G. Torrealba****

Introducción

Cuba es un caso atípico en el contexto latinoamericano. Regido por un mismo partido y liderazgo políticos desde hace más de medio siglo, ilegalizada la oposición y severamente restringidos los derechos ciudadanos, el país rompe la idea de Latinoamérica como un conjunto de naciones donde la constitución, renovación y funcionamiento de sus órganos de poder estatal están fundados en los principios del Estado de derecho. Así, en un continente mayormente democrático, la isla es un rincón de prolongado y persistente autoritarismo.

Partiendo de ese antecedente, el presente capítulo se plantea un estudio exploratorio de un sector relevante de la ilegalizada oposición cubana, a través de la experiencia de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), la principal formación opositora en cuanto a número de integrantes, extensión temática y territorial de su activismo y que más intensamente ha sufrido de represión gubernamental. Lo realizamos a la luz de los estudios contemporáneos sobre los movimientos sociales, los análisis sobre

* Nuestro agradecimiento a las siguientes personas: A los dictaminadores anónimos, que evaluaron las primeras versiones del texto. A los colegas Carlos R. Arechavaleta, Jairo A. López, Jorge I. Domínguez, Luis D. Vázquez, Marie L. Geoffrey y Marlene Azor, por sus profundas observaciones. Pero, muy especialmente, a los activistas de la Unpacu que compartieron —en medio de su difícil condición— sus testimonios de lucha y esperanza.

** Profesor-investigador de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad de Guanajuato, Campus León.

*** Doctorando en Investigación en Ciencias Sociales, Flacso México.

regímenes autocráticos, la relación represión-acción colectiva y la lucha en pro de los derechos humanos en contextos dictatoriales, incorporando la metodología de análisis de marcos, de la cultura de movimientos y de la estructura del discurso.

El objetivo es dar cuenta de los marcos de significación de la organización, analizar sus posibles alcances y ofrecer una discusión acerca de una potencial caracterización de la misma, enmarcándolos en un estudio sobre la situación sociopolítica de la Cuba actual y dimensionándolos en los debates acerca del lugar ocupado por organizaciones de derechos humanos que despliegan acciones en el espacio público de la isla y su dinámica contestataria respecto a un Estado transgresor. Para ello se retomó el resultado de investigaciones anteriores sobre el caso cubano, se recabó el testimonio de dos expertos y 54 miembros de la organización (véase el cuadro 1)¹ y se analizó —con la metodología correspondiente— el contenido del programa mínimo de aquella.

Teniendo lo anterior en cuenta, la estructura del trabajo es la siguiente: *a)* se ofrecen en la introducción los conceptos básicos del enfoque analítico-metodológico, *b)* se presenta una breve contextualización, identificando los rasgos esenciales del régimen político cubano y de la Unpacu, *c)* se reconstruye el enmarcado de significación de los miembros de la organización, especificando los contenidos e importancia de cada categoría y analizándolo en función de la situación sociopolítica de la Cuba actual y del contexto de los movimientos pro derechos humanos, *d)* se hace lo propio con el discurso contenido en el programa mínimo de la organización, y *e)* se propone una discusión de los principales hallazgos en diálogo con las investigaciones previamente realizadas y con los testimonios de los expertos consultados.

Ante las dificultades para recabar datos y construir argumentaciones en torno a la situación de los activismos y organizaciones de defensa de los derechos humanos en la isla, la meta es elaborar un texto que dé cuenta de los rasgos, alcances y limitaciones de una agrupación concreta —en este caso la mayor y más activa del país— apelando a elementos de su propia cotidianidad, para así construir conocimiento acerca

¹ Las preguntas del instrumento fueron: ¿Qué te hizo incorporarte a la Unpacu? ¿Qué ha implicado para ti en lo personal, familiar y demás, unirse a la Unpacu? ¿Cómo imaginas la Cuba futura?

del repertorio (con sus respectivos *performances*), identidades, acciones y constitución de potenciales movimientos contestatarios en el contexto de lo que Charles Tilly y otros autores han denominado como un régimen autoritario (en este caso específicamente posttotalitario) de alta capacidad.

Cuadro 1. Matriz muestral*

	<i>Matriz muestral</i>	<i>Núm.</i>
Sexo	Masculino	38
	Femenino	16
Ocupación	Sin ocupación	7
	Intelectual	2
	Activista	21
	Ama de casa	10
	Trabajador	8
	Cuentapropista	4
	Profesionista	1
Raza	Blanca	10
	Mestiza	32
	Negra	12
Estudios	Altos	8
	Medios	35
	Iniciales	11
Edad	Mayor	1
	Adulto	28
	Joven	25

* La categoría de activista dentro de esta matriz corresponde a la (auto)adscripción de un grupo de los entrevistados; se trata en general de personas que dedican mucho tiempo y energía a la organización. En algunos casos —particularmente cuando la situación personal y familiar sufre afectaciones materiales y psicológicas derivadas de la represión, que afectan el patrimonio y libertad de los implicados— la organización aporta recursos para socorrer en la manutención.

Fuente: Elaboración propia.

Para comenzar, es menester apuntar que los componentes de los marcos de significación que estudian Snow y Benford, según Chihu Amparán, son:

Marcos de diagnóstico (que determinan cuándo una condición o evento social problemático necesitan ser modificados), marcos de pronóstico (que dan propuestas para la solución de un evento social problemático)

y marcos de movilización (que proponen motivos para que los actores se comprometan a participar en la acción colectiva) (Chihu Amparán, 2000: 216).

En ese sentido, hay que tener en cuenta que el marco de diagnóstico involucra la identificación de un problema, pero también la atribución de responsabilidad sobre dicho inconveniente. También es fundamental comprender que estos marcos son relevantes debido a que se consideran claves en la orientación de la acción colectiva. Además, compartimos la creencia de que es necesario apelar a un estudio de las dimensiones culturales de los movimientos sociales, en tanto que en estos es crucial la construcción de una identidad (Chihu Amparán, 2000: 211). Sin embargo, como se verá en el próximo apartado, pero también en el último, no se descuida la necesaria discusión con aproximaciones más centradas en la movilización de recursos y en la dinámica de oportunidades y restricciones que involucra la interacción con un régimen como el cubano. Ambas dimensiones están relacionadas en cuanto que la estructura de significados representa el repertorio simbólico a partir del cual los actores construyen sus incentivos cooperativos, organizativos y de movilización.

Por su parte, el análisis estructural del discurso, constituido por las ideas de Barthes, Greimas y Hiernaux, es una estrategia analítica que se presenta, desde la sociología de la cultura, como método para captar los modelos culturales. La intención es poder comprender representaciones culturales o sentidos socialmente producidos en términos operacionales definidos rigurosamente y basados en elementos concretos. En términos operativos, sus dos principios básicos son el de “oposición — que sostiene que el sentido surge a través de la confrontación con los opuestos, es decir, un ordenamiento binario del mundo — y asociación — que propone que los códigos disyuntivos se asocian con otros para formar redes de sentido” (Suárez, 2008: 121). En otras palabras: sobre los materiales concretos, y para la reconstrucción de las estructuras de sentido de los actores, se identifican, mediante la disyunción, unidades mínimas de análisis y, en el momento de asociación, se clasifican formando una red de atributos.

En estos dos enfoques es crucial la identidad. En el caso de la Unpacu, sus esfuerzos radican en construir una identidad ciudadana democrática.

ca² y, como se verá, esta tiene como eje principal los derechos humanos. Los derechos humanos representan reclamos sobre relaciones de poder organizadas, realizados por personas en diversos sistemas sociales y culturales en pro de una mayor dignidad humana. Expresan estándares mínimos para el buen funcionamiento institucional y la dignidad humana, convirtiéndose en una doctrina política con sus propios sujetos (activistas), agenda (promoción y defensa) y adversarios (violadores) a escala global (Velasco, 2010: 275). Constituyen una construcción social e histórica de sujetos que disputan, frente al poder instituido, las nociones de libertad, justicia y democracia (Estévez, 2010: 142).

Como cuerpo de ideas y agenda de lucha en pro de la dignidad individual y colectiva, los derechos humanos proveen estándares comunes de alcance global para, en competencia con otros actores, ideas y valores opuestos (nacionalistas, autoritarios, privatizadores, fundamentalistas) en la esfera pública (escuelas, medios, etc.), juzgar lo que está mal en la vida política local, nacional e internacionalidad (Chong, 2014: 33). Siendo *universales* —al trascender culturas y estatus legales definidos por los Estados—, *inalienables* —pues no pueden ser objeto de despojo— e *indivisibles* —sin preeminencia o menoscabo de unos u otros—, lo que los confirma como factor decisivo para el logro de la dignidad humana (Chong, 2014: 12) en ámbitos comunitarios, sociales y nacionales.

Realizadas tales precisiones, creemos que este trabajo tributa a una disciplina y campo de estudios específicos, en particular a la *sociología política contemporánea* —que examina la respuesta y transformación de las identidades de los sujetos en su interacción con instancias de poder estatal, haciendo énfasis en los aspectos subjetivos de la ciudadanía y el factor discursivo en la construcción de relaciones sociales— y, en específico, a la *sociología política de los derechos humanos*, que estudia la acción de defensa y promoción de estos, en contextos históricos en que diversos sujetos se empoderan a través de la producción de discursos afines —de derechos humanos—, organizándose y reivindicando intereses frente al poder (Estévez, 2010: 135-136), en este caso el de un Estado autoritario de

² Pues, como señalan Tilly y Wood (2010), una de las repercusiones del accionar de los movimientos sociales se relaciona con el fomento de la soberanía popular; a partir de la idea de que las cuestiones y decisiones públicas deben depender del consentimiento de los gobernados.

alta capacidad. Y, en tanto que para la reconstrucción del enmarcado de significación de los miembros de la organización es clave la interacción con el carácter posttotalitario del régimen, procuraremos abordar este tópico desde la identificación de categorías como *democracia*, *prosperidad económica*, *libertad*, *ver abusos del régimen* o *ser víctima de ellos*, en el discurso de los activistas.

El contexto cubano: régimen político y oposición

A partir de la segunda mitad de 1960, dentro del proceso histórico y social desatado por el triunfo revolucionario de 1959, se produce la transición en Cuba de un proyecto de nacionalismo revolucionario a un régimen de tipo soviético. En paralelo con su enorme impacto transformador de las estructuras internas de la isla, la Revolución cubana se convierte en un proceso político con apreciables capacidades de demostración y difusión continentales, al comprobar la factibilidad de una revolución socialista en Occidente y diseminar, en fuerzas radicales de la periferia global —y algunas vanguardias culturales del Primer Mundo—, ideas y preferencias políticas alternativas a la democracia liberal (Mainwaring y Pérez-Liñán, 2013).³

Vistos en perspectiva, los acontecimientos del verano y otoño de 1960 como la neutralización de la prensa independiente, nacionalización de la industria grande y mediana, comercio y servicios, viajes de dirigentes cubanos a la Europa y Asia socialistas llevan la marca de lo que el neoinstitucionalismo llama una *coyuntura crítica* (Pierson, 2004). Es decir: decisiones y momentos históricos donde, en el marco de una disputa política, ciertos actores clave toman decisiones fundamentales que aíslan o derrotan a sus rivales, tras las cuales los procesos de cambio y desarrollo político-institucionales entran en una inercia que dificulta cualquier reversión potencial. Semejante decurso político se consolidó a través de la forja de un partido único, del control ideológico de la cultura, la edu-

³ Para el estudio del proceso revolucionario cubano —que desde nuestra perspectiva abarca la primera década ulterior a 1959— destacamos, entre otras obras, los libros de Rafael Rojas (2015), Lillian Guerra (2012), Vanni Pettinà (2011) y Sam Farber (2011).

cación y los medios de comunicación masiva, de la neutralización de la oposición compuesta, en gran parte, por nacionalistas moderados que habían luchado contra la dictadura de Batista, así como la suplantación de la sociedad civil republicana por otra revolucionaria, moldeada según el canon leninista (Guerra, 2012; Farber, 2011).

Desde entonces, la Cuba revolucionaria fue terreno fértil para la confluencia y consolidación de los procesos y conflictos ligados con el ejercicio de la política autocrática,⁴ en su modalidad totalitaria, a partir de los mecanismos de control sobre los gobernados y de la concentración y ejercicio del poder, altamente ejecutivo y personalista, bajo la égida de Fidel Castro y su pequeño grupo de colaboradores (Raúl Castro, Che Guevara, Ramiro Valdés). Así, el control se materializó en los marcos del desarrollo paralelo de una *política de masas* y una guerra civil, que consolidaron el control político estatal sobre la población cubana.

Mediante la primera, el gobierno creó nuevas organizaciones de participación y control barriales, los Comités de Defensa de la Revolución; militarizó la ciudadanía a través de la creación de milicias obreras y estudiantiles, y se apropió de tradiciones y formas asociativas de los trabajadores, como los sindicatos y las movilizaciones afines, todo ello con el propósito de fortalecer su control espacial y poblacional mediante una mezcla de inclusión social y hegemonización de la política. Por su parte, la puesta en marcha de un proceso de creciente concentración y ejercicio personalista del poder tuvo durante los años sesenta varios hitos fundamentales. La fusión de las tres organizaciones revolucionarias en una sola, la paulatina incorporación (desde 1960) de comunistas procedentes del pro soviético Partido Socialista Popular a diversas funciones del aparato estatal —desde la economía hasta la esfera cultural— y el encumbraimiento de Fidel Castro dentro del liderazgo revolucionario, acercaban el diseño institucional y el adoctrinamiento ideológico a esquemas afines al modelo de socialismo del Estado soviético.

Estos rasgos, presencia de un liderazgo caudillista y carismático, partido único, ideología de Estado, control a través de la policía política y movilización social, permiten incluir el caso cubano, en especial en sus primeras dos décadas, dentro de la familia de regímenes totalitarios. Con

⁴ Sobre estos fenómenos, véase el excelente libro de Milan W. Svolik (2012) sobre las lógicas y dinámicas del poder autoritario.

posterioridad, a partir del crecimiento de la burocracia, el mercado, espacios de pluralismo social y cultural, la relativa institucionalización y hacer rutinarios ciertos procesos sociales, es posible hablar del paso a un régimen posttotalitario (Linz, 2000) que, sin embargo, no abandona rasgos centrales del modelo clásico, ligados al poder personal de Fidel Castro, el uso de la violencia contra opositores y la persistencia del factor ideológico como elemento de legitimación y control.⁵

Explicar las continuidades y cambios dentro del régimen resulta relevante para los propósitos de este trabajo. En esa línea, Jorge Domínguez (1997) caracteriza al régimen cubano como claramente *totalitario* en su fase temprana —años sesenta—, evolucionando a *burocrático-socialista*. En él se aceitan un poco mejor algunos dispositivos institucionales sin desplazar del todo las lógicas totalitarias, para las décadas de 1970 y 1980. Mientras que para los años noventa el autor reconoce la mutación a un régimen autoritario o posttotalitario, en el cual “las personas adquieren un margen de autonomía frente al Estado a pesar de los deseos de este de impedirlo” (Domínguez, 1997: 8).⁶ Por su parte, Hoffman (2016) señala que, desde que Raúl Castro asume la sucesión en 2006, los cambios son relevantes, pues las reformas económicas no se reducen a la introducción gradual de más mecanismos de mercado sino que también tienen profundas implicaciones para la política y la sociedad en tanto delinean nuevas relaciones entre el Estado, los actores económicos y la ciudadanía.⁷

⁵ En nuestra mirada, los conceptos *totalitario* y *posttotalitario* mantienen vigencia en cuanto que no son utilizados como simples etiquetas ideológicas, sino que remiten —y describen— a modos específicos de concebir y ejercer el poder autocrático. Para una mayor profundidad teórica sobre el tema, véase la obra clásica de Juan Linz (2000); para un aterrizaje de estos conceptos en el caso cubano, véase la obra de Claudia Hilb (2010) y el trabajo reciente de Ramón I. Centeno (2017).

⁶ Prueba de ello sería la emergencia de una sociedad civil relativamente independiente, la generación de grupos y partidos de oposición en un número difícil de constatar en épocas anteriores, el debilitamiento de la ideología oficial (de referencias exclusivas al marxismo-leninismo, al nacionalismo), la estimulación de la inversión extranjera, la restructuración del papel de las fuerzas armadas, cierta desinstitucionalización dada la personalización del poder en Fidel Castro y la muy importante pérdida del temor al poder del Estado. Giro posttotalitario cuyos rasgos fundamentales se mantienen actualizados en los escenarios de gobierno y reforma dirigidos por Raúl Castro (Domínguez, 2016).

⁷ Ahora bien, en una investigación más reciente sobre este sector empresarial naciente se sostiene que estos procesos más que cambiar el modelo pueden *actualizarlo* (Mesa-Lago et al., 2016). En este sentido, una de las reformas más relevantes es la expansión

Entre estos cambios notables estarían el desmantelamiento del carácter personalista de la política cubana, el avance de un proceso de reinstitucionalización —caracterizado por la renovada atención a los procesos y procedimientos del aparato del partido, el aislamiento de las estructuras paralelas vinculadas directamente a Fidel, entre otros elementos—, y cierta apertura mediática, migratoria y diplomática (Hoffmann, 2016: 5).⁸

Para otro experto, hay varios signos que indican que las reformas, luego del histórico acercamiento con Obama, se han estancado o frenado (Bye, 2016: 3),⁹ manteniéndose ausentes elementos clave para avanzar a una transición democrática: la aparición de un importante sector económico no estatal, una sociedad civil libre y activa, una sociedad política relativamente autónoma y una élite política proclive al cambio (Bye, 2016: 10).

En relación con este marco, debemos recordar que si bien el logro de niveles adecuados de derechos humanos supone la existencia de Estados fuertes —en su capacidad de garantizarlos— y contextos sociales no empobrecidos, desiguales o polarizados (Velasco, 2010: 279-281), ese

del sector no estatal (trabajadores por cuenta propia, granjeros usufructuarios, socios de cooperativas); sin embargo, el avance del sector ha sido insuficiente debido a ciertas condiciones adversas que debe enfrentar, por ejemplo, escasez de insumos, precios altos, restricciones burocráticas, impuestos y baja cualificación (Mesa-Lago *et al.*, 2016). Bobes (2016) atiende estos procesos en virtud de sus consecuencias en la reconfiguración de los imaginarios sociales; la centralidad pasó del proletario a estas nuevas figuras, como el cuentapropista, lo que conlleva nuevas formas de desigualdad, jerarquías y exclusiones, con su correspondiente discurso legitimador.

⁸ Para Hoffmann, si bien los medios del Estado siguen siendo fuertes ya no son la única opción disponible. En este punto es relevante el impacto del uso de los medios digitales, aunque destaca que una limitante es el tema de la autocensura como costo para que estos se mantengan, un elemento que también refiere Azor (2016) en la entrevista para esta investigación.

⁹ Señala el autor que “los que toman las decisiones parecen bastante preocupados con que un sector empresarial creciente en la economía socavaré el proyecto socialista de la revolución y que esta es la agenda real de la nueva política de Obama hacia Cuba” (Bye, 2016: 1). En cuanto al acercamiento entre Estados Unidos y Cuba dejó en evidencia el hecho de que, aparte del importante apoyo popular a la iniciativa, los principales interesados eran los presidentes Obama y Raúl Castro. Desde la perspectiva del analista, la desconfianza de diversos sectores del Partido Comunista Cubano y el Congreso estadounidense es palpable, hasta el punto de instaurarse en el discurso del propio Raúl Castro. Un retroceso aparentemente contradictorio que se puede explicar en el hecho de que la visita de Obama “generó un apoyo en la población y una dinámica de cambio para los cuales el gobierno cubano no estaba preparado” (Bye, 2016: 5).

aparato debe ser a la vez democrático y regulado conforme a derecho. En este sentido, Cuba es un *Estado posttotalitario de alta capacidad*, es decir, cumple una parte de los requisitos, pero no la otra. Más aún, la forma en que cumple el requisito de fortaleza es lo que vulnera la otra dimensión. Perteneciendo a la familia milenaria, extensa y variopinta de las autocracias, la de Cuba no es una dictadura tradicional, un autoritarismo militar y mucho menos un régimen híbrido. Tampoco un *posttotalitarismo maduro*. Su régimen se encuentra aún en una fase temprana, y dura, susceptible de recaídas, de la evolución *posttotalitaria* (Linz, 2000) en la que varios núcleos totalitarios (partido único, control político y policiaco, ideología de Estado) siguen siendo centrales en la constitución, reproducción y funcionamiento cotidianos del orden político.

Las características de ese régimen cerrado, estable, de alta capacidad y, en particular, sus mecanismos de control social en combinación con la vigilancia masiva, cooptación variable y represión puntual inhiben la movilización masiva y son determinantes para entender que la acción colectiva ante la injusticia podría emerger, pero se mantiene en niveles limitados de organización y las formas de reconocimiento social aún son marginales.

En ese sentido, es importante resaltar el hecho de que en la Cuba *raulista* ciertos espacios de apertura han sido acompañados con prácticas de clausura y represión en otros. Algunos autores ven esta violencia como efecto del mismo proceso de apertura y una muestra de debilidad, y otros lo perciben de forma más reservada con respecto a la posibilidad de un cambio sustantivo a futuro. Hoffman se refiere a que el “Estado está dando a los ciudadanos más autonomía” (2016: 11), una forma de decir las cosas que puede soslayar lo que apunta Domínguez (2016): no se trata siempre de voluntad sino de incapacidad de controlar. Geoffray, en cambio, retoma el asunto de la voluntad de apertura, pero no en términos benevolentes sino como parte de una forma de *poder suave*: permitir expresiones que no desafíen demasiado el sistema y proseguir con represiones específicas.

En esa línea, la autora llama la atención sobre el proceso de “canalización de las demandas sociales y políticas de los ciudadanos hacia formas de participación relativamente inofensivas y despolitizadas” (Geoffray, 2014: 1). Para ello, el repertorio del Estado para lidiar con sus ciudadanos se constituye como una mezcla de represión selectiva, concesiones tácticas, liberalización económica tímida y participación política monitoreada. Todo con el objetivo de desplazar y acotar el descontento político y

condensarlo en reclamos sociales o culturales específicos y localizados. En otras palabras: se trata de la desactivación del conflicto a través de su canalización y sublimación en escenarios manejables. Así, lo que otros autores asocian como incapacidad estatal, síntoma de debilidad o, incluso, como voluntad benevolente, para Geoffray es expresión de una dinámica ambivalente deliberada, donde el Estado — pese a su vocación y capacidad de control — no alcanza a abarcarlo todo.¹⁰ En este contexto en el cual la existencia y activismo de una sociedad civil mínimamente autónoma frente al gobierno se torna difícil, se funda en 2011 la Unión Patriótica de Cuba.

La Unión Patriótica de Cuba: organización y accionar

En este trabajo entenderemos de modo genérico a la Unpacu como un movimiento, ya que rebasa la estructura formal y acotada de otras organizaciones tradicionales de la disidencia cubana, con una minúscula membresía, procedente de zonas y sectores urbanos. Si partimos de la obra de estudiosos del tema (Tilly y Wood, 2010) veremos que un movimiento es mucho mayor que las organizaciones que lo integran y, sobre todo, que suponen un piso mínimo de derechos democráticos hoy inexistentes en Cuba.¹¹ De ahí que, desde esos clásicos, la Unpacu no pueda ser

¹⁰ Para comprender mejor esta dinámica es útil recurrir a quienes han procurado explicar los modos y efectos contradictorios de la represión para mermar o escalar el accionar de los grupos opositores. Lichbach construye una matriz de análisis sobre tres postulados generales: a) un grupo de oposición cambia su táctica en respuesta a la política coercitiva del gobierno: un incremento en la represión gubernamental de la no violencia puede disminuir las actividades no violentas de un grupo de oposición, pero incrementar las violentas, b) un grupo de oposición altera sus actividades; teniendo lo anterior en cuenta, en respuesta a la política adaptativa del gobierno: el balance de efectos y, por lo tanto, si un incremento en la represión del régimen aumenta o disminuye la actividad conflictiva total del grupo de oposición, depende de las concesiones gubernamentales a dicho grupo, c) la represión puede entonces producir efectos mixtos en el conflicto: *políticas gubernamentales adaptativas y represivas consistentes* reducen el disenso mientras que *políticas inconsistentes lo incrementan* (Lichbach, 1987: 268, las cursivas son nuestras).

¹¹ Como plantean Tilly y Wood (2010), la existencia de un movimiento social vincula una serie de manifestaciones públicas de unidad, número, valor y compromiso (con uso de símbolos afines) de la causa que se reivindica, un esfuerzo público, organizado y sostenido para llevar a las autoridades reivindicaciones colectivas (*campañas*), el uso combinado de marchas organizadas, reuniones, mítines, declaraciones a medios y acciones de propaganda (*repertorio*). Al partir de la perspectiva que identifica la

definida, conceptualmente hablando, como un movimiento social consolidado, según las referencias clásicas de estos estudios. No obstante, otros enfoques recientes conciben al movimiento social como un proyecto de acción colectiva *desde abajo* orientada por una racionalidad determinada —con arreglo a formas de conciencia y relación sociales específicas— para transformar un orden dominante en función de las especificidades, capacidades y necesidades de los actores populares (Nilsen y Cox, 2013: 65-66). Entonces, cruzando los aportes de ambas visiones y con apego a lo que señalan los autores sobre la compleja, asediada y siempre frágil emergencia de estos actores en contextos autoritarios, la Unpacu podría considerarse un protomovimiento (incipiente, poco estructurado, en desarrollo)¹² que apela a la acción colectiva en el espacio público, despliega campañas de comunicación ligadas a aquella, y se organiza en forma distribuida (aunque desigual) a lo largo del territorio y la sociedad cubanos, con visible anclaje comunitario y sectores populares.¹³

Bajo el liderazgo del exprisionero político José Daniel Ferrer García,¹⁴ la Unpacu cuenta con alrededor de 2500 y 3000 afiliados —cifra osci-

existencia de movimientos sociales consolidados allí donde existen instituciones y derechos democráticos (Tilly y Wood, 2010: 245) y en la que emergen manifestaciones movimientistas en las llamadas “grietas de los regímenes autoritarios” (Tilly y Wood, 2010: 248) consideramos que el caso cubano se ubica a medio camino entre los estadios de *ausencia* de posibilidades democráticas y el de *incipiente* despertar de la acción colectiva (Tilly y Wood, 2010: 251) en el cual podemos encontrar repertorios débiles y parciales de movilización social.

¹² En este sentido, Tilly y Wood indican que en contextos como el cubano es complicado que puedan surgir y, sobre todo, consolidarse movimientos sociales, debido a que estos necesitan un piso sólido de derechos, hoy particularmente precario en la isla. Este piso de derechos es relevante debido a que ayuda “a crear unas conexiones sociales y unos intereses compartidos que fomentan la participación en campañas, actuaciones del movimiento social [...] que reúnen a unos participantes socialmente dispares” (Tilly y Wood, 2010: 268).

¹³ En ese sentido la Unpacu combina las lógicas y momentos del movimiento social que Nilsen y Cox (2013) llaman *racionalidad local* —con rutinas cotidianas para resolver necesidades de comunidades empobrecidas dentro de un orden social asimétrico autoritario—; *particularismo militante* —articulado desde la confrontación abierta y politizada con el poder, que produce un “ellos contra nosotros”— y, en ciertos momentos, de *campañas*, que trascienden un lugar y momento de lucha; implica alianzas, identidades, aprendizajes y estrategias amplias.

¹⁴ La Dirección Nacional de la Unpacu estaba integrada (febrero de 2016) por José Daniel Ferrer García, Yriade Hernández Aguilera, Ovidio Martín Castellanos, Jorge Cervantes García, Carlos Ámel Oliva Torres y Yúsmila Reyna Ferrera.

lante por los estragos de la represión y la incorporación de nuevos miembros—, de los cuales unos 200 son activistas permanentes (en el sentido de estar involucrados y participar con constancia) altamente fogueados,¹⁵ y mantienen presencia destacada en las provincias del oriente cubano, en particular Santiago de Cuba. A continuación se presentan datos de integrantes de la organización:

Cuadro 2. Membresía de Unpacu (datos al 23 de febrero de 2016)*

<i>Provincia</i>	<i>Miembros**</i>	<i>Colaboradores***</i>
Santiago de Cuba	834	1514
Guantánamo	83	98
Holguín	75	112
Granma	32	45
Las Tunas	64	121
Camagüey	30	45
Ciego de Ávila	n. d.	27
Sancti Spiritus	n. d.	17
Villa Clara	n. d.	28
Cienfuegos	14	48
Matanzas	8	25
La Habana	97	178
Mayabeque	7	n. d.
Artemisa	12	n. d.
Pinar del Río	29	7
Isla de la Juventud	84	n. d.
Total nacional: 3634	1369	2265

* Los números son estimados a partir del cruce de información documental de la organización y de la entrevista a sus dirigentes. Esta cuantía es altamente dinámica: sube y baja de acuerdo con una serie de factores como el impacto de la represión, la emigración, procesos de desmovilización, buen o mal trabajo motivacional de los líderes locales y nacionales, etcétera.

** Los miembros son ciudadanos que asumen la labor de oposición de forma abierta, participando en las actividades de la organización.

*** Los colaboradores mantienen el anonimato, asisten fundamentalmente en asuntos logísticos y no tienen participación directa en las protestas y otras actividades de la organización.

Fuente: Elaboración propia.

¹⁵ Aunque los movimientos sociales progresan más por las campañas interactivas que por los simples actos individuales, Tilly y Wood (2010) llaman la atención del rol crucial de ciertos emprendedores políticos (activistas y organizaciones especializadas) que actúan en su seno. Ese rol lo cumplen, dentro de la Unpacu, los jefes de célula y activistas experimentados en las diversas regiones donde la organización tiene una presencia y accionar reconocibles.

El tipo de tareas desarrollado por la Unpacu abarca labores de organización y trabajo comunitario, protestas urbanas, formación cívica, difusión de información, apoyo a otras iniciativas y grupos opositores, etcétera. Vale apuntar que el análisis de su acción no puede ser desligado de un contexto en el que el principal antagonista de la agrupación, el gobierno cubano, realiza un esfuerzo por rehacer sus relaciones exteriores, profundizando su inserción global en términos de apertura, sin que esto suponga un cambio en las prácticas autoritarias.¹⁶ Así pues, en referencia a las organizaciones de la sociedad civil cubana entre las que se encuentra la Unpacu, señala Azor que:

Sus activistas centran su acción en un trabajo práctico en las calles, en facilitar la comunicación vía teléfonos celulares, o teléfonos fijos sobre los arrestos y los actos de repudio a los opositores en el territorio nacional, hacer breves videos de casos concretos de represión, tomar fotos con sus celulares para testimoniar el momento de las represiones y hacer manifestaciones pacíficas en las calles (Azor, 2016: 140).

En relación con lo anterior, la organización realizó, en un año, las siguientes actividades:¹⁷

Cuadro 3. Actividades de la Unpacu (2015-2016)

Capacitaciones	Video debate	1 por célula semanal	1 por célula semanal	1 por célula semanal
	Talleres	22 por célula mensual	21 por célula mensual	22 por célula mensual
Trabajos sociales	Análisis de noticias	1 por célula semanal	1 por célula semanal	1 por célula semanal

¹⁶ Según Tilly y Wood (2010) los movimientos sociales combinan reivindicaciones programáticas (declaraciones de adhesión a ciertos objetivos), identitarias (establecen un *nosotros* que cohesiona su estructura y accionar) y de posición (respecto a otros actores), en su actuación cotidiana. En el caso de la Unpacu, el esfuerzo por elaborar y difundir un programa con elementos básicos sobre sus ideas, prioridades y principios; la presencia constante en su discurso y acciones de una marca de identidad como organización y activistas y sus respectivas posturas (y actividades) de colaboración, disputa e incidencia respecto a la oposición, gobierno y sociedad cubanas podrían ser leídas a partir del esquema reivindicativo propuesto por dichos autores.

¹⁷ Se trata de estimaciones generales del periodo 2015-2016 a partir de informes de la organización y la entrevista a sus dirigentes.

7. ¿La calle es de los revolucionarios...? Posttotalitarismo y activismo opositor en Cuba

Cuadro 3. Continuación

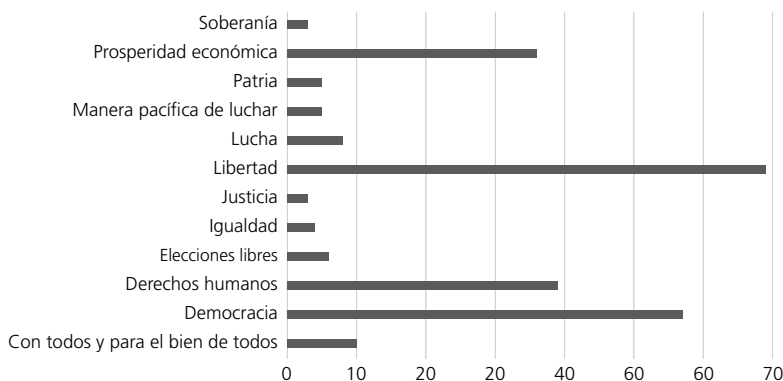
<i>Activismo</i>	<i>Actividades</i>	<i>Región Oriental</i>	<i>Región Central</i>	<i>Región Occidental</i>
Trabajos sociales	Actividades infantiles	15 desde 2015 hasta 2016	1 desde 2015 hasta 2016	3 desde 2015 hasta 2016
	Reparación de viviendas	12 en 2015	n. d.	n. d.
	Construcción de viviendas	2 en 2015	n. d.	n. d.
	Bibliotecas independientes	3	n. d.	1
	Trabajos de capacitación y recreación para niños y jóvenes	1 proyecto comunitario	n. d.	n. d.
	Asistencia con alimentos a personas y familias más desfavorecidas	3 proyectos comunitarios	n. d.	1 proyecto comunitario
	Asistencia a víctimas de conflictos con órganos gubernamentales	Este servicio es brindado diariamente por todas las células	Este servicio es brindado diariamente por todas las células	Este servicio es brindado diariamente por todas las células
	Asistencia a enfermos con medicamentos y transporte	Este servicio es brindado diariamente por todas las células	Este servicio es brindado diariamente por todas las células	Este servicio es brindado diariamente por todas las células
	Capacitación a la población en el uso de internet	1 proyecto	n. d.	1 proyecto
Campaña "Todos Marchamos" (apoyo a las Damas de Blanco)	Limpieza y saneamiento de áreas públicas	13 desde 2015 hasta 2016	2 desde 2015 hasta 2016	4 desde 2015 hasta 2016
	Marchas	1 por célula semanal	1 por célula semanal	1 por célula semanal
	Repartición de impresos y discos	2 por célula semanal	1 por célula semanal	2 por célula semanal
	Lanzamiento de octavillas	1 por célula semanal	1 por célula semanal	1 por célula semanal
Iniciativa "Otro 18" (preparación de candidaturas independientes para elecciones locales del Poder Popular)	Colocación de grafitis	1 por célula semanal	1 por célula semanal	1 por célula semanal
	Talleres de capacitación	1 mensual	n. d.	n. d.
	Repartición de impresos	1 quincenal	1 quincenal	1 quincenal
	Lanzamiento de octavillas	1 quincenal	1 quincenal	1 quincenal
Promoción de la lucha prodemocrática de la Unpacu entre la población	Repartición de discos e impresos	2 por célula semanal	1 por célula semanal	1 por célula semanal
	Colocación de grafitis	3 por célula semanal	1 por célula semanal	2 por célula semanal
	Colocación de pegatinas	1 por célula semanal	1 por célula semanal	1 por célula semanal
	Colocación de carteles	2 por célula semanal	1 por célula semanal	1 por célula semanal
	Lanzamiento de octavillas	3 por célula semanal	1 por célula semanal	2 por célula semanal
	Charlas instructivas con la población	Esta actividad es realizada diariamente por todas las células	Este servicio es brindado diariamente por todas las células	Este servicio es brindado diariamente por todas las células
	Marchas	2 por célula quincenal	1 por célula quincenal	2 por célula quincenal
	Mítines	1 por célula semanal	1 por célula semanal	1 por célula semanal

Marcos de significación de la Unpacu (desde sus miembros)

Valores y metas

Como puede verse en la gráfica 1,¹⁸ el discurso de los miembros entrevistados de la Unpacu muestra valores y metas que construyen una autodefinición en torno a las ideas de democracia, derechos humanos, elecciones libres, igualdad, justicia, libertad, lucha, manera pacífica de luchar, patria, prosperidad económica, soberanía y el pensamiento de Martí “con todos y para el bien de todos”. Cabe destacar que, entre estos, los términos de *democracia* y *libertad* son los que más emergieron, mientras que los de *derechos humanos* y *prosperidad económica* completan lo mejor posicionado axiológicamente.

Gráfica 1. Valores y metas Unpacu (miembros)



Fuente: Elaboración propia.

Estos cuatro ejes atraviesan todo el marco de significación, siendo fundamentales también en el diagnóstico, el pronóstico (propuestas), el

¹⁸ Los números en el eje de las X refieren a la frecuencia de fragmentos asociados a cada categoría. En este caso, solo la categoría “manera pacífica de luchar” representa una abstracción de los investigadores sobre diferentes fragmentos referidos a la forma de lucha. El resto emerge desde el propio sentido que le dan los entrevistados.

impacto, los motivos y las atribuciones. Un ejemplo de esto es que en cuanto a diagnóstico y motivos se habla de la crisis económica, de atribuciones al control estatal de la economía y de propuestas (ya considerando lo expresado en el programa mínimo) para una mayor apertura económica. Por supuesto, lo mismo sucede con los derechos humanos; su erosión motiva la movilización y lo que se propone para cambiar la situación.

De más está decir que las mencionadas arriba remiten a etiquetas abstractas, sin embargo, al relacionarlas se puede explicitar un marco que les da sentido. Por ejemplo, puede afirmarse que para los miembros de la Unpacu democracia significa libertad, prosperidad económica, derechos humanos, igualdad, justicia, etc. O que derechos humanos implican, o necesitan, de los demás valores y principios.¹⁹

Profundizando en este punto, el asunto parece orientarse a reclamar y conquistar el *derecho a tener derechos* (algo que en Cuba no se reconoce ni *de facto* ni *de iure*) y que las personas “de forma individual, grupal o institucional desarrollen todo tipo de acciones para promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales desde cualquier ámbito —ya sea de manera eventual, sistemática, profesional o espontánea— mediante la vía pacífica a menos que actúen en defensa de su propia vida e integridad” (Sauri, 2014: 13-14). Así vistos, la imagen para sí y que buscan proyectar los miembros de la Unpacu —coherente con las nociones y los estándares internacionalmente aceptados en la materia— es la de defensores de los derechos humanos, esto es, de “persona o grupos de personas que, independientemente del tipo de acción o actividades que realicen, tengan por objetivo promover los derechos humanos individualmente o desde organizaciones de la sociedad civil, nacionales o internacionales” (Sauri, 2014: 13-15), actuando pacíficamente en la promoción

¹⁹ Es necesario aclarar que esto es una interpretación de los autores con base en el testimonio recabado. La estructura del diseño de los instrumentos para esta investigación no profundizó en qué significaba democracia para los entrevistados; asunto que desarrollaremos en otro estudio sobre la cultura política de los activistas opositores. En su mayoría, al preguntárseles por aspiraciones y motivos, la respuesta se limitó a nombrar estas etiquetas. Podría suponerse que esto refleja que el uso de tales términos sin profundizar (casi como significantes vacíos) se limita a una —siempre presente en cualquier artilinguio discursivo— simple pretensión de legitimación. Como se verá, el análisis estructural del discurso puede ayudarnos a construir un entramado de sentido que permita brindar contenido a dichas etiquetas a través de su relación: democracia (+) derechos (+) pluralismo político (+) dictadura (-) represión (-) estructura de control (-).

y protección de los derechos humanos, impulsando la lucha contra la pobreza y realizando acciones humanitarias que visibilizan situaciones de injusticia e inmunidad. Esto es lo que hace la Unpacu en la cotidianidad de su activismo y que la distingue del resto de las organizaciones.

En relación con lo antes expuesto y continuando con el enmarcado, resulta interesante la presencia de la idea de *lucha*. Algunos de los mensajes definitorios de lo que se encuentra expresado en el programa mínimo de la organización es que se trata de un movimiento que apela a la *lucha pacífica*. En este sentido, sí hay que destacar que los miembros reproducen esta idea de forma explícita e importante; no obstante, también se menciona *lucha*, a secas. Esta omisión no implica que estemos autorizados a concluir que hay una inclinación a la *lucha violenta*, empero, si atendemos a otra dimensión de análisis y de discurso en el que existe cierta presencia de la idea de *derrocar a la dictadura*, entonces vale la pena hacer explícita la distinción presente en el discurso de los activistas para al menos expresar un ámbito de posible, comprensible —y quizá necesaria— tensión y apertura acerca de lo que la *lucha* significa, como desafío —legalmente penalizado y reprimido por medios violentos— a la autoridad estatal.

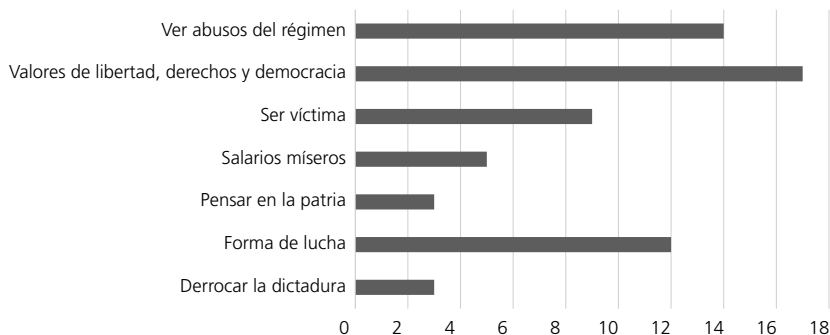
Vale mencionar, como lo hace Estévez, que “en las luchas contra la opresión casi siempre hay actos de ilegalidad, porque en cualquier momento la ley puede legitimar la opresión de alguna forma; la desobediencia civil ha sido siempre clave en el desarrollo de los derechos humanos” (Estévez, 2010: 143). Así que el asunto de la tensión mencionada arriba tendría que entrar irremediablemente en el debate de legalidad y legitimidad en las acciones de los movimientos pro derechos humanos.

En último lugar, con respecto a este primer punto, es significativa la forma en que se repite, en un número importante de entrevistas a los integrantes de la Unpacu, la frase del héroe nacional y artífice del proceso independentista cubano, José Martí: “con todos y para el bien de todos”. Pues además de representar uno de los ejes que expresa la unidad discursiva de la agrupación (en vistas de que es una frase muy presente también en el programa mínimo), se puede relacionar con la idea de patria, término que incluso se incluye en el propio nombre del movimiento. Desde ese punto de vista se pretende articular una identidad patriota que se reapropie de símbolos, como el pensamiento martiano, los cuales se considera que han sido secuestrados por el gobierno.

Motivos

En cuanto a los motivos de pertenencia, dimensión también relevante para la reconstrucción de un marco de significación, destaca, en primer lugar, una identificación con los *valores* de la organización, a saber, *democracia, libertad y derechos humanos*. Este componente, que mezcla un elemento afectivo, pero también cognitivo, es acompañado por el impulso de ser *testigo de los abusos del régimen*. Es decir, en términos del análisis de marcos, podría decirse que uno de los factores motivadores importantes de la participación en la Unpacu tiene que ver directamente con la identificación de un problema y la atribución inmediata de un responsable. Esto no es poco decir debido a que, como se ha establecido arriba, en un movimiento, aunque se comparta el diagnóstico del problema, suele ser más difícil construir unidad en torno a lo que se define como culpable.

Gráfica 2. Motivos de pertenencia a Unpacu (miembros)



* De nuevo, en este caso, los números en el eje de las X reflejan la frecuencia de fragmentos asociados a cada categoría. Solo las categorías "forma de lucha", "valores de libertad, derechos y democracia" y "ver abusos del régimen" representan abstracciones por parte de los investigadores.

Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado, la *manera en que lucha la organización* también se postula como otro de los motivos importantes que expresan sus miembros. En este punto se hizo referencia a los distintos brazos de acción del movimiento (trabajo comunitario, educación y promoción en derechos humanos,

manifestaciones de calle), pero también a la concepción de que se trata de la organización que *más y mejor lucha contra la dictadura de los Castro*.

Del mismo modo, resalta la frecuencia con que se estableció como motivo ya no ser testigo de los abusos, sino *ser víctima* directa de ellos. Como se dijo, esta es una dimensión importante que atraviesa y da sentido a todo el marco de significación: ser víctima de represión lleva a participar en la organización para luchar por que no haya más represiones y, como se verá, esta lucha ha implicado más represión. Que esta esté entre las tres categorías más presentes en los discursos de los miembros permite afirmar una transformación de la experiencia pasiva de la víctima en una experiencia activa de activista.

Desde esta perspectiva, vale la pena traer a colación un postulado de Domínguez al respecto. El autor señala que “la pérdida de poder del Estado, y la pérdida del temor al Estado, nos llevan hacia otra hipótesis: aumenta la violencia tanto criminal como política” (Domínguez, 1997: 14). Es decir que la evidencia de mayor conflictividad y el incremento moderado, pero real, de formas de protesta en la Cuba actual (Domínguez, 2016) pueden estar relacionadas con una mayor represión. Se trataría de una espiral conflictiva: la apertura relativa a la protesta ayuda a que se manifieste, consecuentemente su manifestación abre la posibilidad a la represión. El punto es que ante una represión continua, se puede acen-tuar el descontento y una oportunidad para la organización. La Unpacu es un ejemplo de esto; su constitución gira en torno a la condición de ser víctima de represión y en hacer algo para detenerla.²⁰

Ahora bien, además de emerger el tema *patriótico* como un detonante de pertenencia a la Unpacu, es pertinente explicitar que hubo fragmentos del discurso que se pueden reconstruir en la categoría que se decide llamar *derrocar a la dictadura*. Así pues, frases como “manera más rápida de derrocar a la dictadura” (FA-E138)²¹ y “hasta tumbar a los Castro” (YD-E333) se pueden poner como ejemplo de esta pulsión por susti-

²⁰ En tanto “en dictaduras consolidadas, los ciudadanos difícilmente se expondrán abiertamente ante el gobierno para evitar ser reprimidos, desaparecidos o asesinados” (Vázquez, 2010: 250-251). De ahí lo importante de acudir a tratar de comprender los motivos para la acción de movimientos como la Unpacu.

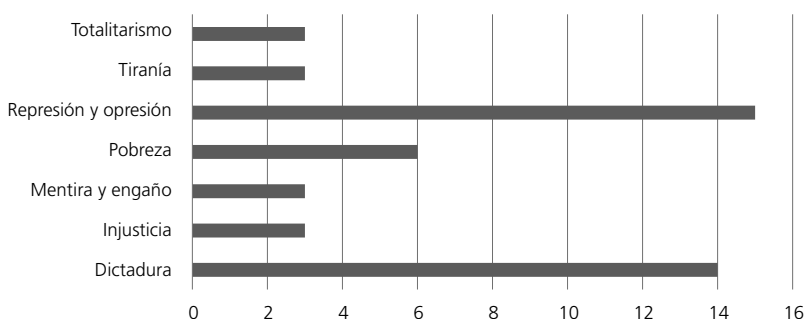
²¹ La notación que se usa al referirse a las entrevistas es: iniciales en mayúsculas-ubicación en la transcripción. En cuanto al programa mínimo se identifican como: PM-ubicación en la transcripción.

tuir el *statu quo*. Que surja este tipo de contenidos no es un tema menor debido a que, como se verá en el análisis del enmarcado del programa mínimo de la organización y en las conclusiones, el componente de la conquista del poder trasciende a una caracterización de un movimiento social pro derechos humanos.

Problema y atribuciones

En este apartado se reúne lo que en el sistema de Snow y Benford (1988) se propone como marco diagnóstico, el cual consta del momento de identificación del problema y de la definición del agente que lo causa. Todo esto siempre pensando en dar cuenta del marco de significación para la acción colectiva de un movimiento. Aquí hay que hacer la salvedad de que existe un consenso en los miembros en relación con el receptor de las atribuciones: los Castro. En ese sentido, a continuación se ofrece una distinción en torno a los ejes problemáticos, por un lado, y, por el otro, cuáles son las categorías con las que se asocia a los Castro.

Gráfica 3. Problema y atribuciones Unpacu (miembros)*



*Los números en el eje de las X hacen referencia a la frecuencia de fragmentos asociados a cada categoría. En este caso, cada una de ellas emerge del propio discurso del entrevistado y no de abstracciones del investigador.

Fuente: Elaboración propia.

Así pues, el problema principal que identifican los participantes de la Unpacu es la *represión y la opresión*. Ya se ha mencionado en esta línea

el importante rol que juegan estos agravios en todo el marco de significación (motivos, valores, problemas y propuestas). Paralelamente, la asociación más frecuente en relación con los Castro (ejes de la dimensión de atribución) es la que se centra en el término *dictadura*. Si pensamos en un esquema de sentido binario entre opuestos, es decir, el enfoque de análisis estructural del discurso de Hiernaux y otros, no resulta sorprendente esta primacía asociativa si se entiende dictadura como opuesto a democracia. Es decir, la matriz democracia-dictadura también puede postularse como fundamental en la construcción del *nosotros* y del adversario de la Unpacu.

Volviendo al tema de los problemas, no es despreciable la manera en que son mencionados asuntos que tienen que ver con la *pobreza* que sufre el pueblo cubano. De hecho, aunque los valores de derechos, democracia y libertad son preponderantes, la economía también juega un importante rol en el enmarcado de la agrupación. El cuadro de identificación de problemáticas se completa con la categoría de *injusticia* con una frecuencia de mención secundaria según muestra la gráfica 3.²²

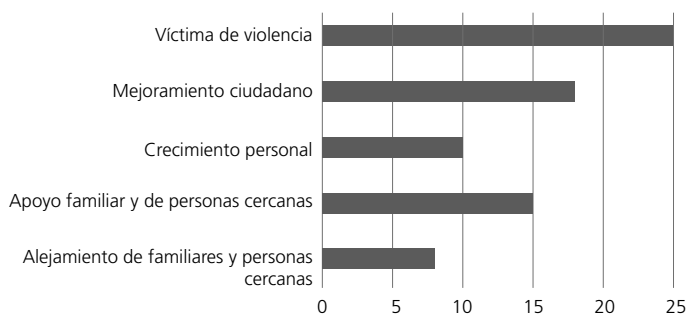
Por último, vale mencionar que también en un rol complementario se encuentran los contenidos que pueden agruparse en las categorías de *mentira y engaño, tiranía y totalitarismo* en relación con los elementos con los que se asocia a los Castro. El primer elemento puede leerse como un componente moral que no puede soslayarse en procesos de identidades. El segundo conviene insertarlo, siguiendo el análisis estructural del discurso, en la articulación de sentido entre democracia (+)-derechos (+)-represión (-)-dictadura (-) y el tercero tiene que ver con un factor que se encuentra de forma más explícita en el estudio sobre el programa mínimo de la organización.

²² La concepción contemporánea de los derechos humanos establece que la libertad negativa —restricción al poder del Estado— no es suficiente para garantizar la dignidad humana; por lo que se necesita promover la igualdad y capacidades de las personas (Vázquez, 2010: 226-227). Por tanto, en el combate contra la pobreza, fenómeno creciente en la Cuba actual pese a su invisibilización por la retórica oficial, en la forma de ayuda a los desvalidos, las obras comunitarias son acciones que defienden y promueven los derechos humanos. Esta concepción compleja puede evidenciarse en el análisis de marcos de significación y el accionar de la Unpacu.

Impacto

Lo que Chihu Amparán apunta en su *Análisis cultural de los movimientos sociales* como la dimensión de éxito del enmarcado de significación lo postulamos, en este estudio, como el impacto o las implicaciones que ha supuesto la participación en la Unpacu en la vida cotidiana de los propios miembros.

Gráfica 4. Impacto de pertenencia a la Unpacu (miembros)*



* Como en el resto de las gráficas, los números en el eje de las X reflejan frecuencia. Este es el único caso en que todas las categorías son abstracciones de los investigadores con base en los fragmentos de entrevistas. Sin embargo, en la sección se muestran ejemplos de ellas.

Fuente: Elaboración propia.

Desde esta perspectiva, resalta la magnitud de la presencia de la categoría *ser víctima de violencia*. La recurrencia de este lamentable tema ha quedado explícita en toda la sección. Motivos, valores, problemas, atribuciones e impactos están marcados por la represión; evidenciarla, qué hacer contra ella y seguir padeciéndola es la cuestión. Es menester destacar que, como lo hace la literatura especializada, la represión puede tanto desincentivar como incentivar la resistencia y participación en organizaciones como la Unpacu. Según el discurso de sus miembros, el caso de estudio parece ser uno en el que la relación es de incentivo, sin embargo, conviene en investigaciones futuras hacer un rastreo de proceso a la interacción Estado represivo-Unpacu para poder evaluar dicha relación.

El segundo elemento en orden de importancia en el discurso de los miembros es el que se decide llamar *mejoramiento ciudadano*. Este es un punto interesante relacionado con las propuestas de la organización que se dejan leer en el programa mínimo, como se verá más adelante. La organización tiene entre sus intereses principales la promoción y educación de una ciudadanía consciente de los derechos humanos.

La presencia de esta categoría puede hablar de un éxito en este sentido. Se trata de un logro crucial si se tiene en cuenta, como se explicará en las conclusiones, lo que señala la literatura en torno al rol de los movimientos sociales en la transformación simbólica de una situación para que se pueda signar como injusto algo que se considera normal. Ejemplo de esto son frases como: “ayudamos a familiares a conocer y defender nuestro derechos” (FG-E104), “aprendido más de la lucha no violenta” (YF-131), “mayor conocimiento político” (FA-E140) y “no conocía mis derechos, ni la declaración de los derechos humanos” (OB-E197). Aquí vale destacar que en tanto “la historia de los derechos humanos demuestra que al final la mejor defensa de los derechos son los sentimientos, las convicciones y las acciones de multitudes de individuos que exigen respuestas acordes con su sentido interno para la indignación” (Hunt, 2009: 219-220), en una lucha como la de la Unpacu son decisivos los aspectos subjetivos, la significación íntima de la indignación.

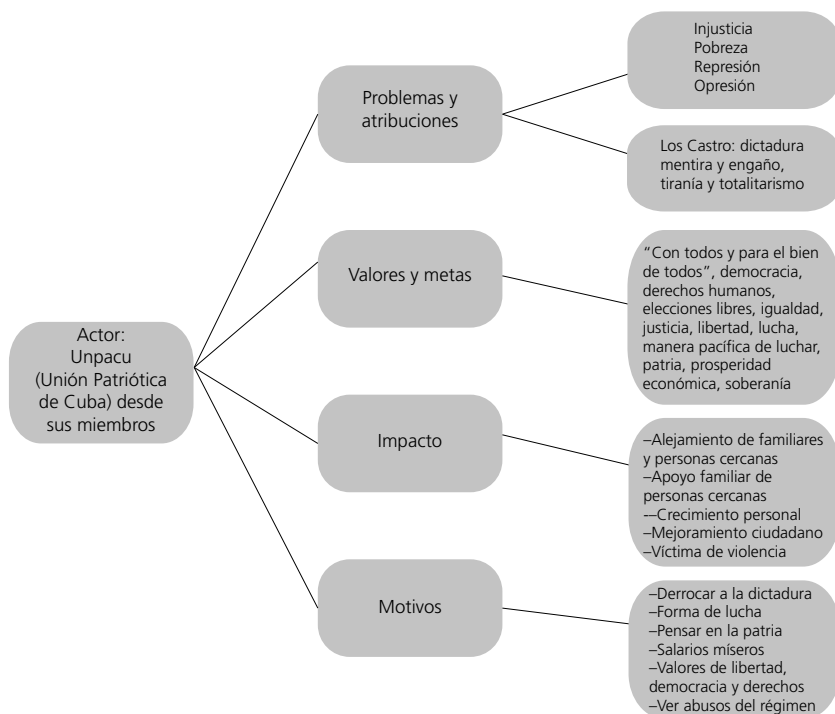
Luego está la dimensión de las repercusiones de la participación en las actividades de la Unpacu a nivel familiar y otras relaciones. Como puede verse en la gráfica 4, aunque son más los casos en que las personas reportan apoyo del entorno cercano, no es despreciable el número de participantes que expresan que su involucramiento en el activismo ha supuesto alejamiento familiar y de amistades. Esto tiene que ver evidentemente con los costos esperables de represión si alguien establece, bajo una autocracia represiva, un vínculo personal con un activista de agrupaciones como la Unpacu.

Por último, y relacionado con el aspecto del desarrollo en una incipiente ciudadanía democrática, está la categoría de *crecimiento personal*. Los miembros expresan que los beneficios de participar en la Unpacu son alegría, orgullo, aprendizaje, valentía, crecimiento y *ser una mejor persona*. Este último punto, como se verá a continuación, tam-

bién puede postularse como un eje de unidad entre los miembros de base y los de más jerarquía debido a que es un mensaje importante en el programa mínimo. Esto puede relacionarse con lo señalado por autores que reconocen que en la lucha por los derechos humanos se combinan el compromiso ético con la agenda e intereses propios que pueden llamarse “mundanos”. De ese modo, los luchadores en pro de los derechos humanos encontrarían, en su accionar, una mezcla de satisfacción y crecimiento personales y una comunidad de pertenencia (Velasco, 2010: 283)

Así pues, el marco de significación reconstruido desde el discurso de la muestra de activistas de la Unpacu puede leerse en el diagrama 1, siguiendo la propuesta de Chihu Amparán (2000: 226).

Diagrama 1. Enmarcado de significación Unpacu (discurso de activistas)



Fuente: Elaboración propia.

Marco de significación de la Unpacu (a partir del programa mínimo)

Valores y metas

En esta primera dimensión del enmarcado, los contenidos que se encuentran en el programa mínimo son los mismos que en las entrevistas a los miembros. No obstante, habría que agregar las categorías de valores *cristianos*, *pluralismo político*, *equidad y solidaridad* y *desobediencia civil*. Estos elementos son remarcados en el programa de la organización y no aparecen en el discurso de sus activistas. Se trata de un hecho no demasiado problemático debido a que no entran en tensión con los que sí están presentes, sin embargo, puede servir para ilustrar en qué hace más énfasis cada nivel del activismo.

Problema y atribuciones

En este segundo plano del marco también se repiten las categorías presentes en el apartado anterior con el agregado, a nivel de la identificación de los problemas, de la crisis económica provocada por lo que se identifica como *estalinismo tropical*. Si la cuestión económica estaba muy presente en las fuentes anteriores, los lugares clave del programa mínimo resaltan de algún modo este eje problemático. Como se verá en las conclusiones, si bien hay una referencia a condiciones mínimas para una vida digna, muchos lugares del programa exceden un discurso de un movimiento pro derechos humanos. El espectro del marco de significación del programa mínimo de la Unpacu articula una serie de problemáticas, valores y propuestas que parecen ir más allá de reivindicaciones específicas.

Ahora bien, a nivel de las asociaciones a la matriz de atribución (*los Castro*), a las categorías antes estudiadas habría que sumar las de *estructura de control*, *adoctrinamiento político* y *comunismo*. Aunque el tema del control social y/o político es algo que se maneja en el discurso de los activistas, el programa mínimo de la Unpacu lo resalta más explícita y enérgicamente; la acusación de adoctrinamiento va en ese sentido también. Se trata de un factor que, desde el análisis estructural del discurso, podría

relacionarse con una idea más elaborada de democracia que el sistema de sentido binario democracia (+) derechos (+) dictadura (-) represión (-) del discurso activista. Aquí habría que agregarle pluralismo político (+) estructura de control (-).

Empero, debe resaltarse la emergencia también del *comunismo* en torno a la construcción del adversario. ¡*Abajo el comunismo!* es una de las consignas que suele verse en las grabaciones de las manifestaciones en la calle de la organización, difundidas por las células de esta y privilegiadas dentro de la estrategia comunicacional de su liderazgo. Podría estar en el discurso activista, reproducida al pie de la letra como la frase de Martí “con todos y para el bien de todos”, pero no está. Consideramos entonces que es una asociación más significativa en los lugares más altos de la organización.

Propuestas

Esta última dimensión —la que Chihu Amparán, basado en Snow y Benford, llama pronóstico— completa lo que sería un enmarcado unitario entre los distintos niveles de participación en la Unpacu. Es algo más propio de un programa mínimo —por eso no se encuentra en el apartado anterior—, pero su estudio es fundamental para tratar de construir pistas analíticas que den cuenta de esta agrupación.

En este sentido, la *educación y promoción de los derechos humanos* más el *trabajo social comunitario* (asistencia en salud, vivienda, cultura, etcétera) son las principales herramientas que propone y que ejerce la Unpacu para su acción colectiva. Los principales logros que difunden en sus redes están basadas en estos pilares, junto con las manifestaciones de calle y la prestación de servicios alternativos de comunicación: producción de audiovisuales de artistas contestatarios, acceso a internet de vecinos pobres, etc.²³ Desde esta visión, resalta que, dada la

²³ Vale la pena detenerse en el tema de la difusión. Geoffray (2015), en este punto, toma como ejemplos el caso del encarcelamiento y breve liberación de Gorki Águila (2008) y la protesta de las Damas de Blanco que culminó con la liberación de presos políticos (2011) como una muestra de que la visibilidad es relevante para contener la acción represiva del régimen cubano. Según la autora, la publicidad del atropello es fundamental; por lo que el uso ampliado de las nuevas tecnologías y el internet puede

importancia de las actividades sociales y comunitarias en la organización, la categoría de *justicia social* no aparezca en el marco de significación de forma explícita. Pero en tanto el discurso oficial cubano se ha apropiado de esa noción, existe la posibilidad de que su ausencia en el léxico opositor se deba a una postura —más o menos consciente— de rechazo a aquel sentido otorgado desde el poder y no a la idea —y contenidos— de igualdad, equidad y empoderamiento popular generalmente asociados con ella.

Por su parte, y en relación con el punto del trabajo comunitario mencionado arriba, señala Chong que entre actores emergentes en la agenda global de los derechos humanos están las organizaciones de base, enfocadas en la lucha por derechos y provisión de servicios locales, junto a una organización más formalizada, que provee servicio y asesoría legal y política a nivel nacional y global (Chong, 2014: 25). La primera dimensión caracteriza parte de la labor de la Unpacu,²⁴ en la segunda está menos fuerte en buena medida por los mismos constreñimientos a los que está sometida.

No obstante, el programa mínimo muestra una serie de propuestas como, por ejemplo, reforma agraria, economía social de mercado, libertad sindical, acceso a internet, libertad de los presos políticos, nueva constitución, salud y educación pública y privada y apertura de relaciones internacionales. Aunque un comentario acerca de esta amplitud de temas se propondrá en el siguiente apartado de conclusiones, vale la pena destacar que el programa mínimo abarca una serie de propuestas tan concretas en diferentes materias que no pocos partidos políticos de nuestro continente envidiarían. Lo que alude a un esfuerzo por ofrecer líneas de un hipotético programa de gobierno, respondiendo a una de las críticas más comúnmente hechas a los opositores cubanos en el sentido de no ofrecer alternativas más allá de la superación del régimen vigente.

ayudar. Para Geoffray, el uso de estas tecnologías genera que “dinámicas horizontales precarias de interacción se [hayan] convertido en una red vibrante de comunicación intrincada y colectiva, debate e intercambio, la cual posibilita campañas y acciones directas” (2015: 26). Espacios públicos pequeños que resignifican el sentido de visibilidad de actores y problemas, a la vez que constituyen espacios de contención con relativa autonomía.

²⁴ Un punto destacado por Azor en la entrevista realizada para este estudio.

Por lo pronto es necesario detenerse en una de las categorías más difusas y problemáticas, cuyo sentido se explicitó en el apartado anterior en lo tocante al asunto de *derrocar a la dictadura*. En esa línea, se leen en el programa mínimo frases como: “resquebrajar los pilares del poder dictatorial, induciendo a la sociedad a negarle cualquier apoyo o cooperación” (PM-40), “diseccionando los mecanismos y estructuras sobre las que se sustentan las dictaduras, y haber sistematizado los métodos capaces de desintegrarlas” (PM-41) y “un gobierno tan incapaz no debe continuar rigiendo el destino de todo un pueblo” (PM-16).

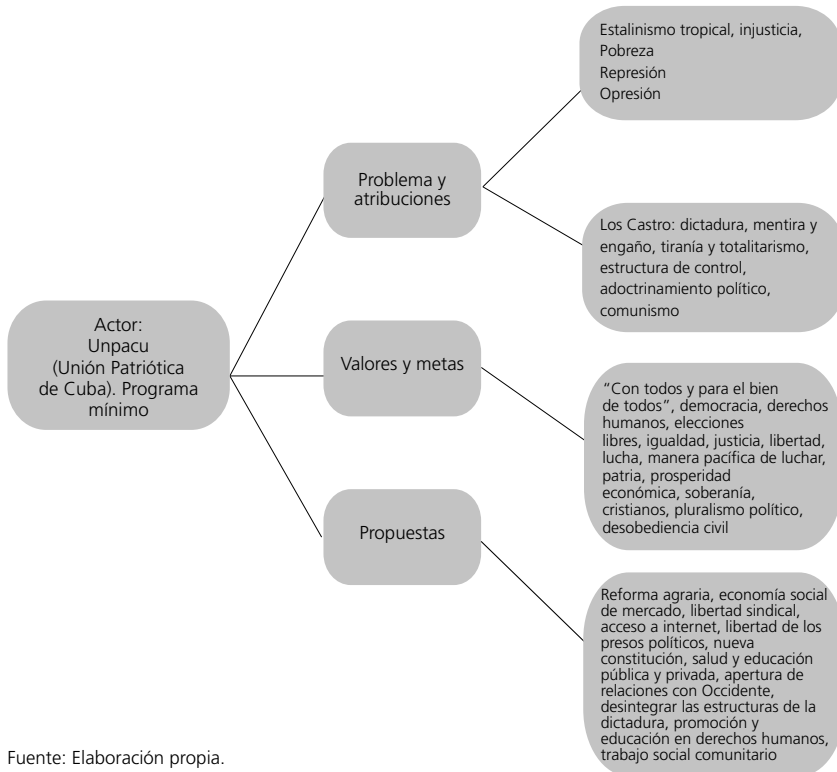
Aunque son contenidos que pueden estar referidos exclusivamente a formar una sociedad civil entrenada en el ejercicio de la ciudadanía democrática para lograr la deslegitimación del régimen, erosionando sus bases de apoyo o cooperación, todavía puede quedar espacio para preguntarse qué significa decir que un gobierno no debe seguir rigiendo y expresar la necesidad de desintegrar las estructuras de la dictadura y resquebrajar los pilares del poder dictatorial desde una agrupación que se define como un grupo pro derechos humanos, toda vez que incluso en uno de sus importantes videos de difusión se sanciona la idea de acceder al poder por la vía armada, pero no se sanciona la idea de acceder al poder.²⁵

Más aún, el líder de la organización llega a hablar de un escenario en el que la Unpacu, “junto con otras organizaciones opositoras derroquemos a la tiranía e instauremos en Cuba un régimen verdaderamente justo”. Al final, para los opositores cubanos es relevante rechazar la violencia como herramienta política debido a que su uso puede incrementar la ya de por sí elevada represión estatal y mermar la unidad del movimiento (separando a quienes prefieren violencia de los que no), pero también es fundamental la organización, la diversidad de estrategias y los propios valores del movimiento. En este sentido, la Unpacu, a pesar de sus limitaciones, es expresión de un movimiento con un interesante nivel de coherencia, organización, con un énfasis en los valores democráticos y un repertorio de acción multidimensional.

Dicho lo anterior, el enmarcado de significación construido a partir del programa mínimo de la Unpacu puede verse en el diagrama 2.

²⁵ Véase Unpacu, “José Daniel Ferrer y la vía armada”. Disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=h6Gt3JacX_I>.

Diagrama 2. Enmarcado de significación Unpacu (programa mínimo)



Fuente: Elaboración propia.

Conclusión

La Cuba futura para mí se basa en lo que seamos capaces de conquistar como justicia social. El futuro para mí no existe, solo el presente continuo, el día tras día.

Activista de la Unpacu, poeta y educador popular

En Cuba existe un régimen no democrático de alta capacidad estatal que restringe severamente la acción colectiva. En contextos como los que, con variable calidad, vivimos la mayoría de los latinoamericanos, es di-

fácil calibrar la diferencia existente entre movilizarse en entornos cabal o parcialmente democráticos —incluso en casos de altísima violencia criminal como el mexicano— y hacerlo bajo una dictadura.²⁶ Una dinámica de restricción que va desde la represión directa hasta el aislamiento de los activistas con respecto al resto de la comunidad, ya que se premia con ciertas concesiones al que no se vincule con los grupos disidentes. En este marco de poca visibilidad de la resistencia, los alcances de agrupaciones opositoras son restringidos porque las condiciones para la agencia están mermadas.

Como han señalado especialistas en el caso cubano (Bobes, 2016), la obstrucción de la acción colectiva, el desinterés hacia la política, el deterioro de las políticas y derechos sociales y la no aparición de derechos políticos produce una erosión ampliada de la ciudadanía que, sin espacios autónomos de articulación de reivindicaciones frente al Estado, se torna más vulnerable tanto a nivel individual como colectivo. En ese marco, “en la medida en que las relaciones entre los gobiernos y sus súbditos sean intermitentes, mediadas, coercitivas y particulares, los incentivos para sumarse a las reivindicaciones públicas y colectivas [...] serán mínimos y, en su mayoría, negativos” (Tilly y Wood, 2010: 267). En una dirección que arroja luz sobre el caso cubano, estos autores admiten incluso que en regímenes unipartidistas la tendencia a restringir la acción de los movimientos sociales es aún mayor que bajo otras formas de autoritarismo.

²⁶ Como señala un autor, en cuanto a la represión y violación de derechos humanos, “en una dictadura, el número de actores ya es muy grande. El Estado es el perpetrador principal que opera de manera especializada, con alta división de trabajo, aunque la responsabilidad última se centra en la cúpula política del régimen. En guerras civiles, las responsabilidades son más difusas, dispersas, opacas. No hay un dictador central y una burocracia representativa que actúen como responsables de la violencia criminal. Los ciudadanos no están sujetos a un régimen represivo nacional, sino a redes dictatoriales locales” (Schedler, 2015: 23). Esta incapacidad de asumir el carácter autocrático del régimen cubano es evidente incluso en estudiosos de los movimientos sociales, que señalan que “el régimen de izquierda diseñado por Fidel Castro sigue en el poder a pesar del embargo y aislamiento continuos impuestos por los Estados Unidos, y actualmente se encuentra en medio de debates sociales acerca de quiénes deben establecer los términos del futuro de Cuba: si las empresas privadas, la gestión de los trabajadores o un Estado centralizado” (Chase-Dunn, Morosin y Álvarez, 2017).

Partiendo de reconocer lo restrictivo del entorno, en este trabajo nos hemos aproximado a una agrupación cuya estrategia supone, desde lo individual a lo colectivo, la movilización de actores con diversos niveles y formas de organización, conciencia, interpelación y reclamo frente al poder (Ansolabehere, 2010: 31, 36). La Unpacu asume los derechos humanos como un eje articulador de acciones que, en el contexto cubano, buscan transformar la legalidad y legitimar identidades, intereses y demandas excluidas, replanteando el concepto y contenidos de la ciudadanía (Estévez, 2010: 137). Desde esta perspectiva, los retos para la Unpacu en un orden de cosas como el perfilado son varios: dar lugar a coaliciones que trasciendan las fronteras de la política pública, formar un grupo de intermediarios para constituir coaliciones fuera del país²⁷ y articular ciudadanos que no se han movilizado (Tilly y Wood, 2010: 276).

No obstante, vale la pena destacar que aunque sea problemático hablar —según la visión de estos autores— de la Unpacu como un movimiento social consolidado, su sostenido activismo en diversas zonas de la isla sí supone un desafío al proponer una interacción contenciosa con el gobierno. El análisis de marcos de significación propuesto sirve para afirmar que además de su voluntad de actuar públicamente ante el Estado, la agrupación cuenta con una identidad definida y un proyecto común compartido, puntos clave en las caracterizaciones de los movimientos sociales. Así pues, cuando organizarse ya es un mérito, sería interesante evaluar cómo esta posibilidad mínima de organización y agencia podrían representar un avance significativo en la historia y alcances de la disidencia cubana.²⁸

Algo valioso en el trabajo de la Unpacu es el tema del entrenamiento cívico. Es clave apostar por un aprendizaje en tanto que recon-

²⁷ En ese mismo sentido, hay que señalar que la movilización desplegada por la Unpacu tiene cierta capacidad de conexión internacional —algo relevante en la movilización por los derechos humanos a escala global— a partir de sus nexos (apoyo financiero, comunicacional, etc.) con organizaciones del exilio cubanoamericano, así como otras internacionales de DH como Amnistía Internacional, que cubren la represión y denuncias que se relacionan con su actividad.

²⁸ Algo que, para Azor, no puede desprenderse de concebir al año 2002 como punto de inflexión en términos de cierta apertura al acceso a nuevas tecnologías de información (Azor, 2016: 214).

figura el sentido de situaciones normalizadas y las marca con el signo de injusticia, pues una importancia de este tipo de colectivos descansa en “dar sentido a las relaciones que forman la sociedad” (Chihu Amparán, 2000: 212), solo así es posible la acción.²⁹ Es interesante que las reivindicaciones que pretende la Unpacu tengan el corte de una democracia liberal formal: es decir, son peticiones que en otros contextos parecen insignificantes, e incluso remiten a matrices ideológicas e institucionales que hacen cada vez más latentes sus insuficiencias y problemas. Sin embargo en Cuba son signo de subversión. En aquel país apostar por sistemas de salud y educación que mantengan lo gratuito y lo público, pero que se combinen con sistemas no estatales son actos de resistencia frente a un poder con pretensiones monopólicas que tiende a controlar los principales recursos materiales, culturales y coactivos de la nación.³⁰

Para profundizar en la complejidad, aunque no es materia del presente escrito, nos topamos con el asunto del tipo de financiamiento de la sociedad civil con el objetivo de empoderar y constituir ciudadanía. Si pensamos en la lectura —característica de un sector de las izquierdas académica y política latinoamericana— que entiende este tipo de prácticas como una nueva y sofisticada manera de intervención extranjera —basada en un discurso supuestamente abstraído de sus “condiciones concretas de acoso imperialista” y amparado en un “universalismo liberal— para ir socavando las bases de legitimidad de un gobierno, mencionar este tópico puede ser importante. En esta materia es destacable la manera en que Ferrer, el líder de la organización, ha enfatizado la necesidad de no depender o arrodillarse ante intereses extranjeros; el énfasis en la idea de patria resulta auxiliar en esta disposición de sentido. Sobre

²⁹ Es la idea de Chihu Amparán cuando afirma que “la acción colectiva solo ocurre una vez que los participantes potenciales han desarrollado un sentido de injusticia con respecto a una situación específica” (Chihu Amparán, 2000: 213).

³⁰ En similar sentido, vale la pena explorar las semejanzas del caso cubano en relación con la agenda de defensa de la democracia liberal y promoción de los DH realizada por movimientos sociales de Hong Kong y Taiwán, frente a la creciente influencia del capitalismo autoritario impulsado por el Partido Comunista Chino (Hang, 2016). Sin embargo, valdría la pena aclarar que, en principio, un discurso pro derechos humanos y otro que apele a la privatización —aunque sea parcial— son cosas diferentes, lo que ilustra la complejidad y tensiones de sentido propias de este tipo de agrupación y del contexto cubano.

esta arista, Azor considera que la precariedad de las viviendas de los activistas es síntoma de que estamos ante “grupos subalternos —ciudadanos sin recursos—, que el Estado expulsa a la marginalidad sin derechos económicos, ni políticos, tampoco jurídicos” (Azor, 2016: 143) luchando por su *derecho a tener derechos*.³¹

Por último, es menester traer a colación, en vistas de —como se vio a lo largo del escrito— la importancia simbólica y práctica del *ser víctima de represión* en la constitución de la Unpacu, el aumento de la represión que hubo en Cuba en 2016. Aunque por la misma situación que se ha descrito, los números en torno a la isla son de difícil constatación, según el Informe 2016 del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, en dicho año hubo 9351 detenciones arbitrarias,³² lo que supone mil más que en 2015. Cabe destacar que, entre ellas, 5383 fueron contra mujeres y 3968 contra hombres (OCDH, 2017: 1). Además, “el número de detenidos desde enero hasta junio de 2016 alcanza la cifra de 6573 y es un 232% mayor que en igual periodo del año anterior” (Foresight Cuba, 2017: 4).³³

En tal estado de cosas, la Unpacu se destaca por ser una de las organizaciones más perjudicada con 138 detenidos, 70 hogares allanados y 48 miembros en prisión (OCDH, 2017: 2). Situación que no puede separarse del marco penal cubano, el cual construye una frontera borrosa entre condenas por delitos comunes y políticos, como tampoco del hecho de que “a partir de 2010, el gobierno cambia su estrategia de condenar a

³¹ Sin embargo, como ha quedado expuesto en el estudio, en el caso de la Unpacu hay un juego entre un incipiente movimiento social en pro de los derechos humanos, por un lado, y, por el otro, una agrupación a la que el análisis de marcos —pero también las referencias explícitas— muestra que tiene el objetivo de acceder al poder político, de la mano de un plan concreto de propuestas políticas, económicas y sociales que desborda el discurso de los derechos humanos. Por supuesto que este comentario no tiene la intención de desprestigiar al movimiento como mercenario del imperio —recurso castista— sino aportar complejidad a la discusión.

³² Según un estudio de Khawaja, “con niveles medios de arrestos se incrementan significativamente los índices de acción colectiva, pero estos disminuyen agudamente con el arresto de un número mayor de personas” (Khawaja, 1993: 65).

³³ En esa misma línea, resulta llamativo que estos atropellos fueron más allá de la oposición política, incluyendo a otros sectores sociales (OCDH, 2017: 3). En ese sentido destacan los trabajadores (al no poder ejercer su empleo sin la tutela del Estado y desembocar en el mercado informal), la comunidad LGBTI y los afrodescendientes como grupos destinatarios de la violencia estatal.

las personas a largas penas de prisión por numerosas detenciones de corto tiempo” (Foresight Cuba, 2017: 3).³⁴

Un reciente estudio (Whitehead, 2016) identifica las formas de represión de baja intensidad —junto a la capacidad autocorrectiva del aparato y su posición geopolítica— como uno de los factores que puede explicar la persistencia del régimen cubano. Para este enfoque, los escenarios futuros variarán entre el colapso del régimen o su resiliencia dependiendo, sobre todo, de los resultados de las reformas y las consecuencias y profundización de la reconciliación con Estados Unidos, de la resolución del traspaso de mando personalista a una dirección más institucionalizada, el cambio generacional dentro del partido y la posición del Estado ante la planeación económica centralizada. Factores y escenarios todos que deben ajustarse también en función de las medidas que tome la administración Trump frente a Cuba.

Los elementos antes señalados dan cuenta razonable de los cómo y porqués de la persistencia autoritaria en Cuba, pero creemos que deben ser acompañados por miradas sobre la emergencia y resistencia ciudadanas frente a ese orden. En una Latinoamérica que recientemente celebró cuatro décadas del inicio de los procesos de transición democrática, pero donde las preferencias autoritarias de amplios segmentos poblacionales y la autocratización de varios países (Nicaragua, Venezuela) ponen en cuestión el consenso democrático regional, revisar la experiencia cubana puede servir como diagnóstico de alternativas indeseables. Sobre todo cuando Cuba, por su eficaz y activo aparato de diplomacia, inteligencia y propaganda, sumado a los nexos históricos con sectores de la izquierda continental, tiene una capacidad de influencia insospechada por aquellos que confunden la pequeñez del país y su relevancia geopolítica.

En ese sentido, artículos como el presente tratan de explicitar la importancia de constituir una academia comprometida con los derechos humanos sin perder una perspectiva crítica ni la rigurosidad propia de las herramientas metodológicas y analíticas que proveen las ciencias sociales.

³⁴ Es decir, la apertura reciente respecto a las relaciones con Estados Unidos y la Unión Europea no ha supuesto un cambio en la situación represiva sino lo contrario: la apuesta oficial a la clausura de los espacios de autonomía de la sociedad se hace más fuerte. En parte, también, porque el descontento ha crecido.

Esperamos que lo argumentado sirva para enriquecer la discusión y generar nuevas preguntas acerca de la acción y marcos de significación de una oposición pacífica que, independientemente de ideologías propias y ajenas surgidas en la lógica de la Guerra Fría, pretende transformar un orden antidemocrático que niega su derecho a existir.

Referencias

- Ansolabehere, Karina (2010). "Los derechos humanos en los estudios socio-jurídicos", en Ariadna Estévez y Daniel Vázquez (coords.), *Los derechos humanos en las ciencias sociales: una perspectiva multidisciplinaria*, México, Flacso México/CISAN.
- Azor, Marlene (2016). *Discursos de la resistencia. Los proyectos políticos emergentes en Cuba 2002-2012*, Madrid, Hypermedia.
- Bobes, Velia Cecilia (2016). "Reformas en Cuba: ¿Actualización del socialismo o reconfiguración social?", *Cuban Studies*, vol. 44, núm. 1, pp. 165-188.
- Bye, Vegard (2016). "The Great Paradox: How Obama's Opening to Cuba may Imperil the Country's Reform Process", *Third World Quarterly*, vol. 37, núm. 9, pp. 1698-1712.
- Centeno, Ramón (2017). "The Cuban Regime after a Decade of Raúl Castro in Power", *Mexican Law Review*, vol. 9, núm. 2, pp. 99-126.
- Chase-Dunn, Christopher, Alessandro Morosin y Alexis Álvarez (2017). "Movimientos sociales y regímenes progresistas en América Latina: revoluciones mundiales y desarrollo semiperiférico", en Paul Almeida y Allen Cordero Ulate (eds.), *Movimientos sociales en América Latina: Perspectivas, tendencias y casos*, Buenos Aires, Clacso, pp. 31-48.
- Chihu Amparán, Aquiles (2000). "El análisis cultural de los movimientos sociales", *Sociológica*, vol. 15, núm. 42, pp. 209-230.
- Chong, Daniel (2014). *Debating Human Rights*, Boulder, Lynne Rienner.
- Domínguez, Jorge I. (1997). "Comienza una transición hacia el autoritarismo en Cuba", *Encuentro*, vol. 6, núm. 7, pp. 7-23.
- Estévez, Ariadna (2010). "Los derechos humanos en la sociología política contemporánea", en Ariadna Estévez y Daniel Vázquez (coords.), *Los derechos humanos en las ciencias sociales: una perspectiva multidisciplinaria*, México, Flacso México/CISAN.

- Farber, Samuel (2011). *Cuba Since the Revolution of 1959: A Critical Assessment*, Chicago, Haymarket Books.
- Foresight Cuba (2017). "Detenciones por motivos políticos". Disponible en <<http://foresightcuba.com/detenciones-por-motivos-politicos>>, consultado el 10 de mayo de 2017.
- Geoffray, Marie Laure (2015). "Transnational Dynamics of Contention in Contemporary Cuba", *Journal of Latin American Studies*, vol. 47, núm. 2, pp. 223-249.
- Geoffray, Marie Laure (2014). "Channelling Protest in Illiberal Regimes: The Cuban Case since the Fall of the Berlin Wall", *Journal of Civil Society*, vol. 10, núm. 3, pp. 223-238.
- Guerra, Lilian (2012). *Visions of Power in Cuba: Revolution, Redemption, and Resistance, 1959-1971*, Chapel Hill, University of North Carolina Press.
- Hang Chuang, Ya (2016). "Girasoles taiwaneses, paraguas hongkoneses. Protestas y democratización en Asia del Este", *Nueva Sociedad*, núm. 266, pp. 17-30.
- Hilb, Claudia (2010). *Silencio Cuba. La izquierda democrática frente al régimen de la Revolución cubana*, Buenos Aires, Edhasa.
- Hoffmann, Bert (2016). "Bureaucratic Socialism in Reform Mode: The Changing Politics of Cuba's post-Fidel Era", *Third World Quarterly*, vol. 37, núm. 9, pp. 1730-1744.
- Hunt, Lynn (2009). *La invención de los derechos humanos*, Barcelona, Tusquets.
- Khawaja, Marwan (1993). "Repression and Popular Collective Action: Evidence from the West Bank", *Sociological Forum*, vol. 8, núm. 1, pp. 47-71.
- Lichbach, Mark I. (1987). "Deterrence or Escalation? The Puzzle of Aggregate Studies of Repression and Dissent", *Journal of Conflict Resolution*, vol. 31, núm. 2, pp. 266-297.
- Linz, Juan (2000). *Totalitarian and Authoritarian Regime*, Boulder, Lynne Rienner.
- Mainwaring, Scott y Aníbal Pérez-Liñán (2013). *Democracies and Dictatorships in Latin America: Emergence, Survival and Fall*, Nueva York, Cambridge University Press.
- Mesa-Lago, Carmelo, Roberto Veiga, Lenier González, Sofía Vera y Aníbal Pérez Liñán (2016). "Cuba: voces de cambio", *Letras Libres*, vol. 18, núm. 212, pp. 44-48.
- Nilsen, Alf Gunvald y Laurence Cox (2013). "What Would a Marxist Theory of Social Movements Look Like?", en Colin Barker, Laurence Cox, John

- Krinsky y Alf Gunvald (eds.), *Marxism and Social Movements*, Leyden, Boston, Koninklijke Brill NV.
- OCDH (2017). "Informe anual de 2016 del Observatorio Cubano de Derechos Humanos". Disponible en <http://observacuba.org/wp-content/uploads/2017/01/InformeDDHH2016.OCDH_-1.pdf>, consultado el 12 de mayo de 2017.
- Pettinà, Vanni (2011). *Cuba y Estados Unidos, 1933-1959. Del compromiso nacionalista al conflicto*, Madrid, Los Libros de la Catarata.
- Pierson, Paul (2004). *Politics in Time: History, Institutions and Social Analysis*, Nueva Jersey, Princeton University Press.
- Rojas, Rafael (2015). *Historia mínima de la Revolución cubana*, México, El Colegio de México.
- Sauri, Gerardo (2014). *Derecho a defender derechos humanos*, México, Flacso México.
- Schedler, Andreas (2015). *En la niebla de la guerra. Los ciudadanos ante la violencia criminal organizada*, México, CIDE.
- Snow, David y Robert Benford (1988). "Ideology, Frame Resonance, and Participant Mobilization", en Bert Klandermans, Kriesi Hanspeter y Sidney Tarrow (eds.), *From Structure to Action: Comparing Social Movement Research Across Cultures*, Greenwich, JAI Press.
- Suárez, Hugo José (2008). "El método del análisis estructural de contenido: principios operativos", en Hugo José Suárez (coord.), *El sentido y el método. Sociología de la cultura y análisis de contenido*, México, El Colegio de Michoacán/IIS-UNAM.
- Svolik, Milan W. (2012). *The Politics of Authoritarian Rule*, Nueva York, Cambridge University Press.
- Tilly, Charles y Leslie Wood (2010). *Los movimientos sociales 1768-2008. Desde sus orígenes a Facebook*, Barcelona, Crítica.
- Vázquez, Daniel (2010). "Los derechos humanos y la teoría y estudios empíricos sobre la democracia", en Ariadna Estévez y Daniel Vázquez (coords.), *Los derechos humanos en las ciencias sociales: una perspectiva multidisciplinaria*, México, Flacso México/CISAN.
- Velasco, José Luis (2010). "Derechos humanos y ciencia política", en Ariadna Estévez y Daniel Vázquez (coords.), *Los derechos humanos en las ciencias sociales: una perspectiva multidisciplinaria*, México, Flacso México/CISAN.
- Whitehead, Laurence (2016). "The 'Puzzle' of Autocratic Resilience/Regime Collapse: The Case of Cuba", *Third World Quarterly*, vol. 37, núm. 9.

Fuentes primarias

Entrevistas a 54 activistas de la Unpacu (mayo-julio de 2016).

Programa mínimo de la Unpacu. Disponible en <<http://www.unpacu.org/unpacu-programa-minimo-y-proyecciones/#more-4166>>, consultado el 13 de julio de 2017.

Entrevista a especialistas: Marlene Azor (septiembre de 2016) y Jorge I. Domínguez (octubre de 2016).

Anexo metodológico del capítulo 2

A continuación se presenta el archivo “do.file” para replicar el modelo construido en Stata con base en Latinobarómetro 2015.

```
***Conservar solo los datos de Brasil.
keep if idenpa==76

***Modelo (sin redes).
. logit polaris1 razas6 democ impues sexo2 siteconper1 siteconper2 S13 educacion pclase2
pclase3

***Modelo (con redes).
. logit polaris1 razas6 democ impues sexo2 siteconper1 siteconper2 S13 educacion
reclamoredes11 reclamoredes12

***Variable aprobación presidencial (polaris por polarización).

tab P48STGBS

generate polar=P48STGBS

tab polar

replace polar=. if polar==1
replace polar=. if polar==2

tab polar
tab polar, gen(polaris)

tab polaris1
tab polaris2

label variable polaris1 "Dummy 1 es aprueba y 0 es no aprueba"
```

¿Fin del giro a la izquierda en América Latina?

```
tab polaris2
label variable polaris2 "Dummy 1 es no aprueba y 0 es aprueba"
```

***Variable educación.

```
tab REEDUC_1
tab REEDUC_1, nolabel
generate educacion=REEDUC_1
```

***Variable impuestos.

```
tab P47N
tab P47N, nolabel
generate impues=P47N
replace impues=. if impues==1
replace impues=. if impues==2
```

***Variable democracia (satisfacción-recodificación en satisfechos y no satisfechos) dummy.

```
tab P12TG_A
tab P12TG_A, nolabel
generate democ=.

replace democ=1 if P12TG_A==1
replace democ=1 if P12TG_A==2
replace democ=0 if P12TG_A==3
replace democ=0 if P12TG_A==4
```

***Variable raza.

```
tab S23
gen raza=S23
tab S23, nolabel
replace raza=. if raza==2
replace raza=. if raza==1
tab raza, gen(razas)
```

****Variable sexo.

```
tab S12, nolabel
tab S12, gen(sexo)
```

**Variable economía personal (bolsillo).

```
generate econper=.
replace econper=1 if P6STGBS==1
replace econper=1 if P6STGBS==2
replace econper=2 if P6STGBS==3
replace econper=3 if P6STGBS==4
replace econper=3 if P6STGBS==5
tab econper
tab econper, gen(siteconper)
```

***Variable edad (variable continua).

tab S13

***Variable percepción clase social (pclase).

```
generate clase=.
replace clase=. if S6== -2
replace clase=. if S6== -1
replace clase=1 if S6==1
replace clase=2 if S6==2
replace clase=3 if S6==3
replace clase=4 if S6==4
replace clase=5 if S6==5
tab clase, gen(pclase)
```

*****Variables de bienes.

```
tab S24_A
tab S24_A, nolabel
generate habsep=S24_A
generate casapropia=S24_B
generate compu=S24_C
generate tablet=S24_D
generate smart=S24_H
generate auto=S24_I
generate caliente=S24_J
generate caliente=S24_J
generate alcantarilla=S24_K
generate unacomida=S24_L

replace habsep=. if habsep== -2
replace casapropia=. if casapropia== -2
replace compu=. if compu== -2
replace tablet=. if tablet== -2
replace smart=. if smart== -2
replace auto=. if auto== -2
replace caliente=. if caliente== -2
replace alcantarilla=. if alcantarilla== -2
replace unacomida=. if unacomida== -2
```

```
replace habsep=0 if habsep==2
replace casapropia=0 if casapropia==2
replace compu=0 if compu==2
replace tablet=0 if tablet==2
replace smart=0 if smart==2
replace auto=0 if auto==2
replace caliente=0 if caliente==2
replace alcantarilla=0 if alcantarilla==2
replace unacomida=0 if unacomida==2
generate proxyclasenobaja=.
```

¿Fin del giro a la izquierda en América Latina?

*** Aquí generamos un índice de bienes. Si tiene todos los bienes. Al final no entra al modelo.

```
replace proxyclassenobaja=1 if habsep==1 & casapropia==1 & compu==1 & tablet==1 & smart==1 & auto==1 & caliente==1 & alcantarilla==1 & unacomida==1
```

```
tab proxyclassenobaja
```

```
replace proxyclassenobaja=0 if proxyclassenobaja==.
```

```
tab proxyclassenobaja
```

*** Probamos modelos logits. Descubrimos que de todos los bienes únicamente el agua caliente salió significativa.

```
logit polaris1 razas7 democ impues sexo2 siteconper1 siteconper2 S13 educacion proxyclassenobaja
```

```
logit polaris1 razas7 democ impues sexo2 siteconper1 siteconper2 S13 educacion proxyclassenobaja clasesocial5
```

```
logit polaris1 razas7 democ impues sexo2 siteconper1 siteconper2 S13 educacion habsep
```

```
logit polaris1 razas7 democ impues sexo2 siteconper1 siteconper2 S13 educacion casapropia
```

```
logit polaris1 razas7 democ impues sexo2 siteconper1 siteconper2 S13 educacion tablet
```

```
logit polaris1 razas7 democ impues sexo2 siteconper1 siteconper2 S13 educacion smart
```

```
logit polaris1 razas7 democ impues sexo2 siteconper1 siteconper2 S13 educacion auto
```

```
logit polaris1 razas7 democ impues sexo2 siteconper1 siteconper2 S13 educacion caliente
```

```
logit polaris1 razas7 democ impues sexo2 siteconper1 siteconper2 S13 educacion unacomida
```

```
logit polaris1 razas7 democ impues sexo2 siteconper1 siteconper2 S13 educacion alcantarilla
```

```
logit polaris1 razas7 democ impues sexo2 siteconper1 siteconper2 S13 educacion smart
```

*** Probamos modelos logits, sin la variable siteconper2 y solo agua caliente y smartphones dio significativa.

```
ogit polaris1 razas7 democ impues sexo2 siteconper1 S13 educacion proxyclassenobaja
```

```
logit polaris1 razas7 democ impues sexo2 siteconper1 S13 educacion proxyclassenobaja clasesocial5
```

```
logit polaris1 razas7 democ impues sexo2 siteconper1 S13 educacion habsep
```

```
logit polaris1 razas7 democ impues sexo2 siteconper1 S13 educacion casapropia
```

```
logit polaris1 razas7 democ impues sexo2 siteconper1 S13 educacion tablet
```

```
logit polaris1 razas7 democ impues sexo2 siteconper1 S13 educacion smart
```

```
logit polaris1 razas7 democ impues sexo2 siteconper1 S13 educacion auto
```

```
logit polaris1 razas7 democ impues sexo2 siteconper1 S13 educacion caliente
```

```
logit polaris1 razas7 democ impues sexo2 siteconper1 S13 educacion unacomida
```

```
logit polaris1 razas7 democ impues sexo2 siteconper1 S13 educacion alcantarilla
```

```
logit polaris1 razas7 democ impues sexo2 siteconper1 S13 educacion smart
```

*** Exploramos sentido de la variable contar con agua caliente en la vivienda.

*** Variable regiones

```
generate region=.
```

```
replace region=1 if reg==76010
```

```
replace region=1 if reg==76011
```

```
replace region=1 if reg==76012
```

Anexo metodológico del capítulo 2

```
replace region=1 if reg==76013
replace region=1 if reg==76014
replace region=1 if reg==76016
```

```
replace region=2 if reg==76020
replace region=2 if reg==76021
replace region=2 if reg==76022
replace region=2 if reg==76023
replace region=2 if reg==76024
replace region=2 if reg==76025
replace region=2 if reg==76026
replace region=2 if reg==76027
replace region=2 if reg==76028
```

```
replace region=3 if reg==76030
replace region=3 if reg==76031
replace region=3 if reg==76032
replace region=3 if reg==76033
```

```
replace region=4 if reg==76040
replace region=4 if reg==76041
replace region=4 if reg==76042
```

```
replace region=5 if reg==76050
replace region=5 if reg==76051
replace region=5 if reg==76052
replace region=5 if reg==76053
tab region
tab region, gen(regiones)
```

*** Probamos modelos logit con regiones. La región sur cuando se incluye agua caliente da significativa pero contraria.
Agua caliente aumenta probabilidad desaprobado, región sur aumenta probabilidad aprobar
Ninguna otra región es sig incluyendo esa agua caliente

```
logit polaris1 razas7 democ impues sexo2 siteconper1 siteconper2 S13 educacion caliente
regiones2 regiones3 regiones4 regiones5
logit polaris1 razas7 democ impues sexo2 siteconper1 siteconper2 S13 educacion caliente
regiones1 regiones2 regiones3 regiones4 regiones5
```

*** Probamos modelo solo con regiones (sin agua caliente) y Región Sur y Nordeste son sig. Las dos aumentan probabilidad aprobar a la presidenta.

```
logit polaris1 razas7 democ impues sexo2 siteconper1 siteconper2 S13 educacion
regiones1 regiones2 regiones3 regiones4 regiones5
```

*** Probamos modelo sin redes con variable agua caliente.
logit polaris1 razas7 democ impues sexo2 siteconper1 siteconper2 S13 educacion pclass2
pclass3 caliente

*** Probamos modelo sin redes con variable regiones. Región sur y región norte aumentan

¿Fin del giro a la izquierda en América Latina?

probabilidad aprobación.

```
logit polaris1 razas7 democ impues sexo2 siteconper1 siteconper2 S13 educacion pclase2  
pclase3 regiones1 regiones2 regiones3 regiones4 regiones5
```

*** Se encontró relación entre tener agua caliente y ser de color blanco. Probamos lo mismo con regiones, con otros bienes, y no dio significativo.

```
tabulate caliente razas7, column
```

```
tabulate razas7 caliente, cchi2 column row
```

*****Exploración variables de redes sociales.

*****Reclamo en redes. Acciones que ha realizado, hacer un reclamo a través de las redes sociales.

```
tab P21N_E
```

```
generate reclamoredes=P21N_E
```

```
tab reclamoredes
```

```
replace reclamoredes=. if reclamoredes==-.1
```

```
tab reclamoredes, gen(reclamoredes1)
```

****Probar modelo con redes.

```
logit polaris1 razas7 democ impues sexo2 siteconper1 siteconper2 S13 educacion  
reclamoredes11 reclamoredes12
```

***Probamos variables de uso de redes. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, etcétera.

```
generate facebook=S10M_A
```

```
generate twitter=S10M_E
```

```
generate twitter=S10M_E
```

```
generate instagram=S10M_G
```

```
generate youtube=S10M_C
```

```
logit polaris1 razas7 democ impues sexo2 siteconper1 siteconper2 S13 educacion  
reclamoredes11 reclamoredes12 facebook
```

```
logit polaris1 razas7 democ impues sexo2 siteconper1 siteconper2 S13 educacion  
reclamoredes11 reclamoredes12 facebook twitter
```

```
logit polaris1 razas7 democ impues sexo2 siteconper1 siteconper2 S13 educacion  
reclamoredes11 reclamoredes12 facebook twitter instagram youtube
```

```
logit polaris1 razas7 democ impues sexo2 siteconper1 siteconper2 S13 educacion  
reclamoredes11 reclamoredes12 facebook twitter youtube
```

```
logit polaris1 razas7 democ impues sexo2 siteconper1 siteconper2 S13 educacion  
reclamoredes11 reclamoredes12 facebook twitter youtube
```

```
logit polaris1 razas7 democ impues sexo2 siteconper1 siteconper2 S13 educacion  
reclamoredes11 reclamoredes12 facebook twitter
```

```
logit polaris1 razas7 democ impues sexo2 siteconper1 siteconper2 S13 educacion facebook  
Twister
```

*****Gráficas Coefplot.

```
coefplot, drop(_cons) xline(0) ciopts(recast(rcap))level(95)
```

```
coefplot, drop(_cons) xline(0) ciopts(recast(rcap))level(90)
```


¿Fin del giro a la izquierda en América Latina? Gobiernos y políticas públicas, editada por Mario Torrico, se terminó de imprimir en febrero de 2018 en los talleres de los talleres de Ultradigital Press, S.A. de C.V., Centeno núm. 195, Santa Isabel Industrial, Iztapalapa, 09820 Ciudad de México.
Coordinación de Fomento Editorial: Gisela González Guerra. Cuidado de edición: Sonia Zenteno Calderón. Diseño de forros: Cynthia Trigos Suzán.
Diseño de interiores y formación electrónica: Flavia Bonasso.
Para su elaboración se usaron tipos *Garamond* y *Frutiger*.

El tiraje consta de 100 ejemplares.

Por su rigor científico, este libro es un avance notable en el estado del arte sobre el proceso político de América Latina denominado *giro a la izquierda*. La lectura de esta obra nos muestra que la izquierda no es una sola, que en ella coexisten vertientes que, por ejemplo, van del caudillismo y el populismo a la socialdemocracia, y que además de ser en principio una crítica del libre mercado, de las prácticas corruptas y clientelares de los partidos y del sistema político al que atribuía la desigualdad social y la pobreza, ha ensayado soluciones como el gasto social, la búsqueda de la inclusión o reformas más profundas que pretendieron ampliar la participación de la ciudadanía.

Pero esta izquierda atraviesa un momento que exige su revisión y discusión en su legado y en sus crisis. Es el objetivo de este libro, cuyos capítulos pueden considerarse representativos de la experiencia de América Latina con gobiernos de izquierda en un contexto de continuidad democrática. ¿Qué sabemos y qué ignoramos del giro a la izquierda? Esta obra deja en claro que su herencia es favorable puesto que su emergencia permitió que la democracia latinoamericana sea hoy más plural que hace dos décadas.

